PAPELES
DE RELACIONES ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL

nº 113
9 €

Impactos y consecuencias de la CRISIS

C. Gómez Gil, A. Recio, A. Álvarez Mora, M. Castrillo Romón,
J. L. de las Rivas Sanz, L. Santos Ganges, M. Pazos,
Colectivo Ioé, A. Antón, F. Vahid Shahidi, C. Muntaner,
V. Puig-Barrachina, J. Benach, J. Tapia,
L. E. Alonso, C. J. Fernández Rodríguez,
R. Ibáñez Rojo, C. Piñeiro, C. Taibo,
J. M. Antentas, E. Vivas

cip ecosocial

Icaria editorial

Ilustración: Piscari/Dreamstime.com

PAPELES
DE RELACIONES ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL

nº 113
Primavera 2011

Director - Santiago Álvarez Cantalapiedra

Jefa de redacción - Olga Abasolo Pozas

Consejo de redacción
Tanja Bastia (Universidad de Manchester)
Óscar Carpintero (Universidad de Valladolid)
Francisco Fernández Buey (Universidad Pompeu Fabra)
Javier Gutiérrez Hurtado (Universidad de Valladolid)
Yayo Herrero (Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental)
Carlos Montes (Universidad Autónoma de Madrid)
José Manuel Naredo (Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado)
Gaby Oré (Centro por los Derechos Económicos y Sociales)
Helena Villarejo (Universidad de Valladolid)
Nieves Zúñiga (Universidad de Essex)

Comité asesor
Daniele Archibugi (Universidad de Londres)
Pedro Ibarra (Universidad del País Vasco)
Isabell Kempf (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos)
Bichara Khader (Universidad de Lovaina)
Michael T. Klare (Hampshire College)
Saul Landau (California State University)
Maxine Molyneux (Universidad de Londres)

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global es una revista trimestral publicada desde 1985 por el Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial), perteneciente a la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM). Con una mirada multidisciplinar, la revista aborda temas relacionados con la sostenibilidad, la cohesión social y la democracia, con la paz como eje transversal de análisis.

La revista está recogida sistemáticamente por las bases de datos: LATINDEX, DIALNET, DICE, ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, RESH, ARCE

© FUHEM. Todos los derechos reservados
CIP- Ecosocial
Duque de Sesto 40, 28009 Madrid
Teléf.: (+34) 91 576 32 99 – Fax: (+34) 91 577 47 26
cip@fuhem.es
www.revistapapeles.fuhem.es

I.S.S.N. - 1888-0576
Depósito legal - M-30281-1993

© de las ilustraciones: Javier Muñoz
Ilustración de portada: Piscari/Dreamstime.com

Para solicitar autorización para la reproducción de los artículos escribir a CIP-Ecosocial.
Las opiniones de los artículos publicados no reflejan necesariamente las de CIP-Ecosocial y son responsabilidad de los autores.

Esta revista ha recibido una subvención de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España,

Impreso en papel ecológico como parte de la política de buenas prácticas en materia de sostenibilidad de FUHEM.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN 5

ENSAYO

Democracia radical y prácticas de economía comunitaria: perspectivas para una andadura conjunta 13
Adam Wright

ESPECIAL:
Impactos y consecuencias de la CRISIS

Diagnósticos de una cooperación en crisis y de la crisis de la cooperación en España 35
Carlos Gómez Gil

Efectos de la crisis sobre las clases trabajadoras 45
Albert Recio

Perfiles de una tragedia: la crisis residencial y urbanística española 57
Alfonso Álvarez Mora, María Castrillo, Juan Luis de las Rivas, Luis Santos

Demografía, sostenibilidad e igualdad de género 71
María Pazos

Notas sobre los efectos socioeconómicos de la crisis para la población inmigrada 85
Colectivo Ioé

La reforma impopular de las pensiones 97
Antonio Antón

Recortes profundos que hay que cortar por lo sano: crisis económica, políticas sociales y daños en la salud 107
Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa Puig-Barrachina, Joan Benach

La mejora de la salud durante las crisis económicas: un fenómeno contraintuitivo 121
José A. Tapia Granados

Consumo y estilos de vida sostenibles en el contexto de la crisis económica 139
Luis E. Alonso, Carlos J. Fernández Rodríguez, Rafael Ibáñez Rojo, Concepción Piñeiro

Antineoliberales, anticapitalistas 149
Carlos Taibo

Su crisis y nuestras respuestas 155
Josep Maria Antentas y Esther Vivas

PANORAMA

Fukushima: un antes y un después de la industria nuclear 167
Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal

PERISCOPIO

Efectos sociales de la crisis. Una evaluación a partir del Barómetro 177
Colectivo Ioé

Los efectos de la crisis en los hogares: nivel de integración y exclusión social 189
Juan J. López Jiménez y Víctor Renes

LIBROS

Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI de Harald Welzer 203
Jorge Riechmann

El retorno de los campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia de Silvia Pérez-Vitoria 205
Pedro Lomas

Por una economía ecológica y solidaria (conversación con Daniel Jover) de Antonio Estevan y José Manuel Naredo 208
Daniel Filippa

Lejos del final de la crisis, cerca de sus consecuencias

INTRODUCCIÓN

Nos hallamos muy lejos del final de la crisis. Desde el verano del 2007, momento en el que se mostraron los primeros síntomas de lo que se ha denominado después la "Gran Recesión", los acontecimientos han ido evolucionando hasta ocultar en buena medida el origen inmobiliario-financiero de los problemas. Al reconocimiento inicial de que se había asumido demasiados riesgos por prácticas crediticias profundamente irresponsables y por un frenesí especulativo con productos financieros enormemente complejos, le sucedió la entrada en escena del Estado como «asumidor de riesgo de último recurso»[1] ante la perspectiva de un colapso del conjunto del sistema financiero. La enérgica respuesta de los gobiernos hizo desaparecer de un plumazo el superávit en las cuentas públicas obtenido durante los años previos. Bien es cierto que a ello coadyuvó no sólo el fuerte incremento del gasto público asociado a los rescates y avales bancarios, sino también la merma considerable de los ingresos como consecuencia de la atonía de una actividad productiva tocada por fuertes desequilibrios financieros. Pero, en cualquier caso, el deterioro de las cuentas del Estado permitió cambiar el foco de la atención del colapso del sistema bancario a la crisis de la deuda soberana, y de ahí a las renovadas obsesiones por el déficit público alimentadas por unas tensiones monetarias que se aprovechan de los errores del diseño de la Unión Económica y Monetaria. Como corolario, se suscribe en marzo del 2011 el «Pacto por el euro» que refuerza las exigencias del anterior «Pacto de estabilidad y crecimiento» que gobernaba la política económica de la Unión Europea.

Así pues, a través de las sucesivas etapas de la crisis se ha asistido a un proceso de sustitución de responsabilidades desde la banca y los

[1] J. Stiglitz, *Caída libre*, Taurus, Madrid, 2010.

agentes financieros hacia las finanzas públicas y, por ende, a los contribuyentes. Este hecho en absoluto ha resuelto los problemas, porque cuando el Gobierno se hace con un activo tóxico o asegura las pérdidas de un banco, estas no desaparecen, simplemente se trasladan desde el balance de una empresa privada a las cuentas públicas del Estado. Se logra, eso sí, una gigantesca redistribución de rentas desde los contribuyentes a las entidades financieras, pero ello no implica vislumbrar ninguna luz al final del túnel, más bien al contrario, significa posponer las posibilidades de la recuperación. La evolución de la crisis ha revelado una vez más que, cuando no se cuestionan los fundamentos del poder de las finanzas y las reglas de funcionamiento del capitalismo, surge rauda la posibilidad de socializar las pérdidas como vía para restaurar la dinámica de la acumulación de capital y su control por parte de las élites económicas.

La dura medicina se ha logrado administrar sin apenas rechazo debido a que el cuerpo social ya estaba habituado a un conjunto de políticas que han venido operando en este mismo sentido desde hace casi tres décadas. No hay que olvidar que la crisis actual refleja, al menos en parte, la salida en falso que supuso el neoliberalismo a esa otra gran crisis que se manifestó en los años setenta del siglo pasado. Unas políticas económicas que han sido hegemónicas en unos procesos de globalización y financiarización que han servido para, en vez de resolver los problemas, desplazarlos hacia nuevas geografías y aplazar su solución en el tiempo.

Efectos de la crisis sobre la cohesión

La desigualdad, la pobreza y la exclusión social son procesos estructurales que ni siquiera se logran atenuar en periodos de cierta bonanza económica.[2] La crisis económica ha servido para extender y profundizar esos efectos, generando un grave riesgo de fractura social.

El pinchazo de la burbuja financiero-inmobiliaria reveló que las instituciones financieras se encontraban demasiado endeudadas y con poco capital para proporcionar el crédito que la economía precisaba para su funcionamiento ordinario.[3] Esto afectó rápidamente a las

[2] Circunstancia que se puede comprobar a partir de los datos de la última actualización del *Barómetro Social de España* del Colectivo Ioé, donde se refleja que mientras los indicadores monetarios (PIB, activos financieros e inmobiliarios) han experimentado una revalorización continua durante los últimos dieciséis años, el bienestar social de la población española apenas mejora en ese mismo periodo. *Vid*. en este mismo número el artículo de la sección Periscopio: «Efectos sociales de la crisis. Una evaluación a partir del Barómetro Social de España».

[3] Ante una pérdida parcial de valor de su patrimonio, a una institución no le queda más opción que vender otra parte de sus activos para recuperar la liquidez necesaria para mantener su capital y pagar los fondos que adeuda. Pero el problema adquiere una dimensión global cuando el fenómeno se generaliza. Al extenderse la inquietud entre las instituciones y los inversores financieros, se incrementa de manera considerable la cantidad de activos que se ponen a la venta, lo que provoca una caída general de sus precios. Esto, a su vez, fuerza a los inversores a vender todavía más activos, conduciendo finalmente a un hundimiento del valor de los mismos. La ola de ventas se produce en el mercado de manera mucho más

empresas que, al estar necesitadas de la renovación del crédito bancario para sus operaciones, vieron comprometida la continuidad de su actividad no financiera. Ello condujo, a su vez, a un deterioro de los indicadores –de producción, de ventas y de consumo–, provocando en numerosas empresas ajustes de plantilla y cierres, con el consiguiente incremento del desempleo. El aumento del paro convirtió en insolventes a muchas familias que habían accedido a la compra de su vivienda a través de un préstamo hipotecario, con lo que empezaron a aflorar altos niveles de morosidad e impago que contribuyeron a cerrar un círculo que se retroalimenta internamente. Para frenar esa dinámica, hubiera sido aconsejable garantizar el crédito a las empresas a través de líneas públicas de financiación y asegurar a aquellas familias con dificultades para afrontar el pago de su hipoteca. Pero la respuesta consistió en abordar costosísimas operaciones de rescate financiero, que si bien sirvieron para que los bancos sanearan sus balances con el dinero de todos los ciudadanos, arrojaron al abismo a aquellos que perdían a un tiempo su puesto de trabajo, su casa y los ahorros de toda una vida.

Las consecuencias sociales empiezan a ser conocidas por todos: en el año 2010 se han producido más de 100.000 embargos y, según los cálculos de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial, más de 350.000 familias españolas perderán sus vivienda en los próximos cinco años. Por otra parte, el nivel de desempleo se aproxima a los cinco millones de parados (el número de parados creció a un ritmo de 1.000 personas al día a lo largo de todo el año 2010) y los cambios en la composición del colectivo de desempleados son especialmente preocupantes: muy superior a lo acaecido en otras crisis, el crecimiento del paro ha sido intenso entre los sustentadores principales; el número de hogares con todos sus activos en paro ha superado el millón trescientos mil (dos de cada cinco parados viven en un hogar en el que todos los miembros están desempleados); los parados de larga duración superan ampliamente los dos millones y, entre ellos, los que llevan más de dos años buscando un puesto de trabajo son un colectivo creciente y sometido al riesgo de pobreza al verse desprovistos de la cobertura por desempleo. A lo que se suma un grave problema, según advierte el propio Banco de España: «la capacidad de protección adicional contra el desempleo que pudieran constituir los vínculos familiares es ahora menor que en recesiones anteriores».[4] Como consecuencia, los ingresos medios anuales de los hogares se han ido deteriorando, y en el año 2010 el 30,4% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes «con dificultad» o «mucha dificultad», incurriendo el 7,7% en retrasos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad, etc.).[5]

---

rápida que la oleada inicial de compras, lo que reduce a la postre el crédito disponible de las empresas que actúan en la economía "real".

4 Datos del INE: *Encuesta de Población Activa* (IV trimestre de 2010) y del Banco de España: «La incidencia del desempleo en los hogares», *Boletín económico*, noviembre de 2010.

5 INE, *Encuesta de Condiciones de Vida año 2010*, 21 de octubre de 2010 (datos provisionales).

Si este conjunto de factores está deteriorando con gran celeridad el bienestar social del presente, las políticas con las que se está respondiendo a la crisis están comprometiendo el bienestar y la cohesión social del futuro. La reforma de las pensiones resulta sintomática a este respecto. Las pensiones públicas han sido el principal programa antipobreza desarrollado por la vertiente social del Estado, y lo atestigua el hecho de que, a pesar de encontrarnos en esta materia lejos de los niveles europeos, los hogares españoles formados por mayores es el grupo que mejor ha soportado los efectos sociales de la crisis actual. Sin embargo, a partir de ahora las actuales generaciones de activos trabajarán más pero cobrarán menos en el futuro. Además, la reforma reforzará en el momento de la jubilación las desigualdades que los trabajadores y trabajadoras arrastren a lo largo de toda su trayectoria vital y profesional, abriendo, por otro lado, el abanico de las diferencias entre los que pudieron complementar su prestación pública con un fondo de capitalización privado y aquellos otros que esta posibilidad la tuvieron negada por una capacidad de ahorro limitada por sus magros ingresos. En esas circunstancias es difícil pensar que se vaya a incrementar el bienestar social futuro, máxime cuando el grupo de los pasivos representará una porción creciente del total de la población del país.

Efectos sobre la democracia y la sostenibilidad

La crisis también está contribuyendo a deteriorar los precarios mimbres sobre los que descansa la democracia representativa en las sociedades europeas. Lo decíamos al principio. La renuncia de los gobiernos a contestar y controlar el poder de las finanzas los deslegitima ante una ciudadanía que asiste impotente a la primacía de la lógica económica frente a la política y que, como consecuencia, padece un menoscabo de sus derechos económicos y sociales. La pérdida de confianza en la política y sus instituciones es un proceso que, aunque viene de largo, se agudiza con la crisis.[6]

Recuerda Ignacio Escolar desde las páginas del diario *Público* la definición de España que sugiere Roberto Mangabeira, ex-ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil con Lula y catedrático de leyes en Harvard: «una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio».[7] La crisis ha puesto de manifiesto también que la supuesta "independencia" de los Bancos Centrales no está al servicio del interés general, sino que constituye una simple coartada para burlar los controles democráticos. En nuestro caso, ¿qué responsabilidades se han exigido desde los poderes públicos al Banco de España por su laxitud supervisora frente a determinadas prácticas financieras? Si de verdad nos concierne la defensa de la democra-

6 CIS: *Barómetro de marzo de 2011*, Estudio 2864 (avance de resultados).

7 http://www.escolar.net/MT/archives/2011/03/camara-de-los-lores.html (31 de marzo de 2011).

cia no deberíamos dejar caer estas apreciaciones en saco roto. Como no deberíamos aceptar impasibles el férreo corsé que supone para los países de la zona euro la renuncia del Banco Central Europeo a financiar el déficit público o la exhortación –expresada a través del denominado «Pacto por el euro»[8]– a modificar las constituciones políticas para canonizar el equilibrio de las cuentas del Estado.

Asimismo, la crisis dificulta el avance hacia una sociedad sostenible. Por un lado, percibimos las profundas consecuencias que sobre el territorio ha acarreado la burbuja financiero-inmobiliaria, y que magistralmente ha resumido Ramón Fernandez Durán con la expresión de «tsunami urbanizador».[9] Por otro, los grandes desafíos –cambio climático, alimentos, energía, etc.– siguen ahí esperando una respuesta, pero después de la crisis económica los recursos con los que contaremos para afrontarlos serán considerablemente menores. Por no mencionar el tiempo, el recurso que se torna más escaso a medida que se agudizan los problemas globales.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

[8] Se puede consultar las conclusiones de los jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro en: *ww.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/.../119812.pdf* (11 de marzo de 2011).

[9] R. Fernández Durán, *El tsumani urbanizador español y mundial* [disponible en: http://www.nodo50.org/ramonfd/tsunami_urbanizador.pdf]

PAPELES: Revista de relaciones ecosociales y cambio global
www.revistapapeles.fuhem.es

CIP-Ecosocial: análisis y debates para
una sociedad justa en un mundo habitable
www.cip-ecosocial.fuhem.es

Ensayo

Democracia radical y prácticas de economía comunitaria: perspectivas para una andadura conjunta 13
Adam Wright

MASCHIN
PISTOL

ADAM WRIGHT

Democracia radical y prácticas de economía comunitaria: perspectivas para una andadura conjunta

Traducción de Olga Abasolo

El artículo plantea la posibilidad de un cruce entre las posiciones de la democracia radical y de la economía comunitaria para potencialmente mermar las carencias que plantea cada una de ellas por separado, con el fin de aportar un proyecto político de izquierda antiesencialista y factible, capaz de enfrentarse a la hegemonía neoliberal. El proyecto de democracia radical propone la rearticulación de la indentidad democrática y de lo político en términos de las relaciones entre poder, hegemonía y antagonismo, basados en una noción radical de pluralismo. La economía comunitaria complementa este proyecto al mostrar cómo el espacio económico puede hacerse plural y democrático cuando se articula con un discurso de la diversidad económica que sustente un aperturismo radical a las prácticas económicas y la contestación política.

Adam Wright es profesor de Teoría Política, University of Essex

La valoración de las consecuencias cada vez más nocivas que está teniendo la hegemonía neoliberal sobre nuestros valores e instituciones democráticas ha impulsado numerosas iniciativas desde las corrientes de pensamiento crítico dedicadas a infundir nuevo vigor a la izquierda. Entre ellas destacan, por innovadoras, dos posturas intelectuales. Por un lado, la democracia radical que, a diferencia de otras alternativas de la teoría democrática, está estrechamente comprometida con una perspectiva ontológica posestructuralista. En segundo lugar, la perspectiva de la economía comunitaria que pretende reconstruir y repolitizar la economía para impulsar desde la base tanto la acción contestataria como las alternativas económicas al capitalismo neoliberal. Los demócratas radicales han dedicado buena

parte de su trabajo a la elaboración de teorías políticas y de la subjetividad capaces de determinar una forma de democracia política radicalmente plural, mientras que sus intentos, algo superficiales, por afrontar las cuestiones de índole económica han suscitado dudas acerca de la capacidad del proyecto para abordar cuestiones de largo alcance para la izquierda, en particular, la desigualdad y la explotación. Los proyectos con orientación empírica en el ámbito comunitario han sido más activos en este aspecto; y se han desarrollado por todo el mundo vinculados a un diverso debate teórico entorno a subjetividad y economía. Sin embargo, en este aspecto, aún falta por establecerse el vínculo con un proyecto político más amplio que incluya el debate de todas las demandas políticas. Este texto plantea la posibilidad de que ambas posiciones se crucen para potencialmente mermar las carencias que plantea cada una de ellas por separado, para finalmente aportar un proyecto político de izquierda antiesencialista y factible para enfrentarse a la hegemonía neoliberal.

Empezaremos por resumir brevemente las premisas de las que parte el pensamiento demócrata radical en el marco del posestructuralismo. A partir de ahí, haremos hincapié en la importancia de que tal proyecto incorpore el discurso económico, y destacaremos ciertas carencias con respecto a una plena conceptualización de la economía desde el terreno del posestructuralismo. A partir de ahí, propondremos concebir la economía como espacio discursivo, para adentrarnos en el debate sobre el discurso económico comunitario y las similitudes que guarda con la democracia radical. Por último, pasamos de la teoría al terreno de lo empírico y repasaremos detalladamente algunos estudios de casos en los que se relacionan los proyectos económicos alternativos, el discurso económico comunitario y la democracia radical.

La democracia radical

El término democracia *radical* ha pasado a definir a una corriente del pensamiento político posestructuralista que hace especial hincapié en la rearticulación de la identidad democrática y lo político en términos de las relaciones entre poder, hegemonía y antagonismo. Como proyecto político, la democracia radical se centra en equilibrar e infundir al liberalismo de valores igualitarios desde la tradición democrática. El objetivo de generar una relación equilibrada entre los derechos liberales, por un lado, y la igualdad, por otro, ha tendido a que converjan en una noción radical de *pluralismo* según la cual las posturas políticas contestatarias y el disenso no solo son la norma, sino un rasgo central de la democracia. Situar el desacuerdo y el antagonismo en el centro del proceso democrático enfrenta a la democracia radical con las premisas de la democracia deliberativa y liberal-igualitaria, que pretenden llegar a alguna forma de consenso racional. A continuación, resumiremos las principales reflexiones de la tradición democrática radical.

Chantal Mouffe argumenta que «el objetivo de la Izquierda debería ser la prolongación y la profundización de la revolución democrática iniciada hace 200 años».[1] Para empezar, esta tendencia hacia la radicalización de la democracia implica una crítica inmanente de la democracia liberal moderna, a partir de la cual surgen dos aspectos clave. Una lectura crítica deconstructiva de la actual articulación de la democracia liberal revela el conflicto entre los principios liberales que sustentan los derechos individuales y el pluralismo y los principios democráticos de igualdad, solidaridad y comunidad. La aportación de Mouffe en este sentido ha sido decisiva para poner de manifiesto la «paradoja democrática» que encierran las limitaciones a la soberanía popular por el bien de los derechos liberales, y el modo en que la actual hegemonía neoliberal esconde una turbulenta relación entre libertad y democracia.[2]

La democracia *radical* hace especial hincapié en la rearticulación de la identidad democrática y lo político en términos de las relaciones entre poder, hegemonía y antagonismo

Desde la perspectiva del discurso posestructuralista, el actual discurso liberal-democrático se considera un intento por universalizar las identidades y las demandas políticas en una lucha política por la hegemonía, que conlleva un encubrimiento parcial de la contingencia y que, en definitiva, impide el cierre de todas las identidades, estructuras y significados.[3] Como consecuencia de ello, los demócratas radicales consideran la democracia como parte de una indeterminación o «contingencia radical» del terreno político discursivo. El espacio de lo político es el espacio en el que los actores se sienten libres de impugnar el significado de las ideas y plantear diferentes demandas políticas. No obstante, es imposible concebir una total indeterminación de lo universal, es decir, una sociedad en la que no exista sujeción del significado, puesto que excluye la construcción de cualquier formación social y constituye (en términos lacanianos) la muerte del orden simbólico.[4] Así, para los demócratas radicales la (completa) democracia es imposible ya que presupone una total pluralidad de ideas y valores, cuando, como afirma Mouffe, «la forma política de gobierno requiere un orden específico de valores que excluye un total pluralismo».[5] Derrida, en clave similar, argumenta que cabe aceptar la imposibilidad de la democracia, y a su vez pretender estructurar la comuni-

[1] C. Mouffe, «Preface: democratic politics today» en C. Mouffe (ed.), *Dimensions of Radical Democracy: pluralism, citizenship, community,* Verso, Londres, 1992, p.1.

[2] C. Mouffe, *The Democratic Paradox*, Verso, Londres, 2000.

[3] J. Torfing, *New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek*, Blackwell, Londres, 1999.

[4] L. Chiesa, *Subjectivity and Otherness: A Philosophical Reading of Lacan*, MIT Press, Cambridge, MA, 2007.

[5] C. Mouffe, «Political liberalism, neutrality and the political», *Ratio Juris*, vol. 7, Nº. 3, 1994, pp. 314-324.

dad política alrededor de la noción de «la democracia por venir»,[6] donde los valores inherentes a la tradición democrática «están inscritos en forma de promesas desde el seno de la democracia» y son aceptadas desde un llamamiento a la democracia por venir.[7]

Los subsiguientes pasos para superar desde la democracia radical las contradicciones y los límites de la democracia liberal moderna han seguido la senda trazada por una noción de democracia imprecisa a la hora de especificar la importancia de la contestación y el disenso en los procesos democráticos. La idea se acerca bastante a lo que Schmitt definiera como política: un choque de diferentes perspectivas a partir del cual se constituyen las identidades de "amigo" y "enemigo".[8] El compromiso con el antagonismo adopta diferentes formas desde la democracia radical. Rancière, por ejemplo, se refiere a la política como "desacuerdo", o al momento de la ruptura del orden social –cuando los grupos marginalizados se enfrentan a él– como el momento de lo *político*.[9] La democracia prospera en esas ocasiones; por lo tanto, «no es un régimen, ni una forma de vida social», más bien es «la institución misma de la política», la constante erosión del orden social a través de la capacidad compartida de contestación.[10]

En *Hegemonía y estrategia socialista,* Laclau y Mouffe definen el concepto de *antagonismo* en términos de que los sujetos, dada su incapacidad para lograr una identidad plena, se construyen un enemigo considerado responsable de su falta de identidad.[11] Para Laclau y Mouffe, «la democracia radical y plural» implica la unificación de una pluralidad de antagonismos democráticos a través de lógicas de equivalencia, es decir, unión en una formación hegemónica. No obstante, semejante unidad basada en la lógica de la equivalencia de la demanda de igualdad no podrá constituirse nunca plenamente pues estará limitada por la «lógica de la autonomía» o, en otras palabras, por el carácter diferencial de las luchas democráticas. La especificidad tanto de la demanda de igualdad (democracia) y la demanda de libertad (pluralismo), es decir, la democracia radical *y plural,* radica precisamente en esa imposibilidad para la equivalencia pura o la diferencia pura.[12]

Laclau y Mouffe han divergido en sus concepciones de la democracia radical desde que publicaran su libro. Laclau ha pasado a interesarse por la relación entre democracia y

6 J. Derrida, *Politics of Friendship*, Verso, Londres, 1997.

7 J. Derrida, «Politics and Friendship: A discussion with Jacques Derrida» [Centre for Modern French Thought, University of Sussex, 1 December 1997; acceso el 15/04/09 http://hydra.humanities.uci.edu/derrida/pol+fr.html].

8 C. Schmitt, *The Concept of the Political*, Rutgers University Press, New Brunswick, 1976.

9 J. Rancière, *Disagreement: Politics and Philosophy*, University of Minnesota Press, Londres, 1998, p. 27.

10 *Ibidem,* p. 101.

11 E. Laclau y C. Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics,* Verso, Londres, 2001, pp. 122-127.

12 *Ibidem,* pp. 180-184.

demandas. En *La razón populista*, pretende identificar cómo se puede construir la «constitución de un pueblo democrático» mediante la articulación de las demandas de equivalencia a través de un «significante vacío».[13] En este caso, Laclau sigue considerando la política democrática en términos de antagonismo entre individuos, o grupos, que plantean demandas y las instituciones del poder pensadas para bloquear la consecución de tales demandas.[14] Por el contrario, Mouffe pretende identificar las políticas democráticas en términos de establecer las «condiciones que mermarían las posibilidades de emergencia [del antagonismo]».[15] Con tal propósito, formula un modelo de democracia «pluralismo agonista» en el cual se reemplaza la relación antagonista entre amigo y enemigo por una relación «agonista» entre «enemigos amistosos» o «adversarios».[16] Si bien mantiene aún que la política democrática descansa sobre la diferencia y el desacuerdo como elementos irresolubles, considera que la política será más fructífera en último término si los sujetos políticos adoptan una mutua tolerancia y respeto hacia sus oponentes.[17]

Evidentemente, esta breve sinopsis no pretende ser una recopilación exhaustiva de las reflexiones de los demócratas radicales, pero sí establecer los principales aspectos a debate. Entre ellos, destacaría: el giro teórico para explorar los ámbitos de la identidad, la subjetividad y el poder, en contraposición con el pronunciamiento dialéctico de los principios subyacentes a la democracia y su empecinamiento empírico en las «instituciones democráticas»; la crítica inmanente de las concepciones neoliberales de democracia para revelar el conflicto irresoluble entre libertad y democracia; la aceptación de los argumentos posestructuralistas que rodean a la contingencia radical y la no sujeción de lo social y la imposibilidad de su cierre; y la concepción de la política democrática como espacio de contestación, diferencia y antagonismo cuya plena constitución es imposible. En el siguiente apartado nos centraremos en la relevancia de los discursos económicos para la aplicación del pensamiento democrático radical, aspecto lamentablemente poco presente en la bibliografía aquí comentada.

La importancia del discurso económico

A pesar del hecho de que los demócratas radicales apenas aluden a la economía, el discurso económico rodea sus reflexiones y penetra en ellas, como lo hace en los espacios no económicos de la sociedad. Este rasgo resulta problemático por dos razones. En primer

13 E. Laclau, *On Populist Reason*, Verso, Londres, 2005, p. 171.

14 A. Norval, *Aversive Democracy: Inheritance and Originality in the Democratic Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 156.

15 C. Mouffe, *op. cit.,* 2000, p. 13.

16 *Ibidem.*

17 *Ibidem.*, pp. 102-103.

lugar, el discurso hegemónico del capitalismo neoliberal produce sujetos que no concuerdan con la identidad democrática. En segundo lugar, el discurso neoliberal capitalista posibilita una transformación material de las sociedad que enfatiza la desigualdad, la explotación y la dominación, cuya superación dependerá de un giro hacia la democracia radical. La subestimación de estos aspectos económicos no solo promueve un cierto escepticismo con respecto a la posibilidad de una aplicación práctica del proyecto democrático radical, sino que también pone en tela de juicio la eficacia de una política radical de izquierdas distanciada de la problemática que plantean la explotación económica, la desigualdad y la justicia social. Con ello no estamos diciendo que la democracia radical abandone estas preocupaciones. Pero existen importantes razones que explican por qué no las afrontan, como veremos más abajo. Por el momento, nos centraremos en destacar la importancia de estos aspectos para un proyecto de democracia radical. A continuación, podremos mostrar cómo su rechazo a enfrentarlos tiene que ver con su resistencia (legítima) a asumir determinadas concepciones de la economía como un todo, algo que podrá superarse mediante la reconstrucción y la repolitización de la economía.

Empezaremos por explorar las subjetividades que emergen del actual discurso económico hegemónico del capitalismo neoliberal. Los demócratas radicales examinan el neoliberalismo, como discurso, en el contexto de su carácter antidemocrático. En opinión de Laclau y Mouffe, las aportaciones de representantes del libertarismo como Hayek y Friedman han contribuido a una redefinición de la democracia en una secuencia de equivalencias que la convierte en sinónimo de totalitarismo, destacando el valor de la diferencia y de la desigualdad y situando la libertad en una secuencia distinta de equivalencia.[18] De modo similar, Mouffe muestra cómo en el discurso neoliberal el equilibrio entre libertad e igualdad se escora firmemente hacia la libertad, lo cual conduce a la hegemonía de los derechos liberales por encima de la democracia y a una estabilización provisional del conflicto entre ambas.[19] Si bien es cierto que son todos ellos aspectos relevantes, están lejos de analizar en toda su extensión el efecto que tiene este discurso antidemocrático en la constitución de una subjetividad democrática.

El sujeto neoliberal se construye sobre el modelo del hombre económico –individuo racional, con intereses propios e igual (para poder competir) ante los ojos del mercado–. La transformación de las situaciones y prácticas económicas del sujeto a través de lógica de la flexibilidad, el riesgo y el azar del mercado contribuye a fomentar tal identidad. El resultado de la potenciación del individualismo y del propio interés es que los individuos están en continuo desacuerdo con los valores que promueven los sujetos democráticos. Y, además, disminuye el valor de la confianza, la tolerancia, la cooperación, la solidaridad y la igualdad,

[18] E. Laclau y C. Mouffe, *op. cit.,* 2001, pp. 171-174.

[19] C. Mouffe, *op. cit.,* 2000, p. 5.

que quedan relegadas a una cadena de equivalencias externas que las convierte en categorías inferiores, improductivas, iliberales y represivas. Lo importante en este sentido es destacar hasta qué punto la subjetividad neoliberal se ha naturalizado, provocando que dada la actual configuración social sea extremadamente improbable el surgimiento de nuevas luchas democráticas que se enfrenten a los conflictos. La posibilidad de poner en práctica un proyecto democrático radical, por tanto, depende de que se revelen formas de deconstrucción y dislocación de la fuerte identidad neoliberal. Semejante tarea requiere una rearticulación de las ideas, instituciones y prácticas económicas sedimentadas en el seno de la hegemonía neoliberal y que contienen una fuerte capacidad transformadora; tarea cuya puesta en práctica será imposible mientras no se repoliticen los espacios económicos.

Es en las prácticas e identidades "no capitalistas" donde hallamos el punto de fractura y donde se produce la apertura de la contestación política al espacio económico

Otra de las características del actual discurso económico es su capacidad para transformar la posición social y material de los sujetos. La transformación de los procesos económicos bajo la lógica de la flexibilidad y la mercantilización ha reestablecido una inmensa desigualdad material. No obstante, el discurso neoliberal presenta la desigualdad como rasgo necesario y beneficioso de la sociedad liberal de mercado. En la actualidad, la desigualdad mina la potencial eficiencia del pluralismo en lo que respecta a la libre elección en condiciones de igualdad. Desde un enfoque pluralista, como el que defiende Dahl, se ha destacado este aspecto pernicioso del libre mercado en el que la desigualdad a gran escala fuerza a la marginalidad a los grupos empobrecidos carentes de capital político para plantear sus demandas.[20] Por tanto, parece razonable abogar por la eliminación de tal desigualdad, no como mero prerrequisito, sino como demanda universal que aporte equivalencia a las luchas democráticas. Laclau y Mouffe aluden a ello en *Hegemonía y estrategia socialista*, argumentando que «es preciso poner fin a las relaciones capitalistas de producción, origen de numerosas relaciones de subordinación».[21] En sus posteriores trabajos, quizá se perciba un acuerdo tácito al respecto, pero ambos autores parecen reacios a aludir directamente al asunto. ¿A qué puede obedecer?

Hemos planteado con anterioridad que no era acertado atribuir a los demócratas radicales un desinterés por la igualdad y la justicia social. Quienes esgrimen argumentos basa-

[20] R. Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, Londres, 2000, pp. 173-179.

[21] E. Laclau y C. Mouffe, *op. cit.,* 2001, p. 178.

dos en dicha asunción han hecho una lectura incompleta y errónea del proyecto demócrata radical, que sí incluye el igualitarismo y por tanto la eliminación de aquellas formas de desigualdad y subordinación sinónimo del discurso capitalista neoliberal. Pero el elemento de pluralismo liberal que también incluye el proyecto acaba limitando este aspecto; el necesario pluralismo y la necesidad de un campo político radicalmente abierto bloquean automáticamente la noción de un discurso económico totalizador. Por tanto, la democracia radical no podrá darse sobre las espaldas de una revolución socialista, dado que esta presupone un intento de cierre de lo social sobre la base exclusiva de la igualdad. Además, caracteriza la economía como esfera total, otorgándole una identidad positiva que viola las asunciones ontológicas de la imposibilidad de cierre. Esto plantea un problema. Por un lado, la democracia radical requiere dislocar y deconstruir la perspectiva totalizadora de la economía del discurso neoliberal para romper con las ideas y prácticas económicas que contribuyen a convertir a los sujetos en individuos antidemócratas que miran por su interés personal. Por otra parte, no puedo producirse el proyecto democrático radical mediante el fomento de un único enfoque totalizador de la economía no capitalista frente al modelo neoliberal sin abandonar con el ello su noción de pluralismo.

La superación de este escollo se convierte, por tanto, en una tarea teórica y práctica. Teórica porque los demócratas radicales deben aceptar las condiciones que impone una conceptualización posestructuralista de la economía para poder interpretar el papel que juega en la teoría democrática radical. Y práctica en el sentido de la necesidad de superar los problemas sociales y políticos reales representados en el ámbito del discurso económico. Por tanto, si seguimos el hilo argumental, un relato posestructuralista de la economía no solo es posible, sino aplicable en términos prácticos para contribuir a la deconstrucción de la hegemonía neoliberal del discurso capitalista, dando paso a una multiplicidad de lugares de dislocación donde pueden surgir antagonismos democráticos.

Pluralismo económico y discurso económico comunitario

En las últimas páginas de *La paradoja democrática*, Chantal Mouffe aludía a un proyecto «posocialdemócrata» de la izquierda; un proyecto que ella concebía como orientado a la lucha por «una economía verdaderamente pluralista, y no meramente mercantil».[22] Sus ideas se asemejan al planteamiento de Paul Hirst sobre la «democracia asociativa», a la que se refiere como «el único desafío al capitalismo corporativo que respeta los principios de la democracia liberal».[23] Las aportaciones teóricas de Hirst fueron pioneras con respecto a la necesaria pluralización de las esferas pública y privada, y la necesaria construcción de teji-

[22] C. Mouffe, *The Democratic Paradox*, Verso, Londres, 2000, pp. 123, 126.

[23] C. Mouffe, «Towards a liberal socialism», C. Mouffe (ed.), *The Return of the Political*, Verso, Londres, 1993, p. 98.

do asociativo de base que diversifique la economía en combinación con las reformas de las instituciones públicas por parte del Estado para descentralizar su poder y proveer un marco regulador para el desarrollo asociativo. Con ello aportaba un vínculo importante entre pluralismo liberal y espacio económico diverso, para superar el escollo que planteaba un proyecto económico totalizante al concebir «la economía desde el punto de vista de los intereses de una amplia variedad de agentes económicos incluyendo a los activos así como a los económicamente inactivos».[24] Percibimos en Hirst un importante giro hacia la deconstrucción de la economía como totalidad unificada; lo que no acaba de verse con claridad es el efecto que tiene sobre la subjetividad y el antagonismo. De hecho, Hirst se muestra reacio a prescindir de una solución racionalista a este aspecto, y argumenta que las personas aceptarán la democracia asociativa ya que son «suficientemente racionales como para saber cuáles son sus intereses».[25] No obstante, la superación del fuerte individualismo propio del discurso neoliberal requiere algo más que una racionalidad débil. Las aportaciones de Hirst pueden enriquecerse con las del pensamiento posestructuralista, y en este sentido las demandas de un mayor asociacionismo podrían surgir a partir de la naturaleza deconstructiva de la propia teoría democrática asociativa o, por mayor precisión, a partir del énfasis en la diversidad económica y de una perspectiva de la economía ajena al discurso totalizante.

La hegemonía neoliberal logra su estabilidad porque es capaz de parecer incuestionable, es decir, no solo están consolidadas sus ideas y prácticas económicas que, pese a ser construcciones discursivas, aparentan ser naturales y estar gobernadas por las leyes naturales del intercambio mercantil, sino que además se ha producido una internalización de identidades y prácticas que no siguen la lógica del mercado, pero que quedan ocultas en los márgenes del espacio económico, y que delimitan la sólida y unificada esfera económica del capitalismo que escapa al conflicto.[26] Sin embargo, precisamente es en estas prácticas e identidades "no capitalistas" donde hallamos los límites del orden social de lo económico, el punto en el cual puede fracturarse la totalidad del capitalismo neoliberal, y revelarse la contingencia primordial del discurso y la apertura del espacio económico a la contestación política.[27] En la actualidad, estas identidades y prácticas económicas diversas permanecen insertas de las cadenas del discurso neoliberal diferenciales y de equivalencia. Su dislocación requiere por tanto el reconocimiento dual de que *son* prácticas/identidades económicas y simultáneamente que *no son* (necesariamente) prácticas/ideas neoliberales capitalistas. El resultado de tales dislocaciones es la formación de nuevos antagonismos capaces de componer un proyecto contra-hegemónico económico diverso.

---

24 P. Q. Hirst, *Associational Democracy: New Forms of Economic and Social Governance*, Polity Press, Cambridge, 1994, p. 97.

25 *Ibidem*, p. 55.

26 J. K. Gibson-Graham, *The End of Capitalism (As We Knew It)*: *A Feminist Critique of Political Equality*, University of Minnesota Press, Londres, 2006, pp. 251-265.

27 *Ibidem,* pp. 11-15, 42-45.

La construcción de un discurso en torno a la diversidad económica requiere reelaborar el marco de las identidades y prácticas económicas dislocadas para establecer una nueva cadena de equivalencias, unida por un nuevo punto nodal. Este nuevo discurso de la diversidad económica puede jugar el doble papel de superación de las subjetividades antidemocráticas y de una reestructuración radical de la producción y del intercambio que permita una distribución de la riqueza más equitativa. Pero, en último término –y quizá sea este el quid de la cuestión– deberá hacerlo *sin* totalizar el espacio económico que ha reactivado. La transparencia radical del espacio económico permite al sujeto adoptar la dimensión ético-política de la diferencia (económica) e implicarse en una pluralidad de prácticas económicas. Gibson-Graham opina sobre este enfoque en su libro *A Postcapitalist Politics:*

> «Nuestro objetivo ha consistido en des-ordenar el paisaje económico capitalista, subvertirlo para de ese modo dislocar la hegemonía del capitalcentrismo. Es en la producción de tales espacios donde pueden surgir nuevos escenarios económicos desde los que tomar decisiones éticas, negociar el poder y forjar transformaciones».[28]

Tanto la democracia radical como la economía comunitaria pueden entenderse como intentos por dislocar a los sujetos de la hegemonía neoliberal

Gibson-Graham especifica el papel esencial de la dislocación, en palabras de Laclau, para liberar «los lenguajes [económicos] alternativos de su subordinación discursiva».[29] Que permita además que aquello que se ha liberado permanezca libre, en lugar de condensar la pluralidad de lo económico bajo una única demanda de "socialismo" o "colectivismo" o lo que fuere. No obstante, debe manejarse una lógica de equivalencia, y aquí Gibson-Graham sigue en sintonía con Laclau al considerar que su pluralismo económico no puede mantenerse en términos de un mero particularismo; conlleva demandas equivalenciales estructuradas en torno a un punto nodal que otorgue una representación universal a lo particular.[30] Por esta razón, Gibson-Graham estructura su discurso de la diversidad económica por medio del punto nodal de la «economía comunitaria».

La idea de una economía comunitaria es muy distinta a la de «economía capitalista» o a la de «economía socialista», intentos ambos de mantener la unidad de una multiplicidad de ideas y prácticas bajo una imagen unificada y fantasmática de la economía como un *todo.*

28 J. K. Gibson-Graham, *A Postcapitalist Politics*, University of Minnesota Press, Londres, 2006, p. 77.

29 *Ibidem,* p. 57.

30 E. Laclau, *On Populist Reason*, Verso, Londres, 2005, p. 171.

Al contrario que en el caso del «capitalismo» y del «socialismo», lo «comunitario» se representa como idea trascendental que no puede alcanzarse por completo a través de la experiencia. En palabras de Singer, «lo comunitario no es un signo de referencia sino un grito y un llamamiento»[31] y, por lo tanto, la economía comunitaria no implica la construcción de un modelo en concreto de economía comunitaria; no se han de especificar ni su forma ni sus contenidos ya que ello conformaría un intento por fijar el significado y reprimir el pluralismo del espacio económico. La idea se aproxima a la interpretación de Derrida de la democracia «por venir».

Entender la economía comunitaria como un llamamiento a la comunidad «por venir» indica la imposibilidad de la comunidad por «su carácter abierto al acontecer y al proceso de emergencia» y su «historia auto-deconstructiva como multiplicidad que da lugar a ficciones de sí misma» –todas las cuales emergen en el relato de Derrida de la democracia «por venir».[32] Los valores de la tradición comunitaria (solidaridad, cooperación, responsabilidad colectiva) se presentan como promesas emprendidas por el llamamiento a la comunidad. Tales valores complementan el pluralismo de la diversidad económica con la expansión de una cadena equivalencial igualitaria. La economía comunitaria como punto nodal es, por tanto, capaz de conservar el pluralismo radical del espacio económico, a la vez que presenta una lógica igualitaria equivalencial que atraviesa los elementos particulares de la negatividad económica, agrupándolos en un único discurso económico.

Los paralelismos entre la economía comunitaria y la democracia radical han empezado a emerger a medida que explorábamos la contingencia radical que habita en el corazón del proyecto político de Gibson-Graham. Tanto la democracia radical como la economía comunitaria pueden entenderse como intentos por dislocar a los sujetos de la hegemonía neoliberal. Con ello hacen hincapié en la dimensión ética de la política de la contingencia radical mediante la apertura del ámbito político a la discrepancia y a la contestación. En el caso de la economía comunitaria, el espacio económico se reactiva al acoger ideas y prácticas económicas discrepantes. Este discurso de la economía comunitaria mantiene la pluralidad radical de la economía y vincula las demandas políticas concretas de la esfera económica a una demanda universal de los principios igualitarios generados por el llamamiento a la comunidad.[33] Hasta cierto punto, cabe entender la economía comunitaria como el pluralismo democrático radical del espacio económico, promovido por proyectos de base que dislocan las ideas, prácticas y sujetos de la hegemonía económica totalizante. Pero surgen dos cuestiones pertinentes como consecuencia de esta conceptualización del proyecto económico.

---

31 L. Singer, «Recalling a Community at Loose Ends», The Miami Theory Collective (ed.) *Community at Loose Ends*, University of Minnesota Press, Londres, 1991, p. 125.

32 I. Goh, «Democracy to come», *Theory, Culture, Society*, vol. 23, 2006, p. 517.

33 J. K. Gibson-Graham, *A Postcapitalist Politics*, University of Minnesota Press, Londres, 2006, pp. 77-78.

En primer lugar, ¿cabe plantear que esta convergencia de ambas alternativas de pensamiento asume que una democracia radical de la esfera económica es equivalente a la democracia radical *en general*? Y, de ser así, ¿significa ello que son intercambiables los conceptos de "comunidad" y "democracia" desde una misma lógica igualitaria? En segundo lugar, a la luz del anterior debate sobre los problemas que plantea el discurso económico capitalista para la consecución de la democracia radical, ¿puede la economía comunitaria actuar de catalizador de la democracia radical en un sentido más amplio, es decir, de todas las demandas políticas, tanto económicas como no económicas? Este último aspecto tiene una dimensión empírica que nos remite a características de los sujetos y del pensamiento ético-político presentes en las economías comunitarias existentes. El primero, es fundamentalmente teórico y remite a las limitaciones que plantea el cruce entre dos proyectos políticos. Sin embargo, para resolver este aspecto el análisis del discurso de las economías comunitarias existentes podría permitir elaborar juicios más claros en torno a cualquiera de las discrepancias y divergencias teóricas entre la economía comunitaria y la democracia radical.

La toma de decisiones en un espacio económico diverso

El «capitalismo» como totalidad se enfrenta a los desafíos que plantean los proyectos de economía alternativa en los actuales espacios económicos del mundo. Estos proyectos tienden a surgir a partir de una ruptura con el discurso económico hegemónico y constituyen momentos de dislocación derivados de un periodo de crisis o discordia frente al habitual orden de las cosas. Pueden derivar a partir de un acontecimiento concreto en el ámbito local, como el cierre de una planta siderúrgica, o deberse a un cambio estructural como la privatización de prestaciones sociales, por ejemplo. En muchos casos, los actores políticos logran rearticular estos proyectos alternativos dentro de un discurso hegemónico, en otros no. Es precisamente en estos casos que evaden su recaptura donde pueden llegar a constituirse formas políticas radicalmente nuevas. Y es en estos casos, que evitan recuperar el discurso hegemónico, donde reside la posibilidad de que puedan constituirse formas de hacer política radicalmente nuevas. Es preciso distinguirlos de otros en los que el re-cierre del espacio económico se ha producido mediante la articulación de un proyecto contra-hegemónico como el socialismo. A continuación, veremos algunos ejemplos de proyectos económicos alternativos que no han logrado mantener una apertura del espacio económico.

En Gran Bretaña han emergido una serie de espacios económicos alternativos interesantes en algunas comunidades, muchas de las cuales han obtenido respaldo del Gobierno New Labour. Han empezado a llenar el vacío que ha ido dejando el rápido declive del Estado de bienestar iniciativas de "economía social" en las que las comunidades producen acti-

vamente formas alternativas localizadas de prestación, voluntariado y empresa.[34] Un ejemplo a destacar es el repentino crecimiento de los bancos de tiempo en algunas comunidades en los que las personas prestan su tiempo en el empleo de sus habilidades para ayudar a otros a cambio de recibir a su vez apoyo de los demás.[35] Este proyecto, como muchos otros, ha recibido respaldo y se ha convertido en último término en una parte integral del New Deal for Communities (NDC) del programa del New Labour. Otros proyectos se han creado como resultado directo de las iniciativas del Gobierno. Aunque, hasta cierto punto, en Gran Bretaña estos proyectos comunitarios locales han surgido a partir de la dislocación del binomio prestaciones-capitalismo, la intervención del New Labour ha supuesto que la existencia de la «economía social» haya adquirido una forma unificada en el seno del discurso económico neoliberal. El programa NDC ha articulado con éxito la mayor parte de las prácticas económicas comunitarias, incluyendo los bancos de tiempo, en su propia esfera de «economía social» lo que ha contribuido a institucionalizar el elemento *workfare* del discurso neoliberal. En este espacio económico, los sujetos quedan atrapados en la responsabilidad individual, la iniciativa empresarial y el mercado. Se otorga a la propia economía social la imagen de una parte diferencial de una economía capitalista más amplia que alberga los importantes valores de la sociedad posbienestar.[36] Por lo tanto, constituye un buen ejemplo de cómo el discurso del capitalismo es capaz de usurpar los proyectos económicos alternativos y rearticularlos en sus propios encadenamientos discursivos de sentido.

Es en las experiencias que evitan recuperar el discurso hegemónico donde reside la posibilidad de que puedan constituirse formas de hacer política radicalmente nuevas

Otro ejemplo ha sido el de Tower Colliery en Gales. El rápido declive de la industria del carbón en Gran Bretaña provocó importantes conflictos en la zona y en el norte de Inglaterra, lo que evidentemente provocó la dislocación de la identidad de las comunidades mineras. Tower Colliery es un ejemplo único de la reacción ante dicha dislocación. Ante la imposibilidad de identificarse con nuevas formas de empleo, y dado su rechazo a aceptar quedar relegados a una degradante situación de exclusión, los mineros de Tower se organizaron con el National Union of Mineworkers (NUM) para comprar la mina colectivamente. Este acto de resistencia frente al programa neoliberal del Gobierno conservador de enton-

34 A. Amin, A. Cameron y R. Hudson, «The Alterity of the Social Economy», A. Leyshon, R. Lee y C. C. Williams (eds.), *Alternative Economic Spaces*, Londres, Sage, 2003, pp. 28-33.

35 L. Stephens y J. Ryan-Collins, «The New Wealth of Time: How Timebanking can help people buildbetter public services», *Compass Think Pieces*, núm. 44, enero 2009.

36 A. Amin, A. Cameron y R. Hudson, «The Alterity of the Social Economy», A. Leyshon, R. Lee y C.C. Williams (eds.), *Alternative Economic Spaces*, Londres, Sage, 2003, pp. 48-50.

ces es un ejemplo de cómo puede estructurarse un proyecto económico alternativo en torno a un discurso contra hegemónico. No obstante, en lugar de mantener la apertura del espacio económico una vez dislocado, se produjo un cierre parcial en torno a un discurso socialista articulado por el NUM y la gestión de la mina.[37] Así lo reflejaba en una entrevista el director de personal de Tower al afirmar que estaban «formando… una empresa predominantemente socialista», si bien lo que verdaderamente develó ese cierre fue su defensa de la necesidad de «hallar una enemigo [para la fuerza de trabajo] fuera de la empresa» para lograr la unidad en torno a una lógica de equivalencia contra el Otro.[38] Ello impidió que los trabajadores de Tower llegaran a reflexionar sobre la contingencia de su propia identidad; una vez más, quedaron atrapados en un discurso totalizador.

Los ejemplos anteriormente citados demuestran con qué facilidad se articulan los proyectos económicos alternativos en torno a discursos que vuelven a totalizar el espacio económico tras la ruptura inicial que permitió que fluyeran las prácticas económicas. Aquí observamos la emergencia de una paradoja. Cuando determinados proyectos como los bancos de tiempo no se oponen con virulencia al capitalismo, se rearticulan con facilidad en torno al discurso capitalista. No obstante, la oposición al capitalismo tiende a implicar la construcción de toda una identidad que lo excluya como sistema unificado, como en el caso del discurso socialista de los trabajadores-propietarios de Tower Colliery. A continuación, relataremos algunos ejemplos en los que no se ha completado un cierre semejante y en los que ha destacado la experimentación de prácticas políticas éticas.

En 1994, el movimiento zapatista en México empezó a dar muestras de una solución a esta paradoja. Los zapatistas rechazan enérgicamente el discurso neoliberal capitalista, y alientan a otros grupos empobrecidos y oprimidos a hacer lo mismo. Pero, la oposición a estas prácticas económicas y políticas dominantes se construye en forma de movimiento radicalmente plural y localizado que no adopta una forma concreta y que carece de fronteras. La solidaridad dentro de movimiento zapatista se logra en torno a la demanda universal de autonomía frente a prácticas totalizadoras.[39] El proyecto está, y debe seguir estando, radicalmente abierto a todas las posibilidades para poder avanzar hacia la promesa de una comunidad autónoma. Dicho de otro modo, la identidad de los zapatistas se construye en torno a la negación de espacios que colonizan y cierran las posibilidades locales, por lo que la imposibilidad del cierre esta en el núcleo mismo del movimiento. Por tanto, los sujetos de las comunidades zapatistas son «no-sujetos» en el sentido de que acogen la incertidumbre de lo social y se liberan a sí mismos de las comunes formas de acción y pensamiento unívocas.[40]

---

37 A. Lincoln, «Alternative Work Spaces», A. Leyshon, R. Lee y C.C. Williams (eds.), *Alternative Economic Spaces*, Sage, Londres, 2003, pp. 114-117.

38 *Ibidem,* pp. 115, 117.

39 G. Esteva y M. S. Prakash, *Grassroots Post-Modernism: Remaking the soil of cultures*, Zed Books, Londres, 1998, pp. 36-41.

40 *Ibidem,* p. 45.

Los zapatistas han logrado sustentar un espacio en el que conviva la pluralización de los ámbitos económico y no económico. Algo que *no* es posible mediante el compromiso con una serie de prácticas económicas o políticas concretas. Por el contrario, a excepción de la ocupación de las tierras para reclamar el territorio, la principal doctrina económica zapatista es la *no intervención* en asuntos económicos, ya que se centra en cuestiones civiles.[41] Los zapatistas se distancian deliberadamente de la imagen de vanguardia. Su discurso se construye para empoderar a los pueblos sin crear fronteras que delimiten el ejercicio de dicho poder.[42] Al destacar el pluralismo junto con el llamamiento universal a la autodeterminación de las comunidades, lo decisivo para la construcción de economías comunitarias y prácticas de democracia directa para la toma de decisiones ha sido una esfera discursiva en la que las prácticas hallan sus propios significados aislados de los discursos políticos dominantes y totalizadores.

Incluso a pesar del violento antagonismo entre las fuerzas paramilitares zapatistas y el ejército mexicano en algunas comunidades, la no intervención de los zapatistas ha promovido la difusión de un discurso de la economía comunitaria similar al que teorizara Gibson-Graham. En la comunidad Diez de Abril, por ejemplo, entre otras actividades, los colectivos locales producen café, miel y pan, crían ganado y aves y tejen. Están organizados democráticamente y rinden cuenta a las asambleas elegidas en el ámbito local. El excedente se distribuye entre las personas que integran el colectivo y un fondo comunitario controlado por la asamblea.[43] La comunidad toma democráticamente las decisiones sobre la producción, la distribución del excedente y el consumo sin presiones externas. Sin duda, esta característica se corresponde con las premisas de las «prácticas éticas» de Gibson-Graham necesarias para las economías comunitarias y que incluyen la implicación en decisiones relativas a la distribución del excedente, el consumo y la conservación de los comunes.[44] ¿Sería esta una comunidad con prácticas de democracia radical?

Esteva y Prakash desde luego así lo creen. En su estudio sobre los zapatistas concluyen que comunidades como la de Diez de Abril «identifican la Modernidad con la muerte de la democracia», a la par que declaran que la recuperación de la democracia va pareja con la lucha por la autonomía, que en el discurso zapatista significa *diferencia.*[45] Por lo tanto, el mecanismo del discurso político que articula a estas comunidades indígenas es muy similar a los que se atribuyen a la democracia radical en el pensamiento posestructuralista. Es más,

---

41 Irish Mexico Group, «Chiapas Revealed: Why are the Zapatistas different?», febrero 2001 [acceso el 15/05/09 <http://zap.to/chiapas> p. 2].

42 *Ibidem,* p. 11.

43 Irish Mexico Group, «Autonomy and a Song», febrero 2002 [acceso 16/05/09 http://www.struggle.ws/mexico/comment/autonomyFEB02.html (escrito en visita a Diez de Abril)].

44 J. K. Gibson-Graham, *op. cit.*, 2006, p. 88.

45 G. Esteva y M. S. Prakash, *op. cit.*, 1998, p. 153.

la demanda de comunidad es sinónimo de democracia como muestra su mutua conquista implícita en la demanda universal de autonomía, una demanda de igualdad que supone el punto de unión para el pluralismo en el que se basa el movimiento. Las formas de deliberación adoptadas en el seno de las comunidades reflejan este discurso. A pesar de las dificultades que plantean las situaciones de pobreza y la violencia del Estado, la autonomía de los municipios y la toma de decisiones asamblearia permiten un debate político abierto entre los miembros de la comunidad. Si bien muchas de las decisiones se toman mediante votación, esta fórmula se valora como secundaria frente a los procesos previos de debate y consulta abiertos que determinan el voto. Por lo tanto, la comunidad puede plantear sus demandas a la hora de que se tomen la mayor parte, por no decir todas, las decisiones relativas a aspectos tanto económicos como no económicos y se dedica un tiempo considerable, que puede durar semanas, a permitir que diferentes puntos de vista determinen el proceso de toma de decisiones.

La experiencia zapatista permite entrever la posibilidad de convergencia de la economía comunitaria y la democracia radical en torno a la demanda universal de autonomía que mantiene una apertura radical mediante la negación de proyectos políticos totalizantes y a través de un fuerte compromiso no intervencionista. Las perspectivas que ofrece esta alternativa son muy estimulantes, pero resulta difícil establecer un juicio suficientemente fundado sobre el movimiento sin obtener la información necesaria acerca de la política que se produce en el seno de las comunidades y mientras siga siendo una práctica habitual la represión violenta por parte de fuerzas del Estado. Asimismo, aunque hayamos podido ver indicios de una convergencia, queda aún por determinar si la economía comunitaria actúa como catalizador de la democracia radical ya que aparentemente ambos proyectos han crecido parejos.

Para ahondar en la construcción de la democracia radical por vía de proyectos económicos comunitarios, nos centraremos a continuación en el ejemplo de las cooperativas de Mondragón en el País Vasco. Al contrario que en el caso anterior, el discurso económico inspira específicamente la experiencia de Mondragón, si bien, este discurso ha promovido y difundido un pensamiento ético y de contestación política dentro del espacio económico. La comunidad de Mondragón se ha configurado a través de su compromiso con más de cien cooperativas propiedad de los trabajadores del sector industrial, así como de los sectores de servicios y comercial.[46] Los orígenes de dicho compromiso radican en la filosofía del padre Arizmendiareta que captó la importancia ética de la autodeterminación económica, y alimentó un discurso sensible a una economía comunitaria que alentara a los trabajadores a reevaluar y renovar las prácticas existentes, dejándolas siempre abiertas a la contestación política.[47] El control democrático de las cooperativas ha producido distintos resultados en

[46] J. K. Gibson-Graham, *op. cit.*, 2006, p.102.

[47] *Ibidem,* pp. 102-3, 125-6.

Mondragón en comparación con Tower Colliery, fundamentalmente por su filosofía de apertura económica. Si bien es cierto que determinadas fuerzas políticas externas han intentado hegemonizar el espacio económico, en particular ETA, los trabajadores propietarios siguen implicados en la resolución de conflictos y en un proceso de toma de decisiones que incluye a todas las voces y la sistemática posibilidad de cambio frente a un posible anquilosamiento.[48]

La experiencia zapatista permite entrever la posibilidad de convergencia de la economía comunitaria y la democracia radical en torno a la demanda universal de autonomía

Como trabajadores-propietarios, los sujetos de Mondragón se organizan «mediante la experimentación de una toma de decisiones ética en torno a aspectos relacionados con el individualismo y el colectivo».[49] Como resultado de todo ello, la política económica es radicalmente plural y democrática. Pero no está del todo claro hasta qué punto se ha extendido esta práctica hasta otros espacios políticos. La socióloga Barbara Peters sugiere que el verdadero impacto de las cooperativas de Mondragón ha sido la reducción de la pobreza, una reducción sustancial de las desigualdades y la promoción de valores igualitarios en el espacio social.[50] Aspectos todos ellos útiles para superar las aspectos económicos que impiden el surgimiento de sujetos demócratas radicales. Algunos dirían que esta localidad ha alcanzado el nivel de madurez para que proliferen prácticas democráticas radicales en la política local comunitaria. Pero, tras 50 años de existencia de la cooperativa, aún no se ha alcanzado semejante fase. Quizá haya que buscar una razón para ello en la falta de una dimensión no-económica en las demandas de pluralidad y de comunidad. En el caso zapatista, se produjo como respuesta simultánea a la represión de las culturas indígenas y de sus formas de vida. En el País Vasco también existe una reivindicación política fuerte de autonomía, que bien podría haber impulsado la causa divergente con la economía capitalista corporativista de la España de Franco. Pero las demandas de autonomía de la región han quedado bajo la hegemonía del discurso independentista de grupos como ETA, y el significado de la autonomía se desplaza hacia el nacionalismo y la construcción de un Estado independiente, postura que los zapatistas evitan deliberadamente para mantener el aperturismo radical de la idea de autonomía.[51] Por lo tanto, parece que el discurso fuerte del independentismo en el País Vasco ha hegemonizado la política fuera del espacio económico que han dejado

48 *Ibidem,* pp. 119-120

49 *Ibidem,* p. 125.

50 Newswise, «Spanish Town without Poverty», 2000 [acceso 16/05/09 http://www.newswise.com/view/17012].

51 W. S. Shepard, «The ETA: Spain Fights Europe's Last Active Terrorist Group», *Mediterranean Quarterly*, vol. 13, núm. 1 (invierno, 2002), pp. 54-68.

abierto las cooperativas de Mondragón. Aunque las circunstancias puedan parecer específicas a la región, el problema pone de relieve una preocupación más general por la capacidad de la economía comunitaria de radicalizar la política democrática fuera de la esfera económica.

Conclusión

A la luz de las aportaciones teóricas y empíricas que se han presentado aquí parece difícil obviar los rasgos comunes entre los proyectos de democracia radical y de economía comunitaria. Hay más de una forma de entender la relación entre los dos ámbitos de pensamiento. Empezamos por problematizar la falta de compromiso de los demócratas radicales con la deconstrucción y la repolitización del espacio económico. En este sentido, la economía comunitaria puede entenderse como complementaria al proyecto de la democracia radical al mostrar cómo el espacio económico puede hacerse plural y democrático cuando se articula con un discurso de la diversidad económica que sustente un aperturismo radical a las prácticas económicas y a la contestación política. Hacia el final del ensayo, realizamos un esfuerzo por clarificar estos cruces teóricos en casos empíricos de proyectos económicos alternativos. Identificamos un problema común a las dislocaciones frente a los discursos económicos hegemónicos: una tendencia a que los proyectos alternativos quedaran recapturados bajo una concepción unificada de economía, ya sea en el discurso neoliberal hegemónico, o en los discursos contra-hegemónicos como el socialismo. En los casos en los que esta dinámica no se ha producido, hemos visto más clara la posibilidad de que las economías comunitarias prosperan como complementos de prácticas de democracia radical, más que como condición previa para políticas radicales más allá de la esfera económica. En el caso de las comunidades zapatistas, la capacidad de la democracia radical para irrumpir en espacios económicos o no económicos parecía erradicar de la articulación de una demanda universal de autonomía, como reivindicación de la diferencia, por encima de todas las cosas y al margen de los proyectos políticos hegemónicos que pretenden encerrar las demandas de autonomía en el nacionalismo, la construcción del Estado o el liderazgo revolucionario.

A la hora de proponer un proyecto de democracia radical es preciso que la izquierda *cuestione* su dependencia instintiva de una imagen de la economía totalizada por las inflexibles leyes del mercado. El neoliberalismo mantiene su hegemonía a través de su habilidad para construir discursivamente la fantasía de que existe una economía capitalista y una "realidad económica" para la que no existe una alternativa. La izquierda puede aprender mucho de la experiencia de Mondragón en este sentido pero, no obstante, no basta con reactivar la economía para disipar otros discursos totalizadores que hegemonizan otros espacios políticos. Si pretendemos crear verdaderamente prácticas de democracia radical

hemos de hallar un discurso capaz de articular una demanda universal que capte la pluralización de todas las políticas, las demandas, y de todo significado. Los zapatistas han trazado una vía para ponerlo en práctica, pero cabe esperar que siempre se produzca una relación de contingencia entre el discurso y la historia política y cultural específica de cada comunidad. Sobre todo, cabe afirmar que no existe atajo alguno ni ley general alguna para la consecución de una política democrática radical. No obstante, la enseñanza que podemos extraer del debate aquí planteado es que parece evidente que un proyecto de estas características deberá incluir de alguna manera la deconstrucción y reactivación del espacio económico hegemonizado por el discurso capitalista neoliberal.

Boletín ECOS

El **Boletín ECOS** es una publicación electrónica, trimestral y gratuita que aborda debates candentes relacionados con las líneas de trabajo del Centro.

Ámbitos de referencia

- Sostenibilidad
- Conflictos socioecológicos
- Cohesión social
- Democracia
- Diversidad

Contenidos

- Entrevistas
- Diálogos
- Artículos de análisis
- Información de actividades de CIP-Ecosocial
- Selección de recursos destacados del Centro de Documentación Virtual

Últimos Boletines ECOS publicados

Boletín nº 14: Feminismos
(Marzo-mayo, 2011)
Debates feministas más allá de las fronteras y la visión de Occidente.
Análisis: Violet Eudine Barriteau, Ziba Mir Hosseini y Teresa Munguía.

Boletín nº 13: Periodismo con otra mirada
(Enero-febrero, 2011)
Entrevista a seis profesionales de la información: Karen Marón, José Manuel Martín Médem, Miguel Romero, Víctor Sampedro, Gervasio Sánchez y Pascual Serrano.
Análisis: José Manuel Sánchez, Alejandro Barranquero, José Naranjo y Greg Simons

Boletín nº 12: Cultura y bienestar humano: el papel de la biodiversidad
(Julio-octubre 2010)
Diálogo: Teresa Ribera, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo
Análisis: Carlos Taibo, Jordi Roca, Cristina García Fernández, Antonio Ruiz de Elvira

Suscríbete al Boletín ECOS en la página web del Centro:

http://www.cip-ecosocial.fuhem.es

Consulta los números publicados:

http://www.fuhem.es/cip-ecosocial/boletin-ecos

Impactos y consecuencias de la CRISIS

Diagnósticos de una cooperación en crisis y de la crisis de la cooperación en España 35
Carlos Gómez Gil

Efectos de la crisis sobre las clases trabajadoras 45
Albert Recio

Perfiles de una tragedia: la crisis residencial y urbanística española 57
Alfonso Álvarez Mora, María Castrillo, Juan Luis de las Rivas, Luis Santos

Demografía, sostenibilidad e igualdad de género 71
María Pazos

Notas sobre los efectos socioeconómicos de la crisis para la población inmigrada 85
Colectivo Ioé

La reforma impopular de las pensiones 97
Antonio Antón

Recortes profundos que hay que cortar por lo sano: crisis económica, políticas sociales y daños en la salud 107
Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa Puig-Barrachina, Joan Benach

La mejora de la salud durante las crisis económicas: un fenómeno contraintuitivo 121
José A. Tapia

Consumo y estilos de vida sostenibles en el contexto de la crisis económica 139
L. E. Alonso, C. J. Fernández Rodríguez, R. Ibáñez Rojo, C. Piñeiro

Antineoliberales, anticapitalistas 149
Carlos Taibo

Su crisis y nuestras respuestas 155
Josep Maria Antentas y Esther Vivas

Especial

CARLOS GÓMEZ GIL

Diagnósticos de una cooperación en crisis y de la crisis de la cooperación en España

La decisión del Gobierno socialista de recortar la Ayuda al Desarrollo en los próximos años, en el marco de las políticas de ajuste neoliberal dirigidas a recortar el déficit público, ha pasado desapercibida entre la sociedad y en el propio sector. Sin embargo, esta medida ha dado carta de naturaleza a una situación de permanente crisis en que se desenvuelve nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo desde hace décadas, al intensificarse numerosos problemas institucionales, técnicos y estratégicos que mantienen nuestra política de cooperación en una situación de precariedad histórica, alejada de los cambios y transformaciones que otros donantes han venido realizando y fuera de cualquier atisbo de crítica razonada encaminada a su mejora.

Carlos Gómez Gil es profesor en el Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante

En el marco de las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la involución histórica que el ejecutivo anunció en mayo de 2010 sobre la política de cooperación al desarrollo, que ha previsto una reducción en 800 millones de euros el presupuesto de la AOD para los dos próximos años, pasó sin pena ni gloria mientras la sociedad asimilaba otros muchos recortes. Sin embargo, fue llamativo que ni siquiera desde el propio sector de la cooperación se ofrecieran respuestas de entidad ante el alcance de estas decisiones, lo que supone todo un síntoma sobre la salud del medio.[1]

Tengamos en cuenta que esta decisión supondrá un retroceso mínimo del 10% del volumen global de la AOD española en los próximos años, en la medida en que el recorte del Gobierno central ha ido seguido por descensos

[1] Mientras que el 20 de julio de 1996, la Coordinadora de ONGD publicó una artículo de opinión muy crítico en el diario *El País* contra los recortes anunciados por el gobierno del PP de aquel entonces en los presupuestos de la cooperación española, en esta ocasión no se ha producido algo similar, a pesar de que estos recortes tienen una mayor trascendencia.

mucho más cuantiosos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, difíciles de cuantificar en estos momentos, pero que oscilan entre un 10 y un 100%. Sin embargo, una vez más se ofreció información inexacta sobre el alcance real de este recorte, ya que la primera nota oficial del Gobierno del 11 de mayo hablaba de un descenso global de 600 millones de euros en los dos próximos años, que pocas semanas después se elevaron hasta los 800 millones, si bien, los presupuestos de la AOD para 2011 plantean una disminución solo en este año de 918 millones de euros.

Las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno de Zapatero sobre la ayuda española venían a terminar con el espejismo en el que esta se mantenía desde la anterior legislatura y donde vive instalada desde tiempos inmemoriales. Y lo que es más importante, estas decisiones dan carta de naturaleza a una situación de permanente crisis en la que se desenvuelve la AOD en nuestro país; por encima de las metáforas y los discursos grandilocuentes; más allá de los viajes publicitarios y las campañas promocionales que tratan de evitar abordar las cuestiones capitales que están en el corazón de los espacios de tensión paradigmática sobre los que discurre la ayuda pública al desarrollo.

Una crisis estructural y cronificada

La crisis de la cooperación española, que este Gobierno oficializó con el anuncio de amplios recortes sobre la misma, no tiene una exclusiva motivación económica, ni mucho menos, sino que hunde sus raíces en problemas de mucho mayor calado que con el paso de los años se han acabado por cronificar. Tratemos de analizar algunos de estos dilemas estructurales que tiene abiertos la cooperación española.

La verdadera repercusión del recorte presupuestario

En España se ha hablado mucho de los dineros de la ayuda, pero muy poco de sus políticas. Uno de los ejes sobre los que se cimentó la candidatura de Rodríguez Zapatero fue la renovación de la ayuda al desarrollo y especialmente el cumplimiento del 0,7% del PIB en AOD que se convirtió en una de las propuestas totémicas del PSOE. Sus sucesivos gobiernos no han parado de repetir con énfasis que el compromiso del 0,7% era sagrado y que se alcanzaría, no ya en el año 2015, fecha fijada por la comunidad internacional a través de los ODM, sino tres años antes, en 2012, como demostración inequívoca de su implicación. Por vez primera, fijaron un calendario concreto, preciso y verificable que se acompañaba de aportaciones económicas crecientes y nunca antes vistas en la historia de la cooperación española que permitieron remontar la negra etapa de progresivos descensos experimentados en la década anterior, alcanzándose así el máximo porcentaje de AOD ejecutada por

España en su historia, que ha llegado al 0,46% de AOD en 2009, es decir, 4.728 millones de euros. Justo es reconocer estos avances.

Sin embargo, siendo esenciales los recursos económicos para llevar a cabo las políticas, en el caso de la ayuda al desarrollo no son el componente exclusivo, ni mucho menos, si no se acompañan al mismo tiempo de otras decisiones, dispositivos y estrategias que aseguren la adecuada finalidad de estos recursos. El PSOE basó la estrategia de futuro de la AOD en el cumplimiento del 0,7%, sin duda, por la fuerza mediática y simbólica de este compromiso, que acabó repitiendo como un *mantra* vacío de contenido, sin abordar cambios imprescindibles sobre el presente y sin que fuera acompañado de una profunda modernización en sus estructuras institucionales, técnicas y estratégicas.

La crisis de la cooperación española no tiene una exclusiva motivación económica, sino que hunde sus raíces en problemas de mucho mayor calado

Ahora bien, cuando se anuncia la imposibilidad de alcanzar el 0,7% de la mano de importantes reducciones en los presupuestos de la ayuda estatal en los próximos años, todo el edificio sobre el que se cimentaba la cooperación española tiembla, porque no se ha venido trabajando en su consolidación y fortaleza. Y lo que es peor, la decisión del Gobierno central lleva a que se adopte en cascada también, si cabe con mayor énfasis, en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España, que como un castillo de naipes ven desmoronar sus políticas de cooperación descentralizada con recortes que en algunos casos han llegado hasta el 100% de sus presupuestos.

A la luz de todo ello, resulta particularmente irresponsable que el presidente Rodríguez Zapatero siga insistiendo en que España llegará al 0,7% en el año 2015 en importantes foros internacionales, como hizo en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en Naciones Unidas, el 20 de septiembre de 2010, donde puso una vez más en evidencia su profundo desconocimiento del rumbo y del verdadero calado de las políticas de ayuda.

Banalización de las políticas de ayuda

A medida que este Gobierno centró todas sus energías en el logro del 0,7%, situó en un segundo plano otras exigencias mucho más acuciantes, reduciendo la complejidad de las políticas de ayuda y los problemas de la pobreza en el mundo a una simple cifra que se creía

que crecería frenéticamente, al igual que nuestra economía, en plena quimera de la abundancia, sin necesitar ningún otro horizonte, carente de pasado y ausente de cualquier otro futuro. Con ello, el principal proyecto político que los gobiernos socialistas han venido empujando sobre la AOD se ha basado en alcanzar el calendario del 0,7%, sin abordar las grandes reformas estructurales e institucionales pendientes que esta acumulaba desde hacía décadas y sin afrontar sus grandes dilemas históricos.

Por el contrario, se ha alimentado un discurso épico y acrítico, cada vez más condescendiente con gobiernos e instituciones multilaterales con las que compartimos intereses opuestos, en no pocas ocasiones, a los mismos objetivos de muchas de las iniciativas de cooperación que decimos promover. El vergonzoso papel que ha tenido el Gobierno socialista en Colombia durante la etapa de Uribe, o el apoyo entusiasta que los Documentos de Estrategia País o los de Actuación Especial contienen sobre políticas extremadamente dañinas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigen en los países prioritarios para la cooperación española, son buen ejemplo de lo que decimos.

De esta forma, la ayuda española se ha construido esencialmente en los últimos años como una aportación caritativa y acrítica necesaria para que la globalización neoliberal avance, pasando de puntillas sobre los mismos elementos generadores de pobreza y sufrimiento sobre los que pretende intervenir y cuya causa es un capitalismo voraz carente de normas y la preeminencia de un mercado que impone sus intereses. Cuando no ha sido, pura y llanamente, un simple instrumento económico, político, comercial y policial a nuestro servicio, como se ha puesto de manifiesto con las medidas de control de la inmigración en África o el apoyo a determinados grandes exportadores con recursos de la cooperación española. Todo el proceso ha ido aderezado de metáforas épicas[2] que acababan por banalizar la finalidad transformadora de las políticas de cooperación en medio de la globalización neoliberal.

Esta banalización extrema en los mensajes, análisis y compromisos se mantiene plenamente vigente, trasladándose hasta los foros internacionales más relevantes. Una lectura del discurso que el presidente Rodríguez Zapatero leyó en la sesión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio[3] da buena idea de lo que decimos, al defender los «importantes avances obtenidos en el cumplimiento de los ODM», que según él, «pueden ser cumplidos en el 2015», o que «suponen un fin en sí mismos», algo que ni siquiera los propios informes de Naciones Unidas sostienen.

---

2 Como cuando el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, en una gira por África en el año 2008 para ofrecer dinero de la cooperación a cambio de actuaciones de lucha contra la inmigración irregular en diferentes países del continente, afirmó que España había pasado «de la hucha del Dómund a la ayuda institucional», como recogió el diario *El País,* el 29 de enero de 2008.

3 Intervención del presidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio, Nueva York, 20 de septiembre de 2010.

Extrema precarización

Pero donde este Gobierno ha actuado de forma completamente irresponsable ha sido en alimentar una precarización extrema en las estructuras institucionales, técnicas y profesionales básicas necesarias para gestionar una ayuda al desarrollo cada vez más relevante que se pretendía llevar hasta el 0,7%. De nada sirve afirmar que este es el estado natural en que se mantiene nuestro sistema de ayuda desde su origen mismo, en la medida en que el propósito de incrementar de forma notable los recursos destinados a ella, así como el cumplimiento de acuerdos y compromisos internacionales exigían de una vez por todas acometer reformas y modernizaciones inaplazables.

Los gobiernos socialistas emprendieron una huida hacia adelante, optando bien por mantener estructuras disfuncionales que han estado lastrando aspectos relevantes para la gestión del dispositivo de nuestra ayuda –como la AECI, a la que a pesar de haberle añadido la D de desarrollo, sigue siendo una institución arcaica y disfuncional– o bien por crear dispositivos inoperantes basados en la contratación masiva de colaboradores, becarios o suministradores de servicios externos. De esta forma, el número de profesionales con trayectoria e historia al frente de parcelas relevantes de nuestra cooperación se ha ido reduciendo como consecuencia de la inyección masiva de trabajadores extremadamente precarios, que en algunos casos, se han mantenido durante años como trabajadores autónomos para no generar relación laboral alguna en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Y por si fuera poco, este mismo esquema de precariedad se ha trasladado a las OTC en el exterior, generándose situaciones verdaderamente ridículas que dejaban al descubierto la debilidad de nuestro sistema de ayuda, trasladaban una mala imagen –como en el caso de los becarios provisionales que desconocían proyectos esenciales–, mostraban incapacidad de atender a los técnicos evaluadores que acudían a diferentes países a evaluar proyectos en marcha de la cooperación española y desatendían las solicitudes que enviaban a las OTC los técnicos que se trasladaban al extranjero para llevar a cabo iniciativas relacionadas con la cooperación española, entre otras.

El despido masivo de un centenar de trabajadores de la AECID en fechas recientes, todos ellos autónomos, que llevaban en algunos casos hasta 10 años trabajando en la cooperación española, con la prohibición de ocupar sus despachos y acceder a sus puestos de trabajo, como respuesta a la reclamación laboral que algunos de ellos hicieron ante las magistraturas de trabajo y el fallo a su favor que obtuvieron, dejó al descubierto lo que era un secreto a voces pero que nadie se atrevía a expresar en público.[4] Eran trabajadores, dis-

[4] El diario *El País* daba cuenta de este hecho en una información titulada «Los recortes en la AECID dejan sin cubrir puestos clave de la cooperación», el día 28 de abril de 2010, en un artículo de Josep Garriga que causó verdadero malestar entre los responsables de la cooperación española, no tanto por su contenido, que era completamente verídico, sino por el hecho de que se difundieran a la opinión pública estos hechos.

ponían de despachos, de cuentas de correo institucionales, de tarjetas de identificación, representaban a la cooperación española desde hace años ante instituciones y organismos, pero se les negaba su vinculación como trabajadores de la misma cooperación a la que servían. Y ante la posibilidad de que se reconociera este hecho de forma masiva, se produjeron sus despidos. Aún más, algunos de ellos acaban de ser sustituidos por agentes forestales que estaban desocupados en la Administración General del Estado, hecho que pone aún más de manifiesto la importancia que concede este Gobierno a la ayuda al desarrollo.

Dentro de la propia SECI, los técnicos de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) –la institución estrella creada en esta etapa de gobierno–, pasan a trabajar para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP), aunque realizan los mismos cometidos anteriores. De esta forma, desde el Gobierno socialista y la Secretaría de Estado de Cooperación se ha impulsado una progresiva privatización de estructuras esenciales de la cooperación estatal, que son gestionadas por la Fundación Carolina, FIIAPP, TRAGSA y P4R, fundamentalmente, en algunos casos mediante adjudicaciones tan opacas como controvertidas.

¿Cómo podía resultar creíble el 0,7% prometido por el Gobierno en medio de un escenario de precariedad, vulneración de derechos laborales y ausencia de funcionarios y técnicos esenciales para la gestión de la cooperación de un Estado?

Lamentablemente, esta inestabilidad profesional, técnica e institucional se ha trasladado al conjunto de capacidades y dispositivos utilizados en la cooperación española, tanto dentro como fuera de España, empapando y filtrando todos los niveles de gestión. Con ello se ha impedido una actualización y modernización tan imprescindible como inaplazable del sistema de cooperación español.

Ausencia de cualquier atisbo de crítica y renovación

Si bien desde los sucesivos gobiernos socialistas se han tratado de recomponer espacios esenciales de participación social que habían sido cortados con anterioridad, los responsables de la cooperación favorecieron desde el primer momento a aquellas entidades, técnicos e investigadores acríticos, generadores de un discurso laudatorio e insustancial, suprimiendo cualquier atisbo de crítica razonada, tan necesaria en las políticas de desarrollo. Es muy significativo que el Consejo de Cooperación al Desarrollo, que debería ser un órgano independiente de análisis y supervisión de estas prácticas, mantenga expertos desde la creación misma de este órgano, en el año 1994, que primero trabajaron para el Gobierno socialista, luego para los del PP y, posteriormente, de nuevo para los del PSOE hasta el momento actual, habiéndose añadido algunos otros de sumisión asegurada. No se busca a los mejores, sino a los más dóciles y acríticos en cualquier ámbito de la cooperación española.

Por si todo ello fuera poco, se han producido retrocesos injustificables en la información de parcelas fundamentales de la cooperación española, como en los créditos FAD, cuyos informes anuales que se venían realizando desde el año 2000 fueron suprimidos por este Gobierno,[5] impidiéndose con ello el acceso a datos esenciales sobre su uso e incumpliéndose así los acuerdos de información semestral al Parlamento. No se trata solo de que se haya impedido acceder a datos básicos sobre el instrumento más importante en la historia de la cooperación española, sino que se niega a los propios parlamentarios el acceso a esta información esencial. En diciembre de 2008, el diputado de CiU, Carles Campuzano, pidió al Gobierno información sobre la ejecución del FAD en 2008; en 2009[6] obtuvo la parca respuesta: «ha sido del 90%» sin más información, documento o listado lo cual retrata la política de información y transparencia llevada a cabo por el Gobierno.

Uno de los sectores más expuestos a la vulnerabilidad de los tiempos es el de las políticas de ayuda al desarrollo y de solidaridad en este nuevo darwinismo social defendido por gobiernos e instituciones de toda naturaleza

Tampoco es casual que la información que España ofrece sobre la financiación concedida a las ONG sea prácticamente inexistente para uno de los donantes que mayores recursos gestiona a través de estas organizaciones. Como ejemplo de ello, mientras que la Agencia Noruega de Desarrollo (NORAD) publica varios informes anuales de contenido crítico con centenares de páginas e información detallada solo en el campo de la cooperación con las ONG de este país, el seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), que recoge todas las actuaciones de la cooperación española, apenas ofrece poco más de una página sobre este sector cada año. El PACI se ha acabado por convertir en un documento tan farragoso como antipático, con abundantes números pero incapaz de dar respuesta a cuestiones esenciales y de ofrecer datos básicos sobre la ejecución y pertinencia de la cooperación española.

Es cierto que se han multiplicado los informes técnicos, estudios y evaluaciones sobre la cooperación española, pero en su mayoría, han estado alejados de cualquier análisis crítico, se han omitido datos y diagnósticos comprometidos, no se ha mostrado voluntad de que sirvan posteriormente para alimentar cambios o aplicaciones efectivas, cuando no se han con-

[5] Nos referimos a los informes pormenorizados sobre la actividad del FAD que publicaba anualmente la Secretaría de Estado de Comercio y que dejaron de hacerse en 2008, siendo retirados incluso de internet, ya que a lo largo de toda la historia de los créditos FAD, desde su creación en 1976 hasta el año 2010, nunca la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional ha realizado evaluación, informe o memoria global sobre el que ha sido el principal instrumento en la historia de la cooperación española.

[6] Respuesta del Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios a la pregunta escrita (184/48358) del diputado Carles Campuzano Canadés, nº 58404, de fecha 26 de febrero de 2009.

vertido en un espacio clientelar más al servicio del grupo de amigos, lo que lleva a que se esté incumpliendo incluso la normativa sobre concursos públicos para su contratación.

Mantenimiento de poderosas estructuras clientelares

Frente a una apariencia de cambios y reformas, muchos de ellos superficiales y sin voluntad de renovación profunda del sistema de ayuda, el Gobierno socialista ha sido incapaz de acometer transformaciones imprescindibles e inaplazables. La razón de ello está en el deseo de mantener los intereses de determinados grupos, sectores y estamentos que utilizan en algunos casos los recursos e instrumentos de la AOD de forma clientelar. Cada sector de la cooperación española presiona para mantener y aumentar su poder y sus recursos en el sector y el resultado de todo ello es un gigantesco puzle en el que cada grupo sitúa sus propias piezas y presiona para disponer de más poder y recursos.

La pervivencia de intereses particulares

Y la consecuencia más visible de todo ello es la pervivencia en la AOD de poderosos intereses particulares que con el paso del tiempo se trata de justificar renovando el discurso y buscando su difícil encaje en acuerdos y compromisos internacionales de todo pelaje, al margen de cualquier política progresista y en sentido contrario a las buenas prácticas que otros importantes donantes vienen llevando a cabo.

El ejemplo más elocuente de lo que decimos ha sido la lamentable transformación de los criticados créditos FAD en el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y el Fondo de Promoción del Desarrollo (Fonprode), bajo la cobertura de la Ley de Reforma del Sistema Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española, y de la Ley de Creación del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que aprobó recientemente el Gobierno socialista. El Gobierno renunció a llevar a cabo una evaluación detallada sobre el más importante instrumento en la historia de la cooperación a lo largo de sus 24 años de vigencia, y a atender a las peticiones y propuestas, en algún caso extraordinariamente documentadas, que se hicieron desde determinadas organizaciones civiles e investigadores, y decidió realizar una aparente reforma que daba carta de naturaleza a su utilización como principal instrumento generador de deuda externa y pobreza en los países del Sur.

No parece preocupar a nadie que el nuevo Fonprode permita, como recoge en el apartado E de su artículo 2, dedicar recursos de la ayuda española a la «Concesión, en su caso, de créditos, préstamos y líneas de financiación en términos concesionales, incluidos aportes a programas de microfinanzas y de apoyo al tejido social productivo, así como la adqui-

sición temporal de participaciones directas o indirectas de capital o *cuasi capital* [*sic*] en instituciones financieras o vehículos de inversión financieras…» ¿Cómo se puede seguir autorizando meter dinero que supuestamente se dirige a la ayuda al desarrollo para adquirir acciones de *cuasi capital*? El capital o lo es o no lo es, de manera que no puede "cuasi serlo", lo cual demuestra hasta qué punto se abren resquicios para financiar iniciativas que no pueden ser financiables, algo que ya se ha empezado a hacer mediante la concesión de recursos del Fonprode a entidades radicadas en paraísos fiscales.

En definitiva, no es más que cambiar el nombre a los mismos procedimientos y mantener buena parte de los elementos históricos de opacidad y financiación de iniciativas polémicas que han rodeado a los créditos FAD desde su creación.

Buen ejemplo del grado de degradación alcanzado en las políticas e instrumentos de la ayuda española se evidencia en un hecho tan insólito como el haber incorporado a la nueva Ley recientemente aprobada que regula el Fonprode, que será uno de los principales instrumentos futuros de nuestra ayuda al desarrollo, disposiciones legales para cuestiones que nada tienen que ver con la AOD[7], como la jubilación de los controladores aéreos y la regulación de los órganos rectores y de gobierno de las cajas de ahorros. Bien es cierto que de forma significativa, no ha habido crítica alguna a ello desde ninguno de los sectores de la cooperación.

Algunos interrogantes finales

Con el paso del tiempo, una de las cosas que hemos ido conociendo inequívocamente sobre la cooperación española son sus malas prácticas y políticas, a pesar de lo cual, este Gobierno ha mantenido con renovada vigencia muchas de ellas. Así, la distancia entre los discursos y las prácticas reales se ha mantenido con fuerza en nuestra AOD, al tiempo que se viene tratando de impedir o dificultar el conocimiento exacto sobre la misma. Por otra parte, la fragmentación de la ayuda entre los diferentes sectores y grupos de interés que se han ido amontonando a su alrededor, dificultan el avance de criterios, discursos, análisis y prácticas renovadoras.

En momentos tan turbulentos como los que atravesamos, conviene fijar bien los cimientos de los dispositivos públicos que el huracán neoliberal que sacude al mundo entero está erosionando y cuestionando. Y, sin ninguna duda, uno de los sectores más expuestos a la vulnerabilidad de los tiempos es el de las políticas de ayuda al desarrollo y de solidaridad,

[7] Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, BOE núm. 257, sábado 23 de octubre de 2010, disposiciones finales segunda, tercera y cuarta.

arrojados como estamos a este nuevo darwinismo social defendido por gobiernos e instituciones de toda naturaleza.

Ahora bien, el Gobierno socialista debería dar respuesta a dos cuestiones básicas pero esenciales que ha ocultado. ¿Nuestro compromiso con las políticas de Ayuda Oficial para el Desarrollo va a depender en adelante de nuestro crecimiento económico y de los procesos de inestabilidad financiera que pueda experimentar España?, y en línea con ello, ¿qué grado de prioridad otorga el Gobierno a las políticas de AOD? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el elemento diferencial que aporta un Gobierno socialista en sus políticas de cooperación internacional hacia los países y pueblos más desfavorecidos? La respuesta a ambas preguntas pasa por dos términos devaluados en los tiempos actuales, como son la política y la ideología.

Precisamente, en tiempos de limitaciones presupuestarias cobra más importancia intervenir sobre aquellos planos que no pasan, necesariamente, por un mayor aumento de recursos económicos, como son los que precisamente se han expuesto, tales como el abandono de la banalización, la eliminación de la precariedad, el aumento de la capacidad de crítica y renovación, la superación del clientelismo y de los intereses egoístas que la lastran desde hace décadas, por señalar algunos de ellos.

Así las cosas, el panorama que se está configurando en la cooperación española con motivo de la crisis no puede ser más sombrío: institucionalmente hay un progresivo derrumbe; los recortes son de mucha mayor cuantía que los anunciados inicialmente por el propio presidente del Gobierno; la rendición de cuentas se ha reducido a una caricatura; el interés empresarial y geoestratégico está llevando a un perfil de ayuda similar a los años negros de las década de los noventa del siglo XX; la ausencia de transparencia, publicidad y equidad es clamorosa en todos sus niveles; la cooptación de personas y organizaciones dóciles y cómplices con las políticas llevadas a cabo está produciendo un proceso de selección deliberado en el que se abren paso los de siempre; mientras en la cooperación descentralizada reina la confusión y el desguace de muchos de los avances y compromisos trabajados con esfuerzo en las últimas décadas.

La cooperación española adolece de relato, rigor y coherencia, y su rumbo es incierto. Si como decía Hannah Arendt, todo proceso político tiene un objetivo, un fin y un sentido explícito, nuestra política de ayuda carece en estos momentos de todo ello.

ALBERT RECIO

Efectos de la crisis sobre las clases trabajadoras

El autor parte de una clara premisa: las crisis las provoca un determinado comportamiento humano, mediado por las estructuras sociales, los marcos institucionales y las dinámicas de acumulación, por lo que su impacto difiere según la posición social y económica que ocupen las personas. Cualquier programa alternativo deberá ser capaz, de promover reformas y propuestas de reorganización social y de desarrollar un discurso cultural que ayude a la gente a situar que el paro no es la alternativa a condiciones de vida y trabajo dignas, sino que se trata de cuestiones entrelazadas que exigen una solución conjunta. Si bien pudiera parecer que el efecto más palpable de la crisis es el desempleo, dista de ser el único y es preciso analizar otros elementos como su impacto por sectores, el nivel de prestaciones sociales, la calidad del trabajo y el impacto sociopolítico y cultural más allá de las condiciones materiales.

Albert Recio es profesor titular del departamento de Economía Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona

Tres años de crisis y destrucción masiva de empleo deben tener efectos importantes sobre la vida social. Pero a la hora de analizarlos hay que considerar, de partida, dos cuestiones básicas. En primer lugar, que una crisis económica no es un desastre natural, como un tsunami, que barre con todo lo que se encuentra a su paso. Los desastres naturales afectan aún de forma desigual a la gente en función de muchos parámetros: calidad y posición de las construcciones, dinámica del desastre, etc. Las crisis económicas modernas no son fenómenos naturales, son el resultado de un determinado comportamiento humano. Y este viene mediado por las estructuras sociales y los marcos institucionales y por las dinámicas de acumulación pasadas y, por tanto, afectan de forma desigual a personas que ocupan una posición social y económica distinta. En segundo lugar, que los efectos de la crisis no siempre son visibles con las fuentes de información disponibles, al menos en el corto plazo. Ello es debido a la propia naturaleza de las fuentes de información estadística diseñadas para recoger un tipo de datos, pero no otros para los que no existe una recogida sistemática y, por tanto, queda mucho espacio para la especulación. Esta es la razón por la que dedicaremos más espa-

cio a analizar aquellos aspectos sobre los que hay información disponible, apuntaremos aquellos sobre los que hay pistas y concluiremos con una reflexión sobre los impactos intangibles de la crisis que acaban por tener efectos reales sobre el funcionamiento económico y social.

Causas del aumento del desempleo

El efecto más palpable de las crisis económicas es el aumento del desempleo. Aunque no es el único. Una parte de las personas que pierden su empleo desaparecen del mercado laboral. Básicamente hay cuatro formas generales de salida: las jubilaciones anticipadas, la vuelta a los estudios, la vuelta al hogar o la migración. Cada una de estas opciones es más usual en personas diferentes y depende de otro tipo de condiciones. Hay también que considerar una última posibilidad que es la que llamaría "salida estadística": como la condición que se exige a una persona para ser contabilizada como parada es la de haber realizado una actividad efectiva de busca de empleo en los 15 días precedentes a ser entrevistada, es posible que una parte de las personas efectivamente desempleadas no hayan hecho nada en concreto y se contabilicen como inactivas, aunque estén dispuestas a trabajar si efectivamente tienen una posibilidad. Esta "ausencia" de búsqueda es más habitual en situaciones de alto desempleo y entre personas con una prolongada permanencia en dicha situación. Los efectos de una búsqueda frustrada les pueden conducir al desánimo y a dejar de buscar, algo tanto más probable cuando se trata de personas que, por sus características (sexo, edad, etnia, salud, historial, etc.) perciben que forman parte de los colectivos que están al final de la cola en las preferencias empresariales.

Es obvio que también en este paso a la "inactividad" hay diferencias importantes que tienen que ver con la posición social de cada cual. Por ejemplo, la jubilación previa puede resultar incluso bien vista por personas que en el proceso de salida han conseguido planes de prejubilación aceptable (habitualmente empleadas en grandes empresas). La vuelta al estudio es más habitual en las personas jóvenes aunque también depende del tipo de estructuras educativas y en algunos casos de sus recursos. La vuelta al hogar es, casi siempre, una vía femenina. Tanto más probable cuando mayores sean los ingresos de sus cónyuges o la existencia de situaciones familiares que exigen una atención especial. La emigración es teóricamente más factible en el caso de trabajadores extranjeros que optan por el retorno, pero también puede ser una opción para personas del propio país que perciben la posibilidad de encontrar un empleo en el exterior. Ninguna de estas respuestas es natural, depende de las políticas que se aplican, de factores institucionales que influyen sobre los comportamientos individuales, de la experiencia de búsqueda. En conjunto, cuando se produce este proceso de retirada del mercado laboral –el efecto que llamamos "trabajador desanimado"– el resultado estadístico es una atenuación del desempleo realmente existente.

Lo que está ocurriendo en esta crisis es, globalmente, el efecto contrario. La llegada de nuevas personas al mercado laboral ha tenido como efecto incrementar el nivel de desempleo generado por la destrucción de puestos de trabajo. Se ha producido un aumento del desempleo en casi 3 millones de personas desde el tercer trimestre de 2007 (el que puede considerarse el momento de cambio de ciclo); un 73% de ese aumento se explica por la destrucción de empleo y, el resto, por las nuevas llegadas al mercado laboral.

Cuadro 1.: Evolución del empleo y el paro 2007-2010 (en miles de personas)

Trimestre/ año	Activos	Ocupados	Parados
3er trim. 2007	22.302	20.510	1.791
4º trim. 2010	23.104	18.408	4.696
Variación	+ 802	- 2.102	+ 2.905

Fuente: Encuesta Población Activa (INE). Elaboración propia

Hay que preguntarse por qué se ha producido esta situación poco habitual en el pasado. La EPA nos da pistas de lo que puede estar ocurriendo. Cuando se analizan los datos segregando por sexo y edad las pistas aparecen. Mientras que se ha producido una salida neta de hombres del mercado laboral, *ha tenido lugar una llegada de casi un millón de mujeres*. Fundamentalmente se trata de mujeres adultas. En el caso de los jóvenes, especialmente menores de 20 años, lo que ha ocurrido ha sido una salida del mercado laboral tanto de chicos como de chicas.

¿Por qué han acudido más mujeres al mercado laboral? En primer lugar, la decisión de buscar empleo depende de las perspectivas de encontrarlo. Y, como después veremos, mientras que se ha producido el hundimiento del empleo en sectores tradicionalmente masculinos, en algunos sectores donde el empleo femenino es mayoritario este incluso ha crecido. La proporción de empleo femenino destruido es pequeña, apenas 200.000 empleos, lo que anima a muchas mujeres a buscarlo en aquellas actividades en las que aún hay oportunidades. En segundo lugar, lo que anima a estas mujeres a buscar empleo es, posiblemente, la pérdida de expectativas de sus cónyuges y las necesidades financieras de muchas familias que obliga a todos sus miembros a ponerse a buscar empleo. En tercer lugar, está el fenómeno migratorio que refuerza tanto la dificultad de empleo masculino como la debilidad financiera. Casi un 65% de las mujeres que se añaden al mercado laboral son extranjeras o tienen doble nacionalidad (o sea, de grupos familiares que ya llevan tiempo residiendo en España). En conjunto, el paro aumenta no sólo por la destrucción de empleo sino porque la fragilidad económica que este hace emerger fuerza a más personas, en este caso mujeres, a entrar en el mercado laboral.

Desigual impacto del desempleo por sectores

Aunque la crisis tiene impactos globales, por ejemplo a través de los recortes del gasto público, desde el punto de vista del empleo su impacto es muy desigual y obedece a impactos sectoriales muy diversos. Ello supone que diferentes sectores sociales experimentan una situación ocupacional muy diversa. La destrucción de empleo se ha concentrado fundamentalmente en la construcción y la industria manufacturera. Estos dos sectores son responsables del 74,8% de la destrucción neta de empleo. Solo la construcción es responsable de más de la mitad del fiasco total y ha experimentado la desaparición del 43% del empleo sectorial.

En el extremo opuesto, cuatro sectores de actividad han generado empleo: administración pública, educación, sanidad y servicios sociales (que incluye los servicios de geriatría) y actividades artísticas, culturales y deportivas. Algo que por si solo indica qué puede ocurrir en los próximos meses con la puesta en marcha de drásticos planes de ajuste de los presupuestos públicos.

El resultado de todo ello es que el desempleo ha golpeado de forma muy desigual a las personas en función del sector de actividad en el que trabajan y su estatus laboral. En el cuadro 2 destacamos la variación del empleo experimentada en función de la posición laboral.

Cuadro 2. Variación neta del empleo por sectores profesionales (3.er trim. 2007- 4.º trim. 2010)

Sector profesional	Variación neta empleo (en miles)	Variación porcentual (% de empleo del sector)
Empleo total	–2.132,0	–10,3
Directivos	–40,9	– 2,6
Técnicos, profesionales, científicos	+169,9	+6,8
Técnicos de apoyo	–72,2	–3,1
Administrativos	–253,6	–11,2
Trabajadores de servicios	–78,3	–2,4
Trabajadores cualificados agricultura y pesca	–42,4	–8,5
Artesanos, cualificados industria y construcción	–1.112,7	–32,7
Operadores de máquinas	–277,3	–14.9
Trabajadores no cualificados	–449,6	–14,8
Fuerzas Armadas	+19,4	+22,4

Fuente: Encuesta Población Activa (INE) y elaboración propia

Lo que este cuadro indica es que el drama ha sido muy diferente en diversos segmentos de asalariados. Se ha cebado particularmente en la clase obrera de la construcción y la industria, fundamentalmente masculina y con un elevado nivel de inmigrantes. En cambio los sectores de clases medias asalariadas han experimentado una pérdida mucho menor de empleo e incluso en algunos grupos, especialmente los profesionales, se ha producido crecimiento. Una vez más por el efecto del crecimiento del empleo público. También resulta evidente que la clase obrera de servicios ha podido parchear mejor la crisis, y como esta es mayoritariamente femenina (aunque no siempre en hostelería y seguridad también hay empleo masculino) esto explica el cambio de los comportamientos de hombres y mujeres cuando los comparamos con crisis anteriores.

El paro aumenta no solo por la destrucción de empleo sino porque la fragilidad económica que emerger de él fuerza a más personas, en este caso mujeres, a entrar en el mercado laboral

Indagar en las pautas de la situación relativa de nacionales y extranjeros plantea una dificultad añadida. La EPA provee de datos agrupados según la nacionalidad de las personas (españoles, extranjeros, etc.). El problema estriba en que hay una categoría, la de doble nacionalidad, que pese a representar un reducido tamaño relativo de población experimenta un fuerte crecimiento en estos años. Lógico por cuanto es un efecto del arraigamiento de personas que llevan largo tiempo residiendo en el país y que ahora han conseguido una nueva situación legal pero distorsiona la situación y hemos optado por omitirlos. Por tanto, sumaremos las personas de doble nacionalidad a los extranjeros para eludir esta distorsión; el resultado que obtenemos pone de manifiesto la complejidad de la situación, como muestran los cuadros 3 y 4.

Cuadro 3. Destrucción de empleo en la crisis (en %) según nacionalidad (3.er trim. 2007- 4.º trim. 2010)

Nacionalidad	Total	Hombres	Mujeres
Españoles	–10,5	–15,4	–3,2
Extranjeros y doble nacionalidad	–9,4	–18,9	+0,7

Fuente: Encuesta Población Activa (INE) y elaboración propia

Cuadro 4. Tasa de desempleo por nacionalidad (4.º trimestre 2010)

Nacionalidad	Total	Hombres	Mujeres
Españoles	18,3	17,6	19,1
Extranjeros y doble nacionalidad	30,0	31,7	28,1

Fuente: INE Encuesta Población Activa y Elaboración propia

La destrucción de empleo ha sido una cuestión básicamente masculina y ahí los extranjeros han salido peor parados por su mayor exposición al tipo de empleos más afectados por la crisis. En cambio, la pérdida de empleo femenino ha sido reducida e incluso se experimenta un muy modesto crecimiento del empleo de mujeres foráneas. Hay que indicar, sin embargo, que el grupo «resto del mundo», que incluye a las inmigrantes africanas, se caracterizaba por una baja tasa de actividad y, por tanto, su peso en el conjunto del mercado laboral es modesto. Si de la caída del empleo pasamos a las tasas de paro al final del período observamos que los extranjeros, que ya partían de una situación mucho peor, experimentan niveles de desempleo mucho más elevados, pero se ha invertido la situación relativa de hombres y mujeres. Es cierto que, especialmente entre los africanos, las tasas de actividad femenina continúan siendo bajas, pero en conjunto resulta patente que la crisis ha trastocado las opciones laborales de hombres y mujeres y provoca resultados que exige seguir estudiando.

Por tanto lo que indica el análisis del empleo y el paro es que la crisis afecta de forma muy desigual a diversos grupos de asalariados. Ha golpeado especialmente a los hombres de clase obrera manual, por lo que afecta al empleo y a los ingresos de muchas familias. En cambio su impacto ha sido muy reducido en las clases medias asalariadas. Ello explica la persistencia de pautas de consumo y de estabilidad social en las que este grupo social contribuye poderosamente. En otro plano, la crisis está alterando las pautas de relación laboral de hombres y mujeres, especialmente en la clase obrera manual. No parece, sin embargo, que los nuevos empleos femeninos vayan a permitir la subsistencia digna de muchas familias.

Disminuyen las prestaciones sociales, surgen nuevas bolsas de pobreza

El desempleo es una experiencia terrible. Pero se trata de una situación que puede ser más o menos llevadera en función del nivel de protección social a que tienen acceso los parados. Por esto conviene analizar qué ocurre con las prestaciones por desempleo. Estas se crearon en la década de 1940 cuando predominaba el keynesianismo. Para los defensores

de los subsidios estos tenían tres funciones: evitar el deterioro de las condiciones de vida de los parados y sus familias, mantener su nivel de gasto y con ello evitar la destrucción de más empleos (actuar como un estabilizador automático) y permitir a los parados una seguridad económica que les permitiera la búsqueda de un empleo digno o en su caso un reciclaje profesional. Eran tiempos donde estas políticas formaban parte de un proyecto más amplio de intervención pública macroeconómica orientada a generar el pleno empleo y a reducir al máximo los episodios de desempleo masivo. Un optimismo que la contrarrevolución neoliberal consiguió abatir y retornar al viejo pensamiento reaccionario sobre las políticas de desempleo.

El impacto ha sido muy reducido en las clases medias asalariadas. Ello explica la persistencia de pautas de consumo y de estabilidad social a las que este grupo social contribuye poderosamente

El punto de vista dominante en la actualidad entre la mayor parte de economistas y políticos es que las prestaciones de desempleo desalientan la búsqueda de empleo y aumentan el paro. Por ello, llevan largo tiempo propugnando la reducción del período y la cuantía de las prestaciones, su vinculación a políticas activas de empleo (solo cobra el que se forma, acude a entrevistas etc.) y la devaluación de lo que es un empleo aceptable, que la persona en paro no podrá rechazar. En España este discurso es antiguo y reiterativo. Se acusa al sistema de protección de favorecer la prolongación del desempleo, a pesar de que existe una clara correlación entre el aumento del volumen total de desempleo y el de larga duración (más de un año). Lo que obliga a pensar que el desempleo prolongado no es, básicamente, una opción voluntaria sino el resultado de una falta real de oportunidades de empleo. A la hora de estudiar la cuestión conviene, por tanto, conocer cuál es la magnitud de las ayudas y sus características.

Como es conocido, existen en España diferentes vías de protección. La más contundente en cuanto a ingresos es la que ofrece la prestación contributiva a la que tienen derecho aquellas personas que han cotizado anteriormente. El tiempo de percepción está en función del tiempo anteriormente cotizado en una proporción de 1 mes de percepción por cada 4 cotizados (con un requisito mínimo de haber cotizado 1 año y un máximo de percepción de 2 años). La cuantía se establece como un porcentaje de la base reguladora (el salario base de cotización), un 70% de la misma los primeros 6 meses y un 60% el resto (con un tope mínimo, no puede ser inferior al 75% del salario mínimo). Cuando esta se agota, una parte de los parados tienen derecho, en función de circunstancias personales (edad, cargas familiares…) a percibir la prestación asistencial del 75% del salario mínimo interprofesional, o sea, unos 480 euros al mes. Existen otras pagas complementarias, como

la de los 400 euros creada para personas excluidas o la famosa paga del PER andaluz y extremeño. Todas ellas en torno a los 400-480 euros.

El desempleo es el principal mecanismo de disciplina social en las economías capitalistas

Sumando todas las posibilidades de retribución a los desempleados el Instituto Nacional de Estadística calcula una tasa de cobertura: porcentaje de personas inscritas en los registros de desempleo que reciben alguna prestación. Esta se sitúa en torno al 75% del total de inscritos, de los cuales algo menos de la mitad (sobre un 47%) recibe la prestación contributiva y el resto alguno de los diversos tipos de prestación de asistencia. Estos porcentajes bajan si en el cociente en lugar de considerar los parados inscritos se incluyen los desempleados que calcula la EPA (unos 600.000 más). En este caso el porcentaje total de cobertura baja 10 puntos (por debajo del 65%). Que las dos formas de medir el desempleo den resultados diferentes es lógico pues obedecen a lógicas distintas. Una, es un registro administrativo al que se apuntan las personas que tienen obligación de hacerlo (por ejemplo, los prejubilados que reciben la prestación de desempleo, que de hecho no son parados pues están a la espera de agotar los dos años de prestación y pasar a cobrar la jubilación o la paga temporal que les ofrece su empresa antes de la jubilación). Mientras que la EPA se elabora por un método de muestreo. Una persona puede estar parada sin obligación de inscribirse y dado el bajo porcentaje de colocaciones que realizan los servicios públicos de empleo parece lógico que muchos parados no lo hagan. Tomando como cotas las dos mediciones resulta claro que entre un 25 y un 35% de los parados no recibe absolutamente ningún ingreso público, y entre un 33 y un 38% solo recibe pagas de 400-480 euros mensuales (más pagas extra), un nivel de ingresos sensiblemente inferior al del exiguo salario mínimo español. Nada parece apuntar a que estar en el paro sea un “chollo”; más bien parece que hay fuertes conexiones que conducen del paro a la pobreza.

Es cierto que la situación de los parados es muy diversa, especialmente atendiendo a su situación familiar. Es también real que en un país con larga tradición de evasión fiscal y economía informal se produce la existencia de picarescas y situaciones que permiten complementar ingresos. Pero no está claro que ello explique el elevado nivel de paro. En la década de 1980 ya se realizó una extensa investigación al respecto que puso de manifiesto que gran parte de los empleos informales no los realizaban parados sino personas formalmente inactivas. De hecho, muchas actividades informales son complementarias, no sustitutivas de las formales (la construcción era, por ejemplo, un espacio típico de informalidad y su crisis arrastra tanto empleos formales como informales). Y más bien los datos disponibles indican que podemos estar asistiendo a la configuración de nuevas bolsas de pobre-

za, en capas de gente joven o adulta. Algo que también indican los informes de organizaciones caritativas que manifiestan una situación de colapso. Sería bueno contar con información sistemática de los servicios sociales que permitieran evaluar la extensión y profundidad del problema.

Un efecto colateral de esta pobreza creciente se manifiesta en el voluminoso nivel de desahucios, la mayoría por impago de hipotecas. Según una evaluación del Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales)[1] entre el inicio de 2008 y el tercer trimestre de 2010 se produjeron en España 95.020 desahucios. Otras estimaciones incrementan el dato, pero, en todo caso, son muestra de otra cara del drama. Un drama que en el caso de las hipotecas no concluye con la pérdida de la vivienda sino que continúa en una espiral de endeudamiento insoportable.

El desempleo, principal mecanismo de disciplina

La crisis no sólo afecta a los que pierden o no el empleo. También puede influir sobre las condiciones de empleo. Ya lo explicó detalladamente el economista polaco Michael Kalecki (uno de los padres de la macroeconomía keynesiana), el desempleo es el principal mecanismo de disciplina social en las economías capitalistas. Cuando el temor a la pérdida de empleo es grande la gente acepta con más facilidad renunciar a sus derechos y olvidarse de sus reivindicaciones. Convertir esta percepción en evidencia cuantitativa es sin duda más difícil y me limitaré a apuntar cuestiones. Una de ellas es la moderación salarial, aunque la evolución de los salarios en cada país es el resultado de varios procesos que de por sí daría para analizarlos en varios artículos: pautas de negociación colectiva, reconocimiento o no de categorías profesionales, características de los empleos creados y destruidos, etc. Pero, sobre todo, disciplina laboral que se manifiesta en espacios diversos: ritmos de trabajo, horarios prolongados, exigencias sobre condiciones de salud. Los sindicatos, por ejemplo, indican que se ha reducido el número de accidentes laborales que se traducen en bajas: la gente prefiere seguir trabajando si la lesión no es muy grave.

Hace un año tuve ocasión de participar en una mesa redonda con especialistas de salud laboral. En ella, una de las aportaciones más importantes fue la de una médica de un centro de atención primaria de Barcelona que presentó una tipología de patologías que claramente apuntaban a la crisis como causa fundamental: desde una anciana con “dolencias” que al final estaban relacionadas con el paro de todos sus familiares próximos, hasta un obrero inmigrante que se negaba a coger la baja por gripe. La propuesta de esta doctora era clara: los centros deberían reportar estas incidencias para evaluar los efectos de la crisis. El

[1] A. Colau, *Les dades sobre desnonaments a Catalunya i Barcelona,* Observatori DESC, Barcelona, 2011.

aumento de la presión que se ejerce sobre las condiciones de trabajo de mucha gente constituye un costo social evidente. Pero este es sistemáticamente ignorado por un sistema social orientado y dominado por el objetivo del lucro privado y no por el de la garantía de una vida digna para toda la comunidad. El conocimiento, evaluación y eliminación de estos costes sociales debe estar claramente en la agenda de los movimientos sociales alternativos.

Impacto sociopolítico y cultural de la crisis

La crisis y el desempleo masivo no sólo afectan a las condiciones de vida material de mucha gente. Tienen también un enorme impacto sociopolítico y cultural. Especialmente en un mundo donde impera un discurso económico controlado por los defensores del capitalismo y naturalizador de la crisis. Si esta es una enfermedad inevitable lo que hace falta es dar con remedios que actúen inmediatamente contra la misma. Una parte importante del discurso dominante se centra precisamente en el reduccionismo de concentrar las causas y las medidas contra el desempleo en el mercado laboral: si el paro es un problema laboral, la lucha contra el desempleo debe concentrarse en reformas en la esfera laboral. Un reduccionismo que ignora lo que toda la tradición de economía heterodoxa (marxista, poskeynesiana, institucionalista…) ha mostrado: que el paro es un mal provocado por el funcionamiento global del sistema económico que se manifiesta en el mercado laboral. Al igual que las enfermedades donde el síntoma o la patología no puede confundirse con la causa.

De este reduccionismo se deducen varias cuestiones cruciales que afectan a la vida social. En primer lugar, que crear empleo es un bien absoluto, sea cual sea la característica del mismo. Un ejemplo de ello es la promoción del empleo a tiempo parcial como alternativa. A pesar de que es evidente que este tipo de empleos no garantizan ingresos suficientes, a menudo se desarrollan en pautas horarias inadecuadas y en su mayoría se orientan a nichos de empleo de poco prestigio social. Un empleado a tiempo parcial es un parado a tiempo parcial. Pero con las actuales convenciones estadísticas vale para maquillar las cifras del desempleo. Absolutizar el objetivo del empleo sin cualificarlo en cuanto ingresos y características es sólo una forma de promover el trabajo indigno. En segundo lugar, permite presentar las prerrogativas de los ricos como peajes sociales a pagar para garantizar la creación de empleo y conduce a aceptar como buenas muchas políticas injustas e ineficientes. Los recortes impositivos, las ayudas masivas al sector financiero, la prolongación de la vida de las centrales nucleares… Cualquier medida que favorece a intereses minoritarios acaba siendo bendecida con el argumento de que va a servir para generar empleo, aunque nadie se preocupa de evaluar a qué coste. De hecho, muchos de los recortes impositivos acaban traduciéndose en menor creación de empleo al bloquear el funcionamiento del sector público. En tercer lugar, promueve un programa de reformas en el que la eliminación de derechos laborales y sociales está en el centro de las políticas: aumentar las pre-

rrogativas empresariales sobre los trabajadores, recortar las ayudas a los parados, impedir la negociación colectiva (o limitarla a unas pocas áreas), subvencionar los despidos… Todo vale con la coartada de la creación de empleo. Y, mientras, quedan fuera de perspectiva las reformas económicas de otro tipo, absolutamente necesarias para hacer frente a los problemas generados por el neoliberalismo, la globalización y la crisis ambiental.

El paro, la principal manifestación de la crisis, es un problema grave, que afecta con especial intensidad a determinados segmentos sociales. Exige respuestas, orientadas a garantizar empleos dignos, bienestar y sostenibilidad. Cualquier programa alternativo debe ser capaz, a la vez, de promover reformas y propuestas de reorganización social, y de desarrollar un discurso cultural que ayude a la gente a situar que el paro no es la alternativa a condiciones de vida y trabajo dignas, sino que se trata de cuestiones entrelazadas que exigen una solución conjunta.

ESTE AÑO HAZ
OBJECIÓN FISCAL
Y DESTINALA A DIAGONAL

La objeción de conciencia a los gastos militares u objeción fiscal consiste en negarse a pagar el dinero que el Estado destina a mantener el militarismo y desviarlo a un destino alternativo que acredite su identificación con los objetivos de la campaña.

Para ello, se debe hacer la declaración de la renta incluyendo la cantidad objetada en el apartado de deducciones y adjuntando su correspondiente justificante.
Esta documentación debe ser remitida a Hacienda junto con el manifiesto tipo de la campaña.

PASOS A SEGUIR

1. Ingresar la cantidad a objetar (**84 euros**, en denuncia por los 84 países empobrecidos por la deuda externa) en la cuenta de la Asociación Punto y Coma **(La Caixa 2100-4065-10-2200111082).**

2. Enviar una copia del recibo y un **manifiesto tipo** al delegado de Hacienda junto con el resto de la documentación.

Diagonal
periódico quincenal de actualidad crítica

ALFONSO ÁLVAREZ MORA, MARÍA CASTRILLO,
JUAN LUIS DE LAS RIVAS, LUIS SANTOS

Perfiles de una tragedia: la crisis residencial y urbanística española

Varios son los aspectos sociales preocupantes directamente ligados a la crisis inmobiliara. Los medios tienden a destacar en particular las ejecuciones hipotecarias y los desahucios o el estado de las nuevas periferias medio vacías. Sin embargo, tiende a obviarse la de la conculcación del derecho constitucional a la vivienda. Otros aspectos tienden también a quedar ocultos: la crisis residencial consiste básicamente en la conversión de la vivienda en una mercancía desvinculada de las necesidades sociales y la crisis urbanística se manifiesta en la identificación de desarrollo urbano y clasificación de suelo urbanizable.

Alfonso Álvarez Mora, María Castrillo, Juan Luis de las Rivas, Luis Santos, son miembros del Grupo de investigación «Planificación territorial y urbanística», Universidad de Valladolid

Tras cuatro años de titulares periodísticos acerca del colapso inmobiliario y de la crisis financiera, de las ayudas públicas milmillonarias a la banca, del elevadísimo desempleo, de las medidas de "ajuste" que afectan sobre todo a los trabajadores, etc., los medios de comunicación en España han comenzado a interpretar y formar el espectro visible de algunas dimensiones sociales de la crisis inmobiliaria. En particular, desde hace unos meses, la prensa viene haciéndose eco de la situación de las nuevas periferias medio vacías y de los miles de afectados por el drama familiar y social de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. En virtud de un marco normativo ventajosísimo para el capital financiero, en el que la entrega del bien hipotecado puede no bastar para saldar la deuda contraída, muchos de los que no han podido hacer frente a las letras y compromisos de pago no sólo han perdido su vivienda y todos los recursos que en ella dejaron sepultados sino que, pese a su quebranto, aun mantienen una deuda sin saldar con el prestamista con quien contrataron la hipoteca.[1]

[1] La normativa vigente privilegia de todo punto a las entidades de crédito. El art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la ejecución dineraria de los bienes hipotecados de tal modo que, si una vez subastados los bienes hipotecados, su producto fuere insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante

Pero la iniquidad y el carácter masivo de esta situación no debe impedir recordar que no es este el único aspecto social preocupante directamente ligado a la crisis inmobiliaria. Los medios de comunicación tienen sus propias lógicas y los problemas viejos suelen perder presencia en beneficio de los más actuales y, así, la ruina masiva generada por las ejecuciones de hipotecas ha ensombrecido otra crisis que no por heredada de los tiempos de "vacas gordas" deja de ser gravísima y de sumarse a la anterior: la de la conculcación del derecho constitucional a la vivienda.[2] Ya sea por la falta de empleo, de crédito, de viviendas protegidas o, muy posiblemente, por causas mucho menos coyunturales, y aun a pesar del descenso de precios que ha seguido a la crisis inmobiliaria, el acceso a la vivienda en España no parece haber mejorado en nada sino más bien lo contrario. Cabe suponer que, por causa del aumento del paro, de la disminución de las rentas del trabajo y de la inestabilidad económico-financiera, el acceso a una vivienda adecuada sea hoy para muchos más que ayer una entelequia.

Sin restar un ápice de importancia a estas dimensiones sociales de la crisis económica e inmobiliaria, hay otros problemas sociales vinculados, que, a nuestro juicio, resulta de imperiosa necesidad comenzar a considerar. No se trata de problemas cuya inmediatez o dramatismo sea compatible con las exigencias de los medios de comunicación, pero no por ello no revisten un alcance social menos importante. Nos referiremos, en concreto, a la crisis residencial y la crisis urbanística que, originadas varias décadas antes, fueron colabora-

podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá su curso. Y el art. 671 regula el caso en que la subasta quede sin ningún postor, otorgando al acreedor la posibilidad de solicitar la adjudicación de los bienes por el 50% del valor de tasación de ese momento. Por otro lado, la responsabilidad patrimonial del deudor es ilimitada según lo establecido en el art. 1911 del Código Civil y en el art. 105 de la Ley Hipotecaria, aunque esto sólo es efectivo con las personas físicas, pues la responsabilidad patrimonial universal de una sociedad anónima acaba cuando la sociedad carece de suficientes bienes o se extingue y, claro, no se extiende a los accionistas. Además, la normativa hipotecaria es muy antigua. Cabe destacar la Ley Hipotecaria de 1946 (texto refundido según decreto de 8 de febrero de 1946, modificado por las leyes 7/1998, 1/2000, 24/2001, 53/2002, 7/2003, 22/2003, 62/2003 y por la Ley orgánica 15/2003), la Ley 2/1981 de Mercado Hipotecario, la Ley 2/1994 sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, y el Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947, modificado por el RD 1867/1998, sobre los que existen varias sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 24/02/2000, 22/05/2000 y 12/12/2000, declarando nulos algunos de sus preceptos).

[2] Podría añadirse otro aspecto más: que la prensa se haya constituido en el canal casi único de revelación de ese agudo problema que afecta a cientos de miles de personas puede considerarse sintomático de los preocupantes niveles de atomización y desmovilización social alcanzados en España… a los que posiblemente haya contribuido, y no poco, el sistema de "todos propietarios"…

Pero, en todo caso, se trata de propietarios no autoorganizados, ya que otra normativa que, inopinadamente, permanece incontestada es la relativa a las cooperativas de vivienda. Las "simili-cooperativas" son un negocio socialmente nocivo pero consentido y regulado por las administraciones. Se trata de sociedades de gestión especializadas en cooperativas de vivienda, que inducen la creación de sociedades cooperativas y sus distintas promociones, pero que controlan e impulsan sus actividades, siendo los protagonistas reales aunque no los responsables ante la ley. De este modo, la crisis ha caído como una losa, no sobre las sociedades de gestión sino sobre los cooperativistas y sus promociones. La promoción inmobiliaria se identifica, así, no con el capitalista que arriesga, sino con el intermediario, conseguidor y hábil negociante, que interrelaciona propietarios, hipotecas y compradores, que tiene un margen fijo y que soslaya las responsabilidades. De hecho, estas gestoras son agentes promotores, pues aún existiendo un órgano de administración de la cooperativa instituido de derecho conforme a lo prevenido por las leyes, por debajo de tal apariencia organizativa está la omnipresencia de la entidad gestora, que se revela como auténtica administradora de hecho de las cooperativas y las promociones, lo que puede percibirse no sin motivo como rayano en el fraude de ley.

dores necesarios del *boom* inmobiliario del cambio de siglo y ahora, tras la crisis del sector, se revelan como algunas de las lacras permanentes y de mayor alcance para nuestro desarrollo social.

En primer lugar, haremos mención a la crisis residencial que marca tanto el origen de las décadas "prodigiosas" españolas como su trágico desenlace. Decimos crisis residencial porque se trataría de un cambio de la vivienda –cambio paulatino pero profundo y no exento de violencia, como manifiestan los problemas sociales arriba mencionados– consistente en la pérdida de su carácter de bien social y su conversión efectiva en una mercancía prácticamente desvinculada de las necesidades de la población.[3] Argumentaremos aquí esta idea sin recurrir a los fulgores del crecimiento urbano y sus esperpentos más mediáticos (Seseña, Valdeluz, etc.), sino refiriéndola al análisis de un fenómeno de las últimas décadas que es menos llamativo pero absolutamente implacable desde un punto de vista urbanístico y social: la producción de vivienda en núcleos urbanos medios y pequeños que contienen un centro histórico declarado.

La ruina masiva generada por las ejecuciones de hipotecas ha ensombrecido otra crisis gravísima, la de la conculcación del derecho constitucional a la vivienda

En segundo lugar, sin menoscabo de sus estrechas relaciones con la crisis residencial, esbozaremos algunos de los rasgos que, a nuestro juicio, se revelan más críticos en un modelo de crecimiento urbano, el español, que se ha venido dibujando desde hace tiempo ante la mirada inadvertida de todos aquellos que confundían o pretendían confundir crecimiento con desarrollo urbano; modelo que ha alimentado el desbocamiento del sector inmobiliario y que ahora, convertido en una suerte de hipoteca territorial de gran alcance, lastra gravemente el futuro de la sociedad española en lo tocante a sus marcos de vida.

Por último, intentando ir más allá de las expresiones actuales de esas crisis residencial y urbanística, esbozaremos los rasgos de lo que consideramos un problema de fondo: la pervivencia incontestada, a pesar de todo, de un modelo urbanístico-inmobiliario cuyas funestas consecuencias sociales son ya inequívocas.

En los asuntos a los que nos referiremos, como en otros muchos relacionados con la urbanización de las últimas décadas, en España y en la necesaria perspectiva internacional,

[3] Hemos desarrollado ya esta hipótesis para el caso castellano y leonés en M. Castrillo, A. Álvarez, J. L de las Rivas y L. Santos, «Vivienda y desarrollo urbano en las ciudades de Castilla y León» en D. Vaz (ed.), *Cidade e território. Identidades, urbanismos e dinâmicas transfronteiriças*, Celta, Lisboa, 2008, pp. 227-249.

es pertinente observar que la investigación desarrollada hasta ahora no se corresponde con la extensión y la trascendencia de los hechos. Valga esto para advertir que, a falta de investigación a escala nacional del alcance social de ese *boom* y de la crisis subsiguiente en lo tocante a exclusión urbana, desigualdades espaciales, despilfarro de recursos territoriales, presión de la situación creada sobre los presupuestos públicos y las posibilidades futuras de desarrollo urbano, etc., el soporte básico de nuestra reflexión será las experiencias parciales acumuladas a través de los trabajos de investigación y de asesoramiento técnico realizados en el seno del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (IUU).

Crisis residencial: más viviendas para quién, para qué

La crisis residencial se manifiesta en la existencia masiva de viviendas vacías o inutilizadas, en la inaccesibilidad de las mismas para las clases populares, en los movimientos del mercado de vivienda en los segmentos de precio más elevados, en el acaparamiento por parte de compradores que ven en la vivienda su capacidad para producir rentas futuras, etc. Y es preciso observar, antes que nada, que todo ello se produce en un marco urbanístico que ha venido encauzando el proceso de producción espacial conforme al llamado "modelo de la renta", esto es, que ha sometido la construcción y reconstrucción de las urbes a la lógica única de la obtención de rentas del suelo.

De todos aquellos aspectos, quizá el más oportuno y el que mejor define el alcance de la crisis residencial en España –esto es, de la desvinculación de la producción de viviendas de las necesidades sociales–, es la constatación de las divergencias entre la construcción de viviendas y la evolución demográfica; divergencias tan profundas que difícilmente pueden justificarse desde las necesidades derivadas del aumento del número de hogares. Éste es uno de los resultados que viene arrojando el análisis de la evolución residencial de los conjuntos históricos declarados en España y de las políticas urbanísticas sobre ellos aplicadas en las últimas décadas.[4]

Para ese estudio, hemos partido de la hipótesis de que lo acaecido en el ámbito de estos conjuntos históricos no podía ser ajeno a lo que estaba sucediendo en el conjunto de la ciudad. Esta hipótesis nos llevó, como camino metodológico ineludible, a analizar los núcleos urbanos que contenían un conjunto declarado, comprobando así las determinaciones que recaían sobre dichos lugares históricos impulsadas desde la dinámica urbana específica de los núcleos en los que se insertaban.

[4] Proyectos de investigación "Producción de la vivienda y recuperación patrimonial en el marco territorial de los centros históricos" y "Políticas urbanas aplicadas a los conjuntos históricos: logros y fracasos. hacia una propuesta de rehabilitación urbana como alternativa al modelo inmobiliario extensivo" del Plan Nacional I+D+i (Refs.: SEJ2006-01530/SOCI y CSO2010-15228, respectivamente), desarrollados desde 2006 hasta la actualidad por equipos del IUU dirigidos por A. Álvarez Mora.

Como primera aproximación, podemos decir que, en la mayoría de los municipios que contienen un conjunto histórico, al comparar la curva que representa la evolución de la población con aquella otra que expresa el número de viviendas construidas –todo ello desde 1950 a 2001–, observamos que la evolución de la población puede ser muy diversa y marca, en cierta manera, el dinamismo específico del núcleo urbano correspondiente, mientras que en ningún caso –esto es lo que más llama la atención– el número de viviendas ha dejado de aumentar.

Son municipios, por otro lado, en su mayoría, de los territorios de Castilla y León, Extremadura, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y, algo menos, Andalucía, que, en definitiva, conforman una extensa representación del territorio español.

Entre estas siete comunidades, es, sobre todo, en Castilla y León donde estos escasos dinamismos demográficos, que no se corresponden con el de la producción residencial, alcanzan la proporción más preocupante. Nos encontramos aquí con casi un 80% de los municipios en los que las curvas de población y vivienda tienden a cruzarse o lo han hecho ya. Corresponden a este último caso el 30% de ellos, que no sólo muestran una disminución constante de la población mientras el número de viviendas no deja de aumentar, sino que la "producción residencial" se sitúa ya por encima de la "producción demográfica". En la comunidad extremeña, aproximadamente, un 66% de los municipios que contienen un conjunto histórico arrojan también una disminución muy importante de la población con un aumento en el número de viviendas. Lo mismo se repite en Asturias y Cantabria, con un 64% de municipios en las mismas condiciones, y también en Aragón, con un 58%, y Castilla-La Mancha, con un 61%. Por otro lado, buena parte de ese conjunto de comunidades autónomas se define por una serie de características diferenciales, como la baja densidad de población, la escasa dinámica demográfica, el aumento del número de municipios con menos de 200 habitantes y su condición de territorios donde el porcentaje de vivienda secundaria es muy alto.

Contemplando estas variables analíticas en lo sucedido en los últimos veinte años, podemos decir, para el caso de Castilla y León, considerando 12 municipios seleccionados a tal efecto,[5] que se han construido 11.090 nuevas viviendas, de las que el 22,6% (2.512) se ha localizado en el interior de los recintos históricos, mientras el 76,4% se ha construido en otros ámbitos. Por lo que se refiere a la población, hay seis municipios con saldos demográficos positivos que, en conjunto, han visto aumentar sus efectivos demográficos en unos 4.277 nuevos habitantes, mientras otros seis han perdido población, hasta un total de 2.697 habitantes. En conjunto, el aumento total de población en unos 1.574 habitantes se con-

[5] La Alberca, Astorga, Béjar, Ciudad Rodrigo, Covarrubias, Frías, Peñafiel, Riaza, Santo Domingo de Silos, Sepúlveda, Simancas y Villafranca del Bierzo.

fronta a un global de 11.090 nuevas viviendas, es decir, algo más de siete nuevas viviendas por cada nuevo habitante-residente.

En los municipios seleccionados en Galicia, incluido el de la ciudad de Vigo, hemos comprobado que, desde 1993 a 2008, se ha construido un total de 36.940 nuevas viviendas y, de ellas, 1.081 se han localizado en los recintos históricos declarados, es decir, un 3% del total. Esta actividad inmobiliaria se ha producido en el marco de una realidad demográfica marcada por un aumento de 19.897 habitantes en el conjunto de los territorios periféricos a los recintos históricos mientras que, en estos, la población disminuye, en total, en 177 habitantes, y ello a pesar de que en estos últimos se han construido algo más de 1.000 nuevas viviendas, lo que significa que se han "rehabilitado" (en el mejor de los casos) o se han construido nuevas viviendas para una población menguante. Fuera de los recintos históricos, se han construido una media de 1,8 nuevas viviendas por cada nuevo habitante.

¿En qué se ha convertido la vivienda
si su producción puede proliferar desgajada de
la evolución de los habitantes?

Si exceptuamos a Vigo, los resultados son algo diferentes. Las viviendas construidas serían 5.172, de las que un 17% se localizaría en centros históricos. La población, por su parte, aumentaría en 2.321 habitantes, lo que daría una media de algo más de 2 viviendas por habitante, proporción superior al cómputo hecho considerando la ciudad de Vigo. Los centros históricos sumarían 414 nuevos habitantes y 743 nuevas viviendas, es decir, casi 1,8 viviendas por habitante. Esto quiere decir que, en términos relativos, en los pequeños municipios la actividad inmobiliaria es relativamente mayor.

Por lo que se refiere a los conjuntos históricos de Cantabria, nos encontramos con dinámicas que apenas tienen que ver con la satisfacción de necesidades de la población residente, ya que el cómputo total inmobiliario está involucrado, prioritariamente, con el consumo turístico o la "segunda residencia". Estamos hablando de un número de nuevas viviendas que puede parecer pequeño si lo comparamos con otras realidades territoriales pero que no lo son en relación a poblaciones como las de Laredo, Comillas o San Vicente de la Barquera (con aprox. 12.000, 3.000 y 5.000 habitantes, respectivamente). En efecto, entre 1990 y 2008, se concedieron licencias para 5.827 nuevas viviendas, de las que 201 se localizaban en conjuntos históricos (3,4%). En el mismo tiempo, se produjo un aumento global de población de 113 habitantes (506 habitantes menos en el conjunto de los centros históricos y 619 habitantes más en el resto de ámbitos urbanos), lo que supone, en conjunto, una media de 51,5 nuevas viviendas por cada nuevo habitante residente.

En el extremo opuesto pueden citarse los dos casos seleccionados en el País Vasco, Fuenterrabía y Zarauz, donde, en el periodo analizado (1998-2007), la población aumentó en, aproximadamente, 4.000 habitantes y se dio licencia a un total de 2.287 viviendas (318 de ellas en centros históricos, un 14%), es decir, en una proporción de 0,57 nuevas viviendas por cada nuevo habitante.

Con estas gruesas cifras a la vista, la idea de una crisis residencial en el sentido antedicho cobra sentido. Fuera de las áreas típicas del turismo de sol y playa también se han construido más viviendas que las que podrían corresponder en el más interesado de los cálculos a una población escasa y a una demografía, en general, poco dinámica y que, a menudo, incluso da síntomas de regresión. ¿En qué se ha convertido la vivienda si su producción puede proliferar desgajada de la evolución de los habitantes? Y peor aún, cruzando esos datos –u otros posibles– con la ya mencionada conculcación del derecho a la vivienda, ¿cómo seguir legitimando la identificación de la crisis "de la vivienda" con la evolución de los precios y del *stock*?

Crisis urbanística: nadie renuncia al negocio del suelo urbanizable

Hace unos años, el urbanismo sin criterio y fuera de escala de un municipio contiguo a Valladolid justificó que fuese tildado como «el peor urbanismo del mundo».[6] Sin embargo, alguien podría decir que Arroyo de la Encomienda, el municipio en cuestión, que, por retomar las cifras gruesas del epígrafe anterior, ganó, entre 1991 y 2003, 1.943 habitantes y 3.681 viviendas (esto es, 1,9 viviendas por habitante), no sólo ha sido un triunfador durante el periodo abusivo, sino que lo sigue siendo hoy en plena crisis inmobiliaria. A pesar de la gran cantidad de pisos vacíos, de la apariencia fantasmal de sus barrios recientes, de la desaparición de algunas industrias y de la escasez de equipamientos locales, Arroyo se considera a sí mismo vencedor. Y tiene razones para ello: Ikea ya está construyendo un complejo comercial en este municipio y ello, pese a una sentencia judicial negativa por defectos urbanísticos en la calificación de los terrenos y a las presiones por una mayor inversión pública para el refuerzo de los dudosos accesos previstos. Pero las obras siguen...

No es se trata de un caso único. Al revés, demuestra una regla que se repite en el urbanismo español: cada nuevo barrio es un nuevo problema. En muchas ciudades europeas, cuando se propone un nuevo barrio, todo el esfuerzo se concentra en él, no se empiezan a construir otros barrios hasta que el comenzado se acaba y se acaba bien. No solo hay planes y un proyecto de ciudad, más o menos flexible, a medio y largo plazo, sino que se con-

6 J. L. de las Rivas, «El peor urbanismo del mundo», *El Norte de Castilla,* 21 de julio de 2005.

trolan los tiempos, se hacen las cosas de manera más pautada y se concluyen partes de ciudad que deben mejorarla, completarla, o, al menos, justificarse en tal sentido. Sin embargo, en España, estamos ya acostumbrados a que la ciudad se esté construyendo en un sinfín de lugares a la vez. Parece que el desarrollo urbano significa crecer. Y se hace con proyectos parciales, sin apenas control de lo que en la ciudad es estructurante. Es decir, se hacen urbanizaciones pero no ciudad. Valladolid y su entorno, dentro del cual se encuentra Arroyo, es un buen ejemplo de ello, pero hay otros muchos.

Hay un aspecto de esta problemática realidad que puede aportar un poco de luz sobre la raíz del modelo urbanístico vigente. Elocuentemente, está recogido en la exposición de motivos de la Ley de Suelo de 2007:

> «En efecto, las grandes instituciones urbanísticas actuales conservan una fuerte inercia […]: la clasificación del suelo como técnica por excelencia de la que se valen tanto la ordenación como la ejecución urbanísticas, donde *la clase de urbanizable es la verdadera protagonista* y la del suelo rústico o no urbanizable no merece apenas atención por jugar un papel exclusivamente negativo o residual».[7]

Es el suelo urbanizable y su protagonismo el que hace diferente nuestro urbanismo. En España, en cada municipio, cuando se redactan o se modifican los planes urbanos, la clave está en "crear" nuevo suelo urbanizable. Crecer parece "natural" pero es que, en realidad, nada es comparable en su "virtualidad urbanística" a dibujar amplias manchas que pretender ser barrios futuros más o menos estructurados por algunos "sistemas generales".

Las operaciones urbanísticas de transformación son costosas de comprender y de financiar, muy complejas de gestionar, afectan a intereses y actores de muy diverso tipo, y no pueden fracasar… Frente a ello, lo realmente sencillo, lo casi mágico, es convertir un "patatal" en ciudad con un solo toque de la varita mágica de la clasificación. Así se ha pretendido en los últimos 50 años y pocos indicios hay que dejen imaginar que no vaya a seguir siendo así. Frente a la clasificación de suelo urbanizable, todo lo demás resulta circunstancial (como ordenar el suelo urbano, donde ya suele haber muchos derechos "adquiridos") o residual (como clasificar el suelo rústico, que a nadie parece interesar, salvo a algunos ecologistas...).

El suelo urbanizable sigue organizando las mentalidades de los agentes implicados en el desarrollo urbano –ayuntamientos, propietarios, promotores, inmobiliarias, financieras, consultoras e incluso arquitectos– en medio de la crisis actual. A menudo, pretenden que es

7 Apartado II de la exposición de motivos del RD 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo (la cursiva es nuestra).

una crisis pasajera y sus expectativas futuras se centran en el retorno de los "buenos tiempos". A pesar de muchas voces críticas solventes, los implicados en la *growth machine* no renuncian a ella. Y no lo hacen porque la realidad es que, en el contexto imperante, no hay alternativas, y si las hubiera, no están en marcha; son sólo ideas o pequeños experimentos.

La razón es muy sencilla: la máquina de los huevos de oro para los agentes inmobiliarios no está en la producción y venta de viviendas o de otros espacios construidos; está en las transacciones de suelo vinculadas a su reclasificación urbanística. Se compra un suelo rústico y se vende como urbanizable. Y, en ello, colaboran administración local, banca, promotores… Ganan todos, y mucho más los intermediarios. A eso lo llaman algunos "crear" ciudad. El paso de suelo rústico –valorado al alza– a suelo urbanizable –valorado al precio de repercusión en el posible precio de las viviendas– no tiene competidor: se puede, como mínimo, triplicar la valoración sin poner un euro, solo moviendo papeles, comenzando en el registro de la propiedad y acabando en la oficina donde se firma el crédito al promotor. Cuestión de confianza y de buen nombre, que hasta ahora lo daba todo el banco. El columnista McCoy, de *Cotizalia*, analizando el monto crediticio de la banca en España indicaba: «Si la banca española no es una gigantesca inmobiliaria, entendiendo por tal una estructura de balance similar y que su destino está ligado a la evolución del ladrillo en sus distintas manifestaciones, que venga Dios y lo vea».[8]

Como conclusión, en lo económico, se anticipa no sólo el cierre del flujo crediticio sino un efecto a medio plazo de progresivo deterioro de los balances bancarios, lo que conduce a otra conclusión, mucho más trágica, en lo urbanístico: todo se apoya en el mantenimiento de la lógica pasada; en consolidar, no los valores reales, sino las expectativas; en mantener en los balances una valoración ficticia de los activos inmobiliarios –valor de los suelos– y administrar con cuentagotas el *stock* inmobiliario.

De hecho, a pesar de la crisis en el sector y de su patente conexión con los impugnables procesos financiero-hipotecarios de los bancos y las cajas de ahorros (que han financiado y avalado incluso adquisiciones de suelo rústico con alguna –¿incierta?– expectativa de reclasificación urbanística "a medida"), es palpable que las sociedades inmobiliarias y las entidades de crédito no ahorran medios a la hora de encubrir la probable sobrevaloración de suelos y productos inmobiliarios, ni escatiman esfuerzos para que el valor asignado se

8 http://www.cotizalia.com/valor-anadido/2011/banca-puede-quiere-credito-20110320-5117.html. Con datos de 2010, el 53% del total del riesgo crediticio está directamente ligado al sector inmobiliario.

9 Así, la crisis, de forma aparentemente paradójica pero entendible a la luz de lo anterior, no siempre ha supuesto la paralización de los procesos de gestión urbanística. Porque la estricta necesidad de las sociedades promotoras y las entidades financieras de "hacer valer" los suelos tal como "deben valer" ha llevado, por ejemplo, en el caso de Valladolid, en plena crisis inmobiliaria, a la formación y aprobación de planes parciales de miles de viviendas sobre suelo urbanizable no delimitado. Con ello, frente a los últimos cambios legislativos estatales y autonómicos, los promotores consiguen consolidar la categoría de suelo urbanizable y su valoración conforme a la Ley de 1998. Poco importa el urbanismo. Se trata, antes que nada, de contabilidad…

mantenga.[9] Con la connivencia de las normativas estatales de valoraciones del suelo y de balances de negocio, se apuntala la ficción económico-financiera del sostenimiento de una valoración de suelos que no sólo no corresponde con el precio de mercado sino que ni siquiera se sustenta en expectativas mínimamente creíbles.

Si la demostración de que no se desea una alternativa urbanística es la propia parálisis del sector financiero y la tolerancia de la administración con su apalancamiento, su confirmación está en la carencia de recursos dispuestos para la rehabilitación urbana, uno de los temas estrella de la nueva "economía sostenible". Todavía el eco de tantas plusvalías generadas por la reclasificación de terrenos y por la sucesión de operaciones de compra y venta antes de que los suelos hayan sido urbanizados es demasiado grande como para que se conceda alguna opción a otros posibles sectores de negocio.

Como base de nuestro modelo inmobiliario se ha fomentado una total penetración social de la vivienda como propiedad e inversión, sin que se ofrezcan alternativas viables

Efectivamente, el suelo urbanizable como eje del urbanismo ha sido y es el problema. Lo es porque su protagonismo conduce a una construcción de la ciudad a fragmentos –eso que llamamos sectores y planes parciales–, sin encaje entre sí, mal articulados por infraestructuras y dotaciones que se suelen retrasar, y que permanecen largo tiempo incompletos. Los suelos urbanizables se transforman en urbanos, pero su edificación no se completa porque depende de los avatares del mercado, un mercado que hoy no puede digerir tanta oferta, tantos espacios sólo empezados. Al menos, debería aprenderse que "hacer ciudad" no es sólo urbanizar. Ahí están las urbanizaciones, su resultado. El paisaje urbano de nuestras ciudades es el de unas periferias a medio construir donde la crisis ha hecho que incluso las grúas desaparezcan. Ciudades fantasma, semi-barrios, lugares perdidos en lo que hace cuatro años parecían ser los lugares demostrativos del éxito económico de un país sostenido por unas grúas y unos andamios retirados prematuramente. Ahora los andamios están en los balances de los bancos.

Un modelo incontestado, un dios insaciable

A pesar de la crisis tan fuerte a la que ha contribuido el reciente "desarrollo urbano" español, como pieza clave del crecimiento económico y del consumo acelerado, apenas nadie cuestiona el propio modelo urbanístico-inmobiliario.

Por desgracia en la (in)cultura urbanística de nuestro país están perfectamente instaladas, además de las nociones ya mencionadas acerca del desarrollo urbano como sinónimo de crecimiento espacial y del planeamiento urbano como herramienta que sirve básicamente para clasificar suelo urbanizable que alimente el negocio inmobiliario, toda una serie de ideas espurias, absolutamente interesadas, en torno al planeamiento urbano. Se ha tildado al planeamiento de rémora al desarrollo y de instrumentación lenta e inútil que no debe estar sino al servicio del crecimiento económico (eso sí, un crecimiento principalmente inmobiliario), de manera que el objetivo central de la ordenación urbana no es otro que otorgar aprovechamientos urbanísticos, los cuales se han constituido en una suerte de derecho latente que el plan urbano no debe contradecir, ya que las facultades del derecho de propiedad parecieran ser absolutas... Finalmente, diríase que la alardeada «función social de la propiedad» instaurada por nuestra legislación del suelo consiste simplemente en que la Administración participe de las plusvalías, obtenga suelos de cesión y dicte algunas condiciones en materia de vivienda de protección.

No debería sorprender la amplia extensión de estas ideas. El crecimiento urbano lo controlan de hecho los promotores inmobiliarios, cuya conexión con los medios de comunicación y las mayores entidades deportivas es conocida y se perfila como una descomunal vía para crear opinión. Además, en este panorama de imágenes subyacentes, las propias Administraciones Públicas, encargadas de velar por un urbanismo puesto al servicio del interés general, a menudo se demuestran también interesadas en un urbanismo orientado a la obtención de rentas (volveremos sobre este asunto un poco más adelante). A ello hay que añadir la total penetración social de la concepción de la vivienda como propiedad y como inversión, concepción nunca contradicha con alternativas viables y realistas, sino más bien fomentada como la base de nuestro modelo inmobiliario.[10] ¿Quién, pues, querría cuestionar la vuelta de las "vacas gordas"? La idea transmitida en todas direcciones es la de aguantar a que pase el chaparrón.

De hecho, a pesar de la dureza de la crisis, no ha habido cambios normativos sustanciales, salvo la bienintencionada pero limitada Ley del suelo de 2007:[11]

a. La normativa urbanística autonómica apenas se ha reformado. El derecho de propiedad del suelo y el crecimiento urbano continúan siendo los presupuestos teóricos básicos de la legislación urbanística desde hace más de medio siglo.

---

[10] *Cfr.* J. M. Naredo y A. Montiel, *El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano*, Icaria, Barcelona, 2011.

[11] La reciente Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, considera la rehabilitación ignorando su dimensión urbanística, con lo que es inoperante en un cambio de modelo que realmente no persiguen ni el Gobierno ni el capital financiero e inmobiliario. No obstante, la idea deambula por algunos documentos oficiales sin valor normativo, como los trabajos iniciales del Ministerio de Vivienda (2010) acerca de la rehabilitación urbana: el Informe «Regeneración urbana integrada en Europa» y la Conferencia de alto nivel «Urban Sustainability and Integrated Urban Regeneration in Europe. Policies, Programes and Best Practices»; y el *Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español*.

b. Se ha abandonado *de facto* la idea de que las facultades urbanísticas están ligadas al cumplimiento de los deberes urbanísticos, lo cual no sólo privilegia al sector inmobiliario frente a la ciudadanía sino que debilita a la Administración Pública e, indirectamente, potencia la especulación.
c. La normativa estatal de valoraciones de suelo, que se ha visto modificada varias veces desde mediados de los noventa, ha venido sustentando la posibilidad de materializar expectativas en el valor de los suelos rústicos en torno a las ciudades y, en definitiva, ha terminado por descalabrar la capacidad de acción de la Administración Local frente a la propiedad privada. Los efectos del nuevo sistema de valoraciones inmobiliarias previsto por la Ley del Suelo de 2007 han sido aplazados –de momento– hasta el 31 de diciembre de 2011, lo que da un balón de oxígeno a uno de los principales problemas del modelo y alarga su proyección como un lastre gravísimo para la gestión futura de las ciudades.[12]

Del lado de los hechos, no de las normas, la construcción disparada de infraestructuras de transporte ha sido colaboradora necesaria, junto al desbarajuste de la Administración Municipal del urbanismo, si no en el alza en la producción de viviendas, sí en la componente extensiva, derrochadora y sumamente lucrativa del crecimiento urbano. Y tampoco en este aspecto ha cambiado nada.

Finalmente, también en los hechos, la propia Administración incumple el mandato constitucional de luchar contra la especulación. Pero ¿cómo podría ser de otra manera cuando la propia Administración Pública actúa como un agente especulador más? Las Entidades Públicas Empresariales y otros entes públicos han visto adaptados sus estatutos jurídicos desde principios de los años noventa, de forma que han adquirido la potestad de gestionar "su" propio patrimonio.[13] Además, numerosas sociedades anónimas públicas y fundaciones públicas se están creando, con motivos diferentes, en el ámbito estatal y, sobre todo, en el autonómico. En buena parte, sustituyen a la propia administración, aunque, sin embargo, pueden operar en el mercado inmobiliario prácticamente cual agentes privados. Como colofón a este asunto, cabe apuntar la creación, en los últimos diez años, de una veintena de sociedades anónimas públicas mixtas «de integración ferroviaria», cuyo fin incontestable es obtener las mayores plusvalías inmobiliarias posibles de los suelos ferroviarios liberados, a fin de financiar obras de soterramiento.

---

12 El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ya estableció un primer aplazamiento para que los terrenos que, a la entrada en vigor de la ley, formasen parte del suelo urbanizable con planeamiento aprobado pudiesen valorarse conforme al sistema precedente. Posteriormente, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, ha prorrogado el plazo hasta finales de este año,

13 Antes bienes patrimoniales del Estado, que ahora son bienes patrimoniales de estos entes, gestionados en el libre mercado y prácticamente en el ámbito del derecho privado, con el fin de obtener recursos para materializar mejor sus propios fines sectoriales.

Esta es, a nuestro juicio, la tragedia: a pesar de la crisis galopante, el modelo urbanístico-inmobiliario basado en el crecimiento urbano y en la primacía de la construcción de obra en nuevo suelo, se mantiene incólume a la espera de tiempos mejores, dado que la burbuja inmobiliaria no estaría "estallada" sino tan sólo "desinflada"… Los *stakeholders* confían en que volverán sus "buenos tiempos", o así lo quieren hacer ver. Podría discutirse la verosimilitud de esta conjetura o si sus propias declaraciones al respecto tienen un carácter táctico, pero no es eso lo importante. Lo importante es que esa confianza, real o fingida, denota que no se arrepienten de nada, que el modelo es el que desean y que volverían a hacer lo mismo (quizá con la excepción de la hipotecas *subprime*) a pesar de lo nefasto de las consecuencias. No es avaricia, no es voracidad, no es mercado… es un libérrimo becerro de oro, un dios insaciable que no sólo decide sobre vidas y haciendas de sus creyentes sino que dispone de sumos sacerdotes que le rinden todo al sacrificio, incluso a estos sus hijos que no vivimos sino para pagar nuestras hipotecas… y las suyas.

Colección
economía crítica & ecologismo social

En coedición con Los Libros de la Catarata

Desde una vocación transdisciplinar, las obras de la colección Economía Crítica & Ecologismo Social abordan los principales problemas económicos, sociales y ecológicos de nuestro tiempo.

El porqué de las crisis financieras y cómo evitarlas

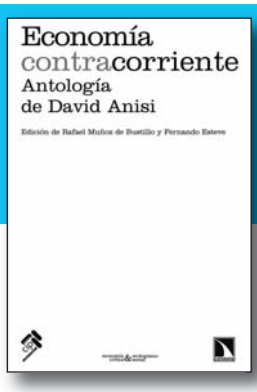
Autor: Frédéric Lordon
ISBN: 978-84-8319-443-0
Páginas: 191
Precio: 18,00 €

Próxima aparición

LA GRAN RECESIÓN Y EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI
Teorías económicas, explicaciones de la crisis y perspectivas de la economía mundial
José A. Tapia y Rolando Astarita

Economía contracorriente

Autor: David Anisi
Edición de Rafael Muñoz Bustillo y Fernando Esteve
ISBN: 978-84-8319-562-8
Páginas: 332



Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar

Autor: Andrew Glyn
ISBN: 978-84-8319-493-5
Páginas: 302
Precio: 20,00 €

Títulos a la venta en:
Librería on-line: www.libreria.fuhem.es
Compra segura y fácil con su tarjeta de crédito
Gastos de envío gratuitos para España

Para más información o hacer su pedido:
Teléfono: 91 431 03 46
Correo electrónico: publicaciones@fuhem.es

MARÍA PAZOS

Demografía, sostenibilidad e igualdad de género

Una de las manifestaciones de la actual crisis es la insostenibilidad del desequilibrio demográfico mundial. Una buena demografía es uno de los retos para un desarrollo económico y social ecológicamente sostenible. Para ello, es preciso considerar la sociedad actual en su conjunto, teniendo en cuenta las complejas relaciones entre la educación, el empleo y el ámbito familiar e impedir que el objetivo de igualdad quede, una vez más, aplazado en tiempos de crisis. El artículo reflexiona sobre las transformaciones necesarias para que se produzca el cambio hacia un desarrollo sostenible y sobre cómo en el centro de ellas estaría la necesidad de un cambio estructural del actual modelo social, apoyado en la familia tipo «sustentador masculino/esposa dependiente», a una sociedad compuesta por «personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad». La crisis actual proporciona una oportunidad única para organizar la economía global conforme a un modelo productivo, solidario, ecológico y demográficamente viable.

María Pazos
es jefa de Estudios de Investigación, Instituto de Estudios Fiscales

La Ley de Economía Sostenible española no se refiere ni una sola vez a la demografía. Sin embargo, España tiene una bajísima y decreciente tasa de fecundidad (1,3 hijos/mujer en 2010, muy por debajo de la tasa de reposición poblacional, que se sitúa en 2,1 hijos/as por mujer). Se estima que, de seguir a este ritmo, la población española total se quedaría en 10 millones de habitantes a finales del siglo XXI;[1] y la estimación es optimista, pues está basada en datos de fecundidad e inmigración anteriores a la crisis económica. Esta bajísima fecundidad va acompañada de una altísima y creciente tasa de pobreza infantil (25%). Con la crisis, las tasas de fecundidad han disminuido aún más; muchas personas inmigrantes (y también muchas personas españolas en edad de trabajar) están abandonando el país; y la pobreza está en aumento. ¿Es esta situación sostenible?

Algunas personas piensan que las bajas tasas de fecundidad no son un inconveniente (el planeta ya soporta demasiada carga humana). El problema

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación "La igualdad de género como eje de un nuevo modelo económico y social eficiente y sostenible: el cometido de las políticas públicas" financiado por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Salud, Asuntos sociales e Igualdad, expediente nº 154/10, convocatoria 2010.

1 G. Esping-Andersen,«Un nuevo contrato de género» en M. Pazos Morán (ed.), *Economía e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI,* Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2008, pp. 31-43.

es que las bajas tasas de fecundidad, prolongadas en el tiempo, no solamente provocan un descenso de la población sino que conducen a una estructura poblacional en la que la pirámide se invierte, pasando a ser mayoría las personas de avanzada edad. Claro que a esto se responde, desde algunos sectores, con la idea que aún persiste de que la inmigración podría suplir el déficit de nacimientos autóctonos (según esa perspectiva, la bajísima fecundidad se compensaría con la llegada de inmigrantes a los países correspondientes). Así, muchas personas rechazan toda consideración del tema demográfico porque creen que es un asunto de xenofobia. Sin embargo, tres elementos contradicen esta perspectiva: en primer lugar el fenómeno ampliamente contrastado de que las hijas y nietas de las mujeres inmigrantes adoptan el comportamiento de los países de acogida. En segundo lugar, que el envejecimiento provoca problemas económicos que empobrecen el país que lo sufre, de tal forma que impide la generación de puestos de trabajo, tanto para inmigrantes como para autóctonos. En tercer lugar, y no menos importante, que la inmigración acelera en los países de origen la llamada transición demográfica (descenso drástico de las tasas de fecundidad), a la que actualmente se ven sometidos todos los países excepto los paupérrimos del África subsahariana y Oriente Próximo. Aunque la fecundidad media del planeta fuera ideal en un momento dado, alcanzar esa media por medio de simples transvases no es factible.

Si los niños y niñas son pobres y no tienen oportunidades de formación ¿qué cohesión social, qué capital humano tendremos en la próxima generación?

En realidad estamos asistiendo a una polarización mundial entre, por un lado, países (y zonas) con bajísima fecundidad y altísima pobreza infantil y, por otro lado, países (y zonas) con altísima fecundidad y también altísima pobreza infantil. Estos dos fenómenos amenazan la sostenibilidad social, económica y medioambiental de cada uno de los países, y por tanto del planeta.

La explosión demográfica mundial continuada sería insostenible (humana y medioambientalmente), pero ese no es el problema del futuro, ya que en la mayor parte del mudo las tasas de fecundidad están descendiendo a gran ritmo. En los países en los que aún no lo están, la insostenibilidad no se debe sobre todo al excesivo número de habitantes (algunos están poco poblados) sino a que las tasas de fecundidad demasiado altas realimentan la pobreza y dificultan el desarrollo social y económico (típicamente nos encontramos con familias de muchos hijos e hijas a los que no pueden mantener. Este fenómeno está íntimamente ligado al modelo actual de crecimiento económico a nivel mundial, que provoca una creciente desigualdad entre países y una sobreexplotación de los recursos naturales. Las personas de los países pobres, con una naturaleza cada vez más esquilmada, sin acce-

so a la formación, sin otros medios de vida y frecuentemente víctimas de guerras y dictaduras (muchas veces apoyadas desde el exterior), no tienen otro recurso que lanzarse a una emigración cada vez más precaria. La emigración es, naturalmente, una salida individual, pero no es la solución para alcanzar un modelo de desarrollo equitativo y sostenible desde el punto de vista humano, social, medioambiental y demográfico.

Por otro lado, la mayoría de las sociedades occidentales están aquejadas de un envejecimiento excesivo de la población que tiene graves consecuencias. La ratio entre el número de personas de la tercera edad y el número de personas en edad de trabajar (llamada «tasa de dependencia demográfica») es clave para el sostenimiento del sistema de pensiones, de los servicios públicos, de la producción y de la sociedad en su conjunto. Las personas en edad de trabajar (y cuidar) alimentan los fondos de la Seguridad Social con sus cotizaciones, las arcas del Estado con sus impuestos, la economía en su conjunto con su producción. En cambio, las personas mayores (inactivas) necesitan pensiones y servicios que aumentan el gasto público. El envejecimiento de la población provoca lo que se ha dado en llamar «crisis de los cuidados»: las necesidades de atención a las personas dependientes crecen exponencialmente, mientras que disminuye el número de personas en edad de cuidar (tanto para trabajar en los servicios públicos de atención a la dependencia como para atender personalmente a sus familiares). El problema se agrava en las sociedades tradicionales (como España) en las que la participación de los hombres en el cuidado es muy escasa, lo que divide por dos el potencial cuidador existente en la sociedad. En la mayoría de los países occidentales las tasas de dependencia demográfica están creciendo enormemente, pero existen diferencias importantes. En España, donde la transición está siendo muy brusca y la tasa de fecundidad es bajísima, la tasa de dependencia era de un 27% en 2000 y se prevé que llegará a un 73% en 2050. Sin embargo, en Suecia, donde la tasa de fecundidad es más alta y está estabilizada, estos valores son 30% en 2000 y 43% en 2050.

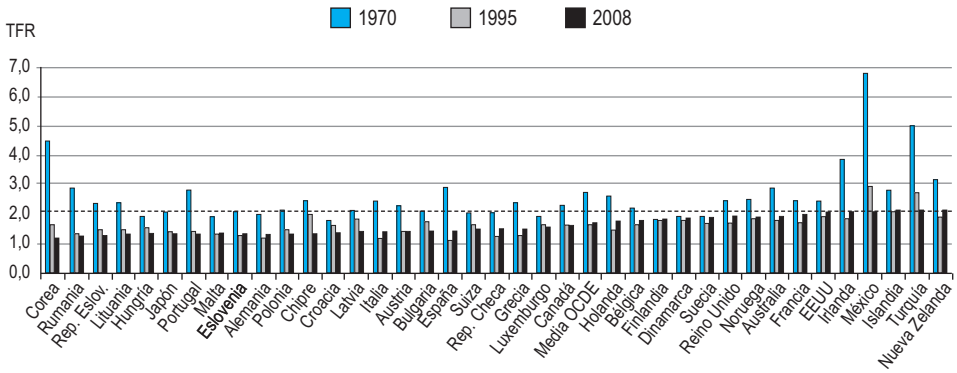
La pobreza, y en especial la pobreza infantil, es el otro elemento demográfico clave (junto con el nivel y la estabilidad de las tasas de fecundidad). En efecto, no solamente se necesita que nazcan criaturas en un número adecuado (ni muchos más ni muchos menos), sino también que estas no sean pobres. La pobreza infantil es un fenómeno indeseable desde el punto de vista de la justicia social, pero también es un problema económico esencial desde el punto de vista de la formación del capital humano. Si los niños y niñas son pobres y no tienen oportunidades de formación ¿qué cohesión social, qué capital humano tendremos en la próxima generación? No tendremos profesionales formados. ¿Quién manejará las nuevas tecnologías, quién se encargará de la organización de las empresas y del sector público?

La pobreza y el analfabetismo son lacras que van asociadas a la desintegración social y que impiden el desarrollo de una sociedad, así en el Norte como en el Sur. Y estas consi-

deraciones son válidas pensando en un solo país o en el mundo entero en su conjunto. Lo curioso es que las tasas de pobreza infantil y las tasas de fecundidad son variables correlacionadas, aunque con distinto signo. En los países (y zonas) paupérrimos, la correlación es positiva: las altísimas tasas de fecundidad van asociadas con altas tasas de pobreza y analfabetismo (especialmente femenino), de las que son consecuencia a la vez que causa de permanencia. Pero, en los países con bajísima fecundidad la correlación es negativa: la pobreza infantil es más alta cuanto menor es la tasa de fecundidad, como veremos (véase gráfico 2, p. 77). En España este problema es especialmente grave, pues tenemos una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, solo por debajo de las de Italia, Latvia, Bulgaria y Rumania.

Otro factor demográfico importante es la estabilidad de las tasas de fecundidad. La decisión de tener hijos está, en principio, condicionada por la situación económica. Por ello, en las fases altas del ciclo económico nacen más niños, dando lugar a los llamados *baby booms*, que crean muchos problemas de planificación económica. Las tasas de fecundidad no pueden considerarse de forma estática sino en su evolución. Por ejemplo, México e Islandia tienen tasas de fecundidad prácticamente iguales a 2,1 hijos por mujer (tasa de reposición poblacional, véase el gráfico 1). Sin embargo, México se encuentra en transición entre los fenómenos de altísima y bajísima fecundidad (y por tanto en proceso de envejecimiento rápido), mientras que Islandia es un país con tasa de fecundidad adecuada y estable, es decir con una buena demografía.

Gráfico 1. Tasas de fecundidad totales en 1970, 1995 y 2008



En resumen, el equilibrio demográfico a largo plazo exige tres condiciones: 1.) tasas de fecundidad al nivel de reposición poblacional; 2.) que estas tasas de fecundidad sean estables en el tiempo y en el espacio; y 3.) evitar la pobreza infantil. Y una buena demografía es uno de los dos grandes retos para un desarrollo económico y social sostenible, junto con la preservación del medio ambiente.

Altísimas y bajísimas tasas de fecundidad: dos caras de la misma moneda

Para interpretar correctamente los datos demográficos es importante analizar separadamente los fenómenos de la altísima fecundidad y de la bajísima fecundidad; y considerar que muchos países se encuentran en transición demográfica entre estos dos fenómenos tan diferentes.

Consideremos la evolución de las tasas de fecundidad en la OCDE durante las últimas décadas (véase gráfico 1). La tasa media de la OCDE descendió de 2,72 en 1970 a 1,61 en 1995, y luego aumentó ligeramente hasta 1,71 en 2008. Ya casi todos los países de la OCDE están por debajo de la tasa de 2,1 hijos por mujer, que es la tasa llamada de «reposición poblacional» (es decir, aquella tasa de fecundidad que, estabilizada en el tiempo, permitiría que el número de habitantes permaneciera invariable). Alcanzan esta tasa Irlanda, México, Islandia, Turquía y Nueva Zelanda. Sin embargo, en Irlanda, México y Turquía la fecundidad ha sufrido una caída espectacular; mientras que en Islandia y en Nueva Zelanda la población permanece más o menos estable en el tiempo, lo que permite prever que no caerá sustancialmente en los próximos años.

Tenemos una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, solo por debajo de las de Italia, Latvia, Bulgaria y Rumania

Dentro de la OCDE, los países que han registrado un aumento significativo de su renta per cápita, son tan heterogéneos como México, Turquía, Irlanda, Corea y España, algunos de los cuales han sido la mayor fuente de flujos migratorios hacia Europa y EE UU, son también los que han visto caer su tasa de fecundidad en mayor medida. Por otro lado, las tasas de fecundidad de las repúblicas del Este de Europa son las más bajas del mundo junto con las de Corea. En Europa –a pesar de que la inmigración aún compensa en parte la falta de nacimientos–, Alemania y algunos países del Este ya están perdiendo población desde hace años; y se estima que hacia 2035 la población europea total comenzará a descender. El crecimiento poblacional se está ralentizando también en la mayor parte de los países de Asia y América en los que las tasas de fecundidad son aún elevadas.

Mientras, continúa la explosión demográfica en el África subsahariana y en Oriente Próximo (véanse los datos en NIC, 2008). Así, aumenta cada vez más la polarización entre países subdesarrollados con altísima fecundidad, por un lado, y países desarrollados con bajísima fecundidad, por otro. Es como si el mundo tuviera la cabeza en el horno y el resto del cuerpo en el congelador, aunque su temperatura media fuera ideal.

Es importante también detenerse a analizar el proceso del llamado cambio demográfico para entender que las tasas demasiado elevadas o demasiado bajas de fecundidad son dos caras de un mismo problema; y que en el centro de este problema está la falta de autonomía de las mujeres. En efecto, los países con altísima fecundidad son aquellos más pobres y en los que las mujeres no tienen ni siquiera un nivel mínimo de información y decisión. Así, no pueden limitar el número de hijos; y nos encontramos con altísimas tasas de fecundidad acompañadas indefectiblemente de elevados índices de pobreza infantil, lo que es un lastre para el progreso de los países. El acceso de las mujeres a la información, a la educación, al empleo y a los derechos reduce estos problemas de excesiva fecundidad y pobreza infantil, y con ello acelera el desarrollo económico en esa primera etapa.

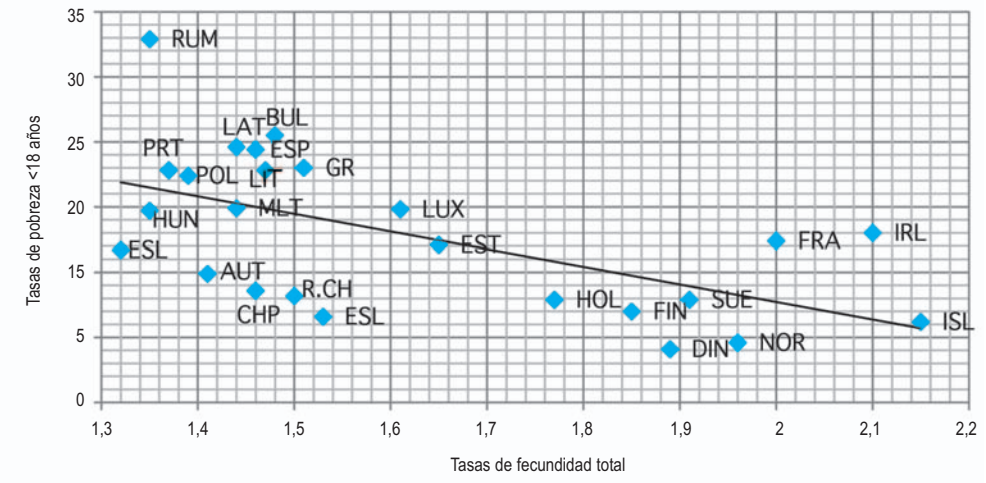
Pero, este proceso de caída de las altísimas tasas de fecundidad, característica de las primeras fases de desarrollo, no se frena en los países en los que no se proporciona a las mujeres la posibilidad de tener hijos en igualdad. Cuando las mujeres no pueden compatibilizar su maternidad con un empleo de calidad, retrasan la decisión de tener hijos; y algunas simplemente renuncian a ello. Así se llega a la bajísima fecundidad propia de los países occidentales con un Estado de bienestar familiarista. Y esta bajísima fecundidad también va unida a altas tasas de pobreza infantil, en gran parte debido a que la familia de un solo sustentador es una trampa de pobreza y a que no se apoya adecuadamente a las familias monoparentales. Así es como la falta de autonomía de las mujeres se sitúa en el centro del problema demográfico.

De hecho, en los países de altísima fecundidad existe una correlación positiva entre tasas de fecundidad y tasas de pobreza infantil (ambas muy altas). Pero una vez pasada la primera fase de transición demográfica (y si no se articulan las políticas adecuadas para impedirlo), las tasas de fecundidad siguen cayendo y las tasas de pobreza infantil no disminuyen de manera acorde. El resultado es que la correlación entre las dos variables cambia de signo: entre los países de la UE, aquellos con menores tasas de fecundidad son también los que registran mayores tasas de pobreza infantil, como se muestra en el gráfico 2 (p. 77).

Políticas natalistas, fecundidad e igualdad de género

Es evidente que la transformación de la familia, y en particular la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, ha ido acompañada de una caída de las altísimas tasas de fecundidad en una primera fase de la transición demográfica. De hecho, hasta la década de 1980 la correlación entre empleo femenino y tasa de fecundidad era negativa en los países de la OCDE (véase gráfico 4, p. 80). Además, dentro de cada país, las madres registran tasas de empleo menores que las que no lo son.

Gráfico 2. Tasas de fecundidad y tasas de pobreza infantil en la UE. Año 2008



Fuente: EUROSTAT

Muchas personas, en consecuencia, piensan que el descenso de las tasas de fecundidad se detendrá si se dificulta el acceso de las mujeres al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. Así, a pesar de que no hay argumentos ni económicos ni humanos para la división del trabajo ni para la organización del trabajo doméstico en torno a la permanencia de las mujeres en el hogar, queda un argumento no siempre explicitado pero siempre presente: el argumento demográfico. Según esta lógica, se trataría de sacrificar en parte el capital humano de las mujeres, aun en detrimento de la eficiencia económica a corto plazo, con tal de resolver el problema demográfico, que al fin y al cabo es uno de los mayores lastres de la economía a medio-largo plazo. Este es el principio (muchas veces implícito) que inspira las llamadas tradicionalmente «políticas natalistas», que consisten en proporcionar incentivos para que las madres permanezcan en el hogar (mediante prestaciones para el cuidado incompatibles con el empleo, facilidades para reducción de jornada, excedencias, etc.).

La reacción ante esta orientación tradicional es la causa del fenómeno que Sommestad[2] califica como la «relación conflictiva del feminismo con la demografía»: por un lado, muchos gobiernos y personas con ideología tradicional tienden a ver en la emancipación femenina la causa del problema, y proponen medidas de vuelta al hogar para solucionarlo. Por otro lado, el fantasma de la maternidad impuesta planea en el ambiente (basta ver las enormes dificultades para mantener y profundizar en las conquistas relativas a la libertad de decidir

[2] L. Sommestad, «Gender Equality-A key to our future?» [disponible en: http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/13/jsp/Render.jsp?m=print&d=1321&nocache=true&a=4220], 2002.

sobre el propio cuerpo, y particularmente el derecho al aborto). En estas condiciones, es comprensible que muchas mujeres, y especialmente muchas feministas, rechacen toda consideración del problema demográfico.

La única manera de detener el excesivo descenso de las tasas de fecundidad es proporcionar a las mujeres la posibilidad de compatibilizar empleo de calidad con maternidad

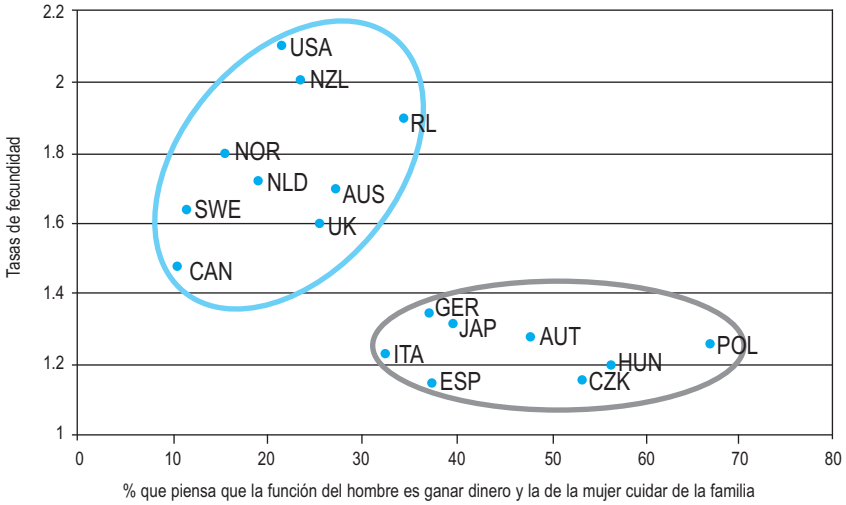
En efecto, si fuera posible recuperar las tasas de fecundidad dificultando el empleo y la autonomía femenina, tendríamos un conflicto de intereses entre los derechos de las mujeres y las necesidades de la sociedad. Pero, en realidad sucede todo lo contrario: los países que han aplicado estas recetas (mal llamadas "natalistas"), como Alemania, no recuperan las tasas de fecundidad a pesar de las elevadas partidas de gasto público que dedican a ello. ¿Por qué? Muy sencillo: las mujeres con un mínimo nivel de información se las arreglan (a veces a costa de poner en riesgo su propia vida) para no tener más hijos de los que desean y esperan poder mantener. Es cierto que muchas mujeres se ven obligadas a renunciar a su empleo (de ahí las menores tasas de empleo de mujeres con hijos). Pero en los países en los que esa es la única posibilidad que se les ofrece para ser madres, muchas otras renuncian a la maternidad a pesar de los muchos incentivos que se les proporcionan para permanecer en el hogar.

En consecuencia, como ya aconsejaba Alva Myrdal en 1934, la única manera de detener el excesivo descenso de las tasas de fecundidad es proporcionar a las mujeres la posibilidad de compatibilizar empleo de calidad con maternidad.[3] Este argumento para la alianza de la fecundidad con el feminismo está contrastado por las investigaciones que muestran cómo, en los países desarrollados, las tasas de fecundidad más bajas son las de los países con modelos más tradicionales de matrimonio y cuidado de niños, como se observa en el gráfico 3 (p. 79).

El mecanismo por el que se produce este fenómeno (que se ha llegado a llamar «huelga de fecundidad») en las sociedades industrializadas tradicionales es el siguiente: ante las dificultades para tener hijos en condiciones adecuadas, muchas mujeres renuncian a la maternidad (en España, por ejemplo, el 19,4% de las mujeres en edad fértil afirma que no quiere tener hijos); y otras toman la decisión de tener el primer hijo a una edad muy tardía (la edad media del primer hijo se ha retrasado de 25 años en la década de 1950 a 30,6 años en 2006). Como resultado, el 42% de las mujeres entre 20 y 44 años no ha tenido ningún

[3] A. Myrdal y G. Myrdal, *El problema de la población en crisis* [1934], 1994.

Gráfico 3: La trampa de las actitudes: tasa de fecundidad e igualdad de género

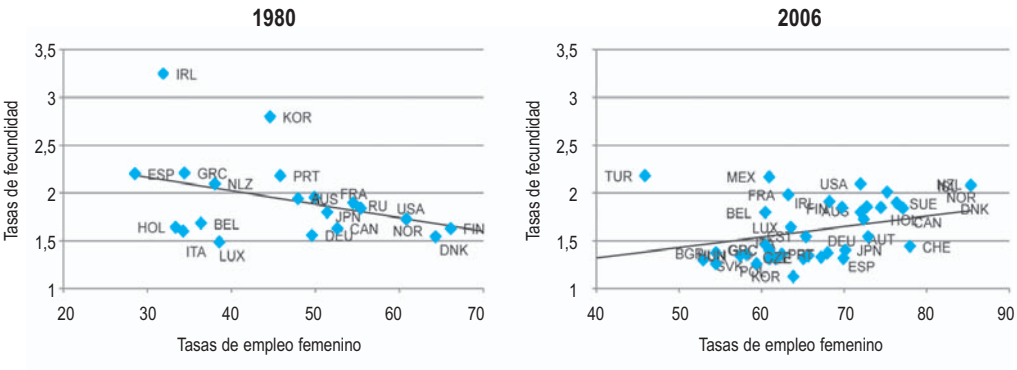


Fuente: R. Mörtvik y R. Spant, «Does gender equality spur growth?» en *OECD Observer*, octubre de 2005 [disponible en: http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1664/Does_gender_equality_spur_growth_.html].

hijo, y los motivos que aduce la mayoría son la incertidumbre personal y la falta de confianza en el futuro (Encuesta de Fecundidad Española, 2006). Mucho más difícil aún es tomar la decisión de tener el segundo, para lo que se conjugan varios factores: la tardía edad de la mujer al primero, las dificultades de conciliación y los conflictos de pareja que se plantean, a juzgar por el gran número de divorcios que se dan entre mujeres con niños de corta edad. Así es como se explica la enorme frecuencia de la norma «mujer con uno o ningún hijo», como es el caso de muchas mujeres profesionales que, después de perder oportunidades por criar a su primer hijo, terminan, divorciadas o no, de vuelta en el mercado de trabajo en situación precaria.

Este fenómeno es el que explica cómo la correlación entre las tasas de fecundidad y de empleo femenino ha cambiado de signo, y actualmente es claramente positiva por países de la OCDE, como se refleja en el gráfico 4, p. 80. Si hasta la década de los ochenta fue negativa, ello se debe a que los países se encontraban en la primera fase de la transición demográfica (altísimas tasas de fecundidad en descenso asociadas a la incorporación de las mujeres a la información, educación y empleo). En la segunda fase, se demuestra que no es posible convencer a las mujeres de que retrocedan (retrocedamos) en su (nuestro) camino.

Gráfico 4. Relación entre tasas de empleo femenino y tasas de fecundidad totales. Países de la OCDE



Fuente: OCDE. Family Database

En definitiva, las políticas tradicionalmente llamadas «natalistas» no funcionan: si bien es cierto que las mujeres se están retirando de la maternidad, y que este abandono está asociado a su incorporación al empleo, también lo es que no se puede revertir la rueda de la historia: la única forma de recuperar las tasas de fecundidad es la de poner en pie políticas que permitan a las mujeres tener hijas e hijos sin verse obligadas a renunciar a un empleo de calidad estable.

Actualmente (véase gráfico 2) el país europeo más sostenible demográficamente (tasa de fecundidad al nivel de reposición poblacional y baja tasa de pobreza infantil) es Islandia, y le siguen el resto de los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia). ¿Cuál es el secreto de estos países? Precisamente un Estado de bienestar desarrollado con mucha menor desigualdad de género que en el resto de Europa: 1.) excelentes servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia; 2.) horarios a tiempo completo cortos; y 3) implicación de los hombres en el cuidado.[4] Existen prestaciones por hijos e hijas universales que no están condicionadas a la inactividad laboral, y las familias monoparentales gozan de una atención especial. Así, todas las mujeres pueden mantenerse en el empleo durante toda la vida, y pueden elegir ser madres sin perder su independencia económica o caer, junto con sus criaturas, en la pobreza.

Conclusiones

La población mundial está evolucionando hacia una bipolaridad creciente entre una mayoría de países industrializados con bajísimas tasas de fecundidad y altísimas tasas de pobreza

[4] Algunos países tienen más bien dos de estas tres condiciones: Islandia (1 y 3); Francia (1 y 2).

infantil, por un lado, y una minoría de países paupérrimos (África subsahariana y Oriente Próximo) con altísima fecundidad, por otro. Solamente unos pocos (esencialmente algunos países nórdicos) están consiguiendo mantener las condiciones para una buena demografía: tasas de fecundidad estables en el tiempo y próximas a la tasa de repoblación poblacional, junto con bajas tasas de pobreza infantil. El desequilibrio demográfico mundial es insostenible: la bajísima fecundidad provoca altas tasas de dependencia demográficas que hacen inviables los servicios públicos, la sanidad, las pensiones y, en definitiva, la propia supervivencia humana, social y económica. En el otro extremo, la altísima fecundidad impide el desarrollo de los países. La pobreza, en los dos polos, agrava los problemas sociales y medioambientales.

Muchas mujeres profesionales después de criar a su primer hijo terminan de vuelta en el mercado de trabajo en situación precaria

Las políticas tradicionalmente llamadas "natalistas" se apoyan en la falsa idea de que se puede convencer a las mujeres para que vuelvan a su ancestral rol de amas de casa. Sin embargo, estas políticas no han dado resultado, y los países que las llevan a cabo registran las menores tasas de fecundidad. Para entender los problemas de la demografía es necesario: 1.) considerar separadamente los fenómenos de las altísimas y bajísimas tasas de fecundidad; 2.) distinguir entre el fenómeno individual (la tasa de empleo de mujeres con criaturas es menor que la de mujeres sin ellas) y el agregado (los países de la OCDE con menores tasas de empleo femenino tienen actualmente tasas de fecundidad menores); y 3.) tener en cuenta que el marco institucional es determinante para la evolución demográfica.

La experiencia internacional demuestra que la solución a los problemas demográficos en todo el mundo está en proporcionar a las mujeres la libertad y el entorno adecuado para que en todos los países, en todos los niveles educativos y en todos los niveles de renta, puedan tener los hijos que deseen. Esto supone concederles, en todo el mundo, los derechos civiles, el derecho a la propiedad, la igualdad ante el código civil, el acceso a la educación y al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. De esta forma se combatirá eficazmente la altísima fecundidad. Por otro lado, para que las tasas de fecundidad aumenten en los países donde son bajísimas, y para combatir la pobreza infantil en todos, hay que proporcionar una buena atención a la infancia, con especial énfasis en los servicios públicos de educación infantil, y dar prioridad a las políticas de integración social; hay que integrar a los hombres en el cuidado; y hay que apoyar especialmente a las madres solas, pues es en esas familias donde el nivel de pobreza (y por tanto de pobreza infantil) es más alto. En definitiva, eliminar la maternidad impuesta y apoyar la maternidad deseada compatible con la autonomía y el empleo de calidad de las mujeres. La historia demuestra que la maternidad impuesta es incompatible tanto con el desarrollo económico como con la democracia.

A pesar de que nadie contradice estas evidencias, la corriente principal de la economía y los diseñadores de las políticas públicas siguen sin tenerlas en cuenta. Las recetas de los expertos para prevenir los efectos del envejecimiento de la población siguen siendo las de retrasar la edad de jubilación y ajustar las pensiones. A lo sumo, las mujeres se consideran como fuerza de trabajo potencial, destinada a engrosar el número de activos cuando es necesario, dando por irreversible la caída de la fecundidad. Lo que casi nadie hace es salir del reducido recinto del mercado de trabajo y abarcar en el análisis económico a las familias, considerándolas no solamente como consumidoras sino como verdaderas productoras en origen de la oferta de trabajo, con todo el monto de trabajo no pagado que ello conlleva.[5] Esta producción doméstica, hasta ahora ignorada por la economía y realizada por las mujeres, tiene que repartirse y socializarse si quiere mantenerse, y esa es la más importante relación de la igualdad de género con, la macroeconomía.[6]

Tradicionalmente ha persistido la idea de que la eliminación de la división del trabajo era imposible. Aunque en teoría es fácil entender que a las mujeres les corresponde la mitad de los recursos, del empleo y del tiempo libre, se pensaba que la igualdad era una utopía que la sociedad no se podía permitir. Según esta óptica, el papel de las mujeres como amas de casa sería imprescindible para la economía, para la cohesión social y para la natalidad. Sin su sacrificio, la familia se disolvería, el gasto público se dispararía, la demografía se iría al traste. Y si ese era el enfoque en tiempos de bonanza, ¿cómo va a extrañarnos que el objetivo de igualdad quede aplazado en tiempos de crisis? Pero este enfoque tradicional está ampliamente superado. Hoy en día existe un amplio consenso acerca del lastre que supone la desigualdad para la economía.[7] Es más, se reconoce que la igualdad sería un elemento fundamental para salir de la crisis. Hoy sabemos que la apuesta por la igualdad no solamente es posible sino también altamente rentable.[8] De hecho, los países que más han apostado por la igualdad, como los países nórdicos, han mejorado la competitividad de sus economías.[9]

La crisis demográfica mundial hace que la desigualdad no solamente sea ineficiente sino también insostenible. El problema es que, para afrontar este reto, hay que considerar la

---

5 J. Rubery, J.Humpries, C.Fagan, D. Grumshaw y M. Smith, «Equal opportunities as a productive factor» en M. Jonathan, J. Rubery, B. Burchill, S. Deakin (ed.), *Systems of Production Markets, Organisations and Performance*, Routledge, Londres, 2002, pp. 236-261.

6 L. Sommestad, *op. cit.,* 2002.

7 CE, *Report from the Commision to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Equality between women and men – 2010*; Comité Económico y Social Europeo, *Dictamen sobre el tema "relación entre igualdad de género, crecimiento económico y tasa de empleo"* [2009/C 318/04].

8 M. Pazos, «El papel de la igualdad de género en el cambio a un modelo productivo sostenible», *Revista Principios,* núm.17, julio de 2010.

9 A. Löfström, *Gender equality, economic growth and employment*, [informe disponible en: http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.17994!menu/standard/file/EUstudie_sidvis.pdf], 2009.

sociedad actual en su conjunto, teniendo en cuenta las complejas relaciones entre la educación, el empleo y el ámbito familiar. El cambio hacia un desarrollo sostenible exige transformaciones importantes, y en el centro de esas transformaciones está el cambio estructural del actual modelo social, apoyado en la familia tipo «sustentador masculino/esposa dependiente» a una sociedad compuesta por «personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad». La crisis actual proporciona una oportunidad única para organizar la economía global conforme a un modelo productivo, solidario, ecológico y demográficamente viable.[10]

[10] Un plan de acción con medidas para llevar a cabo la perspectiva propuesta en este artículo se puede encontrar en www.feminismoantelacrisis.com

REVISTA CIDOB

D'AFERS INTERNACIONALS

93-94
abril
2011

Islam político en el Mediterráneo:
Transformación y adaptación en un contexto cambiante

Ferran Izquierdo Brichs (coord.)

La lucha por la democracia ha llegado al mundo árabe y, aunque los cambios que la acompañen seguramente no responderán totalmente a las esperanzas de la población o serán reprimidos, ya nada será igual tras los "días de la ira". Hasta este momento, el islamismo había ocupado un lugar central en el debate sobre las transformaciones en el mundo árabe, pero las recientes revueltas parecen desmentir la importancia que se le continuaba otorgando. Como veremos, el islamismo ha evolucionado a posiciones mucho más moderadas que en los años ochenta o primeros noventa del siglo pasado. En la actualidad, los partidos islamistas ni tienen la fuerza de entonces, ni reclaman las mismas cosas, ni siquiera siguen las mismas políticas. En este sentido, desde Turquía a Marruecos, pasando por Siria, Líbano, Israel, Palestina, Egipto, Somalia, Argelia y Túnez, los artículos recogidos en este número de la *Revista CIDOB d'afers internacionals* serán muy útiles para situar el islam político en el contexto actual.

EDITA

CIDOB
Elisabets, 12, 08001 Barcelona
www.cidob.org

DISTRIBUYE

Edicions Bellaterra, S.L.
Navas de Tolosa, 289 bis, 08026 Barcelona
www.ed-bellaterra.com

Ferran Izquierdo Brichs
ISLAM POLÍTICO EN EL SIGLO XXI

Paloma González del Miño
EL MOVIMIENTO ISLAMISTA EN MARRUECOS

Juan Antonio Macías Amoretti
LA "VIRTUALIZACIÓN" DEL DISCURSO Y LA ACCIÓN POLÍTICA EN EL MAGREB

Rosa Meneses
LA EXCLUSIÓN DEL ISLAM POLÍTICO EN ARGELIA

Guadalupe Martínez Fuentes
EL ISLAM POLÍTICO TUNECINO

Athina Lampridi Kemou
LOS HERMANOS MUSULMANES

Ignacio Gutiérrez de Terán
LA SOMALIZACIÓN DEL ISLAM POLÍTICO

Stuart Reigeluth
HAMAS Y HEZBOLÁ

Ignacio Álvarez-Ossorio
LAS PARADOJAS DEL ISLAM POLÍTICO EN SIRIA

Isaías Barreñada
EL ISLAM POLÍTICO EN LA MINORÍA PALESTINA EN ISRAEL

Antonio Alonso Marcos
HIZB UT TAHRIR EN EL LÍBANO

Francisco Veiga
NEOLIBERALISMO, TECNOCRACIA E ISLAMISMO NACIONAL: EL MOVIMIENTO GÜLEN

COLECTIVO IOÉ*

Notas sobre los efectos socioeconómicos de la crisis para la población inmigrada

La sociedad española se enfrenta en la actualidad a su tercera etapa económica recesiva en los últimos 35 años, cuya duración no es posible prever. El actual contexto ofrece como novedad el hecho de que los inmigrantes representan el 14% de la población del país y en torno al 16% de la población activa. A lo largo del presente artículo repasaremos los principales impactos registrados en el ámbito laboral así como algunas consecuencias en las condiciones de vida (ingresos, pobreza, y prestaciones) a partir de la sistematización de diversas fuentes estadísticas oficiales, y tras lo cual cabe concluir que la crisis ha ampliado las diferencias salariales entre españoles y extranjeros.

En los últimos 35 años la sociedad española se ha visto confrontada con tres momentos económicos recesivos, que se expresaron en una importante pérdida de puestos de trabajo y el consiguiente incremento del desempleo. El primero de ellos se desarrolló en un periodo de tiempo prolongado (1976-1985), supuso la pérdida de 1,8 millones de empleos y el incremento de la tasa de desempleo desde el 4,6% hasta un 21,6%. Por entonces, la población de origen extranjero representaba apenas el 0,8% del total de los habitantes del país. En los años siguientes se produjo un incremento de la ocupación y una disminución del paro, pero este se instaló ya en unas magnitudes siempre superiores al 15% de la población activa. El segundo momento de crisis se desarrolló en un espacio temporal mucho más reducido (1991-1994), lapso en el que se perdieron 850.000 puestos de trabajo y la tasa de paro volvió a ascender, desde 16,3% hasta un histórico 24,1%. Por entonces, la población de origen inmigrante representaba el 1,1% del total poblacional.

En la actualidad estamos inmersos en un tercer momento recesivo, cuya duración no es posible prever. En los tres años transcurridos hasta

* www.colectivoioe.org

el momento (2007-2010), la pérdida de empleo se sitúa en 1,9 millones, cifra similar a la registrada en la primera crisis aunque en periodo mucho más breve; en sólo tres años, la tasa de desempleo ha escalado espectacularmente, desde el 8,3% hasta un 20% (aún por debajo del récord alcanzado en 1994). La gravedad del momento no radica sólo, ni especialmente, en la magnitud de la tasa de desempleo sino en el carácter global de la crisis, y de las políticas que se vienen adoptando en el ámbito de la Unión Europea, que auguran un periodo de penurias sociales que no será breve. En este contexto de incertidumbre nos encontramos con una novedad de peso en la sociedad española: actualmente los inmigrantes representan el 14% de la población del país y en torno al 16% de la población activa. En este artículo queremos repasar y poner brevemente de manifiesto los principales impactos que se registran en el ámbito laboral así como algunas consecuencias en las condiciones de vida (ingresos, pobreza, y prestaciones) a partir de la sistematización de diversas fuentes estadísticas oficiales. El análisis *excluye* la población con 65 o más años, debido al desigual peso que tiene entre inmigrantes (escaso) y autóctonos (muy significativo).

Cambios en el ámbito laboral

El último ciclo de crecimiento económico se caracterizó, entre otros rasgos, por un continuo incremento de población ocupada, que pasó de 12 a 20 millones y absorbió, por una parte, a desocupados e inactivos autóctonos –especialmente mujeres– y a inmigrantes procedentes de otros países. Esta fue la principal razón de la continua llegada de población foránea que pasó de 1,2 millones en 2001 a 5,7 en 2008. Aún no contamos con cifras referidas a 2010 pero de momento puede afirmarse que la crisis ha supuesto una disminución del saldo migratorio hacia España: desde 2004 se superaron las 600.000 personas anuales y en 2007 las 700.000;[1] en cambio, en 2008 se redujeron a 460.000 y en 2009 a 181.000. Este importante descenso se debe más a una disminución de las entradas (915.000 en 2007; 462.000 en 2009) que a un incremento de las salidas (193.000 y 280.000. respectivamente). Por tanto, no estamos ante un "éxodo" de inmigrantes sino ante un frenazo del "efecto llamada" que generaba la dinámica ocupacional del país.

¿Cómo se refleja esta dinámica migratoria en el mercado laboral? Para analizarlo utilizamos datos de la EPA[2] comparando la situación de la mano de obra autóctona e inmigrada en dos periodos de duración similar: uno de crecimiento económico (2005-2007) y otro de crisis (2008-2010).

[1] Las cifras proceden de las entradas y salidas de población extranjera contabilizadas por la Estadística de Variaciones Residenciales del INE.

[2] Para evitar el sesgo de la estacionalidad utilizamos cifras medias anuales, en lugar de las trimestrales ofrecidas por el INE.

Actividad

La *población en edad laboral* (16 a 64 años) autóctona disminuyó continuamente en ambos periodos, en cambio, los inmigrantes continuaron aumentando en los inicios de la crisis: sólo en 2010 se produjo una disminución de los no comunitarios. Es sabido que no toda esta población es contabilizada como económicamente activa, pues se excluye a quienes no tienen ni buscan empleo remunerado de forma activa. Las *tasas de actividad* han evolucionado de forma diferenciada en función del sexo: en el caso de los hombres la crisis ha supuesto una disminución para los autóctonos (de 82% en 2008 a 80,6% en 2010); en cambio, entre los inmigrante el retroceso se registra entre 2006 y 2009 (89,1% a 87,8%) pero en 2010 se observa un ligero repunte (88%). En síntesis, hasta la fecha la crisis no ha supuesto una caída significativa de la tasa de actividad de los varones inmigrados. Entre la población femenina la tasa de actividad ha crecido continuamente, especialmente durante los años de crisis: en el caso de las autóctonas el incremento fue de 3 puntos porcentuales (pp) durante los tres años de auge y de 4,5 pp en los de crisis; para las inmigradas las cifras fueron algo menores pero con tendencia similar (1,1 y 3,6 pp). Por tanto, la tendencia hacia un incremento de la tasa de actividad femenina se ha visto agudizada por la crisis. Es de destacar el importante incremento de las africanas (desde 43,6% en 2007 hasta 51,9% en 2010), a pesar de que aún siguen mostrando los índices más bajos de actividad.

Ocupación

Como es sabido, las cifras de *ocupación* han sufrido un retroceso significativo en los años recientes. Para los autóctonos el ciclo comenzó en 2008: en los últimos tres años se perdió el 10,1% del empleo existente. Para los inmigrantes la caída de empleo no se produjo hasta 2009, pero en sólo dos años el saldo neto es similar (-10%). La destrucción de empleo afectó en mayor medida a los procedentes de África (-20,7%), que a los europeos ajenos a la UE-25 (-13,8%) y a los latinoamericanos (-10,4%). Por el contrario, el número de ocupados nacidos en países de la UE-25 se incrementó durante los últimos tres años. También en este caso es necesario destacar las diferencias en función del sexo. La pérdida de empleo masculino fue muy significativa: -15% para los autóctonos en tres años; -15,5% para los inmigrantes en dos años (-25,4% para los de África; -20,7% para los de la Europa no comunitaria; y -18,4% para los de América Latina). Para las mujeres la caída de empleo se registra a partir de 2009 y las cifras son claramente inferiores: -4,7% las autóctonas y -3,3% las inmigradas (-8,7% las africanas). Conviene destacar que 2009 ha sido un año de retroceso general del empleo, especialmente para los hombres; en 2010 sólo se registró destrucción de puestos de trabajo para las mujeres de la Europa no comunitaria (-5,4%), puesto que las de África y América Latina experimentaron ligeros incrementos (0,4% y 0,3%, respectivamente).

La destrucción de empleos comenzó por los de carácter *temporal* en 2008; en los tres años transcurridos desde entonces las mayores pérdidas en este segmento correspondieron a los hombres autóctonos (-32,4%), muy por delante del conjunto de inmigrados (-19,2%), aunque no de los europeos no comunitarios (-37,6%); las mujeres también experimentaron retrocesos, aunque algo menores: -15,9% las autóctonas y -7% las inmigradas (-36,4% las del resto de Europa). Significativamente, en 2010 se ha registrado un incremento del empleo temporal de los inmigrantes, gracias a la mayor ocupación de hombres africanos y de mujeres latinoamericanas. En cambio, el empleo asalariado *indefinido* solo se vio afectado a partir de 2009, específicamente entre los hombres (en dos años los autóctonos retrocedieron -6,4% y los inmigrantes -4,1%), mientras que el de las mujeres se incrementó (3,3% las autóctonas y 15,5% las inmigradas, especialmente las del resto de Europa y América Latina, que crecieron más de un 20%).

La crisis ha supuesto una movilización de fuerza de trabajo –de la "inactividad" a la actividad– que en su mayoría se ha quedado embalsada en una situación de desempleo

Entre los ocupados por cuenta propia el retroceso fue generalizado desde 2009 para los *autónomos* sin asalariados, tanto hombres (-12,9% los autóctonos, -10,2% los inmigrantes) como mujeres (-15,2% y -8,2%, respectivamente). Sin embargo, en el caso de los varones inmigrantes a una fortísima caída en 2009 le ha seguido un incremento en 2010. Distinta ha sido la evolución de los *empleadores*, que muestran caídas para los hombres desde 2009 (-16,3% los autóctonos, -15,8% los inmigrantes, que volvieron a crecer en 2010) y un impacto diferente para las mujeres (retroceso de -2,1% para las autóctonas e incremento de 19,7% para las inmigradas).

En resumen, la evolución del empleo durante la crisis muestra la existencia de dinámicas diferenciadas: mientras la destrucción de empleo afectó más a los asalariados temporales, especialmente a los hombres y los autóctonos, se ha registrado un incremento de la ocupación femenina en puestos asalariados indefinidos (especialmente de inmigrantes) y empleadoras (sólo inmigradas).[3]

[3] Una lectura apresurada de las cifras anteriores parece sugerir que las mujeres son las menos perjudicadas –desde el punto de vista laboral– por la crisis. Sin embargo, esta conclusión queda inmediatamente cuestionada cuando analizamos los tipos de empleo existentes y las cifras de desocupación. Pero, especialmente, si contáramos con datos referidos al empleo del tiempo, puesto que los recortes en prestaciones sociales suponen una mayor carga de tareas para los hogares, habitualmente asumidas por la población femenina, incluso la que tiene empleo remunerado. Las inmigrantes se ven especialmente afectadas debido a que en sus hogares –según la EPF– es mucho más frecuente la presencia de menores dependientes.

Desempleo

Al final del ciclo expansivo la *tasa de paro* del conjunto de la población inmigrante (15,3% en 2007) duplicaba a la de los autóctonos (7,8%); tres años después las proporciones se mantienen aunque las cifras han empeorado de forma significativa (39,1% y 18,4%, respectivamente), alcanzando cifras de auténtica emergencia entre los originarios de África (60,2%). Antes de la crisis las tasas de paro femeninas eran claramente superiores a las masculinas; en 2010 las mujeres autóctonas continúan en peor situación que los hombres del mismo origen (20,6% y 16,9%), mientras que los hombres inmigrantes (41,2%) presentan cifras peores que las de las mujeres procedentes de otros países (36,4%). Estas cifras muestran el impacto diferencial de la mayor destrucción de empleo masculino durante la crisis. Sin embargo, en 2010 parece anunciarse un cambio de tendencia: durante ese año la tasa de desempleo femenino continuó incrementándose (para las mujeres de todos los orígenes), en tanto que las de los hombres latinoamericanos y africanos experimentaron ligeros descensos. Con todo, en la actualidad el desempleo afecta de forma notabilísima a las mujeres africanas (85,1%), hombres africanos (52,7%) y hombres del resto de Europa (43,6%).

Por tanto, a pesar del mayor retroceso del empleo autóctono masculino, el paro sigue afectando de forma particular a la población inmigrante, y especialmente a algunos de sus segmentos. Esto se debe a que la población parada no procede sólo de la pérdida de ocupados sino también del incremento de la población activa que, como hemos visto, se ha registrado entre la población femenina. En este sentido, el peculiar incremento de actividad de las africanas se ha visto acompañado de un paralelo incremento de su tasa de paro (desde 40,4% en 2007 hasta 85,1% en 2010); la crisis ha supuesto una movilización de fuerza de trabajo –de la "inactividad" a la actividad– que en su mayoría se ha quedado embalsada en una situación de desempleo.

La distinta incidencia del desempleo por *grupos de edad* muestra diferencias importantes entre autóctonos e inmigrantes, y entre distintos grupos de extranjeros. El paro juvenil (16 a 24 años) es elevado y afecta de manera similar a ambos grupos; en cambio, para los autóctonos las tasas descienden a medida que se incrementa la edad, circunstancia que apenas se verifica entre los inmigrados. Las cifras han crecido mucho entre 2007 y 2010 pero la tendencia descrita se mantiene: en 2010 el desempleo afectaba al 40,7% de los autóctonos jóvenes, al 18,5% del grupo de 25 a 39 años y sólo al 13,6% de los mayores de 40. En cambio, para los inmigrantes jóvenes el paro es algo mayor que el de los autóctonos (43%), el del grupo de edad intermedia desciende hasta el 28,3% pero la diferencia con los mayores de 40 años es poco apreciable (26%). Por tanto, con la crisis el desempleo juvenil ha alcanzado cotas preocupantes más allá del origen nacional de la población afectada, mientras que la mayor edad y experiencia laboral no parece resultar una ventaja para los inmi-

grantes con más de 40 años, precisamente la generación que sostiene el grueso del proyecto migratorio. Nuevamente los trabajadores africanos son los más afectados por el desempleo: la tasa entre los jóvenes asciende hasta el 66% mientras que la de los adultos no desciende del 40%.

Las implicaciones de la situación de desocupación varían en función de múltiples circunstancias: las rentas y patrimonios acumulados por la persona afectada; la percepción o no de prestaciones y subsidios; la formación, experiencia laboral y posibilidades de reempleo; y las diversas formas de solidaridad social y familiar. Una circunstancia especialmente grave es la de los *hogares con todos sus miembros activos en paro;* en el año 2007 estaban afectados el 2,8% de los hogares autóctonos (unos 325.000) y el 3,9% de los encabezados por una persona inmigrada (alrededor de 80.000). Tres años más tarde las cifras han aumentado de forma notable: hasta el 8,4% (982.000 hogares) y el 13,9% (331.000), respectivamente. Aunque ambos grupos se han visto perjudicados, el mayor crecimiento correspondió a los hogares de inmigrantes; en otros términos, el desempleo de estos se ha concentrado algo más en determinados hogares. La situación presenta matices importantes en función de la zona de origen de los inmigrados; aunque numéricamente destacan los africanos (116.000 hogares en 2010) y los latinoamericanos (109.000), proporcionalmente la situación es significativamente más grave entre los africanos: el 27,7% de los hogares se encuentra en esta situación (frente al 12,6% de los europeos ajenos a la UE-25 y el 10,3% de los latinoamericanos).

Tipos de ocupación: no es oro todo lo que reluce

Más allá de la típica distinción entre empleos temporales e indefinidos, que tiende a identificar a los primeros como más cercanos a la precariedad y a los segundos como el paradigma de "buenos empleos", existe una amplia gama de ocupaciones fijas que están lejos de alcanzar dicha cualidad. Entre ellas destacan quienes ocupan puestos a *jornada parcial* porque no encuentra empleo de jornada completa; este segmento ha crecido durante la crisis: representaba el 3,8% de los empleos indefinidos entre 2005 y 2007 y ha alcanzado el 6,1% en 2010. Los menos afectados son los asalariados autóctonos (5,3%) y los procedentes de la UE-25 (7,8%); en cambio, las cifras son más elevadas para el resto de europeos (14,5%), latinoamericanos (13,9%) y africanos (10%). Es sabido, además, que este tipo de empleo afecta más a las mujeres que a los hombres.

Otra modalidad es la de los asalariados *fijos discontinuos*, que sólo tienen empleo garantizado durante algunos meses al año; en este caso la crisis no ha tenido incidencia sobre la población autóctona: tanto en 2007 como en 2009 este segmento representaba el 1,9% del empleo asalariado indefinido. En cambio, se ha producido un incremento para el caso de los

inmigrantes: desde el 2,5% al 3% de los trabajadores; nuevamente el grupo más afectado es el de trabajadores africanos (5,4%). Un último indicador de insatisfacción con el empleo es el de los *ocupados que buscan otra ocupación;* comparando con el número de personas que se encontraban en tal situación en 2005 (=100) entre los autóctonos se ha producido un descenso (hasta el 86 entre los hombres, hasta el 82 entre las mujeres) mientras que entre los inmigrados se registra un claro incremento (hasta 136 para ellas, y 122 para ellos). En síntesis, crece el descontento –y/o la capacidad reivindicativa– entre los inmigrantes respecto al puesto de trabajo que ocupan.

Ingresos, pobreza y privación material

Los ingresos de los asalariados

El *salario medio declarado* de los españoles, según las estadísticas tributarias, es superior al de los extranjeros y con el desarrollo de la crisis la diferencia se ha incrementado. En euros constantes, entre 2006 y 2009 el salario medio real de los españoles apenas se incrementó (1,9%, hasta 18.809 euros de 2006) mientras que el de los extranjeros disminuyó con fuerza (-6,6%, hasta 9.865 euros de 2006), produciendo una caída neta del salario medio. Esta afectó a los hombres, pero no a las mujeres que vieron aumentar su remuneración media (las españolas el 6,5% y las extranjeras un 2,6%). En 2009 el salario medio anual de las mujeres autóctonas representaba el 78,3% del que percibían los hombres del mismo origen; el de los hombres inmigrantes alcanzaba el 52,9% y el de las mujeres de origen extranjero apenas un 42,9%.

La situación más próxima a una equiparación de ingresos (los extranjeros ganan el 90% de lo que cobran los españoles) se registra en el grupo de 18 a 25 años, debido a la generalización de bajos salarios entre la población joven de cualquier origen; a partir de los 25 años la cifra no llega al 60% y las mayores diferencias se registran en el segmento entre 46 y 55 años, en el que los extranjeros ganan menos de la mitad que los españoles (43%), debido a que la precariedad laboral está mucho más extendida entre los primeros.

Otras fuentes de ingreso, redistribución y pobreza

La Encuesta de Condiciones de Vida permite identificar la importancia de otro tipo de ingresos entre los hogares cuya persona principal es menor de 65 años, teniendo en cuenta la nacionalidad de la persona principal. Hasta 2008, en torno al 11% de los hogares autóctonos recibía *prestaciones por desempleo*, cifra que se amplió hasta el 15,7% en 2009. En el caso de los hogares del "resto del mundo" (inmigrantes no europeos) la cifra se situó en

torno al 15% en 2007 y 2008 para crecer hasta el 24,7% en 2009. Por tanto, la diferencia entre ambos grupos se incrementó con la crisis (3 pp en 2007; 9 pp en 2009). Además, existen hogares que perciben *otras prestaciones* (distintas de las de vejez y supervivencia); en este caso las diferencias son menores, favorecen a los españoles y no han aumentado con la crisis (incluyen al 16,4% de los hogares españoles y al 13,7% de los del «resto del mundo»).

La misma fuente nos informa sobre los *ingresos medios*[4] de los hogares (por todos los conceptos, no sólo los salariales), aunque hasta la fecha sólo se conoce la evolución hasta 2008, año en el que apenas comenzó a sentirse el impacto de la crisis económica. Los resultados muestran que los ingresos de los hogares de inmigrantes son inferiores a los percibidos por la población autóctona y que la crisis tiende a agudizar dichas diferencias. La relación de ingresos entre ambos grupos empeoró entre 2004 y 2005 (de 69% a 66,5%) para mejorar progresivamente hasta 2007 (68,9%), pero con el inicio de la crisis en 2008 se deterioró claramente: el ingreso medio por persona de los hogares del "resto del mundo" era el 64% del que recibían los hogares autóctonos. El deterioro de ingresos de los extranjeros no es sólo relativo (respecto al de los hogares autóctonos); además, en 2008 se registró un retroceso en términos absolutos (de 9.494 a 9.114 euros por persona, en moneda constante de 2006).

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares también existen diferencias en cuanto a los gastos. Entre 2006 y 2009 se ha ampliado la brecha respecto al *gasto medio* de los hogares entre españoles y extranjeros (de 17,4 a 23,7 puntos porcentuales). Durante este lapso el gasto medio, por persona y unidad de consumo, de los españoles se ha incrementado (4-5%) mientras que el de los extranjeros ha retrocedido (5-6%). En 2009 el gasto medio por persona en los hogares españoles supone el 104% del gasto medio total en España, mientras que el de los inmigrantes de otros continentes apenas alcanza el 64%.

Las diferencias de ingresos se traducen en distintos grados de *dificultad para llegar a fin de mes* con los ingresos habituales. Durante el ciclo expansivo se vieron mucho más afectados los inmigrantes no europeos (44%) que la población autóctona (27%) y durante la crisis las diferencias crecieron, debido a un incremento moderado para los nacidos en España (29% de los hogares en 2009) y un crecimiento importante para los del "resto del mundo" (54%).

[4] Las cifras medias nada nos dicen sobre la forma en que los ingresos se distribuyen entre los individuos de cada grupo analizado. Pudiera ocurrir que el ingreso medio se deteriore sin que lo haga el de los individuos (durante el auge crecieron más los empleos peor retribuidos, lo que bajó la media, sin que por ello los ya ocupados ganaran menos); que la media mejore en un contexto de incremento del desempleo (cuando se pierden preferentemente los empleos peor retribuidos). Estos problemas se subsanan en parte analizando la distribución del ingreso por tramos, tal como hacemos a continuación para identificar a los hogares afectados por la pobreza monetaria.

A partir de la distribución de ingresos puede calcularse la tasa de *pobreza antes de transferencias sociales*. Esta incluye a quienes ganan menos del 60% del valor de la renta mediana del país, contabilizando sólo sus ingresos personales.[5] Las cifras correspondientes a 2008 indican que estaba afectado el 38,9% de los hogares españoles y el 41,7% de los no-comunitarios (diferencia de 2,8 puntos porcentuales). El riesgo de tener rentas bajas es mayor para las mujeres inmigradas de 40 o más años y más reducido para los hombres autóctonos. Pero la situación se modifica de forma notable una vez que tenemos en cuenta las prestaciones sociales; al hacerlo observamos que la acción redistribuidora del Estado reduce significativamente la *pobreza* entre la población autóctona (en valores para 2008: del 30,1% al 16,8%) pero lo hace en menor medida entre los nacidos en países ajenos a la Unión Europea de 25 miembros (de 36,2% a 28,9%). La acción estatal reduce la pobreza en 13,8 a las mujeres autóctonas y en 12,9 a los hombres españoles; 9 puntos a las mujeres inmigradas y 5,4 a los hombres de ese origen. Por tanto, la acción protectora es más eficaz respecto a la población femenina y autóctona; a pesar de ello el riesgo de pobreza monetaria afecta mucho más a la población inmigrada femenina y a los mayores de 40 años.[6]

Los resultados muestran que los ingresos de los hogares de inmigrantes son inferiores a los percibidos por la población autóctona y que la crisis tiende a agudizar dichas diferencias

La pobreza afecta especialmente a los hogares en los que viven menores económicamente dependientes, sea con parejas, hogares monoparentales o varios adultos. Entre los inmigrantes afecta incluso a aquellos hogares en los que los adultos trabajan a tiempo completo. Con el inicio de la crisis se observa un *incremento de los "pobres muy pobres"* (los que se sitúan por debajo de la mitad de la línea de pobreza). En 2008 estos son el 9% de los hogares inmigrantes y el 5,7% de los autóctonos.

Algunos síntomas de privación material

El umbral de pobreza monetaria es un valor relativo y relativamente arbitrario, que no tiene la misma significación en distintos grupos sociales y espacios geográficos; los mismos

[5] Excluyendo prestaciones por desempleo, vejez, enfermedad, invalidez, ayudas para estudios, familiares, para vivienda, subsidios contra la exclusión social, etc.

[6] Los datos avance de la ECV de 2010 (con datos referidos a 2009) muestran un incremento notable de la tasa de pobreza (de 19,5% a 20,8%); lamentablemente aún no es posible estudiar el impacto diferencial de este crecimiento en función de la nacionalidad de los afectados.

ingresos pueden en algunos casos permitir una vida digna y en otros resultar manifiestamente insuficientes. Con el fin de aproximarnos a las condiciones de vida de la población es posible identificar algunas situaciones de carencia material que afectan a "mínimos sociales" relativamente extendidos. Veamos la incidencia diferencial de algunos de ellos en función de la nacionalidad de la persona de referencia de los hogares:

- Los hogares que en 2009 no pueden permitirse una semana de vacaciones al año fuera de su domicilio son el 59,8% de los encabezados por inmigrantes y el 35,7% de los españoles; esta diferencia se ha incrementado con la crisis (desde 17 puntos en 2005-2007 hasta 24 puntos en 2009).
- Los hogares encabezados por migrantes no comunitarios han tenido más dificultades para cumplir con pagos básicos, aunque la diferencia tendía a disminuir durante los años de crecimiento económico; con la crisis estas han vuelto a agudizarse, especialmente en el rubro de créditos al consumo (25 pp en 2009) y, en menor medida, en el pago de alquileres e hipotecas (14 puntos porcentuales). No obstante, el intenso crecimiento de los desahucios y embargos, que se han triplicado en España entre 2008 y 2010, afectan en mayor medida a la población inmigrante.
- La imposibilidad de comer carne cada dos días afecta a una minoría de hogares, pero en 2009 se incrementaron los hogares de inmigrantes afectados (3,7%), y se amplió la brecha respecto a los autóctonos (de 1,7 a 2,4 pp).
- El volumen de hogares inmigrantes que no consiguen caldear la vivienda durante los meses fríos supera claramente al de los autóctonos; en los años de crisis (2008-2009), el diferencial entre ambos se sitúa en 10 puntos porcentuales (15% de los inmigrados del resto del mundo, 5% de los españoles).

Conclusión

La crisis ha supuesto un freno al "efecto llamada" que se expresa en caídas del saldo migratorio a partir de 2008, aunque la población en edad laboral no disminuyó hasta 2010. La tasa de actividad de los hombres inmigrados se estancó mientras que la de las mujeres creció especialmente durante la crisis. Estos procesos están relacionados con un fuerte incremento del desempleo masculino, vinculado a la pérdida de empleos asalariados, en su mayor parte de carácter temporal. En cambio, entre las mujeres coexiste la pérdida de empleo temporal con el incremento de las asalariadas fijas, paralelo a un crecimiento de los empleos de menor calidad (jornada parcial no deseada, fijos discontinuos, ocupados buscadores de otro empleo). En este contexto general se ve más afectada la población joven, aunque entre los extranjeros el desempleo continúa siendo elevado a todas las edades. Por regiones de origen resulta especialmente grave la posición de la inmigración africana, con elevadísimas tasas de desempleo.

La crisis ha ampliado las diferencias salariales entre españoles y extranjeros, y ha supuesto un descenso absoluto del salario medio de estos últimos, medidos en euros constantes. El retroceso afecta a los hombres, pero las diferencias de ingresos entre sexos se reproduce en ambos grupos. También los ingresos medios de los hogares inmigrantes son inferiores y el deterioro aumenta desde 2008, así como las dificultades para llegar a fin de mes, afrontar créditos, pagar alquileres o hipotecas. Junto a mayores índices de privación material se registran tasas de pobreza más elevadas, debido a una menor eficiencia de la cobertura social: las transferencias estatales reducen menos la pobreza entre los inmigrantes que entre los autóctonos.

Estos datos reflejan sólo el impacto en los inicios de la crisis y no incluyen los efectos de los recortes sociales adoptados en 2010, que tenderán a agravar las condiciones de vida de los sectores sociales más débiles. Si por un momento dejamos de focalizar el análisis en el origen de las personas podremos comprender cómo la situación del grueso de los migrantes es un indicador del impacto negativo de las políticas actuales sobre el segmento más precarizado de la población trabajadora.

EMPLEO, TRABAJO Y DESIGUALDADES EN SALUD: UNA VISIÓN GLOBAL

Autores:
Joan Benach y Carles Muntaner,
con Orielle Solar, Vilma Santana
y Michael Quinlan

ISBN: 978-84-9888-238-4
Páginas: 520

Una visión integral de cómo las condiciones de empleo afectan a las desigualdades de salud de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo.

- Causas y consecuencias de las condiciones de empleo sobre la salud y calidad de vida en contextos económicos y políticos muy distintos.
- Clasificación de los países según su mercado de trabajo.
- **Estudios de caso:** situaciones diversas del mercado laboral y los problemas de salud de los trabajadores.
- **Propuestas:** los cambios institucionales y las políticas necesarias para mejorar la salud de los trabajadores y reducir la desigualdad entre ellos.

BOLETÍN DE PEDIDO

Para hacer su pedido:

✔ Compre a través de la librería electrónica **www.libreria.fuhem.es**
✔ Envíe este formulario al fax **91 577 47 26**
✔ Llame al teléfono **91 431 03 46**
✔ Escriba un correo a **publicaciones@fuhem.es**

Nombre: .....

Dirección: .....

Población: ..... C.P. ..... Provincia: .....

Teléfono: ..... Correo electrónico: .....

☐ **EJEMPLAR 48 €** (Gastos de envío gratuitos para España) **Nº ejemplares** .....

FORMA DE PAGO

☐ Domiciliación bancaria (preferible esta modalidad para suscriptores)

Titular de la cuenta.....

ENTIDAD ☐☐☐☐ OFICINA ☐☐☐☐ CONTROL ☐☐ NÚMERO CUENTA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Cheque a nombre de Fundación Hogar del Empleado

☐ Contra reembolso

☐ Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0216 0251 51 0600005047

Duque de Sesto, 40 - 28009 Madrid
Tel.: 91 431 03 46 - Fax: 91 577 47 26
Web: www.cip-ecosocial.fuhem.es
E-mail: cip@fuhem.es

ANTONIO ANTÓN

La reforma impopular de las pensiones[1]

El pacto social, firmado por Gobierno y representantes de la patronal y los sindicatos el pasado 2 de febrero, supone un fuerte recorte de las pensiones públicas respecto de los derechos anteriores de los trabajadores. Los discursos que lo justifican son débiles y existen dificultades de legitimación social ya que la mayoría ciudadana no comparte sus principales medidas. Dada la diversidad de los recortes, los resultados respecto de las posiciones iniciales de Gobierno y sindicatos y la relevancia de los efectos sociopolíticos y sindicales de este acuerdo es preciso valorar con rigor su contenido y su significado.

Antonio Antón es profesor honorario de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El acuerdo sobre pensiones supone un recorte medio de su cuantía mensual en torno al 20% respecto de los derechos actuales. Es similar al previsto por el plan gubernamental aprobado en enero de 2010 y remitido a la Unión Europea y el Pacto de Toledo. En la fase negociadora los sindicatos no han conseguido suavizar ese impacto global sino que los recortes se han reestructurado entre diferentes segmentos: desde el 7% para una minoría hasta entre el 19% y el 26,5% para la mayoría.

Es reconocido por todas las partes que supone un recorte de las pensiones futuras respecto de los derechos actuales y que el objetivo es reducir 3,5 puntos del PIB el gasto en pensiones (unos 35 mil millones de euros actuales) cuando se aplique totalmente la reforma a todos los pensionistas, en el año 2050. Ello supone una reducción en torno al 25% del gasto público en pensiones previsto necesario para mantener los derechos de protección social anteriores a la reforma, hoy del 9% del PIB. El gasto público social en pensiones previsto por el Gobierno se situaba entre el 12% y el 13% del PIB en la década de 2030 (y según él podía llegar al 16% en el año 2050), debido al aumento del número de pensionistas, el envejecimiento y el incremento de las bases reguladoras de las altas en el sistema respecto de las bajas.

[1] Estudios rigurosos realizados por diversos catedráticos e investigadores se publican en el libro A. Antón (coords.), *La reforma del sistema de pensiones,* Talasa, Madrid, 2010.

La reducción de esa cuarta parte del gasto social es reconocida institucionalmente pero las opiniones sobre su distribución son divergentes. La valoración sobre lo que han cedido unos y otros también es polémica, aunque la idea principal es que el Gobierno ha impuesto un retroceso significativo pero que los sindicatos han suavizado o frenado el plan del Gobierno, cosa incierta. Veámoslo en detalle.

Como se avanzaba, el resultado del acuerdo –cuando se aplique totalmente en el año 2027–, es un recorte medio de la cuantía mensual de las nuevas pensiones de jubilación en torno al 20%, respecto de sus derechos anteriores. Este resultado global es compartido por catedráticos de economía como I. Zubiri y R. Muñoz de Bustillo.[2] Pero dada la diversidad de medidas y situaciones laborales conviene evaluar el impacto de cada una de ellas entre distintos segmentos de la población trabajadora.[3]

El pacto no disminuye significativamente el carácter regresivo de la reforma; el Gobierno es el que sale más beneficiado porque se legitima su política de ajuste y austeridad

Esta valoración inicial significa que el Gobierno no ha cedido nada respecto de su objetivo global de reducir el gasto en pensiones y los sindicatos no han sido capaces de frenarlo o suavizarlo. Los cambios en el proceso de negociación se introducen en dos direcciones: a unos colectivos se les limita la rebaja, pero otros sufren un incremento del recorte previsto.

Así, una parte minoritaria, el 20% puede reunir la doble condición de 65 años de edad y 38,5 de cotización y no es penalizada adicionalmente (solo sufre el recorte medio del 7% por el incremento del tiempo de cómputo de 15 a 25 años, al igual que el resto, y la exigencia de cotizar esos tres años y medio más que ahora). Pero, a la mayoría del 80% se le aplica la referencia de la edad de jubilación a los 67 años y 37 de cotización. De ese 80% solo el 20% puede alcanzar esas dos condiciones; por lo tanto, supone una penalización adicional –dos años más de edad y de cotización, o lo que es lo mismo, una reducción de un 10% del total del importe a percibir a lo largo de su vida. Al 60% restante, que no puede reunir esas condiciones, se le aplica mayor penalización: un 15% (un 7,5% anual o 1,875% trimestral) adicional a la que sufre si se anticipa más –a los 63 o 64 años–, por los dos años de alargamiento hasta los 67; unida a una nueva penalización del 4,56% (2,28% anual), al

[2] I. Zubiri, *El País*, 30/1/2011; R. Muñoz de Bustillo en A. Antón, *op. cit.,* 2010.

[3] Se analiza detalladamente en mi artículo «Pensiones: recorte del 20%» publicado en *Nueva Tribuna* el 30/1/2011 [disponible en http://www.nuevatribuna.es/noticia/44397/OPINIÓN/pensiones-recorte-20.html].

pasar de 35 a 37 años el límite de cotización para el acceso a una pensión del 100% de la base reguladora.[4]

El acuerdo aprueba una nueva segmentación con otro reparto de los recortes diferente al inicial: a) un colectivo minoritario sin penalización por jubilarse a esa edad de 65 años (si alcanza los 38,5 años de cotización); y b) otro colectivo mayoritario con hasta 19 puntos de penalización adicional. Aunque en ambos casos hay que añadir los 7 puntos de reducción derivada de la ampliación del tiempo de cómputo, cuyo impacto es reconocido por el propio Gobierno tras su firma. Se disminuye la penalización prevista a un colectivo menor a costa de incrementar el recorte de otro colectivo mayor.

Por tanto, con la excepción conseguida para los trabajadores que cumplan esas dos condiciones de 65 años de edad y 38,5 años de cotización, los dirigentes sindicales suavizan el recorte para un segmento del 20% y salvan un elemento simbólico de romper la obligatoriedad total de estar empleado hasta los 67 años para obtener el 100% de la pensión, aspecto fundamental de la huelga general de septiembre y de las movilizaciones sindicales anteriores y posteriores. Pero, al contrario, han aceptado una condición nueva, al incrementar hasta 37 años los años cotizados necesarios para la pensión completa, que recorta un 4,56% la pensión de la mayoría.

En definitiva, la negociación y el acuerdo no han suavizado el plan del Gobierno, tomado en su conjunto. Los negociadores sindicales han intercambiado una reducción menor hacia unos trabajadores con un mayor recorte de lo previsto a otros.

Por otra parte, algunas mejoras menores (becarios, cotización por hijo) tampoco compensan otros retrocesos significativos. En este apartado de elementos nuevos, se ha incorporado uno particularmente nocivo. Se trata de la aceptación de la variable de la esperanza de vida a los 67 años para adecuar los «parámetros fundamentales del sistema» a partir del año 2027, de forma quinquenal. Con las proyecciones oficiales actuales para la década de 2030, el recorte adicional de las pensiones aceptado a partir del año 2027 es del 2,5%. Es, además, un retroceso cultural importante que hace depender el importe de la pensión y su ajuste en esa variable demográfica, sin valorar otras alternativas planteadas hasta ahora como la de ampliar la base de ingresos del sistema (aumentar el empleo y los salarios, o la participación pública en su financiación) para contrarrestar y financiar ese efecto de envejecimiento.

En conclusión, es una reforma regresiva, injusta socialmente y no justificada económicamente, que recorta fuertemente las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales.

[4] Véase mi texto «Pacto social: recortes sin legitimidad» [disponible en http://www.pensamientocritico.org, marzo de 2011].

La consecuencia es la reducción de la intensidad protectora y la segmentación de la protección social con una privatización parcial. No hay una rectificación de la política socioeconómica, laboral y fiscal. Persiste el alto paro y nuevas brechas sociales, con incremento de la desprotección pública, y una perspectiva de empobrecimiento de las personas mayores. El pacto no disminuye significativamente el carácter regresivo de la reforma, y se avala el retroceso sustantivo decidido por el Gobierno, que es el que sale más beneficiado porque se legitima su política de ajuste y austeridad. Tampoco es una salida "compartida" de la crisis económica, con un equilibrio de las aportaciones o concesiones de las partes. El resultado, con menor cohesión social, es una protección social menos intensa para la mayoría de la sociedad, más fragmentada y asistencializada, junto con el desarrollo de fondos privados de pensiones como salida parcial para las capas acomodadas.

La mayoría ciudadana está en contra del pacto

El acuerdo sobre pensiones es negativo para los trabajadores y no es apoyado por la mayoría de la sociedad. Lo dice la propia ciudadanía según una encuesta de opinión de Demoscopia.[5] Este acuerdo nace con un importante problema de legitimidad social. No sólo afecta al Gobierno socialista sino, particularmente, a los dirigentes sindicales que lo han firmado y ven debilitada su credibilidad ante la sociedad. Veamos los datos.[6]

Dos tercios o más de la población está *poco o nada de acuerdo* con las cuatro principales medidas: «ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años»: 76%; «para retirarse a los 65 años habrá que tener 38,5 cotizados» [65+38,5]: 70%; «para las jubilaciones a los 67 años habrá que tener cotizados 37 para alcanzar el 100%» [67+37]: 71%; «ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión a 25 años»: 66%. Este pacto es considerado *mala noticia* también por la mayoría del 51% de los ciudadanos (el 46% de los votantes socialistas y el 59% de los del PP). Solo es valorado como *buena noticia* por el 33% de los mismos (41% de los votantes del PSOE y el 24% de los del PP). No hay más datos desagregados pero es fácil intuir que entre los votantes de la oposición política de izquierdas, los afiliados a los sindicatos y los que participaron o apoyaron la huelga general del 29-S la disconformidad con esas medidas y este pacto social es todavía mayor.

Por otra parte, *la actuación de los agentes para conseguir el pacto económico y social* recibe la nota de suspenso: sindicatos, 3,8; Gobierno, 3,9; patronal, 4,2, y PP, 3,8 (0 muy mala y 10 muy buena). Además, la gestión de Zapatero es *desaprobada* por el 69% (la de Rajoy por el 67%), que *inspira poca o ninguna confianza* al 82% de los ciudadanos y el 62% de los votantes socialistas (la de Rajoy el 78% del total y el 48% de los votantes del PP).

5 Véase diario *El País* 6/2/2011.

6 El Barómetro del CIS de marzo de 2011 ha publicado datos similares.

Por tanto, la mayoría ciudadana percibe esas medidas como un recorte de las pensiones públicas, un retroceso de la protección social, una merma de sus derechos; no ven en ellas una solución equilibrada. Esa percepción crítica se corresponde con el contenido regresivo del pacto y contra las ideas fuerza que lo justifican.

Diversas fuentes oficiosas admiten un recorte significativo, aunque los responsables sindicales lo minimizan o lo consideran casi nulo. En todo caso, ante la evidencia de mayor o menor recorte, se utilizan tres tipos de discursos para intentar justificarlos, cosa que a la vista de las opiniones ciudadanas no han hecho mucha mella.

El primero es una paradoja: hay que recortar (ahora) para «fortalecer el sistema público» (mañana). Se instrumentaliza este objetivo positivo y compartido y se reinterpreta. «Garantizar las pensiones públicas» resulta que es reducirlas respecto de los salarios y cotizaciones realizadas, rebajar la calidad de vida de los pensionistas futuros, retroceder en derechos y condiciones, debilitar la protección pública, facilitar la privatización parcial del sistema de seguridad social. La posición de la mayoría social es clara: recortar es empeorar hoy y mañana. Y su lógica, aplastante: fortalecer el sistema es mejorar las pensiones públicas no disminuir los derechos actuales.

El segundo discurso para justificar los recortes es el que los considera un medio clave para conseguir el fin de ganar la “confianza” de los mercados financieros y las instituciones internacionales y europeas. La idea es que el sacrificio de las clases trabajadoras es imprescindible para frenar el acoso de esos poderosos. Es la lógica de la austeridad (para las clases populares). ¿Qué es esa confianza? Según ellos la garantía de pago de la deuda a medio y largo plazo por la contención del déficit y el gasto públicos, vías de negocio para los mercados financieros con los fondos privados de pensiones, contención de las demandas sociales y control político del descontento popular. Pero sin reactivación económica relevante no hay bases sólidas para garantizar el pago de la deuda soberana, y los mercados pueden no fiarse. Y sin una reforma fiscal progresiva, necesaria para aumentar el gasto público y posibilitar el crecimiento económico y del empleo (cotizaciones), pervive la desconfianza. Además, con la continuidad y refuerzo de las políticas de ajuste económico (ampliadas en el Consejo Europeo de marzo), mayor austeridad del gasto público y moderación salarial, en España tampoco se genera consumo y actividad económica suficientes para crear empleo de forma significativa, lo cual no facilita la mejora de los ingresos y cotizaciones a la Seguridad Social. En resumen, esa “confianza”, objetivo central para el Gobierno y supuestamente conseguida con el acuerdo, es frágil y efímera, y no impide, en pocas semanas o meses, nuevos ataques especulativos o presiones para el recorte de más derechos sociales, económicos y laborales.

El tercer tipo de discurso es el basado en el determinismo demográfico para justificar la necesidad de una reforma regresiva. Es aceptado en el propio acuerdo. El envejecimiento

es real pero, según previsiones del propio Gobierno, el incremento de la esperanza de vida a los 65 años, entre los años 2009 y 2030, es de un 5,4% (y un 2,5% más para el año 2040). Es un aumento limitado que puede perfectamente afrontarse. Incluso las previsiones gubernamentales estiman que el sistema tiene suficiencia financiera, incluido el Fondo de Reserva, hasta el año 2029. Pero aquí es cuando es preciso un enfoque diferente al de reducir el gasto: a partir de esa fecha hay que garantizar las prestaciones por la vía de mejorar los ingresos propios del sistema (ampliar el empleo, aumentar salarios y bases de cotización), empezando desde ahora, o, si es necesario, con la participación de la financiación pública. Pero nada de ello se contempla en el acuerdo.

Ese apoyo de la mayoría de las direcciones sindicales a esta reforma con disconformidad y distanciamiento de gran parte de su base social, perjudica al propio sindicalismo y su capacidad representativa y transformadora

Por último, aun los que admiten sólo ligeros recortes pretenden justificar el acuerdo como mal menor. Reconocen merma de derechos para los trabajadores pero, al mismo tiempo, incremento del poder contractual de los sindicatos. No obstante, es difícil explicar que el retroceso de los derechos sociales y laborales mejora la capacidad representativa, negociadora y transformadora del sindicalismo. Con el pacto se puede frenar la ofensiva mediática contra los sindicatos y conseguir su mayor reconocimiento institucional, cosas positivas. Constituyen el dique más amplio y compacto contra las políticas neoliberales de ajuste y austeridad; es necesario reforzarlos y frenar las dinámicas que tratan de debilitarlos. No obstante, con este pacto social la mayoría de sus dirigentes que lo han apoyado han cometido un gran error. El aval a ese recorte de las pensiones tiene ese coste de menor prestigio y autoridad moral entre la ciudadanía, conseguidos arduamente sobre todo este último año de oposición a las medidas antisociales y defensa firme de los derechos sociolaborales (manifestaciones hace un año contra este plan de pensiones, huelga general contra la política de ajuste y la reforma laboral). Ese apoyo de la mayoría de las direcciones sindicales a esta reforma de las pensiones, con esa disconformidad y distanciamiento de gran parte de su base social, perjudica al propio sindicalismo y su capacidad representativa y transformadora. Esa decisión disminuye la credibilidad popular y la legitimidad social de sus estructuras dirigentes, como manifiesta esa encuesta de opinión. Le da menos fuerza para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores y la sociedad y queda en una posición más subordinada ante el poder económico y político.

Los problemas principales de la sociedad, el amplio y persistente paro, las consiguientes brechas sociales e incertidumbres y el impacto de la reforma laboral, continúan. Nuevas políticas antisociales, la moderación salarial o la reestructuración regresiva del Estado de bienestar persisten en el horizonte y no se han neutralizado.

Dificultades de legitimación social del acuerdo en pensiones

El Gobierno ha confirmado que el impacto reductor del gasto en pensiones va a ser de 3,5 puntos del PIB, unos 35 mil millones de euros anuales (de hoy), cuando a todos los pensionistas existentes en el sistema se les haya aplicado el recorte aprobado con la reforma, en el año 2050. Lo comunica a través de la vicepresidenta Salgado en la Comisión del Pacto de Toledo el día 10 de febrero pasado, y solo una semana después de la firma del pacto social.

El Gobierno se ratifica en el fuerte recorte que significa este acuerdo en pensiones y echa por tierra la interpretación de los responsables sindicales de que sólo conlleva ligeros retoques y no supone un gran retroceso de derechos para los trabajadores. Ese diagnóstico gubernamental es claro y transparente porque busca un objetivo central para él: ganar la confianza de los mercados financieros y las instituciones de la UE que le exigen continuar con las reformas "estructurales", particularmente, con el recorte del gasto público social. Hay que partir de esa realidad del grave impacto regresivo de su política; reconocerla es el primer paso para cambiarla. La confrontación aquí es con la decisión de aplicarla y los argumentos que intentan justificarla, basados en la necesidad de la disminución de la intensidad protectora pública, la austeridad para las capas populares y el retroceso de sus derechos sociolaborales.

La reforma del sistema de pensiones es una reducción del gasto público social previsto, una merma de derechos. El contenido principal del acuerdo es malo o regresivo y así es percibido por dos tercios de la ciudadanía española. El debate se traslada a su dimensión y a las dificultades para su legitimación social.

Pero es el propio Gobierno, junto con los mercados financieros y las instituciones europeas e internacionales, el que confirma el impacto real del recorte de las pensiones en aras de su objetivo central: conseguir "confianza" de los mercados financieros y la UE mediante una política restrictiva del gasto público social a corto, medio y largo plazo. La explicación institucional y mediática se centra en la necesidad de la austeridad del gasto público y la interpretación de su bondad para los trabajadores se queda sin credibilidad social. Se amplía así el problema de la legitimación social de esta política.

Los recortes en los derechos de las pensiones públicas futuras son una realidad evidente, buscada por los gobiernos de la UE para contentar a los mercados financieros y como estrategia fundamental para la gestión conservadora de la crisis; ese objetivo y ese resultado son compartidos por los grandes poderes económicos e institucionales. Es normal que la mayoría de la sociedad, de la gente trabajadora y el electorado del propio PSOE,

muestren su disconformidad con esas medidas y las considere negativas. La existencia de una amplia conciencia social sobre su carácter regresivo e injusto dificulta la legitimación social del acuerdo.

Aquí hay dos intereses diferentes: el Gobierno prioriza su justificación ante los mercados y la UE y destaca la profundidad del recorte en pensiones para conseguir su beneplácito; los dirigentes sindicales deben explicaciones a sus bases sociales, e intentan negar ese impacto regresivo para frenar su desafección o descontento. En la opinión de la sociedad ha calado más la primera idea no solo por el mayor peso de su aparato mediático sino porque transmite la evidencia de esa política liberal-conservadora y el alcance real del acuerdo: merma de derechos sociolaborales, sacrificios para las capas populares.

La comparación del contenido del acuerdo se debe hacer respecto del plan gubernamental inicial. Existen diversos agentes que todavía persiguen un mayor retroceso de la protección social pública, incluso su desmantelamiento y total privatización. Pero lo dominante en la Unión Europea, a corto y medio plazo, es una reestructuración "regresiva" del Estado de bienestar: "debilitamiento" del sistema público de protección social, "disminución" de su intensidad protectora, "fortalecimiento" de la privatización parcial (para capas acomodadas), y "asistencialización" con prestaciones y derechos mínimos para la ciudadanía vulnerable. La referencia es la reforma alemana,[7] cuya estela ha seguido el Gobierno de Zapatero. La reforma de pensiones acordada no es peor que el plan gubernamental inicial, o es menos mala que las propuestas por otros sectores neoliberales (desde FEDEA hasta la OCDE) que han tratado de endurecerla. Pero no se puede decir que el acuerdo sea un éxito porque ha evitado el desmantelamiento del sistema público de pensiones que sólo unos pocos, aunque poderosos, pedían ya.

El plan gubernamental (y la tendencia dominante del poder económico y la UE) era imponer un fuerte recorte del sistema público. Y es lo que ha conseguido. Los cambios introducidos han supuesto, fundamentalmente, un reparto de la reducción entre diferentes segmentos de trabajadores, con una rebaja menor para unos y un recorte adicional para otros. O sea, aparte de otros componentes menores, los negociadores sindicales han conseguido suavizar un aspecto significativo (65 años de edad + 38,5 años de cotización) y no han evitado que el Gobierno endurezca otro (de 35 a 37 años de cotización).

El objetivo central del Gobierno es la fuerte reducción del gasto en pensiones y se hace por las dos vías: recortar la cuantía mensual (a través de mayores penalizaciones cuando no se llega a las dos condiciones de 67+37 años o bien 65+38,5), y rebajar el importe total a cobrar por el pensionista al disminuir dos años de percepción.

[7] Un análisis de la reforma de los sistemas de pensiones europeos se expone en A. Antón, *La reestructuración del Estado de bienestar*, Talasa, Madrid, 2009.

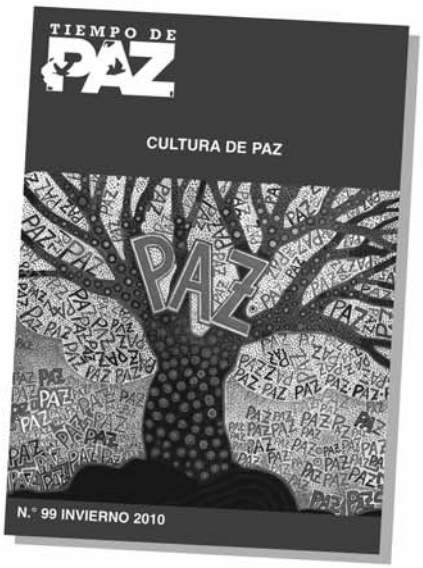
En definitiva, los negociadores sindicales han conseguido suavizar un aspecto significativo planteado por el Gobierno pero, al mismo tiempo, no han evitado el endurecimiento de otro elemento relevante. El primero afecta al 20% de trabajadores a los que no se les imponen 15 puntos de penalización por no llegar a los 67 años (aunque deben reunir tres años y medio más de cotización y se les reduce la pensión, como a los demás, un 7% por la ampliación del periodo de cómputo). Es un limitado avance respecto del objetivo central de los sindicatos (*67 años no*) apoyado por la mayoría social y que ha constituido un eje fundamental (junto con la reforma laboral y los planes de ajuste) de la batalla sociopolítica de todo el año 2010, desde las grandes manifestaciones de hace un año hasta la huelga general del 29-S. El segundo perjudica al 80% restante con 4,56 puntos más de penalización si no incrementan dos años su cotización, al poner la referencia en 37 años en vez de 35. Es un retroceso importante, particularmente lesivo para las nuevas generaciones con dificultad para alcanzar ese tope de cotización. Consideradas las dos medidas, el recorte global se queda como estaba, el resultado de ese reparto distinto no suaviza el plan gubernamental inicial. Un segmento minoritario tiene una desventaja relativa menor de la prevista y otro segmento mayoritario sufre un retroceso mayor del esperado. Tener en cuenta esa realidad es imprescindible para evaluar la gestión sindical de este pacto: no han frenado el plan gubernamental, no han conseguido un acuerdo equilibrado, sino que han repartido el fuerte recorte de forma diferente. Por otro lado, otros componentes del pacto –plan de empleo juvenil, políticas activas de empleo, reforma de la negociación colectiva…– no reequilibran su carácter regresivo.

En conclusión, este acuerdo social es negativo y tiene un impacto regresivo en el sistema de protección social; el recorte de derechos es muy grave aunque es desigual su distribución. Debilita el sistema público de pensiones, disminuye su intensidad protectora y favorece la salida de las capas acomodadas hacia fondos privados. Este pacto social de pensiones consolida la política socioeconómica dominante liberal-conservadora; no mejora las condiciones para promover una salida progresista a la crisis, defender el modelo social europeo, fortalecer la protección social y cambiar el modelo productivo. No sirve para avanzar en las propuestas generales manifestadas por los sindicatos de defender los derechos sociolaborales y fortalecer el Estado social y de bienestar, y tampoco garantiza la reactivación económica y del empleo. Todo ello conforma las grandes dificultades para su legitimación entre las clases populares y la ciudadanía.

I. CULTURA DE PAZ
El Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia (2001-2010)
Federico Mayor Zaragoza
Culturas y paces para el siglo XXI: una perspectiva desde la Filosofía para hacer las paces
Vicent Martínez Guzmán
Pacifismo y belicismo en la escuela
Luis Gómez Llorente
Una escuela promotora de paz
Juan López Martínez
Sobre la legislación española en materia de paz
Manuel Dios Diz
La escuela, gérmen de paz1
Carolina Alonso Hernández
Progresos y retos de la educación para la paz en Cataluña
Cécile Barbeito y Marina Caireta
Crimen contra la humanidad
Pilar del Río y José Saramago
Red ciudadana por la Paz
Ricardo Chicharro

II. SOCIEDAD INTERNACIONAL EN MUTACIÓN
El papel de la sociedad civil en la promoción de la cultura de paz: el caso del Sáhara Occidental
Sidi M. Omar

III. CONFLICTOS INTERNACIONALES
España y el Líbano: una presencia plural y comprometida
Juan Carlos Gafo Acevedo



IV. OTRAS DIMENSIONES DE LA PAZ
¿Es el desarrollo un concepto relevante? Una aproximación desde la teoría
Iván Fernández Lefort

VII. DOCUMENTACIÓN
Declaración y Programa de acción sobre una cultura de paz, Naciones Unidas
Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz, España

TIEMPO DE PAZ

Revista Trimestral • Martos, 15 • Tel.: 00 34 91 429 76 44
Fax: 00 34 91 429 73 73 • E-mail: mpdl@mpdl.org • 28053 MADRID

SUSCRIPCION ANUAL (4 números) - España 40 € • Resto Europa 65 € • Resto mundo 90 $US
Números sueltos: España 11 € • Resto Europa 21 € • Resto mundo 29 $US
Socio Movimiento por la Paz –MPDL–: 30 €
Cuota joven Socio-Suscriptor para menores de 30 años: 70 € (oferta válida solo para España)

Nombre y Apellidos _____ NIF/CIF _____

Empresa/Institución _____ Dirección _____

Localidad _____ Provincia _____ C.P. _____

Teléfono _____ E-mail _____

Nº cuenta bancaria (20 dígitos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muy Señores Míos: Les ruego que a partir del día de la fecha y con cargo a mi cuenta Nº_____ abonen el recibo de suscripción a la revista "TIEMPO DE PAZ", que a mi nombre presentará el MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD, por un valor de ..... €. Atentamente

_____ a ____ de _____ 201 __ FIRMA:

Le informamos que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados a las bases de datos de MPDL, para la gestión de asociados y suscriptores y envíos informativos sobre actividades propias desarrolladas por MPDL.
Le solicitamos que cualquier modificación/actualización posterior de sus datos se resuelva mediante escrito a la dirección indicada más adelante.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. Tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos relevantes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: C/ Martos, 15. 28053 Madrid".

FARAZ VAHID SHAHIDI, CARLES MUNTANER,
VANESSA PUIG-BARRACHINA, JOAN BENACH

Recortes profundos que hay que cortar por lo sano: crisis económica, políticas sociales y daños en la salud

A pesar de que la literatura científica de salud pública recoge y reconoce ampliamente que una crisis económica tan profunda como la actual supone una grave amenaza para la salud, son escasos los estudios que aborden las motivaciones políticas, económicas e ideológicas que subyacen a la respuesta estatal ante dicha crisis, ni su impacto global, actual y futuro, sobre la salud colectiva. A pesar de la naturaleza económica y política de estas estrategias, términos como "capitalismo", "neoliberalismo" o "privatización" no aparecen con mucha frecuencia en los estudios sobre la salud pública, hecho que demuestra una tendencia muy preocupante a evitar consideraciones sobre el poder, la política y la economía en los análisis de salud.

Faraz Vahid Shahidi es estudiante del colegio universitario de la Universidad de Toronto

Vanessa Puig-Barrachina y Joan Benach son miembros del Grupo de Investigación de Desigualdades en Salud, Universitat Pompeu Fabra

Carles Muntaner es catedrático de las facultades de enfermería, salud pública y medicina, Universidad de Toronto

Vivimos en tiempos de crisis, una crisis económica amplia y profunda que amenaza seriamente la salud pública, nuestra salud. En España, sin ir más lejos, la crisis ha hecho estragos tanto en el desempleo como en la precariedad laboral. El paro alcanza ya cifras catastróficas con más de 4,7 millones de desempleados y 1,3 millones de hogares con todos sus miembros en paro, cifras que no dejan de aumentar.[1] El paro afecta sobre todo a jóvenes (43%), inmigrantes (más del 30%) y a las clases sociales pobres con menos educación (43% en analfabetos y 30% con educación primaria frente al 11,7% y al 2% en quienes tienen educación superior o doctorados). Sabemos que estar desempleado incrementa la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, alcoholismo, tabaquismo, depresión, trastornos de ansiedad, y muerte prematura,[2] y que sus efectos se agravan en colectivos como las madres solte-

1 EPA, enero de 2011 [disponible en: http://www.ine.es]

2 D. Dooley, J. Fielding y L. Levi, «Health and unemployment», *Annual Review of Public Health*, núm. 17, 1996, pp. 449-465.

ras o las familias de las clases sociales más empobrecidas que no perciben prestaciones por desempleo.[3] Igualmente, la precariedad laboral, o trabajar intermitentemente con periodos de paro y precariedad, daña la salud: a peor situación laboral, peor salud.[4]

Lo que ha quedado patente es una falta de voluntad e interés políticos para defender la salud pública, y no una ausencia real de alternativa

La grave amenaza que una crisis económica tan profunda como la actual supone para la salud es ampliamente reconocida y recogida por la literatura científica de salud pública.[5] Sin embargo, no existen ni los análisis ni el reconocimiento suficiente que estudie las motivaciones políticas, económicas e ideológicas que subyacen a la respuesta estatal ante esa crisis, ni tampoco cuál es su impacto global, actual y futuro, sobre la salud colectiva. Es decir, mientras las consecuencias de la crisis en la salud poblacional han recibido cierta atención por parte de la disciplina que conocemos como "salud pública", no se puede decir lo mismo de las consecuencias de las "políticas de austeridad" que los gobiernos están realizando. Quienes trabajamos en la salud pública tenemos fundadas razones para pensar no sólo que la imperiosa austeridad gubernamental de «apretarse el cinturón» tendrá su traducción en profundos recortes en el bienestar, la salud, la educación, las pensiones u otros programas sociales, sino también que esos recortes sociales tendrán fuertes consecuencias en la salud poblacional que producirán una "recesión humana" en buena parte oculta tanto para muchos investigadores como para la población general. Este artículo, que forma parte de los trabajos de revisión que habitualmente se realizan en los campos de la salud pública y las políticas sociales, pretende identificar los puntos de vista convergentes y divergentes en la literatura científica respecto a las medidas necesarias para hacer frente a la crisis y a sus consecuencias en la salud colectiva.

No hay alternativa

Después de haber evitado una segunda "Gran Depresión" mediante un rescate del sistema financiero mundial extremadamente costoso, los gobiernos buscan ahora la manera de compensar estos costes mediante un plan económico conservador y la puesta en mar-

[3] V. Puig-Barrachina, D. Malmusi, J.M. Martínez y J. Benach, «Monitoring social determinants of health inequalities: the impact of unemployment among vulnerable groups», *International Journal of Health Services,* en prensa, 2011.

[4] A. Vives, «A multidimensional approach to precarious employment: measurement, association with poor mental health and prevalence in the Spanish workforce», Tesis Doctoral, UPF, Barcelona, 2010.

[5] R. Horton, «The Global Financial Crisis: An acute threat to health», *The Lancet*, núm. 373, 2009, pp. 355-356 y A. Uutela, «Economic crisis and mental health», *Current Opinion in Psychiatry*, núm. 23(2), 2010, pp. 127–130.

cha de reducciones fiscales para los más ricos, supuestamente favorables al crecimiento económico y la salida de la crisis.[6] Estas medidas se están aplicando en toda Europa con fórmulas y nombres diversos pero con un mismo objetivo común: abandonar el estímulo de las políticas públicas para dirigirse hacia el sector privado. Un objetivo político no menos importante de estas medidas es el debilitamiento del Estado de bienestar europeo. Tanto la derecha política como los partidos socialdemócratas sitúan el sector privado como el motor del crecimiento económico, el cual será capaz, dicen, de disminuir la deuda adquirida. Estas estrategias, desarrolladas por los gobiernos y por los propios sectores financiares –bancos y multinacionales– que generaron la crisis, van a servir para el doble propósito de, por un lado, gestionar las consecuencias de la crisis económica y, por otro, reforzar una lógica económica concreta: la estricta ortodoxia neoliberal de austeridad presupuestaria.[7] Así pues, la crisis financiera mundial ha adoptado un giro que realmente es irónico: «Las mismas empresas multinacionales que pidieron un rescate a los gobiernos, se muestran ahora sorprendidas por el *despilfarro* existente en el gasto gubernamental».[8]

A pesar de la naturaleza económica y política de estas estrategias, términos como *capitalismo, neoliberalismo* o *privatización* no aparecen con mucha frecuencia en los estudios sobre la salud pública, hecho que demuestra una tendencia muy preocupante a evitar consideraciones sobre el poder, la política y la economía en los análisis de salud. En el campo de la medicina, la epidemiología e incluso la salud pública existe una amplia noción romántica del investigador "independiente" que persigue una verdad científica objetiva, libre de influencias como la ideología política o económica. Nada más lejos de la verdad, ni nada más peligroso.[9] Buena parte de la investigación sobre temas de salud se ve así lastrada por una grave limitación que dificulta la capacidad para evaluar con precisión y combatir las consecuencias sociales y de salud de las estrategias económicas conservadoras como respuesta a la crisis. Lejos de aplicar un saludable escepticismo hacia los discursos de gobiernos y académicos favorables a los mismos, los investigadores en salud pública y política social suelen tomar estas medidas como algo inevitable, como una solución "natural" para hacer frente a la crisis, como una simple fase más de la cambiante economía global. No es pues extraño que determinados autores, líderes en el campo de la epidemiología social como Marmot y Bell, por ejemplo, hayan argumentado que «la crisis financiera no ha dejado otra opción que recortar en todos los gastos».[10]

---

6 M. Blyth, *The G-20's Dead Ideas. Foreign Affairs,* 2010 [disponible en: http://www.foreignaffairs.com/articles/66490/mark-blyth-and-neil-k-shenai/the-g-20s-dead-ideas].

7 G. Albo, «From Rescue Strategies to Exist Strategies: The struggle over Public Sector Austerity», *Socialist Register*, núm. 47, 2010.

8 M. Blyth, *op. cit*., 2010.

9 D. Stuckler, «Public Health in Europe: Power, Politics and Where Next?«, *Public Health Reviews*, núm. 32(1), 2010, pp. 213-242.

10 M. Marmot, y R. Bell, «How Will the Financial Crisis Affect Health?», *BMJ*, núm. 338, 2009, pp. 858-861.

¿Realmente no hay alternativa? Como mínimo existen dos argumentos que cuestionan la ausencia de alternativas. En primer lugar, en salud pública generalmente se acepta que cuando existe una crisis económica es necesario hacer frente a sus posibles consecuencias para la salud mediante el desarrollo de políticas sociales, aunque ello comporte un mayor gasto público. El coste de evitar este gasto en un primer momento puede tener graves consecuencias, en términos de mortalidad y morbilidad que multipliquen este coste inicial, en un futuro.[11] Y, en segundo lugar, el argumento de la presión fiscal por parte de los gobiernos para no poner en práctica medidas protectoras para la salud no se aplicó tras la quiebra del sector financiero. En realidad, «la crisis financiera ha mostrado cómo los Estados pueden buscar y encontrar recursos y reformar la regulación rápidamente cuando sus propios intereses están en riesgo».[12] Sólo en Estados Unidos, el rescate financiero costó un total de 5 billones de dólares.[13] No obstante, el Gobierno no ha mostrado la misma capacidad para resolver los problemas cuando se trata de proteger la salud de la población.[14] Estos dos argumentos demuestran la falta de voluntad e interés políticos necesarios para defender la salud pública, más que una falta real de alternativas, a la vez que también demuestran la importancia de los factores políticos y económicos en la determinación de la salud y las políticas sociales.

Política, economía y salud

Las decisiones políticas y económicas determinan la producción, distribución y tratamiento de la enfermedad y la salud colectivas[15] al tiempo que la naturaleza de su justificación es de origen ideológico.[16] La puesta en marcha de las medidas de austeridad tras la crisis de 2008 responde a una determinada decisión ideológica, la cual va a tener considerables efectos negativos sobre la salud y el bienestar de la población. Por lo tanto, para entender la naturaleza de las medidas de austeridad, es decir, las decisiones políticas y económicas que se tomaron después del inicio de la crisis, es necesario reconocer que estas responden a una determinada ideología.[17] Sin embargo, gran parte de los investigadores de salud pública

[11] L. King, «Rapid Large-scale Privatization and Death Rates in Ex-communist Countries: An analysis of stress-related and health system mechanisms», *International Journal of Health Services*, núm. 39(3), 2009, pp. 461-489.

[12] K. S. Mohindra y R. Labonté, «Making Sense of the Global Economy: 10 resources for health promoters», *Health Promotion International*, núm. 25(3), 2010, pp. 355-362.

[13] Equivalente a "5 trillion dollars" en la contabilidad del mundo anglosajón

[14] R. Catalano, «Health, Medical Care, and Economic Crisis», *The New England Journal of Medicine*, núm. 360(8), 2009, pp. 749-751.

[15] V. Navarro y C. Muntaner, *Political and Economic Determinants of Population Health and Well-Being*. Baywood Publishing Company, Inc., Amityville, 2004.; C. Bambra *et al*., «Towards a New Politics of Health», *Politics of Health Group*, Discussion Paper núm. 1, 2003.

[16] A. Maryon-Davis, «Living With Cuts to Public Services: How can we get more for less?», *Journal of Public Health*, núm. 32(3), 2010, pp. 310-311; D. Stuckler *et al.*,«Responding to the Economic Crisis: A primer for public health professionals», *Journal of Public Health*, núm. 32(3), 2010, pp. 298-306.

[17] T. R. Oliver, «The Politics of Public Health Policy», *Annual Review of Public Health,* núm. 27, 2006, pp. 195-233.

demuestran su timidez política cuando se trata de examinar las motivaciones políticas y económicas que subyacen a estas medidas de austeridad.[18] Así, existe una tendencia reduccionista a separar el análisis de las políticas de salud de un análisis más amplio sobre cuestiones políticas y económicas bajo la consideración de que pertenecen al estudio crítico de la macroeconomía y no de la salud pública.[19] De ese modo, los debates sobre las medidas de austeridad tienden tan sólo a valorar los temas de macroeconomía, como si las consecuencias para la salud y el bienestar de la población no tuvieran nada que ver con ello, cuando debieran ser parte de un mismo debate que no se puede separar. Si realmente queremos avanzar en hacer realidad el conocido lema «salud en todas las políticas» cada vez más citado en los discursos de salud pública,[20] deberemos siempre tener en cuenta las consecuencias de las medidas de austeridad o de cualquier decisión política y económica en la salud pública. Así pues, debemos abandonar la idea de evaluar las decisiones políticas y económicas con parámetros puramente macroeconómicos, para realizar una evaluación más global que tenga en cuenta variables de bienestar social. Abandonar esta idea significaría abandonar también la idea de que el estándar de éxito o de mejora de una sociedad sea única y exclusivamente la actividad económica o su crecimiento, generalmente simbolizado con un indicador como el PIB. Para avanzar hacia una sociedad más justa, sostenible y saludable es preciso incluir indicadores que contengan medidas ecológicas y de equidad económica y salud, entre otros indicadores sociales.[21] Así pues, la relación entre salud y macroeconomía generalmente no está reconocida, y cuando se reconoce siempre lo es en un mismo sentido: la salud es un medio o precondición necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo. Raramente se considera la relación a la inversa: los recursos materiales y la equidad socio-económica son quienes determinan la salud, la equidad y el bienestar colectivos.[22]

La tarea de investigadores y profesionales de salud pública sigue siendo entender y responder a los orígenes de las decisiones políticas y económicas y sus consecuencias sobre la salud. Como ha argumentado Stuckler: entender mejor las «políticas de salud es simple: preguntar quién se está beneficiando y quién pierde. Sigue al dinero y encontrarás la raíz de la mayoría de los problemas más difíciles de solucionar».[23] Desde el momento en que la crisis se presenta como una oportunidad para cambiar la organización del capital, las regulaciones estatales y aumentar la productividad laboral y los márgenes de beneficio priva-

18 D. Stuckler, *op cit.*, 2010

19 R. Rowden, «Why Health Advocates Must Get Involved in Development Economics: The case of the International Monetary Fund», *International Journal of Health Services*, núm. 40(1), 2010, pp. 183-187.

20 B. González López-Valcárcel y V. Ortún,«Putting health in all welfare policies: is it warranted? A Southern European perspective», *J Epidemiol Community Health,* núm. 64, 2010, pp. 497-499.

21 J. E. Stiglitz, A. Sen y J. P. Fitouss, *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress,* CMEPSP, 2009 [en: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr]

22 J. D. Sachs, *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*, Penguin Books, Nueva York, 2005.

23 D. Stuckler, *op. cit.,* 2010.

dos,[24] es fundamental examinar la reducción de los Estados del bienestar y las medidas de austeridad asociadas en relación con los intereses y las intenciones propuestas por quienes son sus arquitectos.[25]

En resumen, aunque la mayor parte de la literatura en la salud pública y la política social examine el mundo y lo evalúe como si no existieran «factores, ni causas, ni intereses de clase, ni conflictos»,[26] las medidas de austeridad que se están realizando no conforman en absoluto un producto neutral ni una observación científica, sino que son un producto inevitablemente político e ideológico que debe ser evaluado en estos términos si queremos entender adecuadamente la posible validez de esos instrumentos.

La "gobernanza global" y la despolitización

A pesar del optimismo generado por los líderes del G-20 –quienes anunciaban la oportunidad de restaurar el crecimiento económico sentando, al mismo tiempo, las bases para establecer un nuevo orden económico mundial más justo y sostenible–, las medidas de austeridad propuestas no han mostrado ningún tipo de desviación del curso económico responsable de la crisis.[27] El Fondo Monetario Internacional, una de las agencias parcialmente responsables de la crisis y a quien el G-20 encargó la tarea de buscar respuestas a la crisis y mitigar sus efectos, después de recibir de él 750.000 millones de dólares para evitar su propia bancarrota, no ha realizado ningún tipo de cambio en unas prácticas, que evidentemente no tienen en cuenta sus consecuencias sociales ni su impacto sobre la salud.[28]

Si el plan del G-20 para la recuperación económica fuera cierto, este «representaría un cambio radical con el pasado, que sería un paso hacía un nuevo orden económico necesario para alcanzar una distribución más justa de poder, dinero y recursos».[29] Marmot y Bell no parecen haber sido muy proféticos en sus predicciones. Más que promover la equidad, las medidas conservadoras de austeridad anunciadas por los líderes del G-20 en su encuentro en Toronto en junio de 2010, prometen conllevar un declive en la calidad de vida,

---

24 D. McNally, «From Financial Crisis to World-slump: Accumulation, financialisation, and the global slowdown», *Historical Materialism*, núm. 17, 2009, pp. 35-83.

25 A. R. Katz, «New Global Health: A reversal of logic, history and principles», *Social Medicine*, núm. 3(1), 2009, pp. 1-3

26 A. R. Katz, «Prospects for a Genuine Revival of Primary Health Care», *International Journal of Health Services*, núm. 40(1), 2010, p. 123.

27 Bretton Woods Project, *Back from the Dead: IMF Pumps Out Loans and Conditionality,* 2008 [disponible en: www.brettonwoodsproject.org/art-562981]

28 R. Batniji, *Reviving the International Monetary Fund: Concerns for the health of the poor*, International Journal of Health Services, núm. 39(4), 2010, pp. 783-787.

29 M. Marmot y R. Bell, *op.cit.,* 2009.

30 D. Stuckler *et al.,* «Budget Crises, Health, and Social Welfare Programmes», *BMJ,* núm. 341, 2010, pp. 77-79.

resultados nocivos para la salud de la ciudadanía y un aumento de las desigualdades.[30] Así pues, aquí tenemos una muestra más de la cautela y falta de sentido crítico característicos de autores que forman parte de la visión dominante en este campo de investigación.

> La mayor parte de la literatura sobre salud pública y política social examina el mundo y lo evalúa como si no existieran causas, intereses de clase ni conflictos

A pesar del fracaso por parte de la mayor parte de los investigadores de salud pública en involucrarse críticamente en los debates sobre economía global, algunos expertos en este campo se han mostrado muy críticos con la gestión del G-20. Un ejemplo: «El G-20 ha fracasado a la hora de combatir las causas económicas de la crisis, o de saber conceptualizar esta crisis como una crisis múltiple de nuestro modelo global de desarrollo [...] El fracaso del G-20 para combatir la crisis e identificar soluciones plausibles radica, de hecho, en una tercera crisis: una crisis de democracia global».[31] Esta postura adoptada por De Vogli y Gimeno contrasta con la mayor parte del trabajo realizado en salud pública, el cual ha fracasado en responsabilizar a quienes son responsables de tomar las decisiones políticas de las consecuencias de sus propios actos. Buss, por ejemplo, continúa confiando en la tarea de los «líderes de una gobernanza global» para «generar sistemas de salud más equitativos».[32] Es más, el uso común del termino «gobernanza», ahora muy en boga, permite despolitizar el campo de la salud y del bienestar social, convirtiendo problemas de valores e intereses económicos en cuestiones de proceso deliberativo. Un ejemplo interesante del uso de la «gobernanza» para mantener una situación de desigualdad política y económica es la tesis doctoral del hijo del líder libio Saif-al–Islam Alqadhafi.[33] No obstante, las críticas de De Vogli y Gimeno no consideran cómo la crisis de la democracia puede ser en sí misma una señal, más que una explicación, de la crisis del capitalismo mundial, es decir, no han considerado el hecho de que la crisis del capitalismo puede preceder y producir el problema de una gobernanza no democrática y la falta de «imaginación moral»[34] consiguiente. Consecuentemente, debemos considerar la primera crisis, es decir, la crisis del sistema económico sobre el cual se fundamenta toda la vida social parafraseando a Wolff.[35] Este sistema tiene un nombre concreto: el capitalismo.

---

31 R. De Vogli y R.Gimeno, «The G20 and the Three Global Crises: What prospects for global health?», *Journal of Epidemiology and Community Health*, núm. 64(2), 2010, pp. 99-100.

32 P. Buss, «Public Health and the World Economic Crisis», *Journal of Epidemiology and Community Health*, núm. 63(6), 2009, p. 417.

33 S. Al-Islam Alqadhafi, *The role of civil society in the democratisation of global governance institutions: from 'soft power' to collective decision-making?*, Tesis doctoral, London School of Economics, 2007.

34 S. Benatar, «Moral Imagination: The missing component in global health», *PLoS Medicine,* núm. 2(12), 2005, p. 1207; S. Benatar, «Values in Global Health Governance», *Global Public Health*, núm. 5(2), 2010, pp. 143-153.

35 R. Wolff, «In Capitalist Crisis, Rediscovering Marx», *Socialism and Democracy,* núm. 24(3), 2010, pp. 130-146.

El capitalismo neoliberal y sus desencantos

Como ha apuntado Stuckler, después de la crisis mundial de 2008, países como Georgia, Ucrania, Hungría, Islandia, Lituania, Pakistán, Serbia, Rumania, Bielorrusia, Grecia e Irlanda tienen como mínimo un rasgo en común: «son participantes en los programas [del FMI] diseñados para reestructurar sus economías».[36] En Lituania y Grecia las medidas de austeridad impuestas por el FMI se han traducido en recortes del 70 y el 50% en las pensiones, respectivamente. En Rumania e Irlanda los programas han forzado la disminución de los salarios de los empleados públicos en un 25% y en un 15% respectivamente. El Gobierno español recortó las retribuciones de los funcionarios en un 5% de promedio en 2010, congelándolas para 2011, recortó también las pensiones de jubilación, y redujo en 600 millones de euros su contribución en cooperación internacional. En los primeros meses de 2011 se está estudiando la realización de fuertes recortes en el sector sanitario en comunidades autónomas como por ejemplo en Cataluña.[37] En definitiva, como afirma Pollin los planes de ajuste estructural han sido introducidos en el norte del planeta, y aunque hubiera una recuperación económica, la «época de la austeridad» tendrá unas implicaciones para la salud pública y el bienestar de la población que aún son impredecibles.[38]

El neoliberalismo y sus políticas se han introducido en todo el mundo mediante diversas vías: por la fuerza militar en Chile, vía programas de ajuste estructural en Malawi o mediante elecciones democráticas en el Reino Unido.[39] La mayoría de países ricos han adoptado una ideología que «considera el mercado como la mejor manera de distribuir bienes y servicios»[40] y, aunque con algunas variaciones históricas, el objetivo siempre ha sido establecer las condiciones necesarias para la acumulación de capital y la obtención de beneficios.[41]

La pregunta a partir de 2008 fue: «¿Quién pagará la crisis?» Como muy bien apunta Gosh,[42] aunque el crecimiento económico no ha sido inclusivo, es decir, sus beneficios no se han repartido equitativamente, las consecuencias de la crisis de 2008 han sido, sin

36 D. Stuckler y S. Basu, «The international monetary fund's effects on global health: before and after the 2008 financial crisis», *International Journal of Health Services*, núm. 4(39), 2009, p. 772.

37 *El País*, «Las nuevas medidas con las que el Gobierno quiere ahorrar 15.000 millones» [disponible en: http://www.elpais.com/articulo/espana/nuevas/medidas/Gobierno/quiere/ahorrar/15000/millones/elpepuesp/20100512elpepunac_5/Tes; V. Navarro «Los recortes del gasto sanitario» [disponible en: http://www.vnavarro.org/?p=5272]

38 R. Pollin, «Austerity is Not a Solution: Why the deficit hawks are wrong. Challenge», en prensa.

39 U. Brand y N. Sekler, «Postneoliberalism: Catch-all word or valuable analytical and political concept? Aims of a beginning debate», *Development Dialgoue*, núm. 51, 2009, pp. 5-14.

40 L.Bernier, «International Socio-economic Human Rights: The key to global health improvement?», *The International Journal of Human Rights*, núm. 14(2), 2010, p. 262.

41 D. Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

42 J. Ghosh, «Global Crisis and Beyond: Sustainable growth trajectories for the developing world», *International Labor Review*, núm. 149(2), 2010, pp. 209-225.

embargo, «demasiado inclusivas», con medidas de austeridad que están forzando a todos aquellos que durante décadas han quedado excluidos del crecimiento económico, tanto a nivel nacional como internacional, a pagar con el desempleo y la reducción de su calidad de vida por los crímenes de un financiamiento imprudente. En palabras de Wolff, «el capitalismo en sí mismo prueba que no sólo es un sistema que genera repetidas y severas crisis económicas. También sistemáticamente desplaza hacia la parte media y baja de la escala social los costes de esta inestabilidad».[43]

Después de 2008, la globalización de los ajustes estructurales ha facilitado transformaciones radicales de la crisis. Lo que comenzó como una crisis del sector privado se ha transformado en una crisis de deuda pública mediante el movimiento de millares de millones de dólares en transferencias del sector público al privado,[44] que ha permitido fabricar una crisis del Estado de bienestar. Según nuestros gobernantes, el Estado no tiene más opción que recortar el gasto público. La transformación de la crisis del sector privado en prácticamente una crisis de todo lo público ha generado justificaciones políticas y económicas para una «época de austeridad» que está desplazando el peso de la crisis sobre las espaldas de aquellos que menos pueden aguantarla.[45]

Sin embargo, lo que más se ha generado durante la crisis han sido las justificaciones políticas, económicas e ideológicas para transformar el Estado con el objetivo de restablecer las condiciones necesarias para generar una mayor acumulación de capital.[46] Estas condiciones para la acumulación del capital se dan gracias a la imposición de medidas de austeridad, muy nocivas para la salud y el bienestar de la población. No obstante, con ello podemos correr el riesgo de asignar toda la responsabilidad de estas medidas a los actos políticos, en vez de a sus organismos y a los gobiernos responsables de su planificación y puesta en práctica. Las políticas no son las que matan, los asesinos, son más bien aquellos que se benefician de su puesta en práctica.[47] Detrás de los eventos macroeconómicos y políticos están clases sociales con personas concretas que actúan institucionalmente según sus intereses de clase.

En resumen: 1.) la recuperación de la economía mundial, tal y como se entiende hasta ahora, ha necesitado la globalización de los ajustes estructurales y la imposición de lo que se ha llamado una «época de austeridad»; 2.) estas medidas demuestran la relación dia-

43 R. Wolff, «Economic Crisis and Tax Injustice», *The Bullet*, núm. 425, 2010.

44 J. Granados, «On the Implications of the Global Financial Crisis: Some thoughts about the past and future», *Capitalism Nature Socialism*, núm. 19(4), 2008, pp. 84-88.

45 R. Wolff, *op. cit.,* 2010.

46 McNally, *op. cit.,* 2010.

47 V. Navarro, «What We Mean by Social Determinants of Health», *International Journal of Health Services*, núm. 39(3), 2009, pp. 423-441.

léctica entre la crisis del capitalismo y la crisis del Estado de bienestar; 3.) el modelo dominante utilizado para mitigar los efectos de la crisis económica se ha basado en la imposición de estas medidas y su transformación en una crisis humana que tiene y va a tener graves implicaciones para la salud y el bienestar de la población; y 4.) en la medida en que éstas son la causa de un "asesinato social" mediante la reducción de los estándares de vida,[48] las medidas de austeridad no son sino la encarnación de la lucha de clases. Consecuentemente, para debatir los méritos de las políticas de austeridad es fundamental debatir la política de clases.

Las medidas de austeridad son la encarnación de la lucha de clases; es preciso explicitar cómo los intereses privados de acumulación de beneficios gobiernan la lógica del Estado

Economía, austeridad y clase

El contrato social de posguerra que caracterizó la provisión del Estado de bienestar después de la segunda guerra mundial y que duró hasta finales de la década de los setenta, ha sufrido tres décadas de ataques por parte de una creciente popularización de la doctrina económica neoclásica. Durante estos años y bajo el nombre de lo que hoy se conoce como *neoliberalismo*, los capitalistas privados han hecho campaña en contra de las intervenciones nacionales e internacionales del Estado que limitan su rentabilidad. Con ello, se «intentaba restituir la utopía neoclásica: la propiedad privada y los mercados competitivos aumentan los ingresos provenientes del trabajo y del capital evitando así los conflictos de clase mediante el crecimiento económico.»[49]

La crisis de 2008 emergió a raíz de décadas de interacciones entre «las tres grandes instituciones del capitalismo»: la propiedad privada, los mercados y las relaciones de producción que explotan. La era del neoliberalismo y su lógica de la "economía del chorreo", es decir, la teoría que sostiene que beneficiar a los más ricos en primer lugar va a repercutir finalmente de manera positiva en toda la población, se caracterizó por el fomento de cambios estructurales para revertir las ganancias conquistadas durante décadas con un bienestar social sin precedentes, además del estancamiento de los salarios. Por un lado, esta reducción en los salarios reales benefició a la acumulación de capital por parte de los sectores privados de la economía. Y por otro, la quiebra de este modelo de crecimiento se hizo

[48] F. Engels, *The Condition of the Working Class in England*, Oxford University Press, Oxford, 1845.

[49] R. Wolff, «In Capitalist Crisis, Rediscovering Marx», *op. cit*, pp. 134-135.

evidente a través de una realidad social fuertemente contrapuesta que contaba por un lado con una profunda reducción de los gastos en el bienestar y la calidad de vida de la mayoría de la población, junto al aumento de la productividad. Dicho en forma muy breve: «las ganancias de los capitalistas fueron las pérdidas de los trabajadores».[50]

La promesa de austeridad encarna en este momento una nueva fase de la lucha política donde las clases más pobres tendrán que pagar por la necesidad de hacer frente a una deuda adquirida a través de décadas de neoliberalismo.[51] Los sectores responsables de crear la crisis ya han demostrado una absoluta falta de voluntad de pagar por ella. Además, las medidas de austeridad no van a afectar a todo el mundo de la misma manera. Las clases pobres, los trabajadores y las clases medias, es decir, aquellos que no obtuvieran más que deudas durante las décadas neoliberales de "productividad" y su ilusoria creencia de prosperidad,[52] serán los únicos que pagarán esta crisis. Son estas las clases que más dependen de los servicios y las ayudas y salarios públicos. De hecho, el pago de la crisis ya ha comenzado con los recortes en los servicios sociales y con recortes en los salarios públicos y las pensiones. Así pues, se hace necesario conceptualizar correctamente la explotación de estas clases (pobres y de ingresos bajos y medios) y explicitar de qué modo las clases ricas –con intereses privados de acumulación de beneficios– ahora gobiernan la lógica del Estado y gran parte de la salud y de la política social que emergen de esa lógica.

Resumiendo lo dicho hasta ahora, la construcción político-económica de la respuesta a la crisis ha sido capaz de trasladar el peso de la crisis a las espaldas de quienes menos pueden soportarla. Lo que empezó como una crisis fiscal de los sectores financieros se ha transformado rápidamente en una crisis de deuda pública, con la necesidad urgente de "consolidación fiscal". Los conflictos de demandas financieras reflejan claramente antagonismos de clase sobre los que se fundamentan las relaciones de producción capitalista. Siguiendo esa lógica, el problema no radica por tanto en la provisión del bienestar, ni en el nivel de Estado de bienestar, sino más bien en la lógica fundamental del sistema económico capitalista actual.

Crisis y lucha de clases

El sistema económico actual se caracteriza por una «matriz de poder social donde algunas clases sociales, actores colectivos, y otras categorías sociales tienen más oportunidades de modelar y remodelar la realidad política, y de abrir y cerrar la agenda política».[53] Este equi-

[50] *Ibidem*, p. 142.

[51] G. Albo, *op. cit*., 2010.

[52] M. Blyth, *op. cit.,* 2010.

[53] C. Offe, «Some Contradictions of the Modern Welfare State», *Critical Social Policy*, núm. 2(1), 1982, pp. 7-16.

librio en el poder político es un reflejo del conflicto subyacente entre las clases: entre trabajadores y empleadores; entre vendedores y compradores de poder laboral; entre el trabajo y el capital.

El resultado de este antagonismo determina la dirección de la sociedad, la economía y la política.[54] En momentos de crisis surge la oportunidad de reconfigurar los tres ámbitos: la inestabilidad política, económica y cultural ayudan a minimizar los costes involucrados en su reconfiguración.[55] Por lo tanto, las políticas contemporáneas de austeridad son, en esencia, una estrategia político-económica privada emergente de la crisis actual. Una estrategia diseñada para reconstituir las relaciones sociales de producción con el objetivo de detener la depresión de la economía mundial y reestablecer las condiciones necesarias para la acumulación de capital y la lógica del beneficio. En otras palabras, este equilibrio de poder brinda la oportunidad a la clase capitalista de socializar los costes de sus errores financieros mientras refuerzan la lógica responsable de generar la crisis. En definitiva, lo que demuestra esta crisis es «la validez de la teoría marxista de la lucha de clases como motor de la fuerza de la historia –como mínimo desde el momento en que la condición humana es considerada el centro de la historia».[56]

No obstante, la materialización de esta matriz social de poder –a través de las «políticas de austeridad», por ejemplo– desenmascara la naturaleza de clase de nuestra sociedad. Así, todo parece indicar que «poco a poco, pero de forma constante, los sindicatos, los partidos de izquierdas y las formaciones políticas de izquierdas se están movilizando en contra de la austeridad y posicionando a favor de planes alternativos».[57] Tan pronto como las prioridades de los Estados y los sectores privados queden más claros, también lo harán los conflictos de interés y las necesidades de la mayoría de la población. De este modo, la crisis económica y la necesidad de los capitalistas de detenerla proporcionan el terreno político para la lucha y la resistencia en contra de las políticas de austeridad y, consecuentemente, de las relaciones sociales que la constituyen.

Conclusiones

En este artículo hemos problematizado la falsa suposición de una sociedad sin clases, un supuesto que caracteriza la mayor parte del análisis del Estado de bienestar actual y de los

54 W. Korpi, *Power Resources Theory and the Welfare State: A critical approach*, University of Toronto Press, Toronto, 1998.

55 P. Pierson, «The New Politics of the Welfare State», *World Politics*, núm. 48(2), 1996.

56 J. Petras, «The Rising Tide of Barbarism: Prospects for Socialism», Centre for Research on Globalization, 2010 [disponible en: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20370]

57 R. Wolff, «Deficits: Real Issue, Phony Debates», 2010 [disponible en: http://www.rdwolff.com/content/deficits-real-issue-phony-debates]

análisis sobre la salud pública que pone de manifiesto: 1.) la importancia de la crisis de 2008 para reducir los costes políticos de reorganizar la sociedad, la economía y la política; 2.) la implicación de clase y la «matriz de poder social», resultado de esta estrategia; 3.) demuestra la distribución social, es decir, la composición de clase, sus consecuencias para la salud poblacional y el bienestar; y 4.) argumenta que las políticas de austeridad garantizan el terreno necesario a las comunidades para luchar en contra de las relaciones sociales reflejadas en esta estrategia y su política. Estas observaciones ayudan a demostrar qué políticas de austeridad expresan el estado de las relaciones sociales de explotación, lo cual ofrece la oportunidad de cambiarlas mediante una lucha de clases democrática y en favor de una sociedad más justa y saludable.[58]

58 W. Korpi, *The Democratic Class Struggle*, Routledge, Boston, MA, 1983.

Convivir para perdurar

Un libro que reflexiona sobre la necesidad de organizar la vida social para satisfacer las necesidades humanas sin exclusiones y respetando los límites naturales.

Los conflictos socioecológicos son también conflictos culturales. Aprender a convivir es también aprender a resolverlos.

Editado por CIP-Ecosocial (FUHEM) e Icaria
PAGINAS: 440
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-9888-315-2

Un libro dividido en tres partes:

- Los conflictos que surgen entre los diferentes grupos sociales a partir de la desigual apropiación de la naturaleza.
- Los saberes orientados a la sostenibilidad.
- Iniciativas para la sostenibilidad: el papel de las artes, la educación, la comunicación y la cooperación cultural.

BOLETÍN DE PEDIDO

Para hacer su pedido:

✔ Compre a través de la librería electrónica **www.libreria.fuhem.es**
✔ Envíe este formulario al fax **91 577 47 26**
✔ Llame al teléfono **91 431 03 46**
✔ Escriba un correo a **publicaciones@fuhem.es**

Nombre: .....

Dirección: .....

Población: ..... C.P. ..... Provincia: .....

Teléfono: ..... Correo electrónico: .....

☐ **EJEMPLAR 22 €** (Gastos de envío gratuitos para España) **Nº ejemplares** .....

FORMA DE PAGO

☐ Domiciliación bancaria (preferible esta modalidad para suscriptores)

Titular de la cuenta.....

ENTIDAD ☐☐☐☐ OFICINA ☐☐☐☐ CONTROL ☐☐ NÚMERO CUENTA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Cheque a nombre de Fundación Hogar del Empleado

☐ Contra reembolso

☐ Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0216 0251 51 0600005047

Duque de Sesto, 40 - 28009 Madrid
Tel.: 91 431 03 46 - Fax: 91 577 47 26
Web: www.cip-ecosocial.fuhem.es
E-mail: cip@fuhem.es

JOSÉ A. TAPIA GRANADOS

La mejora de la salud durante las crisis económicas: un fenómeno contraintuitivo

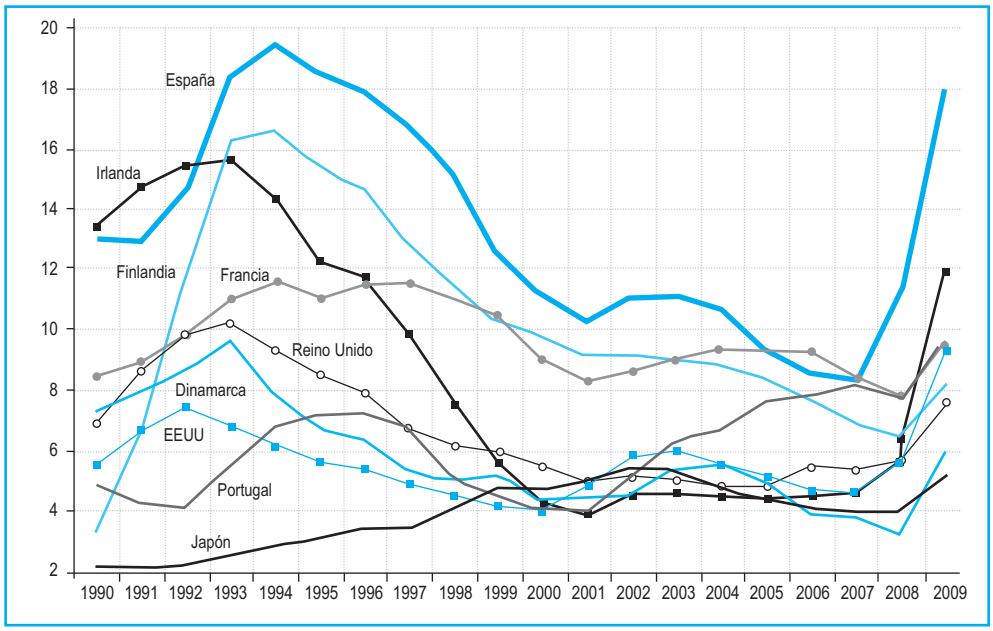
En este texto, presentamos algunos datos sobre la crisis mundial que comenzó en 2007 y se comentan sus posibles consecuencias sobre la salud basándose en diversos estudios sobre la influencia de los ciclos económicos (de expansión-contracción) en la salud y en concreto en las experiencias de EE UU (1920-1940), España (1960-2000) y China e India (desde 1950 hasta el presente). Contrariamente a lo que pudiera parecer inicialmente, el crecimiento económico favorece los procesos y desarrollos a largo plazo que introducen mejoras en la salud, pero una vez alcanzado cierto nivel de ingreso comienza a perjudicarle.

José A. Tapia Granados, Programa de Ambiente Social y Salud (SEH/SRC), Instituto para la Investigación Social, Universidad de Michigan

En la segunda mitad de 2008 la economía mundial entró en crisis. Prácticamente en todos los países el desempleo aumentó (véase figura 1), el consumo privado disminuyó y las deudas impagadas y las quiebras de empresas y bancos se multiplicaron en lo que se denominó "la Gran Recesión". Los Gobiernos intervinieron masivamente respaldando con dinero público a los grandes bancos y aseguradoras cuya caída, se decía, amenazaba con hundir todo el sistema financiero. En EE UU la tasa de desempleo aumentó 5 puntos porcentuales entre 2007 y 2010 y el PIB se contrajo en el primer trimestre de 2009 a una tasa anualizada del 5,7% tras haberse contraído 6,3% en el cuarto trimestre de 2008. En Japón el PIB se contrajo 3,3% en el cuarto trimestre de 2008, lo que corresponde a un 12,7% anualizado. En Australia el desempleo aumentó rápidamente de 2008 a 2009 y en China, según informaciones no oficiales, pudieron ser decenas de millones los que perdieron sus trabajos; en algunas áreas del país el desempleo podría haber alcanzado el 30% de la población activa. En la zona euro de la Unión Europea el PIB se contrajo un 4,6% entre el primer trimestre de 2008 y de 2009. El desempleo

aumentó prácticamente en todos los países europeos con España, Letonia y Lituania a la cabeza en tasas de desocupación de la población activa.

Figura 1.
Tasa de desempleo (porcentaje de personas sin trabajo en la población económicamente activa) en varios países



Fuente: Datos de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat). Las recesiones se manifiestan por aumentos de la tasa de desempleo, que se observa sobre todo a comienzos de los años noventa y hacia el 2002-2003. Las oscilaciones paralelas del desempleo en distintos países son indicativas de la mundialización de la economía. Los efectos de la "Gran Recesión" se reflejan (solo parcialmente, ya que solo hay datos hasta el 2009) en el aumento del desempleo en todos los países a partir del 2007.

Aunque en muchos países las estadísticas económicas muestran un cambio hacia una dinámica expansiva desde la segunda mitad de 2009, el crecimiento del PIB durante 2010 ha sido en general muy débil, los desequilibrios financieros siguen presentes y el desempleo sigue alto. Las revueltas antidictatoriales en el mundo árabe y el terremoto-maremoto en Japón con la posterior crisis nuclear son factores que complican y confunden aún más la situación mundial. A la fecha, en marzo de 2011, "la coyuntura", como solía denominarse en otros tiempos al estado expansivo o recesivo de la economía, parece muy inestable y podría evolucionar en cualquier dirección en la segunda mitad del año.

Las políticas de estímulo fiscal aplicadas por el Gobierno de Obama y por algunos Gobiernos europeos al comienzo de la crisis, a menudo juzgadas como muy insuficientes por economistas keynesianos como Krugman o Stiglitz, dieron paso durante 2010 a políti-

cas económicas claramente conservadoras, antikeynesianas, en las que olvidando la idea de aumentar la demanda agregada para impulsar la actividad económica, los Gobiernos buscan como primera prioridad recortar el gasto público para disminuir el déficit fiscal. Si de alguna forma se busca estimular la economía, es mediante recortes de impuestos que yendo generalmente a las empresas y las rentas más altas, probablemente solo sirvan para aumentar la desigualdad de ingreso y las masas monetarias flotantes en el espacio de inversión mundial (a la espera de oportunidades de inversión rentable). A la misma vez el *establishment* económico y político predica la necesidad de *apretarse el cinturón* y los Gobiernos recortan los salarios, directamente a los empleados públicos; a los trabajadores del sector privado, de momento, de forma indirecta, mediante, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación (en España, tristemente aceptado por los sindicatos mayoritarios). Por otra parte, no hay mejor argumento para "convencer" a los asalariados de que han de aguantar las reducciones de paga que reclaman los empresarios que las tasas altas de desempleo hoy presentes en muchos países. La inflación también puede ser un mecanismo para recortar los salarios reales y, de hecho, ya parece estar operando en algunos países. Así el *Financial Times* informaba en febrero de 2001 que la contracción de los salarios reales (es decir, ajustados según la inflación) que estaba teniendo lugar en el Reino Unido no tenía precedente desde la década de 1920, en la que la economía británica pasó por un periodo de prolongada y profunda depresión.

En Europa, la actitud generalizada de los Gobiernos, tras los titubeos y los intentos de políticas expansivas iniciales, es recortar gastos, resultado que parecía inevitable frente a las tensiones del área monetaria del euro, cuestionada por las crisis de Grecia e Irlanda, amenazada por los niveles de deuda pública en Portugal, España e Italia y paralizada por la falta de instituciones políticas para desarrollar políticas económicas unificadas. En el resto del mundo cada Gobierno enfrenta sus problemas y toma sus propias decisiones sin ningún punto de referencia claro, ahora que, lo reconozcan o no quienes fueron sus patrocinadores durante varios lustros, el Consenso de Washington y las ideas generales sobre política económica antes predominantes se han hundido casi tanto como se hundieron los valores bursátiles en 2008.

La crisis y la salud

Un aspecto que se comenta poco es el de las posibles o probables consecuencias de la crisis sobre la salud. ¿Dañará esta crisis la salud de la población?

En principio, para quienes están familiarizados con el campo de la salud pública, la epidemiología o, en general, con el campo de estudio y práctica social que, bajo diversas etiquetas (demografía, medicina social, salud colectiva) ha investigado la distribución de la

enfermedad y la muerte en las sociedades humanas, una idea básica es que la pobreza, la miseria social y la enfermedad están íntimamente relacionadas. Por ello, lo que sería de esperar es que cuando el estrés y la miseria social aumenten en un periodo de crisis económica, empeoren los indicadores de salud de la población. En otras palabras, se esperaría que en las épocas de recesión económica disminuyeran los indicadores positivos de salud (esperanza de vida, por ejemplo) y aumentaran los indicadores objetivos de falta de salud, es decir, las tasas de morbilidad (frecuencia de enfermedad) y de mortalidad (frecuencia de muerte). Los datos muestran, sin embargo, que esta deducción es completamente equivocada.

La idea de que hay una conexión entre prosperidad económica y mejor salud y la conexión complementaria entre la penuria o la miseria y la enfermedad o la muerte tiene un precedente histórico clave en Malthus, que consideraba las guerras, las hambrunas y las epidemias como los mecanismos básicos para reducir la población al nivel compatible con los recursos alimentarios disponibles.[1] Pero, la idea general de que la prosperidad se asocia a la buena salud, mientras que la pobreza, la miseria y el desempleo se asocian a peor salud tiene también fundamentos empíricos. En primer lugar, la observación de que, en épocas preindustriales, las epidemias y las hambrunas que provocaban picos de mortalidad se asociaban a malas cosechas.[2] En segundo lugar, la observación repetida, en un ámbito geográfico y un momento dado, de que la mortalidad y la clase social están en relación inversa, es decir que a mayor ingreso o años de educación, o mejor calidad del empleo (los tres índices generalmente usados para "medir" la clase social), menor es el nivel de mortalidad (y mayor el nivel de salud individual medido por otros indicadores). En tercer lugar, los estudios en los que se ha comparado la salud de personas empleadas y desempleadas y en los que se ha observado que los desempleados tienden a tener peor salud y mayor mortalidad (aunque también se observó que cuando el desempleo es masivo, las diferencias entre desempleados y empleados tienden a desaparecer).[3]

---

1 T. R. Malthus, *An essay on the principle of population; and, a summary view of the principle of population* [intr. y ed. Antony Flew], Penguin, Harmondsworth, 1970.

2 M. Livi Bacci, *Population and nutrition: An essay on European demographic history* [trad de T. Croft-Murray & C. Ipsen], Cambridge University Press, Nueva York, 1991. D. S. Thomas, *Social and economic aspects of Swedish population movements, 1750-1933,* Macmillan, Nueva York, 1941.

3 S. A. Burgard, J. E. Brand y J. S. House, «Toward a better estimation of the effect of job loss on health», *Journal of Health & Social Behavior* 48(4), 2007, 369-384. P. Martikainen, N. Maki y M. Jantti, «The Effects of Unemployment on Mortality following Workplace Downsizing and Workplace Closure: A Register-based Follow-up Study of Finnish Men and Women during Economic Boom and Recession», *American Journal of Epidemiology* 165(9), 2007, 1070-1075. M. Voss, L. Nylen, B. Floderus, F. Diderichsen y P. D. Terry, «Unemployment and early cause-specific mortality: A study based on the Swedish Twin Registry», *American Journal of Public Health* 94(12), 2004, 2155-2161. M. Bartley y J. Ferrie, «Glossary: unemployment, job insecurity, and health», *Journal of Epidemiology & Community Health* 55(11), 2001, 776-781. D. Dooley, J. Fielding y L. Levi, «Health and unemployment», *Annual Review of Public Health,* 1996, 17449-465. P. T. Martikainen y T. Valkonen, «Excess mortality of unemployed men and women during a period of rapidly increasing unemployment», *Lancet* 348(9032), 1996, 909-914. P. T. Martikainen y T. Valkonen, «The effects of differential unemployment rate increases of occupation groups on changes in mortality», *American Journal of Public Health* 88, 1996, 1859-1861. T. Valkonen y P. T. Martikainen, «The association between unemployment and mortality: causation or selection?» en A. D. Lopez, G. Casell y T. Valkonen (compiladores) *Adult mortality in*

Así, por ejemplo, según un estudio publicado en el 2005, en EEUU las personas de clase social alta –que tienen una buena educación, empleos con remuneración elevada y viven en buenos vecindarios– viven más años y tienen mejor salud que las personas de clases más bajas, muchas de las cuales son personas de raza negra o miembros de otras minorías étnicas. Y la brecha se está ensanchando.[4]

Si las malas cosechas, los menores niveles de ingreso y la desocupación a nivel individual se asocian a peor salud y mayor mortalidad, en una recesión económica en la que aumenta el desempleo y disminuyen en general los niveles de ingreso sería de esperar que la mortalidad tendiera a aumentar. Esta es la idea "lógica" que, apoyada en análisis estadísticos muy oscuros y confusos popularizaron durante el último cuarto de siglo David Harvey y Robert Brenner en numerosas publicaciones.[5]

Sin embargo, los resultados de Brenner no sostenían la idea de que la salud y la mortalidad tiendan a empeorar como consecuencia de las recesiones económicas. Ya en las primeras décadas del siglo XX algunos autores habían percibido con asombro que comparando épocas de expansión y épocas de recesión en economías industriales, la mortalidad tendía a aumentar en las épocas de recesión, no en las de expansión.[6] El hallazgo se olvidó durante casi medio siglo, pero en los años setenta, a la misma vez que Brenner publicaba sus estudios supuestamente probatorios del carácter nocivo de las recesiones para la salud, Joseph Eyer publicaba otros artículos que indicaban exactamente lo contrario e iniciaba una serie de críticas a Brenner[7] respaldadas por otros muchos autores.[8] La polémica, complicada por consideraciones estadísticas y económicas relativamente complejas, quedó limitada a un gueto de especialistas y fue poco lo que trascendió de todo ello al mundo de los profesionales de la atención a la salud y los investigadores de las ciencias sociales no directamente implicados en ese campo de estudio.

---

developed countries: from description to explanation, OxfordClarendon Press, 1996. J. B. Turner, «Economic context and the health effects of unemployment», *Journal of Health & Social Behavior* 36(3)*,* 1996, 213-229.

4 S. Isaacs y S. A. Schroeder, "Class—The ignored determinant of the nation's health", *New England Journal of Medicine* 351(11), 2005, 1137-1142.

5 Por ejemplo, M. H. Brenner, «Mortality and economic instability: detailed analyses for Britain and comparative analyses for selected industrialized countries», *International Journal of Health Services* 13(4), 1983, pp. 563-620. M. H. Brenner, «Political economy and health» en B. C. Amick III *et al*., *Society and health*, Oxford University Press, Nueva York, 1995.

6 W. F. Ogburn y D. S. Thomas, «The influence of the business cycle on certain social conditions», *Journal of the American Statistical Association* 18, 1922, pp. 324-340; D. S. Thomas, *Social aspects of the business cycle,* Knopf, NuevaYork, 1927.

7 J. Eyer, «Prosperity of the Capitalist Variety as a Cause of Death – Reply», *International Journal of Health Services* 9(1), 1979, pp. 161-168; J. Eyer, «Review of [Brenner's] *Mental-Illness and the Economy*", *International Journal of Health Services*», 6 (1), 1976, pp. 139-148; J. Eyer, «Review of [Brenner's] *Mental-Illness and Economy* – Rejoinder», *International Journal of Health Services* 6(1), 1976, pp. 157-168; J. Eyer, «Does unemployment cause death rate peak in each business cycle – Multifactor model of death rate change», *International Journal of Health Services* 7(4), 1977, pp. 625-662.

8 H. S. Gravelle, G. Hutchinson y J. Stern, «Mortality and unemployment: A critique of Brenner's time-series analysis», *Lancet* 2(8248), 1981, pp. 675-679; A. Wagstaff, «Time series analysis of the relationship between unemployment and mortality: a survey of econometric critiques and replications of Brenner's studies», *Social Science & Medicine* 21(9), 1985, pp. 985-996;

En lo que va de siglo las cosas parecen estar cambiando. Una serie de publicaciones han puesto de manifiesto que son las ideas de Eyer y no las de Brenner las que tienen sustento en los datos estadísticos de distintos países. O sea, que son las épocas expansivas más que las recesivas las que tienden a tener efectos nocivos sobre la salud. Este fenómeno se ha comprobado en EE UU,[9] Japón,[10] Alemania,[11] España,[12] Finlandia[13] y los 28 países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tomados en conjunto;[14] y también en países de menor nivel de ingreso como Argentina,[15] México[16] y Corea del Sur.[17] El caso de Suecia, donde existen excelentes estadísticas demográficas desde el siglo XVIII se ha estudiado extensamente.[18] Aunque los resultados iniciales parecían indicar que Suecia era un caso distinto, el análisis de distintos datos y las debilidades metodológicas de algunos estudios sugieren que la relación entre la economía y las fluctuaciones de la mortalidad en Suecia es similar a la encontrada en otros países (aunque, por ejemplo, las expansiones parecen perjudicar la salud menos que en EE UU).

P. J. Cook y G. A. Zarkin, «Homicide and economic conditions: A replication and critique of M. Harvey Brenner's new report to the U.S. Congress», *Journal of Quantitative Criminology* 2(1), 1986, pp. 69-80; J. Winter, «Unemployment, nutrition and infant mortality in Britain, 1920-50», en *The working class in modern British history: essays in honour of Henry Pelling,* Cambridge, Cambridge University Press, 1983; S. Kasl, «Mortality and the business cycle: some questions about research strategies when utilizing macro-social and ecological data», *American Journal of Public Health* 69(8), 1979, pp. 784-789; J. Sogaard, «Econometric critique of the economic change model of mortality», *Social Science & Medicine,* 34(9), 1992, pp. 947-957.

9 C. J. Ruhm, «Are recessions good for your health?», *Quarterly Journal of Economics* 115(2), 2000, pp. 617-650; C. J. Ruhm, «A healthy economy can break your heart», *Demography* 44(4), 2007, pp. 829-848.

10 J. A. Tapia Granados, «Macroeconomic fluctuations and mortality in postwar Japan», *Demography,* 45(2), 2008, pp. 323-343.

11 E. Neumayer, «Recessions lower (some) mortality rates: evidence from Germany», *Social Science & Medicine* 58(6), 2004, pp. 1037-1047 [erratum corrigendum en 59(9):1993].

12 J. A. Tapia Granados, «Recessions and mortality in Spain, 1980-1997», *European Journal of Population* 21(4), 2005, pp. 393-422; J. A. Tapia Granados, «Salud, economía y libertad: cuarenta años de crecimiento económico, transición política y condiciones de salud en España», *Medicina Clinica,* 128(12), 2007, pp. 463-467.

13 J. A. Tapia Granados, «Case Study A2: Do health inequalities increase when employment grows?» en J. Benach, C. Muntaner y V. Santana (comps.), *Employment Conditions and Health Inequalities - Final Report to the WHO Commission on Social Determinants of Health (CSDH) prepared by the Employment Conditions Knowledge Network (EMCONET),* Ginebra, WHO, 2007; T. Valkonen, P. Martikainen *et al.,* «Changes in socioeconomic inequalities in mortality during an economic boom and recession among middle-aged men and women in Finland», *European Journal of Public Health* 10274-280, 2000; M. Jäntti, P. Martikainen y T. Valkonen, «When the Welfare State works: unemployment and mortality in Finland», en G. A. Cornia y R. Paniccià (comps.), *The mortality crisis in transitional economies,* Oxford University Press, Nueva York, 2000.

14 U. G. Gerdtham y C. J. Ruhm, «Deaths rise in good economic times: Evidence from the OECD», *Economics & Human Biology* 4(3), 2006, pp. 298-316.

15 F. Abdala, R. N. Geldstein, S. M. Mychaszula, «Economic reestructuring and mortality changes in Argentina - Is there any connection?» en G. A. Cornia y R. Paniccià (comps.), *The mortality crisis in transitional economies*, Oxford University Press, Nueva York, 2000.

16 F. Gonzalez y T. Quast, «Macroeconomic changes and mortality in Mexico», *Empirical Economics,* 2010.

17 Y. H. Khang, J. W. Lynch y G. A. Kaplan, «Impact of economic crisis on cause-specific mortality in South Korea», *International Journal of Epidemiology* 34(6), 2005, pp. 1291-1301; J. A. Tapia Granados, «Mortality effects of the economic crisis in South Korea», *International Journal of Epidemiology,* 2006.

18 U.G. Gerdtham y M. Johannesson, «Business cycles and mortality: Results from Swedish microdata», *Social Science &.Medicine* 60(1), 2005, pp. 205-218; M. Svensson, «Economic upturns are good for your health but watch out for accidents: a study on Swedish regional data 1976–2005», *Applied Economics* 42(5), 2010, pp. 615-625; M. Svensson, «Do not go breaking your heart:

En conclusión, las visiones conflictivas sobre la relación entre las oscilaciones macroeconómicas y la salud parecen estar dando paso a un consenso cada vez más general sobre una regularidad estadística, la de una oscilación de las tasas de mortalidad paralela a las oscilaciones del crecimiento económico. Quien lea esto ha de saber de todas formas que quien así lo afirma difícilmente puede ser un juez imparcial por ser parte implicada en la polémica.

En lo que sigue se explicarán tres casos concretos de la relación entre la economía y la salud. Los dos primeros, EE UU 1920-1940 y España 1960-2000, revelan la evolución de la salud durante épocas de expansión y épocas de crisis en economías industriales de libre mercado (alias capitalismo típico desarrollado). El tercer "caso" es el de China e India durante el último medio siglo. En estos dos "países en desarrollo", cuyos 2.000 millones de habitantes forman casi un tercio de la población mundial los datos muestran que la evolución de la salud va fundamentalmente en contra de lo que predican los apóstoles del desarrollismo.

Hay un consenso cada vez más general sobre una regularidad estadística: las tasas de mortalidad oscilan en paralelo a las del crecimiento económico

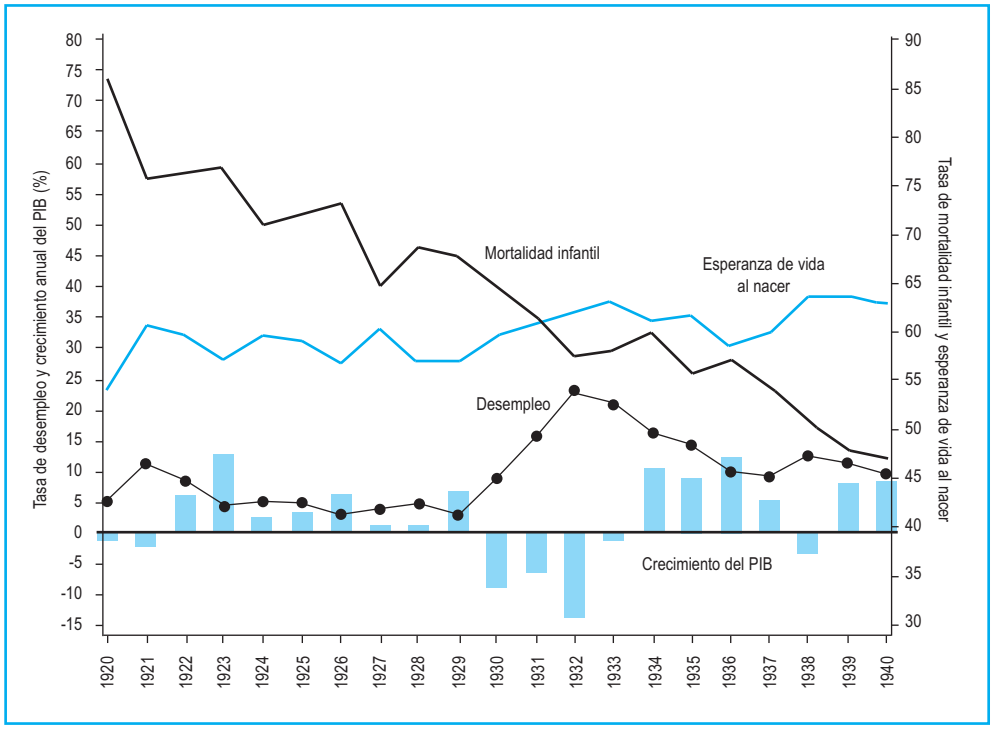
La salud en EE UU entre 1920 y 1940

Los años veinte en EE UU se iniciaron con una importante recesión en la que el PIB se contrajo y la tasa de desempleo llegó a 11% en 1921 (véase figura 2). Durante el resto de la década, que pasó a la historia como *los felices* o incluso *los rugientes* años veinte (por la prosperidad industrial y comercial y el *boom* de la bolsa, donde todos pensaban enriquecerse), el crecimiento económico intenso (que llegó, por ejemplo, a 12,5% en 1923, figura 1) mantuvo las tasas de desempleo a niveles muy bajos, de menos de 5%. En el otoño de 1929 los valores en Wall Street comenzaron a desmoronarse y se inició la Gran Depresión. Durante cuatro años consecutivos el PIB se contrajo, siendo la máxima contracción, 14%, en 1932. El desempleo aumentó hasta llegar a casi 23% en 1932. Entre 1934 y 1937 la economía se reactivó y el crecimiento del PIB alcanzó tasas por encima del 10% en 1934 y 1936, pero en 1938 la economía volvió a entrar en recesión (la llamada recesión de Roosevelt) y el desempleo, que había disminuido entre 1933 y 1937 de más de 20% a menos de 10%, volvió a subir y alcanzó el 12,5% en 1938. Por los altos niveles de desocu-

Do economic upturns really increase heart attack mortality?», *Social Science and Medicine* 65, 2007, pp. 833-841; J. A. Tapia Granados y E. L. Ionides, «The reversal of the relation between economic growth and health progress: Sweden in the 19th and 20th centuries», *Journal of Health Economics* 27(3), 2008, pp. 544-563; J. A. Tapia Granados y E. L. Ionides, «Mortality and macroeconomic fluctuations in contemporary Sweden», *European Journal of Population,* 2011 [en prensa)].

pación durante toda la década algunos autores piensan que la Gran Depresión duró prácticamente toda la década, aunque por lo general el término suele aplicarse estrictamente a los años iniciales de la misma, en concreto de 1930-1933.

Figura 2
Evolución de la economía y la salud en EE UU, 1920-1940

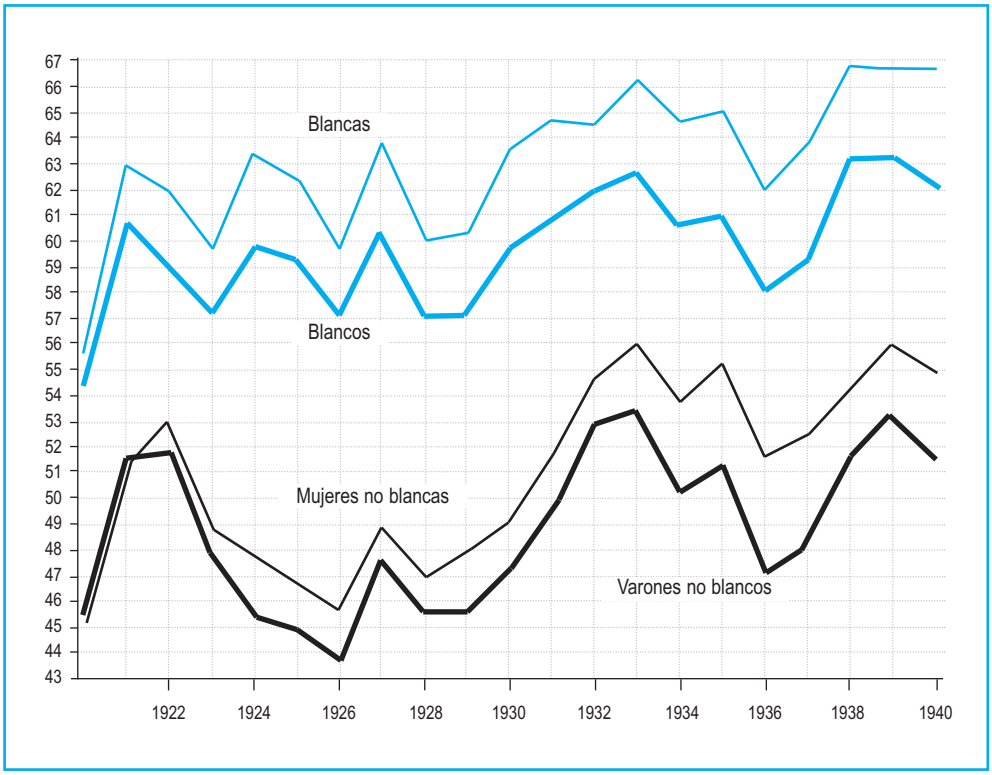


Entre 1920 y 1940 la tendencia general de la mortalidad infantil fue a la disminución y la de la esperanza de vida al nacer fue al aumento, revelando una tendencia general a la mejora de las condiciones de salud (véase figura 1). En los años 1930-1934 en que la crisis fue especialmente severa y el desempleo aumentó hasta alcanzar su máximo histórico en EE UU, la mortalidad infantil no solo continuó disminuyendo sino que disminuyó más rápidamente que en los años previos. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, después de haber oscilado sin una tendencia clara entre 1921 y 1929, entre 1930 y 1934, en los años de depresión intensa de la economía, aumentó considerablemente. Luego disminuyó otra vez en los años de reactivación económica de mitad de la década.

La esperanza de vida de mujeres y varones blancos y no blancos (véase figura 3) revela claramente las peores condiciones de salud de los «no blancos» (que corresponden fun-

damentalmente a afroestadounidenses). Entre 1922 y 1929, la esperanza de vida de los no blancos en EE UU sufrió un claro empeoramiento que, sorpresivamente, se tornó en mejora durante la depresión de 1930-1933. En los años de reactivación económica a mediados de la década la esperanza de vida al nacer empeoró en todos los grupos demográficos.

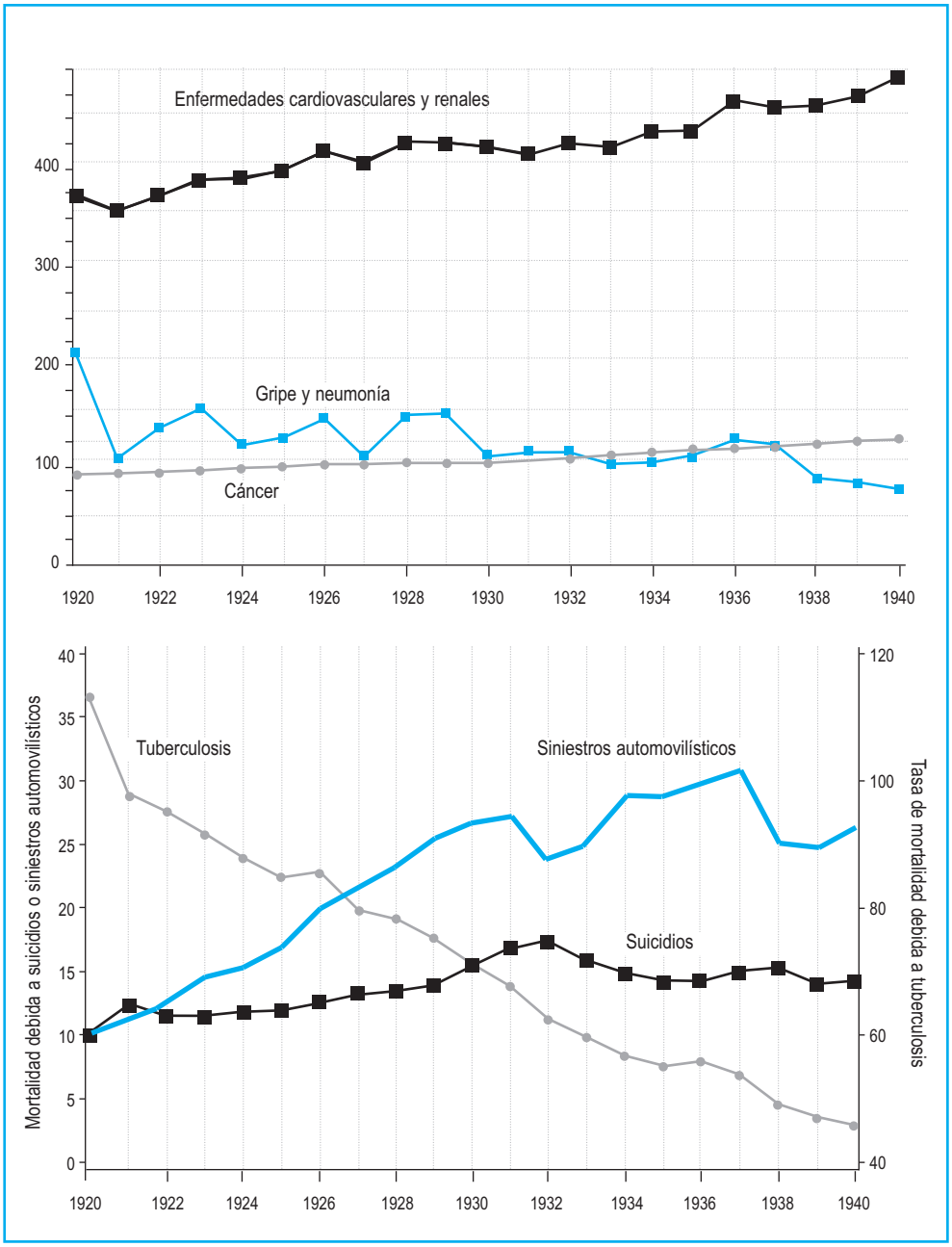
Figura 3
Esperanza de vida al nacer en distintos grupos demográficos, EEUU, 1920-1940



En cuanto a mortalidad por causas específicas (véase figura 4), los datos muestran que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y renales (la causa principal de muerte), aumentó entre 1920 y 1940. Sin embargo, aumentó más rápidamente en los años de expansión (1926, 1928-1929, 1937) que en los de depresión (por ejemplo, 1930-1931). La mortalidad por tuberculosis y por gripe y pulmonía en general disminuyó en 1920-1940 y la mortalidad por cáncer continuó su lenta progresión sin verse afectada de ninguna forma por las oscilaciones de la economía. La única causa de muerte que aumentó claramente en los años de crisis económica son los suicidios, que muestran picos en la recesión de 1921 y luego en la Gran Depresión a comienzos de los treinta y, otra vez, en la recesión de 1938.

Figura 4
Tasas brutas de mortalidad (por 100.000 habitantes) para distintas causas de muerte, EE UU, 1920-1940

Nótese que las causas de muerte del panel superior son cuantitativamente mucho más importantes que las de panel inferior (las escalas son distintas en las gráficas).



En resumen, en términos de mortalidad (o de esperanza de vida al nacer, que se computa a partir de las cifras de mortalidad) los datos indican una mejora general de la salud de la población de EE UU durante la Gran Depresión. Los datos de morbilidad (frecuencia de enfermedad) disponibles no indican un empeoramiento durante las recesiones de los años treinta (véanse figura 5, cuadro 1). Así, la frecuencia de difteria, paludismo, viruela y sífilis se mantuvo durante toda la década de 1930 a niveles inferiores a los de 1928-1929, previos a la Gran Depresión, y la gonorrea se mantuvo a niveles similares a los de 1928-1929 (véase cuadro 1). El sarampión disminuyó durante los años iniciales de la depresión, en 1930-1933, pero aumentó luego en 1934-1935 a la vez que se reactivó la economía. Algo similar ocurrió con la tos ferina. Solo la poliomielitis aguda parece revelar un aumento significativo de notificaciones al comienzo de la Gran Depresión, en 1930-1932; pero luego aumentó incluso más durante la reactivación económica de mediados de la década. Las infecciones meningocócicas (véase figura 5) aumentaron en los años finales del *boom* (1927-1929), disminuyeron rápidamente durante la depresión, hasta 1934, y volvieron a aumentar cuando la economía se aceleró de 1935-1937.

Cuadro 1
Tasas de incidencia de varias enfermedades de notificación obligatoria en EEUU durante la década de la Gran Depresión

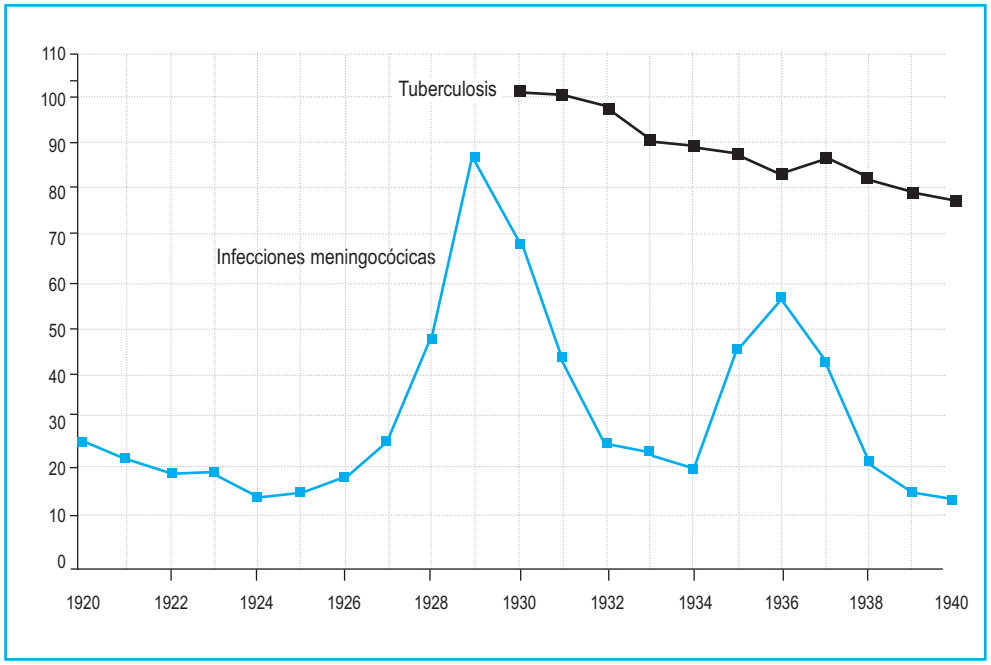
Números índice tomando la incidencia media de los años 1928-1929 como 100

Enfermedad	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Difteria	74	78	66	55	47	42	32	30	32	25
Gonorrea	99	100	97	89	91	96	95	105	112	102
Paludismo	59	42	40	73	77	79	77	62	48	46
Sarampión	89	100	84	83	165	152	61	65	165	80
Tos ferina[a]	91	94	116	96	142	96	78	112	118	94
Poliomielitis aguda	224	382	93	119	176	254	104	221	39	167
Escarlatina[a]	96	110	114	116	119	140	130	122	101	88
Viruela	118	72	27	15	13	19	18	27	34	22
Sífilis	108	115	121	113	109	120	124	154	217	214
Fiebre tifoidea[b]	106	103	103	89	84	69	59	59	55	48

[a] Incluye también casos notificados de faringitis estreptocócica.
[b] Incluye también fiebre paratifoidea.

Fuente: Cálculo del autor a partir de datos tomados de Carter *et al., Historical Statistics of the United States,* Cambridge University Press, 2006.

Figura 5
Incidencia de tuberculosis (por 100.000 personas) e infecciones meningocócicas (por millón) en EE UU, 1920-1940



En resumen, mientras los datos de frecuencia de enfermedad son relativamente ambiguos aunque no muestran ningún aumento de la frecuencia de la morbilidad durante la Gran Depresión, los datos de mortalidad y de esperanza de vida (que es un índice calculado a partir de las tasas de mortalidad) revelan claramente que la salud se estancó o empeoró en los periodos expansivos de los años veinte o treinta y mejoró en las épocas de recesión.[19]

España 1960-2000

En España, la evolución de la esperanza de vida al nacer durante el siglo XX revela un aumento general solo interrumpido por dos terribles "crisis sanitarias" en 1918-1919 y en 1936-1941 (véase figura 6). La primera corresponde a la pandemia de gripe que, como en todo el mundo, en España causó una gran mortandad entre 1918-1919. La segunda crisis es la de guerra civil y los primeros años de la posguerra, cuando resultaron muertos muchas

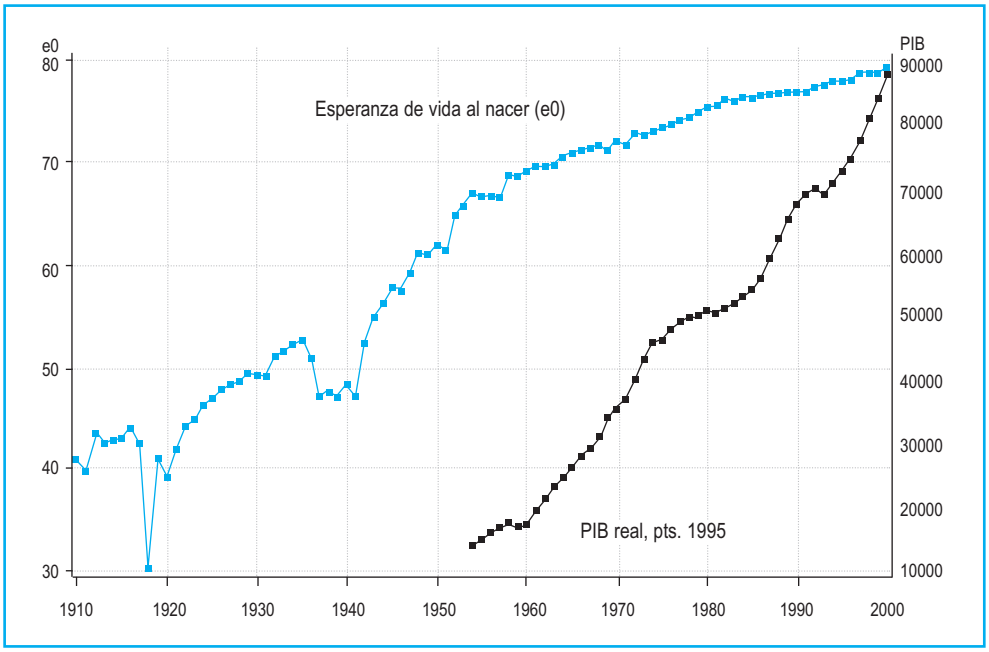
[19] Toda esta sección sobre EE UU en 1920-1940 está basada en J. A. Tapia Granados y A. V. Diez Roux «Life and death during the Great Depression», *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 1061, 2009, pp. 7290-17295 [en castellano disponible en www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=757].

decenas de miles de españoles. Ambas crisis se traducen en un bajón en las cifras de esperanza de vida al nacer en los años correspondientes.

Promediando quinquenalmente el crecimiento económico anual del PIB y el crecimiento de la esperanza de vida, se observa que la mejora de la salud está en relación inversa al crecimiento económico

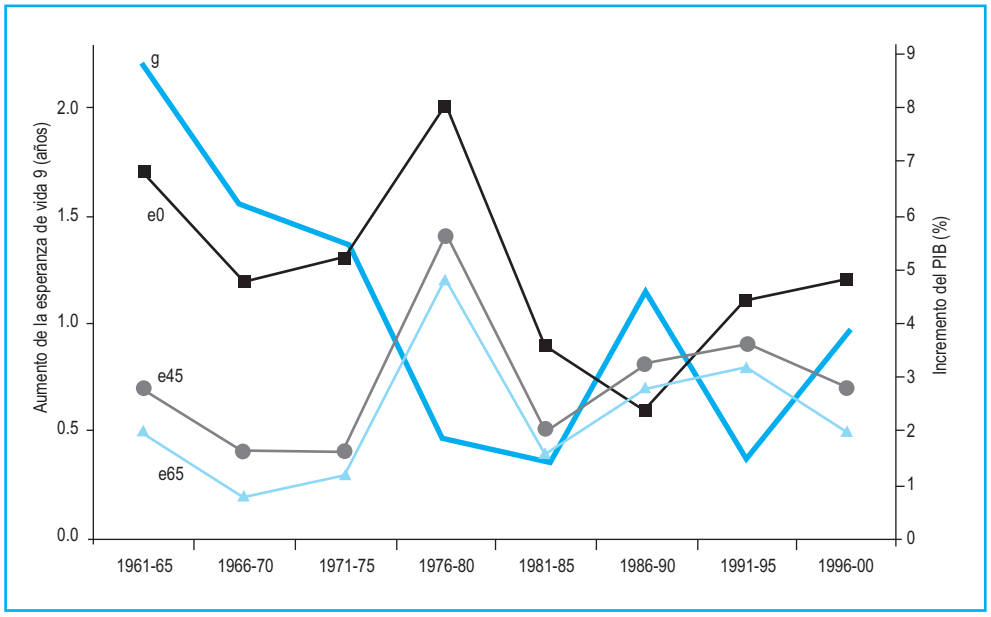
Las cifras de PIB disponibles a partir de los años cincuenta revelan el crecimiento económico general que hizo que el volumen del PIB se multiplicara aproximadamente por un factor de 5 desde mediados de los años cincuenta hasta finales de siglo. La comparación del aumento del PIB y el alza "paralela" de la esperanza de vida al nacer en la segunda mitad del siglo XX (véase figura 6) parece sugerir un sinergismo de ambas variables. El crecimiento económico y los consiguientes niveles crecientes de renta habrían impulsado y favorecido la mejora de la salud. Esta interpretación ha sido habitual, tanto en el caso de España como en el de otros países. Una consideración más detallada de la relación entre ambas variables sugiere, sin embargo, conclusiones bien distintas.

Figura 6
Esperanza de vida al nacer y Producto Interior Bruto (en pesetas de 1995) en España a lo largo del siglo XX



Promediando quinquenalmente el crecimiento económico anual del PIB y el crecimiento de la esperanza de vida (al nacer y a las edades de 45 y 65 años) en los ocho quinquenios del periodo 1960-2000, lo que se observa es que la mejora de la salud está en relación inversa al crecimiento económico. Dicho de otra forma, cuanto más rápida era la expansión de la economía más lenta era la mejora de la salud (véase figura 7). Así el quinquenio en el que más mejoró la salud de los españoles fue entre 1976-1980, en el que la economía apenas creció un 0,5% (de hecho, hubo recesión, o sea contracción económica, durante varios años de ese quinquenio). Fue ese también el quinquenio de la recuperación de las libertades políticas, arrebatadas a los españoles por el régimen militar-católico durante casi cuarenta años. Si ese cambio político tuvo alguna repercusión en la mejora inusitada de los indicadores de salud en esos años es una hipótesis que se ha sugerido en otro lugar[20] y que quizá convendría estudiar más en detalle. De todas formas, el análisis de las tasas de mortalidad y de las tasas de desempleo provinciales en el periodo 1980-1997 lo que muestra es que cuando la economía mejoraba las

Figura 7
Crecimiento económico anual promedio (g) y ganancia anual media de esperanza de vida (al nacer, e0; a los 45 años, e45, y a los 65 años, e65) en España durante los ocho quinquenios del periodo 1960-2000



Fuente: Cálculos propios según datos de esperanza de vida tomados de R. Gómez Redondo y C. Boe, «Decomposition analysis of Spanish life expectancy at birth: Evolution and changes in the components by sex and age», *Demographic Research* 13(20), 2005, 521-546.

20 J. A. Tapia Granados, «Salud, economía y libertad: cuarenta años de crecimiento económico, transición política y condiciones de salud en España», *Medicina Clínica* 128(12), 2007, pp. 463-467.

tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, infecciosas y respiratorias tendían a subir. Solo los suicidios –de varones, pero no de mujeres– aumentaban al aumentar el desempleo provincial; la mortalidad por las demás causas de muerte tendía a disminuir.[21]

China e India

En las décadas siguientes a la formación de la República Popular en 1949, en la economía china, planificada centralmente por el Partido Comunista, prácticamente no había lugar alguno para el mercado y la empresa privada. La economía hindú en las décadas que siguieron a la independencia de la India en 1947 nunca tuvo el grado de estatalización de la economía maoísta, pero la influencia soviética en India fue grande en esa época, el sector estatal de la economía era muy poderoso, muchas actividades económicas se desarrollaban bajo planificación central y había serias restricciones al mercado y a la inversión foránea. En ambos países hubo un estancamiento económico relativo en las décadas de 1950 a 1970. La política económica cambió luego durante los años ochenta, cuando se abrieron las puertas al capital privado nacional y extranjero, se privatizaron muchas empresas y en general se liberalizó la economía y se dieron muchas facilidades para el funcionamiento de los mercados. El crecimiento económico se aceleró enormemente en ambos países.

En países de alto o medio ingreso las condiciones de trabajo y la contaminación atmosférica parecen empeorar cuando la actividad económica se acelera

En China y, en menor grado, en India, había habido importantes mejoras de la salud en las décadas previas a la liberalización de los años ochenta.[22] La mortalidad infantil se estaba reduciendo sustancialmente en los dos países y la mortalidad a otras edades estaba mejorando sustancialmente. Sin embargo, en las décadas de liberalización del mercado y rápido crecimiento económico la salud se ha estancado y prácticamente no ha habido progreso respecto del nivel alcanzado en los años ochenta.[23]

21 J. A. Tapia Granados, «Recessions and mortality in Spain, 1980-1997», *European Journal of Population* 21(4), 2005, pp. 393-422.

22 El caso de la hambruna causada en China por las políticas de industrialización "heterodoxa" (el Gran Salto Adelante) de 1959-1961 es controvertido. Hay quienes dicen que tal hambruna pudo causar varias decenas de millones de muertos; otros niegan que existiera incluso.

23 D. M. Cutler, A. Deaton y A. Lleras-Muney, «The Determinants of Mortality», *Journal of Economic Perspectives* 20(3), 2006, pp. 97-120.

En el caso de China, las causas del estancamiento de la salud desde los ochenta no parecen muy difíciles de intuir. La desigualdad social aumentó enormemente e incluso la pobreza aumentó en zonas rurales, donde además se desmanteló por completo el sistema de médicos descalzos que proporcionaba atención sanitaria básica, prácticamente gratuita, a la población.[24] Además, la vertiginosa industrialización de las décadas recientes a menudo ha creado condiciones de vida y trabajo muy insanas para los cientos de millones que se han desplazado de las zonas rurales a las ciudades. La mortalidad por lesiones y traumatismos en los centros de trabajo alcanza niveles altísimos comparada a la de otros países, y los niveles de contaminación atmosférica se considera que pueden ser responsables de medio millón de muertes anuales.

Conclusión

Hay pruebas sobradas de que los periodos de expansión económica acelerada son perjudiciales para el avance de la salud. Ciertamente, la salud ha mejorado mucho en casi todos los países del mundo en el último siglo, a la vez que el crecimiento económico hacía aumentar los niveles de ingreso per cápita. Pero los factores clave para el progreso de la salud parecen ser una alimentación suficiente –que ya se ha tornado excesiva en muchos países–; la creación de infraestructuras que permitan el suministro general de agua no contaminada; la generalización de la educación primaria; y un ambiente que no sea nocivo para la salud. Inicialmente, el crecimiento económico favorece esos procesos, que a menudo son desarrollos a largo plazo que no tienen nada que ver con las fluctuaciones de la economía. Una vez alcanzado cierto nivel de ingreso, el crecimiento económico no solo no favorece la salud, sino que comienza a perjudicarla. De hecho, para la salud las épocas de prosperidad económica son peores que las épocas de recesión.

Los mecanismos concretos por los que los periodos de expansión económica acelerada dañan la salud no están todavía claros. En países de alto o medio ingreso las condiciones de trabajo (horas extraordinarias, ritmos de trabajo) y la contaminación atmosférica parecen empeorar cuando la actividad económica se acelera. También en las épocas de "prosperidad" aumenta el consumo de productos nocivos –tabaco, alcohol y comidas grasas– y disminuyen actividades beneficiosas como el ejercicio físico, las interacciones sociales, el sueño y, quizá, la actividad sexual. Esas podrían ser las causas de que en esas épocas aumente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y se produzcan más traumatismos y lesiones laborales. También en esas épocas aumenta el tráfico industrial, comercial y

[24] J. Watts, «China admits first rise in poverty since 1978», *The Guardian*, 20 de julio, 2004; H. W. French, «Wealth grows, but health care withers in China», *The New York Times,* 14 de enero, 2006, p. A1; J. Amon, «High hurdles to health in China» en M. Worden (comp.), *China's great leap: The Beijing games and Olympian human rights challenge*s, Seven Stories Press, Nueva York, 2008.

recreativo y hay más muertes en las carreteras. En España todas esas causas de muerte son cuantitativamente más importantes que los suicidios que, contrariamente, aumentan (en varones) durante los periodos de recesión. Desde el punto de vista práctico esto exige prestar especial atención en las épocas de crisis económica a la prevención del suicidio, un fenómeno revelador del deterioro social que a menudo se da en jóvenes y que, además del sufrimiento en los que sobreviven y la muerte del que lo padece, desde el punto de vista sanitario provoca para la sociedad una pérdida de muchos años potenciales de vida sana.[25]

[25] El filme *La vida de los otros* hace interesantes alusiones a este carácter sintomático del suicidio como indicador de deterioro social precisamente en el contexto de la Alemania oriental, en cuya economía estatalista no había desempleo. La referencia sociológica obligada al hablar del suicidio es la obra de É. Durkheim, *Suicide. A study in sociology*, Free Press, Nueva York, 1966. Sin embargo, las consideraciones de Marx, que se basó en gran parte en las de un autor francés, Peuchet, fueron previas (véase E. A. Plaut y K. Anderson (eds.), *Marx on suicide*, Northwestern University Press, Evanston, 1999.

Barómetro Social de España
www.barometrosocial.es

Actualizados los indicadores con los últimos datos oficiales disponibles

Una evaluación rigurosa de la situación social de España desde 1994 a 2009

Una herramienta on-line al servicio de la investigación social:

- Un sistema de 189 indicadores, todos procedentes de fuentes oficiales.
- 34 índices sintéticos que corresponden a once ámbitos.

Análisis de la evolución de las principales dimensiones sociales:

renta y patrimonio • fiscalidad • empleo • educación • vivienda • protección social • seguridad y justicia • medio ambiente • participación ciudadana • relaciones internacionales • igualdad de género

El Barómetro Social de España es obra del Colectivo Ioé.

El libro publicado por CIP-Ecosocial refleja el análisis de la situación social de España desde 1994 a 2008

A la venta en **www.libreria.fuhem.es**

La actualización de los indicadores y los análisis periódicos se reflejan en la página web:
www.cip-ecosocial.fuhem.es

L. E. ALONSO, C. J. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, R. IBÁÑEZ ROJO, C. PIÑEIRO

Consumo y estilos de vida sostenibles en el contexto de la crisis económica[1]

La situación de crisis económica que se ha instalado en España desde hace más de dos años está teniendo efectos significativos en las formas de relación de la ciudadanía con el consumo que pueden ir más allá de la caída de las cifras de ventas. A ello se suma una preocupación creciente por la sostenibilidad de los patrones consumistas actuales y el surgimiento de pautas de consumo responsable que, con la profundización de la crisis económica, afrontan nuevas oportunidades y riesgos. Para ahondar en estos aspectos, hemos querido reconstruir el mapa de necesidades y prácticas de consumo en España, valorar el impacto de la crisis en las mismas y vislumbrar las prácticas de consumo concretas de cada uno de los grupos sociales.

Luis Enrique Alonso es catedrático de Sociología, UAM

Carlos J. Fernández Rodríguez es profesor de Sociología, UAM

Rafael Ibáñez Rojo es profesor de Sociología, UAM

Concepción Piñeiro es investigadora del Departamento de Ecología, UAM

El *boom* económico del período 1995-2007 había favorecido el ascenso de una cultura fuertemente consumista[2] (como prueba el espectacular crecimiento de la deuda privada) que podría haber alcanzado sus límites con la llegada de la crisis. Sin embargo, es evidente que el impacto de esta última no ha sido el mismo para todos los grupos sociales, pues el desempleo o los

[1] Las conclusiones que presentamos se basan en los resultados de una investigación en la que ha estado involucrado el Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial), el Centre de Recerca i Informació en Consum, el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental y nosotros mismos. Todos los resultados de este proyecto de investigación serán publicados en el marco del proyecto Cambio Global 2020-2050 en España. Quisiéramos agradecer a Álvaro Porro (Centro de Investigación e Información en Consumo, CRIC) tanto su participación en la investigación como los comentarios realizados a este texto.

[2] Sobre estas cuestiones, véase Colectivo IOÉ, *Barómetro social de España. Análisis del período 1994-2006*, Traficantes de Sueños CIP-Ecosocial, Madrid, 2008; y L. E. Alonso, C. J. Fernández Rodríguez, «De la norma de consumo al consumo sin norma: precariedad laboral, especulación inmobiliaria y nuevas formas de consumo en España», en J. F. Tezanos (ed.), *Juventud y exclusión social: décimo foro sobre tendencias sociales*, Editorial Sistema, Madrid, 2009, pp. 103-136.

recientes recortes sociales han afectado de forma muy desigual a estos. Por ello, es más probable que exista una fragmentación importante en los discursos sociales que se están articulando en torno a la relación entre consumo, crisis y mercado de trabajo, con la posibilidad de que se estén generando nuevas reflexiones sobre lo que significa consumir e incluso asumir nuevas prácticas alternativas.

La finalidad de nuestro estudio ha sido adentrarnos en la comprensión del funcionamiento de la gramática de las necesidades y las prácticas de consumo reales, con el objetivo último de entender su relación con la percepción de bienestar. Para ello, hemos partido de un análisis sociológico construido sobre una metodología cualitativa, con la utilización de la práctica de los grupos de discusión, tratando de integrarnos en la perspectiva de la llamada por algunos Escuela Cualitativista de Madrid, y tomando como referencia, entre otros, los trabajos de Alfonso Ortí o Luis Enrique Alonso.[3] Se ha diseñado, así, un mapa de posiciones diferenciales para lograr una muestra cualitativa y un guión temático, que sirvieran como instrumento de desarrollo de los grupos de discusión.[4] A lo largo de este artículo, haremos referencia a cada uno de los grupos aludiendo a su perfil.

Percepción de las necesidades, bienestar y adaptación a la crisis

«Sucede, en fin, que en la época en la cual la subjetividad se ha vuelto más inestable, elástica, flexible y modulable, es también la era en la cual la identidad se ha convertido en la más tiránica y rígida de las exigencias individuales»
José Luis Pardo[5]

Uno de los aspectos que pretendimos conocer mejor era el sentido práctico que los distintos grupos sociales dan al concepto mismo de bienestar y el desarrollo de sus estrategias de adaptación a la crisis en el terreno del consumo. Ello nos permitiría indagar en la auto percepción de sus condiciones de vida, cuestión fundamental de cara a reflexionar acerca de cómo se interpreta socialmente dicho concepto de bienestar.

---

[3] A. Ortí, «La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta o semidirecta y la discusión de grupo», en M. García Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira (comps.), *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*, Alianza Editorial, Madrid, 1986, pp. 171-203; L. E. Alonso, *La mirada cualitativa en sociología*, Fundamentos, Madrid, 1998.

[4] El trabajo de campo se llevó a cabo en las primeras semanas de febrero de 2010, con los siguientes perfiles de participantes: 1) empresarios del sector de la construcción y la hostelería, hombres, 55-65 años, Málaga (a partir de aquí, perfil RG1); 2) amas de casa de clase alta, mujeres, 45-55 años, Madrid (perfil RG2); 3) pequeños comerciantes y trabajadores autónomos, mixto, 45-60 años, Valencia (RG3); 4) empleados de rango medio del sector servicios, mixto, 25-35 años, Zaragoza (RG4); 5) funcionarios de rango medio, mixto, 35-45 años, Barcelona (RG5); 6) amas de casa de clase baja, mujeres, 35-45 años, Sevilla (RG6); 7) trabajadores especialistas en grandes empresas industriales y de servicios, hombres, 50-60 años, Madrid (RG7); 8) trabajadores jóvenes de la hostelería, mixto, 20-30 años, Gran Canaria (RG8); y 9) becarios y trabajadores en formación, mixto, 25-35 años, Barcelona (RG9).

[5] J. L. Pardo, *Nunca fue tan hermosa la basura*, Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2010, p. 178.

En los discursos recogidos en los grupos se ha hecho patente la fuerza simbólica que han cobrado las marcas blancas, la búsqueda sistemática de las ofertas, los descuentos, etc. Este imaginario circula cuando los grupos son preguntados por los efectos sobre el consumo de la crisis económica, y lo hace dentro de una representación dramatizada de la crisis que permite comprender la rapidez con la que se han disparado las tasas de ahorro en nuestro país.[6] La percepción de la crisis es, obviamente, generalizada, si bien sus consecuencias concretas son valoradas de formas muy diferentes en los diferentes grupos sociales analizados. Aunque los efectos específicos hayan sido nulos en términos individuales en las posiciones supraordinadas, la dramatización de la crisis en dichas posiciones supone un cierto redescubrimiento de la extensión y generalización de los riesgos que concuerda con la teoría de *desestabilización de los estables*.[7] La dramatización de la crisis facilita la uniformización de los discursos en torno a la crisis en las posiciones sociales supraordinadas, creando un marco ideológico que contribuye a no cuestionar las diferencias sociales y a racionalizar la estructura y el orden social.

En cambio, en los sectores populares contemplados, la crisis se vive con un dramatismo diferente. La posición de partida es la de quien siempre ha tenido que mirar por el dinero y, en concreto, se marca una primera distancia con respecto a quienes sufren la crisis como una novedad. Tras la naturalidad con la que es asumida la crisis por las amas de casa de clase baja se esconde una relación muy racionalizada con el consumo y la gestión cotidiana de los ingresos, que no se ve muy modificada en sus prácticas por los cambios en la percepción de la situación general de crisis, que es exactamente la negación del tipo de comportamiento y de subjetividad que les va a ser atribuido por las posiciones más supraordinadas. En la ética de consumo popular de las amas de casa se encuentra muy presente la huida del crédito y de la dependencia con los bancos, las deudas, los créditos, las tarjetas, etc. Pero hay diferencias entre grupos de posición subordinada, porque el discurso de los jóvenes de posición social modesta, más presionado tanto en lo laboral como en los hábitos de consumo, sí expresa con angustia la situación de necesidad a través de la que viven la crisis y la relación con el consumo. En estas fracciones de los jóvenes y amas de casa no integradas en determinadas prácticas de consumo, no hay percepción de «culpa» con respecto al derroche y la ostentación de riqueza «ficticia» –responsables, en último término, de la «caída» actual. Sin embargo, el discurso de una fracción de los trabajadores varones especialistas de grandes empresas industriales y de servicios representa el punto de inflexión, la ambivalencia ideológica de quienes ya han accedido a niveles altos de consumo y abren el hueco para interiorizar la culpa y la responsabilidad propia en la situación de crisis.

---

6 En el momento más agudo de la crisis la tasa de ahorro de las familias alcanzó uno de sus máximos históricos en las épocas recientes. En el cuarto trimestre de 2009, la tasa de ahorro de los hogares españoles alcanzó el 24,7%, su nivel más alto desde el año 2000.

7 Este concepto fue acuñado por el sociólogo Robert Castel, *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Paidós, Buenos Aires, 1997.

Existe un discurso moral dominante que critica los excesos del consumismo. Nadie puede negar, al ser interpelado por el moderador, que se consume «más de la cuenta». Esta línea discursiva en torno a los «valores» y la «moral» asociada al consumo, adquiere buena parte de su eficacia simbólica –desde hace muchos años, y todavía en la actualidad– mediante la caracterización de una singular idiosincrasia «española» frente a Europa, que será convertida en responsable de nuestro «retraso». Estas características particulares del «ser español» favorecen que las desigualdades concretas pasen a un segundo plano; y permiten, a su vez, que esos modos diferentes de representar la crisis y sus efectos no tengan las mismas posibilidades de circulación social y la misma eficacia simbólica. El espacio ideológico que abren los tópicos sobre la «cultura» española permite la circulación de dos grandes líneas discursivas represivas para el discurso popular: *la centralidad del pequeño empresario y la eficiencia tecnocrática*. Esta singularidad del «caso español» lleva los discursos de las mayorías dominantes a trascender las prácticas concretas –y diferenciadas– para discutir sobre la cultura y los valores que se hayan vinculados.

Apenas hay margen ni criterios de racionalidad común desde los que sugerir un límite al tipo de necesidades que construye la sociedad de consumo

Dentro de este movimiento ideológico ocupa un lugar central el discurso del pequeño negocio y del trabajador autónomo. Su discurso representa la mediación necesaria para llegar a una crítica del consumismo capaz de recuperar la ética del esfuerzo y la responsabilidad individual. La posición de los pequeños empresarios y trabajadores autónomos representa la encarnación del movimiento más aleatorio del mercado, y por ello el discurso de su fracción conservadora es la punta de lanza ideológica del discurso liberal. Ellos son quienes asumen los máximos riesgos, y quienes dotan de legitimidad al conjunto del sistema.

En cuanto a los cambios producidos por la crisis económica y la posible percepción de una crisis ecosocial, casi todos los grupos, con independencia de su condición social, reflejan un primer movimiento en sus discursos que recoge la sensación de *miedo* que ha desatado la crisis. Miedo a que «de la noche a la mañana puedes estar en la calle», puesto que pierde fuerza la antigua dualización entre estables y precarios: ahora ningún puesto de trabajo es seguro. Y sobre la base de esta crítica genérica y moral al derroche consumista –que se proyecta hacia los sectores populares– se esconde, sin embargo, un relativo cinismo que se hace patente cuando los grupos son cuestionados en torno a los límites del modelo actual de consumo. Porque pese al consenso obvio y superficial que existe en torno al consumismo, ningún grupo es capaz de plantear principios para poner límites al mismo. En los grupos apenas hay margen ni criterios de racionalidad común desde los que sugerir

un límite al tipo de necesidades que construye la sociedad de consumo.[8] Sólo los trabajadores industriales especialistas mencionan las relaciones entre prácticas de consumo y condiciones de trabajo. En el discurso más popular –representado por el grupo de amas de casa realizado en Sevilla– el consumo es una trampa explícita y perfectamente conocida. El rechazo a caer en formas de endeudamiento de cualquier tipo y la necesidad de contar con ahorros para afrontar cualquier situación imprevista sigue siendo el centro del discurso popular en torno al consumo. Precisamente por ello, la frontera entre lo básico y lo innecesario se considera de sentido común, y en ningún momento el discurso queda atrapado en un relativismo de la necesidad y el bienestar –como ocurre en casi todos los demás grupos–.

En todos los grupos con un cierto nivel de renta no hay espacios para el *no consumo*. La sociedad de consumo es perfectamente capaz de presentarse a sí misma como un monstruo –en lo colectivo– y como una trampa –en lo individual–. Pero se trata de una realidad completamente ajena al deseo y a las posibilidades de intervención de las y los participantes. Una vez la política ha sido negada –en un marco de relativismo moral extremo–, sólo queda el lamento cínico. Está además presente la nostalgia del pasado en casi todos los grupos, que se remiten en algún momento a un idealizado pasado en que la mayor parte de las cosas que tenemos ahora ni existían ni eran necesarias. Pero esta memoria ya no cumple el papel de inventar otros futuros, de hacer visibles nuevas prácticas: la memoria únicamente funciona en todos los grupos como negación del presente.

Existe de manera general en los grupos una percepción separada de las crisis económica y ecológica, de manera que la crisis económica se ve cercana y real, pero la crisis ecológica se identifica con algo lejano, aunque cierto en general (excepto para un sector negacionista). Los límites biofísicos se expresan de forma muy minoritaria, así como cuestiones tales como la obsolescencia planificada y otras asociadas al modelo actual de producción-distribución-consumo (deslocalización de la producción, el transporte de los alimentos, la dependencia del petróleo, los transgénicos, etc.). Estas críticas a la insostenibilidad del sistema y la amenaza del fin de las formas de vida llevadas hasta ahora se expresan en forma de lamento y fatalismo, como algo casi inevitable, poniendo en algunos grupos la esperanza en las generaciones más jóvenes que tienen ya una educación ambiental. Hay discursos encontrados acerca de si la crisis económica es una oportunidad para un cambio de patrones de consumo actuales hacia unos más sostenibles. En algunos grupos, si bien de forma minoritaria, se recoge cómo la crisis económica aleja las opciones de consumo ecológico como los productos ecológicos que se consideran más caros y en otros se explicitan sinergias entre el ahorro económico y la reducción de impacto ambiental, como por ejemplo en el uso de la bicicleta como medio de transporte. De manera minoritaria, casi testimonial,

[8] Para la propia sociología del consumo tampoco la cuestión «normativa» sobre los límites para la construcción de necesidades sociales ha sido un objeto central de su análisis: véase A. Sayer, «(De)commodification, consumer culture, and moral economy», *Environment & Planning D: Society & Space*, 21(3), 2003, pp. 3-41.

parecen emerger alternativas ante la crisis, como la de compartir recursos (libros, coche, CD, etc.), usar equipamientos de uso colectivo de recursos como las bibliotecas o reutilizar objetos desechados, así como buscar otros lugares donde comprar, como, por ejemplo, la vuelta al mercado tradicional.

Prácticas de consumo concretas y sostenibilidad

«No existe ningún mercado que funcione tranquilamente»
Alan Thein Durning[9]

El discurso que emerge en los grupos nos permite vislumbrar las prácticas de consumo concretas de cada uno de los grupos sociales, y facilita el análisis de aspectos como el ocio y el tiempo libre, la alimentación o la movilidad. Además, y de manera consecuente, nos permite explorar la relación entre los hábitos actuales de consumo y la sostenibilidad de los mismos, y si la crisis ha afectado a dichos hábitos o no. Parece claro que las renuncias al prototipo de estilo de vida consumista actual se consideran parte de una opción moral basada en la mentalidad o los valores o consecuencias de una pérdida de estatus. Las comodidades que se han mencionado con mayor resistencia (aunque no en todos los grupos) como aquellas a las que más cuesta renunciar son: el coche (desde el uso laboral y la comodidad), el confort térmico (la calefacción), y la tecnología de la comunicación (móvil, internet, ordenadores, etc.). Uno de los factores condicionantes y clave en el discurso sobre las renuncias es la tecnología, a la cual parece que no se puede renunciar por la pérdida de funcionalidad del contexto en el que vivimos y sus elementos, y se le atribuye tanto la capacidad de cambiar las situaciones actuales como la que limita y controla las posibilidades de cambio. Comprender la importancia de este factor está relacionado con la *tecnolatría* que ha caracterizado Jorge Riechmann[10] dentro de las ilusiones de omnipotencia: uno de los tres rasgos degenerativos de nuestras sociedades actuales, junto con la renuncia a saber (*denegación*) y la negativa a asumir las consecuencias de nuestros actos (*irresponsabilidad*).

Al hablar de prácticas de consumo más sostenibles, aparece la presencia cotidiana de dos prácticas concretas: la de apagar las luces y la separación para el reciclaje, lo que concuerda con los resultados de otros estudios cuantitativos,[11] además de otros elementos recurrentes como el uso de bombillas de bajo consumo, por el ahorro económico que

9 A. T. Durning, *¿Cuánto es bastante?*, Apóstrofe, Barcelona, 1994, p. 89.

10 J. Riechmann, *La habitación de Pascal*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2009, p. 26.

11 P. A. Meira, M. Arto y P. Montero, *La sociedad ante el cambio climático. Conocimientos, valoraciones y comportamientos en la sociedad española*, Fundación MAPFRE/Universidad de Santiago de Compostela, 2009.

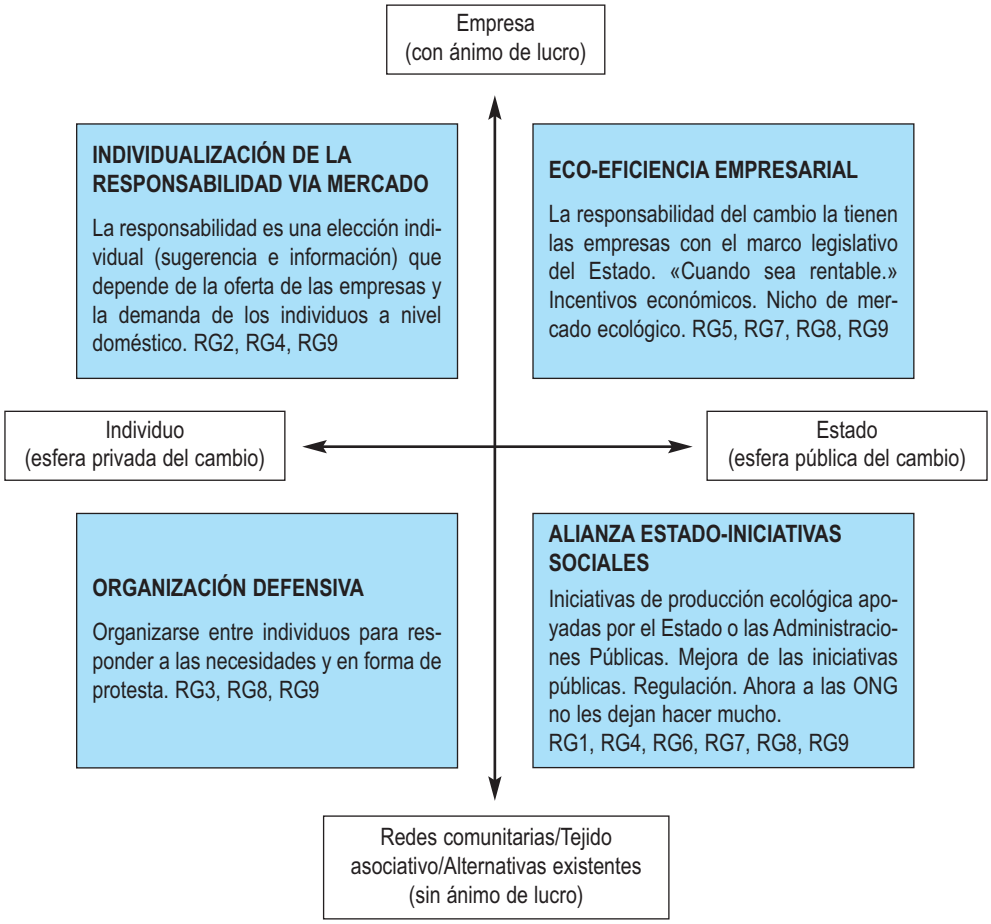
suponen. Otra práctica muy reiterada en algunos grupos es el uso del transporte público y destaca la presencia en el discurso de la bicicleta como potencial medio de transporte, a pesar de las limitaciones percibidas para su uso como la ausencia de infraestructuras, el riesgo en las ciudades, la falta de cultura, educación y respeto en relación a este vehículo, etc.

> Una vez la política ha sido negada
> –en un marco de relativismo moral extremo–,
> sólo queda el lamento cínico

La escasa presencia de discursos críticos con respecto al modelo actual de consumo en relación a las posibilidades que tienen unas prácticas de consumo alternativas que fomenten la auto responsabilidad (canales alternativos, consumo responsable, comercio justo, productos ecológicos, etc.), podría obedecer a que hemos partido del binomio consumo-crisis al abordar los temas en las reuniones de grupo. Nuestros grupos no reflejan el verdadero peso social que estos discursos –y sus prácticas asociadas– están teniendo en la actualidad. No obstante, sí pueden servir para tomar conciencia de las dificultades para construir discursos relativos a los límites que plantea la construcción social de las necesidades, cuando el marco para la discusión son las pautas individuales de consumo. Los discursos sobre la responsabilidad de otras formas de consumo más sostenible están cargados de una fuerte ambivalencia, ya que no están construidos respecto a una agencia o experiencia activa, sino que son conocimientos mediados; por ello, faltan argumentos de lo cotidiano, y se oscila entre una visión positiva y una visión negativa, entre las cuales se esgrimen argumentos contradictorios, apareciendo un discurso cargado de dobles vínculos. Se trata, en la mayoría de los grupos, de posicionamientos defensivos, por lo cual es difícil encontrar discursos que propongan alternativas y cambios.

El discurso en relación a nuevas formas de consumo sostenible en sus diferentes facetas y vínculos con la crisis (renuncias asumibles, percepción del discurso ambiental, los límites biofísicos y la crisis ecosocial, responsabilidad de un cambio hacia la sostenibilidad, etc.) está sometido por tanto a fuertes tensiones. En el análisis de los grupos, se pueden describir cuatro discursos básicos, configurados en dos ejes que sintetizan las tensiones principales: el primer eje de estructuración es el de la individualización de la responsabilidad o la responsabilidad del cambio en la esfera privada frente a la responsabilidad institucional, y la regulación de los cambios; como segundo eje de estructuración, tendríamos las empresas en el contexto de mercado actual frente a las redes comunitarias o el tejido asociativo, cuya tensión principal radicaría en la diferencia entre el ánimo de lucro de las primeras y la ausencia de ánimo de lucro de las segundas:

Figura 1: Los discursos básicos en torno al consumo sostenible



La responsabilidad se reparte, así, en los diferentes grupos entre los gobiernos e instituciones a diferentes niveles de competencias, las empresas, y la ciudadanía; aparece un discurso más institucional, otro más vinculado al tándem empresas-instituciones y otro más individualista. A lo largo de las reuniones, surgieron algunas referencias a la necesidad de que la ciudadanía se organice para dar respuesta a sus necesidades, así como a la idea de repartir y compartir responsabilidades: todas, no obstante, de manera muy minoritaria. También, a la hora de hablar de responsabilidad, aparecen expresiones vinculadas al malestar y al sentimiento de culpa, que rápidamente se disuelven. Se percibe además una presión institucional hacia algunos hábitos, como la separación de la basura doméstica, y aparece en los grupos una incipiente institucionalización y una mercantilización del discurso ambiental, al menos en los temas explorados como la separación doméstica de residuos para el reciclaje y el cambio climático.

La crisis económica instalada tras un período de consumismo sin precedentes históricos no parece haber servido para cuestionar nuestro modelo socioeconómico y de consumo

Se construyen, asimismo, argumentos de negación de otros modelos de producción-distribución-consumo más sostenibles por el tecno-fatalismo («técnicamente es imposible», «somos muchos»). En los grupos aparecen representados los discursos negacionistas del cambio climático, así como el escepticismo y la desconfianza hacia los problemas ambientales y las opciones de consumo ecológico.[12] El discurso publicitario consigue integrar los productos ecológicos de tal manera en su sistema de diferencias que en las mayorías dominantes no es posible sacar lo ecológico de la esfera publicitaria. La desconfianza y desinformación no sólo se aplica a los productos ecológicos sino también a otras opciones de consumo vinculadas a criterios sociales, como el comercio justo, que es percibido como ayuda, no como una alternativa de economía solidaria y se engloba dentro de la lógica de la presión moral, lo que conlleva eludir la responsabilidad y conduce a la *ecofatiga*.[13] En las posiciones más conservadoras de los grupos, esta desconfianza se traslada a una crítica global de todo el discurso en torno a la crisis y el límite ecológico del modelo actual de producción y consumo, y ese constituye el hueco en el que puede circular no ya un discurso desconfiado e indiferente, sino un discurso negacionista y perfectamente consciente.

12 Heras distingue tres respuestas asociadas a la negación del cambio climático y la negación de posibles acciones responsables ante el cambio climático: *negacionistas* (niegan que esté sucediendo, y niegan el factor humano en el fenómeno o su peligrosidad); *refractarias* (ignoran activa o deliberadamente el problema); e *inconsecuentes* (conocen y comprenden el problema, pero actúan en consecuencia). F. Heras, *Negacionistas, refractarios e inconsecuentes: sobre el difícil reto de reconocer el cambio climático.* Seminario «Biodiversidad, cambio climático, desertificación y lucha contra la pobreza: cuatro grandes retos, una solución global», Madrid, 22 y 24 de septiembre de 2010. Organizado por la Fundación IPADE en el marco del Convenio AECID.

13 Las estrategias analizadas de las instituciones de carácter político, promotoras habituales de la comunicación ambiental, fundamentadas en la información, la orientación de las conductas y la comunicación normativa, pueden facilitar cierta sensación de exceso de responsabilización entre sus públicos destinatarios, lo que puede potenciar precisamente rechazo hacia la responsabilidad, inhibición y *ecofatiga* (D. L. Uzzell, «The Psycho-Spatial Dimension to Global Environmental Problems», *Journal of Environmental Psychology* 20, 2000, pp. 307-318.; E. Pol, *Impacte Social, Comunicació Ambiental i Participació*, Monografies Universitaries. Dpt. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2000; E. Pol, «Retos actuales de la Psicología Ambiental», *Actas del VII Congreso de Psicología Ambiental*, San Sebastián, 2001. *Monografías Socio / Ambientales*, 25 (CD), PUB, Barcelona; E. Pol, T. Vidal y M. Romeo, «Supuestos de cambio de actitud y conducta usado en las campañas de publicidad y los programas de promoción ambiental. El modelo de las 4 esferas», *Estudios de Psicología* 22(19), 2001, pp. 111-126. También la proliferación de logotipos o apelativos presuntamente ecológicos y no siempre contrastados generan confusión y *ecofatiga* (G. Luna, *Factores involucrados en el manejo de la basura doméstica por parte del ciudadano*, tesis doctoral, Dpto. Psicología Social, UB, Barcelona, 2003 a partir de Moreno y Pol, 1999, *op. cit.*). Por tanto, el exceso de responsabilización está ligado a la tendencia a individualizar, tanto en la comunicación como en el consumo, desligando la responsabilidad de la gestión y de los cambios sociales; pautas que tienden a perpetuar la injusticia social, por ejemplo, en el caso de las mujeres en el ámbito de la sostenibilidad (S. MacGregor, «No sustainability without justice: a feminist critique of environmental citizenship», en A. Dobson y D. Bell, *Environmental citizenship*, MIT Press, Massachusetts, 2006).

En los diferentes grupos, se recogen imágenes distintas de la ecología aplicada al consumo y del consumo ecológico: es decir, se llega al «producto ecológico» por diferentes vías de distribución, constituyendo diversos conceptos de producto ecológico. Las opciones de compra tipo relación directa productor-consumidor y, de forma minoritaria, las cooperativas, son las que aparecen como algo que se ha visto en los medios de comunicación o algo que parece que «cada vez se está haciendo más» (pero no tanto el ser declarado como una opción propia). Se trata de una incipiente normalización («ya no es una cosa tan descabellada») de estas opciones, que antes estaban consideradas en los márgenes. Los discursos sobre otras formas de consumo posibles (cercanas a criterios ecológicos, de economía social, etc. y alejadas del consumismo) son mayoritariamente inestables, basados en los medios de comunicación y referidos a las opciones de otras personas, por lo que no son articuladas desde una argumentación estable que se construya desde la práctica personal. Sólo algunas prácticas responsables, como se ha detallado anteriormente, son compartidas por diferentes grupos y personas, las cuales son las que hemos llamado *ventanas para el cambio*.

Conclusión

Como resumen final, cabe decir que la crisis económica parece haber tenido un impacto severo en las percepciones sobre el consumo, con una cierta sensación de miedo e incertidumbre ante el futuro, que podría influir en una moderación de los hábitos tras un período de excesos. No obstante, la lectura de la crisis se hace de maneras distintas desde diferentes posiciones de clase: así, los grupos detentadores de posiciones supraordinadas enfatizan que la crisis ha sido el resultado de una falta de racionalidad a la hora de gastar (el excesivo consumismo de «los otros», «la gente ha vivido por encima de sus posibilidades»), mientras que para las clases populares la crisis se vive con menor dramatismo, pues es ni más ni menos que su condición económica existencial. No obstante, en los grupos y salvo raras excepciones no aparece un discurso crítico frente al consumo, al que se identifica mayoritariamente como motor de la economía y del bienestar, y no se cuestiona la insostenibilidad del modelo actual; de hecho, apenas se profundiza en la posibilidad de desarrollar formas alternativas de consumo (ecológicas, sostenibles, etc.). En este sentido, la crisis económica, instalada entre nosotras y nosotros desde hace años tras un período de un consumismo sin precedentes históricos, al menos en nuestro país, no parece haber servido para cuestionar nuestro modelo socioeconómico y, en definitiva, de consumo actual.

CARLOS TAIBO

Antineoliberales, anticapitalistas

Nuestro propósito principal estriba en sopesar dos respuestas bien diferentes que la crisis en curso ha acabado por suscitar en el marco de la izquierda. Una, pretende la recuperación de la institución del Estado del bienestar, renuncia a remitirse a problemas de fondo en el funcionamiento de la civilización capitalista y se centra en la acción institucional, es decir, en promover leyes que reconstruyan la regulación y alentar el despliegue de un sindicalismo de pacto. La otra, reclama con urgencia salir del capitalismo, promueve ante todo la acción desde la base de los movimientos sociales críticos, plantea la creación de espacios de autonomía, reivindica el asentamiento de fórmulas autogestionarias, discute las formas de propiedad hoy imperantes y se pronuncia, en el Norte opulento, por proyectos de decrecimiento y de cuestionamiento de la lógica del consumo.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política y de la Administración, UAM

Solemos prestar mucha mayor atención a los elementos materiales –las crisis económicas, los indicadores que presuntamente las retratan, los programas de respuesta– que a las tramas ideológicas que los acompañan. Ello es así, entre otras muchas razones, por una que se antoja obvia: la identificación de lo que ocurre al calor de esas tramas es a menudo dificultosa en un marco general en el que los procesos afectados tardan, por lo demás, en reposar.

Aun con ello, no es difícil avanzar una idea general en lo que respecta a lo que ha sucedido en los últimos tiempos con un proyecto ideológico que ha hecho correr mucha tinta: el neoliberalismo. Señalemos por lo pronto que, acaso con ocasión de los dos primeros años de manifestación cruda de lo que hemos dado en llamar *crisis financiera*, el proyecto neoliberal pareció plegar banderas. Con el paso de los meses ha ido recuperando, sin embargo, presencia pública. No se trata sólo de certificar al efecto una evidencia empírica, como es la de que ese proyecto sigue inspirando hoy de manera franca el grueso de las políticas que abrazan, en los Estados miembros de la Unión Europea, gobiernos liberales y socialdemócratas. Hay que referirse también a la reaparición pública del neoliberalismo en el propio teatro de las disputas ideológicas –si hay tal cosa hoy entre nosotros–, amparado en dos circunstancias diferentes. Si por un lado se ha hecho valer la extendida asunción de que no hay otras alternativas, por el otro, y desde el propio discurso neolibe-

ral, se ha perfilado una ingeniosa explicación de lo acontecido en los últimos años: lo que habría fallado serían las personas, de tal suerte que la propuesta neoliberal, como tal, conservaría todo su rigor y credibilidad. Si así se quiere, y en fin, con el neoliberalismo habría sucedido algo similar a lo que ha ocurrido con la palabra *globalización*, ingeniosamente retirada de la circulación durante unos años para evitar, sin duda, que quedase contaminada por los estigmas negativos que acompañan a la crisis en curso.

No son, sin embargo, los avatares ideológicos del neoliberalismo los que nos van a interesar en este texto. Nuestro propósito principal estriba, antes bien, en sopesar dos respuestas bien diferentes que la crisis en curso ha acabado por suscitar en el marco de la izquierda –no nos detendremos ahora a glosar las ventajas y las desventajas que acarrea este término– que contesta, o quiere contestar, las políticas oficiales. La tarea correspondiente parece tanto más urgente cuanto que, en un escenario de convulsiones y premuras, disputas como la que aquí nos atrae pasan a menudo, y literalmente, inadvertidas. Y eso que hay quien dirá, cargado de razón, que hablando en propiedad esas disputas nada tienen de nuevas.

El primer diagnóstico: reconstruir los Estados del bienestar

La primera de las respuestas invocadas parte inexorablemente –de lo contrario no hay forma de explicar el sentido de su propuesta de fondo– de la certeza de que el capitalismo como sistema conserva, pese a todo, buena parte de su vitalidad de antaño. En su defecto presume que la capacidad de atracción de un proyecto alternativo al capitalismo es tan nimia en estas horas que no merece la pena prestar atención a semejante opción.

El diagnóstico que nos ocupa se asienta en una certeza: la de que los problemas que acosan hoy al capitalismo tienen su origen en la desregulación que ha acompañado indeleblemente a la revolución neoliberal. Lo que estaría en crisis, de resultas, no sería el capitalismo en sí, sino la versión desregulada de este último. La mentada revolución neoliberal habría acabado con muchos de los equilibrios anteriores y habría puesto en peligro, en singular, una institución decisiva como es el Estado del bienestar. Así las cosas, la respuesta no puede ser otra que la que reclame la reconstrucción de la regulación perdida y, con ella, el retorno al estadio anterior a la irrupción fulgurante de las prácticas neoliberales. Importa mucho subrayar que desde esta perspectiva se postula que la única tarea honrosa es la que reclama, *en exclusiva*, el reflotamiento de los Estados del bienestar. Cualquier propuesta que exija algo más es objeto, en consecuencia, de inmediato rechazo. No sólo eso: la demanda omnipresente de reconstruir la regulación acarrea de manera inevitable una aceptación de la bondad ontológica de lo que había antes de la desaparición de aquélla.

Parece obligado subrayar que este diagnóstico no dispensa atención alguna, ni seria ni liviana, a la crisis ecológica y a sus consecuencias. El *cortoplacismo* manifiesto que rodea a la propuesta aconseja cancelar cualquier consideración relativa a los límites medioambientales y de recursos del planeta, como aconseja dejar en el olvido cualquier suerte de cuestionamiento de los cimientos conceptuales de la economía oficial, y entre ellos los vinculados con el crecimiento y la productividad. El cambio climático, el encarecimiento inevitable –en el medio y en el largo plazo– del precio de la mayoría de las materias primas energéticas que hoy empleamos o la prosecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres no parecen asomarse en momento alguno al discurso de quienes defienden esta propuesta. Pareciera, en otras palabras, como si la crisis tuviese una única dimensión, la financiera, y en modo alguno remitiese a problemas de fondo en el funcionamiento de la civilización capitalista.

No está de más identificar cuál es el contenido político de la propuesta que nos ocupa. A tono con su fundamento material, no parece contemplar otro horizonte que el que pasa por la acción institucional. Se trataría, en otras palabras, de promover leyes que reconstruyan la regulación y de alentar el despliegue, en paralelo, de un sindicalismo de pacto.

El segundo diagnóstico: salir del capitalismo

El segundo de los diagnósticos que nos interesan bebe de una percepción distinta en lo que respecta al capitalismo y su futuro. Considera, en otras palabras, que el capitalismo ha perdido dramáticamente los mecanismos de freno que en otros momentos le permitieron salvar la cara y entiende que, en consecuencia, ha iniciado una inquietante deriva terminal. Ya no es, en cualquier caso, el sistema eficiente –explotador, injusto y excluyente, sí, pero al mismo tiempo eficiente– que demostró ser en el pasado. La demanda que surge de la propuesta que ahora nos interesa reclama con urgencia salir del capitalismo, aun cuando al respecto se aprecien dos modulaciones distintas de esa exigencia. Si la primera reivindica una acción franca en ese sentido, la segunda, consciente de la debilidad de quienes podrían sacar adelante el proyecto anterior, se inclina más bien por aguardar que el colapso del sistema abra, por fin, los ojos de buena parte de la población. Las cosas como fueren, este segundo diagnóstico entiende que nuestros problemas no lo son, en exclusiva, con el capitalismo desregulado, sino que alcanzan, antes bien, al capitalismo considerado como un todo. De resultas, cualquier ejercicio encaminado, sin más, a reconstruir la regulación perdida no es sino un ingenuo puente de plata que se le ofrece al capitalismo (y que éste, por lo que parece, y dicho sea de paso, no muestra interés alguno en utilizar).

Agreguemos que este diagnóstico, a diferencia del anterior, otorga un relieve central a la crisis ecológica y contesta agriamente todos los enfoques de cariz *cortoplacista*. Frente a la

propuesta institucional de la primera de las visiones, y sin desdeñar en modo alguno la defensa cabal de derechos y libertades, promueve ante todo la acción desde una base que configurarían los movimientos sociales críticos. En ese marco plantea, por encima de todo, la creación de espacios de autonomía que escapen a la férula del capitalismo dominante, reivindica el asentamiento de fórmulas autogestionarias, discute agriamente las formas de propiedad hoy imperantes y se pronuncia, en el Norte opulento, por proyectos de decrecimiento y de cuestionamiento de la lógica del consumo.

Este segundo diagnóstico, a diferencia del anterior, considera al capitalismo como un todo, otorga un relieve central a la crisis ecológica y contesta agriamente todos los enfoques de cariz cortoplacista

Choque de trenes

Es preciso traducir, en términos de apuestas concretas, el sentido que esos dos diagnósticos han acabado por asumir entre nosotros. En torno a cada uno de ellos se han perfilado dos grandes bloques de trazos más o menos consolidados. En inicio el primero de los diagnósticos lo hicieron suyo las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios –Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)– y la dirección de Izquierda Unida (IU), no sin algunos apoyos externos como el dispensado por lo que llamaremos *economistas antineoliberales*. Es obligado subrayar que estos últimos, que han proporcionado buena parte del arsenal de argumentos en que ha acabado por sustentarse esta propuesta, han asumido una crítica frontal del neoliberalismo y una defensa cabal de los Estados del bienestar sin contestar, sin embargo, la lógica general del capitalismo que padecemos. En términos más precisos, pareciera como si esta primera oferta política, consciente de la literal imposibilidad de atribuir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) una condición socialdemócrata –fuere cual fuere el significado que asignemos a esta etiqueta–, se hubiera lanzado a ocupar el espacio dejado vacío por aquél, con la vista puesta, en el caso de IU, de atraer el voto de muchos simpatizantes socialistas hoy abiertamente decepcionados.

El otro bloque, el vinculado con el segundo diagnóstico, abarca un espectro más heterogéneo. En él se dan cita numerosos movimientos sociales de vocación crítica –en lugar singular los que se vinculan con el ecologismo en sus versiones más contestatarias–, el sindicalismo alternativo y segmentos importantes de lo que llamaremos *izquierda radical*. Aunque sobre el papel este bloque era más débil que el primero, las circunstancias parecen haber reequilibrado la situación. Ello es así de resultas, ante todo, de un hecho vital: al

amparo de su aceptación final de la oferta gubernamental, formalizada a finales de enero de 2011, los dos sindicatos mayoritarios han desertado del bloque en el que, a título provisional, se hallaban.

No deja de sorprender que la deserción mencionada no haya provocado reacciones agrias de repulsa del lado de los perjudicados. Y en este terreno pensamos tanto en la dirección de IU como en el grueso de los *economistas antineoliberales*. Si en unos casos se aprecia cierto intento de justificar a CC OO y UGT –de la mano unas veces de la sorprendente sugerencia de que el acuerdo aceptado por las centrales sindicales es saludable y en otras de la afirmación de que aquéllas han suavizado algunos de los términos más draconianos de los planes gubernamentales–, por ningún lado se barrunta un intento de dejar las estrecheces propias del primer diagnóstico en provecho de una apertura hacia lo que significan el segundo y las fuerzas que lo respaldan. De manera más concreta, sigue sin apreciarse del lado de IU ningún esfuerzo serio orientado a mejorar sus relaciones con los movimientos sociales críticos y con el sindicalismo alternativo. Es verdad que el acercamiento a unos y otro a duras penas es posible en un escenario en el que la coalición de izquierdas no ha cejado –parece– en su empeño de atraer a votantes socialistas descontentos.

De por medio es obligado certificar lo que por momentos se hace evidente: el fracaso de la opción política alentada al calor del primero de nuestros diagnósticos, descabezado de resultas de la por lo demás previsible deserción de CC OO y UGT. Tal vez es éste el momento adecuado para subrayar carencias básicas que rodeaban a esa toma de posición. Bastará con que recordemos que muchas de sus propuestas –así, la encaminada a reconstituir una banca pública– arrastraban ingenuidades imperdonables: ¿qué sería de esa banca en manos de gobernantes socialistas y populares? En paralelo, parece que ha llegado el momento de preguntarse por el buen sentido de los análisis que, tras explicarnos que para progresar en materia de productividad no era preciso reducir salarios ni congelar pensiones, prefieren esquivar cualquier consideración crítica seria de la cuestión principal: la relativa a esa formidable estafa que acompaña al concepto de productividad.

Más allá de todo lo anterior, no está de más agregar una consideración: sobran las razones para certificar que los sindicatos mayoritarios tienen una livianísima capacidad de movilización, de la que son, por cierto, culpables. Pilares fundamentales de sustento del sistema hoy existente, esos sindicatos, dependientes en buena medida de las ayudas públicas, hace tiempo que abandonaron cualquier estrategia de combate y resistencia, de tal suerte que conviene ser provocadores en el argumento: las bases de CC OO y UGT, hablando en propiedad, no existen. Así las cosas, y en lo que se antoja un anuncio de cambio de tercio, empiezan a acumularse los datos que sugieren que el segundo de los bloques que antes describimos, pese a su tradicional precariedad y dispersión, disfruta de mayores capacidades de acción y de movilización, y, con ellas, y a la postre, de mayor credibilidad.

Tres conclusiones rápidas

A efectos de perfilar nuestro conocimiento de los términos del debate cuyos grandes rasgos hemos intentado trazar se imponen tres conclusiones principales:

1. Aunque a menudo las disputas conceptuales tienen un interés limitado, la distinción entre *antineoliberalismo* y *anticapitalismo* exhibe en estas horas un relieve difícilmente rebajable. Quienes, a menudo orgullosamente, se sienten retratados de la mano del primer término no han asumido al respecto una opción inopinada: sus propuestas, que se dirigen, efectivamente, a contestar el magma neoliberal, en modo alguno aspiran a ampliar esa contestación para que alcance al capitalismo como un todo. Conviene agregar que en la mayoría de los casos ni siquiera se ha argumentado la necesidad, táctica, de defender con urgencia los Estados del bienestar para, más adelante, y estratégicamente, ampliar la esfera de las demandas y de las luchas. Ello es así, ante todo, de resultas de un dato que ya hemos manejado: de manera lamentable la crisis ecológica no forma parte, ni de manera retórica, de las preocupaciones de quienes se encuentran en esta posición.

2. Si así se quiere, y en estrecha relación con lo que acabamos de señalar, nos encontramos ante una relativa paradoja: aun cuando en el pasado, y desde la izquierda tradicional, la cuestión ecológica era encarada con cierta displicencia, como si se tratase de un problema menor por el que sólo sentían algún interés, siempre reducido, las clases medias aposentadas, el escenario está cambiando a marchas forzadas. Y lo está haciendo porque la contestación más franca del capitalismo de estas horas llega en buena medida del mundo del ecologismo radical. O, para decirlo mejor: se está produciendo merced a una síntesis entre las luchas sociales de siempre y lo que, vía contestación del crecimiento y del consumo, nos propone el ecologismo mencionado.

3. El proyecto *político* alentado por el primero de los bloques que hemos identificado arrastra hoy problemas graves. Y no estamos pensando sólo en la posibilidad de que el intento de ocupar el espacio socialdemócrata que el PSOE ha dejado libre no produzca los resultados apetecidos. Mayor relieve tiene el hecho, incontestable, de que los beneficios que parecían derivarse de la consolidación de ese bloque han demostrado no ser tales. Si, por un lado, el abandono con que han obsequiado a ese proyecto, con su conducta, las direcciones de CCOO y UGT ha abierto una herida sin fondo, por el otro ni siquiera puede reivindicarse una suerte de *legitimación por la eficacia*. Y es que el proyecto que nos ocupa no ha sido capaz de crear, siquiera, un consenso social en torno a una iniciativa tan poco ambiciosa, y tan poco adaptada a las exigencias del momento, como era la mera defensa, sin más aditamentos, de los Estados del bienestar.

JOSEP MARIA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS

Su crisis y nuestras respuestas

La situación de las resistencias y los movimientos sociales en el Estado español está marcada por una tibia respuesta frente a la crisis. Es, entre otras cosas, una muestra de hasta qué punto los valores individualistas y la lógica capitalista han penetrado en el seno de amplias capas de la población. Por otra parte, la respuesta sindical desde el estallido de la crisis ha puesto en evidencia los límites del actual modelo sindical. La situación requiere profundizar y radicalizar las alternativas, ir a la raíz de los problemas, apuntar hacia el "núcleo duro" del actual sistema económico desde un anticapitalismo consecuente. Para cerrar la brecha entre la pérdida de legitimidad del capitalismo neoliberal y de sus instituciones y la debilidad de los movimientos populares para imponer un cambio de políticas, es necesario seguir organizando, desde abajo y día a día, la resistencia social, con criterios unitarios y combativos y buscando enlazar las distintas luchas y problemáticas para favorecer espacios de convergencia y solidaridades a escala internacional, nacional y local.

Josep Maria Antentas, es profesor de Sociología de la UAB

Esther Vivas, Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la UPF

El estallido de la crisis en septiembre de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers vino acompañado de las proclamas grandilocuentes, entonadas por la clase política y algunos círculos empresariales y financieros, acerca de la "refundación" y "moralización" del capitalismo. Las primeras cumbres del G-20 en Washington y Londres (cuyo protagonismo como instrumento para hacer frente a la crisis muestra las reconfiguraciones de la economía global, el ascenso de los países emergentes y el declive de Estados Unidos y la Unión Europea) se caracterizaron por la solemnidad de la retórica de sus protagonistas, empeñados en dar trascendencia histórica a sus decisiones y en buscar frases de impacto. Para cerrar la brecha entre la pérdida de legitimidad del capitalismo neoliberal y de sus instituciones y la debilidad de los movimientos populares para imponer un cambio de políticas, es necesario seguir organizando, desde abajo y día a día, la resistencia social, con criterios unitarios y combativos para enlazar las distintas luchas y problemáticas que favorezcan espacios de convergencia y solidaridades a escala internacional, nacional y local.

A pesar de los grandes discursos, el sentido de las políticas de los principales gobiernos del mundo apuntado en los compases iniciales de la crisis era

claro: hacer pagar el coste de la misma a los trabajadores, socializar las pérdidas e intentar apuntalar el modelo vigente con tímidas reformas que aseguraran su viabilidad corrigiendo algunos "excesos" disfuncionales. En palabras de David Harvey, su objetivo era «reinventar el mismo sistema […]. El razonamiento fundamental que se están planteando es, ¿cómo podemos reconstituir el mismo tipo de capitalismo que hemos tenido en los últimos treinta años en una forma ligeramente más regulada y benevolente?».[1]

Para movilizarse no sólo hay que partir del malestar y la indignación, también hay que creer en la utilidad de la acción colectiva, en que es posible vencer y en que no todo está perdido antes de empezar

Bajo el impacto del shock del hundimiento de Wall Street y las medidas de rescate bancario algunas voces desde la izquierda hablaron de forma apresurada del «fin del neoliberalismo». Contrariamente a estas ilusiones, a menudo sacadas de lecturas poco sólidas de los años treinta y haciendo abstracción de las diferencias de contexto, no hubo giro neokeynesiano alguno. Lejos de ello, las políticas implementadas en el conjunto de la UE han intensificado la presión sobre el mundo del trabajador asalariado con la voluntad de transferir los costes de la crisis a los trabajadores y debilitar a los sindicatos. Su objetivo es infligir una derrota histórica al movimiento obrero y reforzar los mecanismos de dominación de clase. El neoliberalismo ha sufrido una crisis de legitimidad muy profunda y las falacias y contradicciones de su discurso han quedado más descubiertas que nunca pero, en ausencia de reacción social fuerte, las medidas neoliberales se han profundizado.

Pasado el momento de pánico inicial de la clase política y del mundo de los negocios provocada por la magnitud de la propia crisis, la falta de instrumentos teóricos para comprenderla y el temor a una posible reacción social, progresivamente la retórica "refundadora" fue evaporándose. En consonancia con los intentos de presentar la crisis como un simple problema financiero y una crisis superficial, un año después de su estallido el coro de voces entonado en la cumbre del G-20 en Pittsburgh en septiembre de 2009 fue claro: lo peor ya quedó atrás, la recuperación se aproxima y enfilamos la recta final. Asunto concluido. Y dentro de poco tiempo, *«business as usual»*. Quizá, en el fondo, la cosa no era tan grave.

Sin embargo, más que el principio del final la realidad mostró que nos encontrábamos en el final del principio. Las turbulencias de la zona euro y el rescate financiero a Grecia en

[1] D. Harvey, «El G20, la crisis financiera y el neoliberalismo», *Rebelión* [disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83558]

mayo de 2010, así lo señalaron y marcaron la entrada en una nueva etapa, que puede definirse como una verdadera guerra social europea,[2] caracterizada por la aplicación de fuertes planes de ajuste a escala europea, en particular en aquellos países periféricos amenazados por la inestabilidad financiera. La tan reiterada «luz al final del túnel», del fin de la crisis, resultó ser, como señala Slavoj Žižek,[3] la luz de un tren en dirección contraria que venía directo contra la amplia mayoría de los trabajadores, la defensa de cuyos derechos requiere hacerlo descarrilar antes de la embestida.

Una (todavía) débil respuesta social

Más de dos años y medio después del estallido de la crisis, la situación de las resistencias y los movimientos sociales en el Estado español está marcada por una tibia respuesta frente a la crisis. Atrás quedó el optimismo que invadió a gran parte de la izquierda en el momento del derrumbe financiero. Hay un sesgo muy grande entre el descrédito del actual modelo económico y su traducción en acción colectiva. La poca combatividad mostrada hasta ahora por los trabajadores se explica por la combinación entre el miedo, la resignación frente la situación actual, el escepticismo respecto a los sindicatos, la ausencia de referentes políticos y sociales y la penetración entre los asalariados de los valores individualistas y consumistas.

Para movilizarse no sólo se requiere malestar e indignación, también hay que creer en la utilidad de la acción colectiva, en que es posible vencer y en que no todo está perdido antes de empezar. No hay ningún automatismo entre malestar y movilización social, y todavía menos, movilización en sentido solidario. Las reacciones de los trabajadores, en escenarios como el actual, pueden estar dominadas por el miedo y el egoísmo o por la solidaridad y la rabia frente a la injusticia. Pueden orientarse hacia opciones progresistas o girarse hacia alternativas reaccionarias.

En el Estado español la respuesta social a la crisis no ha sido, hasta ahora, proporcional al descrédito del actual modelo económico. Conflictos y movilizaciones las ha habido, y algunas relevantes, pero (con la excepción del 29-S) han tenido una base social limitada y dificultades para trascender los sectores militantes organizados y más activos. Las luchas, sobretodo en los centros de trabajo, han sido muy defensivas y la mayoría, con algunas excepciones, han terminado en derrotas. Las tendencias a la fragmentación predominan sobre las tendencias a la unificación de las luchas, sin que ninguna de ellas actúe como elemento centralizador y catalizador que permita arrancar un nuevo ciclo de movilizaciones.

[2] Ch. André Udry, «Ha empezado una nueva guerra social en Europa», *Viento Sur* 111, julio 2010, pp. 19-24.

[3] S. Žižek, «Las buenas películas sobre el Holocausto son comedias» (entrevista), *Público*, 15 de junio de 2010.

Faltan victorias que hagan de revulsivo y permitan iniciar un periodo ascendente de acumulación de fuerzas, demostrar la utilidad de la acción colectiva, aumentar las expectativas de lo posible, vencer el escepticismo o el miedo y, contribuir como señala Luc Boltanski a «socializar la rebeldía y a socializar el sentimiento de que la realidad es inaceptable».[4]

Todas las grandes crisis de la historia del capitalismo se han saldado con una reorganización de las relaciones sociales y entre clases. Lo que está en juego es una salida proempresarial a la crisis, que refuerce el dominio del capital en el seno de la sociedad y el peso de los valores reaccionarios o una salida en clave solidaria y anticapitalista. La situación es bastante contradictoria. El neoliberalismo está completamente desacreditado y la crisis ha abierto espacio para un discurso y para un "sentido común", en la acepción gramsciana del término, anticapitalista, pero las políticas dominantes profundizan los recortes sociales y la resistencia a las mismas no es suficiente para pararlas. Al mismo tiempo, la deslegitimación del neoliberalismo y el aumento de la credibilidad del anticapitalismo coexisten con un fuerte arraigo social del individualismo, el consumismo, la privatización de la vida social y la despolitización.

En paralelo asistimos a un fuerte ascenso de los discursos xenófobos y populistas de derecha fruto de la desestructuración del movimiento obrero y de las clases trabajadoras, y de la fragmentación social y la descomposición de las organizaciones y de la cultura de izquierdas en los barrios populares. Es una muestra de hasta qué punto los valores individualistas y la lógica capitalista han penetrado en el seno de amplias capas de la población. La izquierda mayoritaria, política y sindical, tiene una particular responsabilidad en ello. El ascenso de las fuerzas reaccionarias se cimienta sobre las ruinas de su política. Sus políticas social-liberales colisionan con los intereses objetivos de su propia base social. El resultado es la desmoralización, la desafección y la desorientación. La institucionalización y burocratización de la práctica y el discurso sindical mayoritario y la pérdida de vínculo orgánico y de identificación entre la izquierda parlamentaria y su base social tradicional, en particular la de origen trabajador, abre la puerta al ascenso de la demagogia de la derecha populista y xenófoba fruto de la «desorientación de un pueblo que ha sido abandonado por la izquierda» como señala Traverso.[5]

Las dinámicas de los movimientos sociales son siempre imprevisibles. A pesar de las dificultades no se puede ser fatalista, ni llegar a conclusiones prematuras respecto a la debilidad de la reacción social y menos ahora que el anuncio de los recortes puede hacer que se mueva la situación. Desde finales de 2010 hemos asistido a un repunte de las movilizaciones sociales en la UE: las fuertes movilizaciones en otoño de 2010 en Francia contra

[4] L. Boltanski, «La rebeldía no es un placer solitario» (entrevista), *Viento Sur* 103, mayo 2009, pp. 5-16.

[5] E.Traverso, «La islamofobia está en la fuente del nuevo populismo de derechas», *Viento Sur* [disponible en: http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3463].

Sarkozy, la permanencia de la situación de explosividad social en Grecia, las movilizaciones primero estudiantiles y después sindicales contra Cameron en Gran Bretaña, las luchas estudiantiles y contra Berlusconi en Italia, o la huelga general y el movimiento de jóvenes precarios en Portugal. Sin olvidar la reactivación del potente movimiento antinuclear en Alemania. Pero aún es pronto para determinar si estamos ante el inicio de un nuevo ciclo y de una fase de ascenso sostenido.

Lo que está en juego es una salida proempresarial a la crisis, que refuerce el dominio del capital en el seno de la sociedad y el peso de los valores reaccionarios o una salida en clave solidaria y anticapitalista

En el Estado español, a pesar de que la huelga general del 29-S pareció abrir una brecha el giro sindical posterior y la firma del pacto social frenó en seco esta dinámica. Más allá de las cuestiones generales comunes en toda la UE ya señaladas que explican los límites de la reacción social ante las políticas de ajuste, en la situación específica del Estado español hay dos factores a tener en cuenta: primero, el hecho de que sea la socialdemocracia quien está en el poder y no la derecha, cuestión que actúa en detrimento de la movilización; segundo, las particularidades de la historia reciente española, el impacto del proceso de "modernización" posterior a la transición y del auge de un capitalismo especulativo ligado al *boom* inmobiliario.

Crisis del capital, crisis sindical

La respuesta sindical desde el estallido de la crisis ha puesto en evidencia los límites del actual modelo sindical dominante en el conjunto de la UE y en el Estado español. La crisis del capital muestra también la existencia de una fuerte crisis de estrategia sindical.

Hablar de crisis sindical es algo común desde hace décadas en toda la UE. Esta presenta varias dimensiones objetivas como: la pérdida de afiliación en muchos países (aunque no en todos); la caída de la participación interna de los afiliados en la vida sindical, que expresa un debilitamiento de la base social real de los sindicatos; la reducción de la conflictividad laboral; una crisis de función debido a los procesos de individualización de las relaciones laborales que cortocircuitan a los sindicatos; y la disminución de su influencia social, aunque a veces, como señala Recio[6] para el caso español, dicha pérdida de influencia social y declive de fuerza real se haga en paralelo a una mayor institucionalización de los mismos.

[6] A. Recio, «¿Qué fue de la clase obrera?», *Mientras Tanto* 93, 2004, pp. 25-44.

La crisis sindical, sin embargo, se manifiesta también a través de un agotamiento del discurso y la práctica sindical, y sus dificultades para dar respuestas satisfactorias a los retos planteados por el capitalismo global. Su crisis es, por tanto, estratégica, de proyecto e identidad.

Los sindicatos mayoritarios en el conjunto de la UE y en el Estado español no han ofrecido la respuesta adecuada al ascenso de las políticas neoliberales y a la precarización de los derechos sociales y laborales. Su modelo de sindicalismo de concertación, orientado fundamentalmente a la práctica institucional, ha hecho una labor de "acompañamiento crítico" de las líneas maestras de la política neoliberal y de la integración europea. Sólo ha ofrecido resistencias puntuales ante situaciones concretas que se juzgaban "excesivas", pero sin plantear una crítica de conjunto al modelo neoliberal ni organizar una respuesta movilizadora.

El reto es un sindicalismo alternativo

La política seguida por CCOO y UGT desde el estallido de la crisis ha estado desenfocada, contribuyendo a la desorientación de los trabajadores. Primero, acompañaron acríticamente la política de rescates bancarios y las medidas tomadas en los primeros meses después del estallido de la crisis y asumieron la explicación oficial de la crisis como una crisis financiera fruto de los "excesos" del sector, sin entrar a analizar su carácter estructural y sistémico. Convocaron tarde, y en frío, la huelga del 29-S y, aunque su resultado fue mucho más positivo de lo previsto, dilapidaron el potencial abierto volviendo de nuevo a la actividad sindical rutinaria. La huelga fue concebida como una movilización puntual, convocada desde arriba a modo de paréntesis o de desvío accidental en el camino, y no como un punto de inflexión dentro de un plan de movilización sostenida, dejando que la brecha abierta tras el 29-S se fuera cerrando en los meses posteriores sin ofrecer una perspectiva de continuidad. Sin embargo, ante el embate del Gobierno con las pensiones pareció que se orientaban de nuevo a la movilización en el último tramo del 2010, después de un par de meses de parálisis pero, a última hora, giraron bruscamente hacia la búsqueda de un pacto. El resultado de esta orientación no sólo es la firma de una acuerdo perjudicial para los intereses de los trabajadores, sino también una política que contribuye a la desorientación y la confusión, fomenta la apatía y la resignación, el desapego a los propios sindicatos, mina su propia base social... y crea las condiciones para futuros ataques a los derechos conquistados.

Ante esta situación el reto es reforzar y desarrollar un sindicalismo alternativo orientado a la movilización, al fomento de la participación democrática

desde la base, y provisto de un discurso y una perspectiva anticapitalista. Un sindicalismo portador de un "sentido común" alternativo al dominante, de otra lógica, en sintonía con lo que ha sido el movimiento antiglobalización y los movimientos alternativos. Los sindicatos tienen que tener como prioridad reconstruir, en un mundo cada vez más fragmentado, una cultura de la solidaridad, de la movilización y de la participación cotidiana en los asuntos colectivos. Tienen que buscar nuevas formas organizativas y estrategias para conectar con los segmentos más débiles de la clase trabajadora, como los parados, los precarios, los inmigrantes..., combinando la acción en el centro de trabajo y en el territorio, fomentando la colaboración entre sindicatos y otras organizaciones y movimientos sociales y desarrollando una práctica militante dinámica que rompa con la acción sindical rutinaria. Es necesario recuperar la dimensión sociopolítica de la acción sindical y desarrollar lo que en el mundo anglosajón se ha llamado un "sindicalismo movimentista", que busque alianzas con otras organizaciones, actúe dentro y fuera del puesto de trabajo y tenga una práctica activista.[7]

La coordinación europea de las resistencias es otro de los objetivos insoslayables para el sindicalismo y los movimientos sociales. Una auténtica "euromovilización", más allá de las ya tradicionales eurojornadas simbólicas convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos, sería mucho más efectiva para hacer cristalizar la emergencia de un sindicalismo europeo en el imaginario colectivo que largas décadas de negociaciones burocráticas de bajo perfil en Bruselas. La consigna «huelga general europea», defendida por el sindicalismo alternativo, si bien hoy para hoy es sólo un eslogan propagandístico, tiene el mérito de fijar un horizonte de trabajo claro y plantear lo que es necesario para oponerse a las políticas económicas en curso. Y, de forma más realista, es necesario insistir en la necesidad de reforzar la coordinación sindical en la Europa mediterránea, en pleno ojo del huracán, y defender una movilización sindical euromediterránea.

Anticapitalismo: el regreso

La crisis no ha hecho más que confirmar la pertinencia de una crítica radical al actual orden de cosas. Confirma la validez de la crítica "antiglobalizadora" que se fue gestando durante la segunda mitad de los años noventa y eclosionó después de las protestas ante la Organización Mundial del Comerció en Seattle en 1999.

En realidad la crisis abierta en 2008 plantea la necesidad de profundizar y radicalizar las alternativas, en el sentido de ir a la raíz de los problemas, de apuntar hacia el "núcleo duro" del actual sistema económico, pasando de un mero "antineoliberalismo" a un "anticapitalismo" consecuente. Paradójicamente, el impacto de la crisis ha hecho que algunas de las ideas y

[7] J. M. Antentas, «Sindicatos y resistencias globales», *Viento Sur*, 86, 2006, pp. 28-36.

demandas “antineoliberales” formuladas por los movimientos alternativos en los últimos años (la Tasa Tobin, la supresión de los paraísos fiscales…) aparezcan como insuficientes aunque estemos lejos de su misma aplicación. Se trata ahora de en la lucha contra los recortes neoliberales defender medidas concretas como las formuladas y que forman parte del acervo común de las luchas “antineoliberales” de los últimos años y plantear de nuevo “grandes propuestas”, poniendo encima de la mesa alternativas hasta ahora fuera del debate por parecer demasiado lejos de la realidad, como la apropiación pública del sistema bancario, entre otras.

«No se puede ser neutral en un tren en marcha», nos recordaba el historiador Howard Zinn en su autobiografía,[8] y menos en un tren desbocado hacia el precipicio como lo es la humanidad, retomando la lúcida metáfora de Walter Benjamin. En vistas de cómo va el mundo, el anticapitalismo es hoy una apuesta perfectamente razonable y un verdadero imperativo moral y estratégico. No parece que sean los antisistema quienes deban justificarse, sino los pro-sistema quienes deberían hacerlo.[9] La solución no pasa por la “moralización” del capitalismo, retoques cosméticos superficiales o, simplemente la domesticación de sus “excesos” neoliberales. Una opción meramente “antineoliberal”, aún yendo hacia la buena dirección, se queda sólo en la superficie del problema.

Ante los intentos de regulación sistémicos y de dar una salida a la crisis favorable a los intereses del capital es necesario plantear claramente otra agenda, la de una ruptura con el paradigma neoliberal desde una lógica anticapitalista. Dos lógicas irreconciliables se contraponen: «la del beneficio a cualquier precio, el cálculo egoísta, la propiedad privada, la desigualdad, la competencia de todos contra todos, y la del servicio público, los bienes comunes de la humanidad, la apropiación social, la igualdad y la solidaridad».[10] Precisamente esta es la cuestión central que intentan soslayar los gobiernos y los partidarios del actual modelo económico y la izquierda institucionalizada reconvertida en gestora fiel de los intereses del capital o con vocación de corregir simplemente sus excesos. Las promesas de moralización del capitalismo entonadas al comienzo de la crisis y las proclamas posteriores de que lo peor ya pasó tienen en común el intento de negar el carácter sistémico de la crisis y de evitar que la misma abone el cuestionamiento del propio sistema económico. El presidente francés Nicolás Sarkozy lo señalaba bien claro en septiembre de 2008 en su discurso de Toulon, justo después de la debacle de Wall Street: «La crisis financiera no es la crisis del capitalismo, es la crisis de un sistema alejado de los valores fundamentales del capitalismo a los que, en cierto modo, ha traicionado. Quiero decírselo claro a los franceses: el anticapitalismo no ofrece ninguna solución a la crisis actual». ¿Seguro?

8 H. Zinn, *You can’t be neutral on a moving train: a personal history of our times,* Beacon Press, Boston, 2002.

9 Para el debate mediático sobre los “antisistema” suscitado tras el 29-S véase J. M. Antentas y E. Vivas «¿Antisistema? Por supuesto», *Público*, 15 octubre 2010, p. 8.

10 D. Bensaïd, «La crisis capitalista: apenas un comienzo», *Sin Permiso*, 15 de marzo de 2009 [disponible en: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2422].

Anticapitalismo es el término que se ha ido imponiendo para designar este horizonte de ruptura y rechazo al actual orden de cosas. A pesar de su aparente carácter negativo, el anticapitalismo, tal y como lo entendemos, desemboca directamente en la formulación de propuestas alternativas que apuntan hacia otro modelo de sociedad. «La indignación es un comienzo. Uno se indigna, se levanta y después ya ve», señalaba Daniel Bensaïd».[11] Del rechazo inicial a lo existente se pasa después a la defensa de otra lógica opuesta a la del capital y la dominación.

En vistas de cómo va el mundo, el anticapitalismo es hoy una apuesta perfectamente razonable y un verdadero imperativo moral y estratégico

Los límites del término son, en cierta forma, los límites del periodo actual, todavía de resistencia y de (re)construcción, marcado por la dificultad para expresar una perspectiva estratégica en positivo y para afirmar tanto una perspectiva revolucionaria de transformación, como un horizonte de sociedad alternativo. Los grandes conceptos de la historia del movimiento obrero, como "socialismo" o "comunismo", tienen hoy un significado equívoco debido al fracaso de los proyectos emancipatorios del siglo XX. Los debates como el del «socialismo del siglo XXI» lanzado (con muchísimas contradicciones y límites) desde Venezuela, o sobre el «ecosocialismo» impulsado por la Red Ecosocialista Internacional (animada entre otros por Michael Löwy o Joel Kovel), o los debates actuales en círculos académicos e intelectuales sobre el «comunismo» y la «hipótesis comunista» muestran un renacimiento aunque todavía débil del interés por repensar y rediscutir un horizonte poscapitalista. Pero se precisan todavía nuevas experiencias fundacionales para imponer nuevos términos o recuperar los antiguos: «No se inventa un nuevo léxico por decreto. El vocabulario se forma con el tiempo, a través de usos y experiencias».[12]

Para cerrar la brecha entre la pérdida de legitimidad del capitalismo neoliberal y de sus instituciones y la debilidad de los movimientos populares para imponer un cambio de políticas, es necesario seguir organizando, desde abajo y día a día, la resistencia social, con criterios unitarios y combativos y buscando enlazar las distintas luchas y problemáticas favoreciendo espacios de convergencia y solidaridades a escala internacional, nacional y local para evitar el aislamiento y la fragmentación de las resistencias. Como nos recuerda Walden Bello «las ideas no bastan, y lo que será decisivo es el modo de traducir nuestras ideas, nuestros valores y nuestra visión a una estrategia y a unas tácticas con vocación ganadora que puedan triunfar democráticamente».[13]

11 D. Bensaïd, *Les irreductibles. Théoremes de la Résistance a l'air du temps,* Textuel, París, 2001.

12 D. Bensaïd, «Potencias del comunismo», *Viento Sur* 108, febrero 2010

13 W. Bello, «La crisis del capitalismo y la respuesta política de la izquierda», *Sin Permiso* 5, marzo 2010, pp.11-24

La crisis incrementa las contradicciones sociales y ha abierto posibilidades para la crítica anticapitalista y la reconstrucción de un proyecto alternativo, pero lo hace desde un punto de partida muy desfavorable. La correlación de fuerzas a escala europea y planetaria está muy degradada y la capacidad de la izquierda política y social de pesar significativamente es mínima. La pasividad y el desánimo conviven con el ascenso de los populismos reaccionarios y de extrema derecha. Entre ambos la voz de las fuerzas alternativas aparece débil y frágil. Sin embargo, el desenlace y el modelo de salida a la crisis no están prefigurados de antemano. El potencial de inestabilidad global derivada de la crisis es todavía muy fuerte, las contradicciones se acumulan, y la capacidad del mundo empresarial y de la clase política para estabilizar la situación es limitada. Las inesperadas revoluciones acontecidas en el mundo árabe son la mejor prueba de ello. Los vigorizantes vientos que soplan en el norte de África y Oriente Próximo no sólo electrizan la región sino que dan aliento a los movimientos sociales europeos, contribuyen (limitadamente) a resituar en nuestro imaginario colectivo que la acción colectiva es útil y ensanchan el horizonte de lo posible.

Estamos, en cualquier caso, todavía en una de las etapas de una crisis de largo recorrido y es necesario huir de lecturas demasiado impresionistas de la realidad. Al constatar las dificultades de las luchas sociales en Europa para hacer frente a las consecuencias de la crisis, sin voluntad de establecer comparaciones históricas mecánicas, no está de más recordar, por ejemplo, que tras el *crack* de 1929 el movimiento obrero norteamericano tardó más de cuatro años en responder, pasar a la ofensiva y sacudir la vida política y social del país.[14]

Conviene evitar tanto los optimismos exagerados (más bien escasos ahora mismo, todo hay que decirlo) como los pesimismos paralizantes. Al igual que *Saïd el pesoptimista*, el personaje de la novela del escritor palestino Emile Habibi, ni optimistas ni pesimistas, los activistas sociales deberíamos permanecer simplemente "pesoptimistas".

[14] D. La Botz, «The global crisis and the world labor movement», *New Politics*, 47, verano, 2009.

Panorama

Fukushima: un antes y un después de la industria nuclear 167
Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal

EDUARD RODRÍGUEZ FARRÉ Y SALVADOR LÓPEZ ARNAL

Fukushima: un antes y un después de la industria nuclear[1]

La catástrofe de Fukushima es un Chernóbil a cámara lenta. El accidente de la central nipona ha arrojado definitivamente al archivo de los trastos inútiles y la publicidad engañosa el lema publicitario del poderoso lobby ***nuclear internacional: la energía nuclear, insistían, insisten ahora con menos griterío, es ilimitada, limpia, barata y segura. Ni es ilimitada dada las reservas internacionales de uranio; ni es limpia analizada en su conjunto; ni es barata si sumamos todas las externalidades y el inmenso pozo sin fondo que representa el tratamiento de los residuos radiactivos (ya en 1984 la revista*** Forbes ***calificó la energía nuclear del «mayor fiasco en la historia económica norteamericana»), ni desde luego es segura. Por si faltara algo, está envuelta en el oscurantismo, las falsedades y la manipulación de la opinión pública. Y, en ocasiones, en el miedo y el servilismo.***

Un dato significativo. No existen inversores privados que se atrevan a lanzarse a construir centrales nucleares en un entorno que ellos mismos llaman de libre competencia ni siquiera ante la promesa de importantes ayudas públicas. El último reactor construido en EE UU data de 1979, pese a que Bush II y Barack Obama han ofrecido préstamos preferentes que podían llegar hasta el 80% del total de la inversión y los 25.000 millones de euros.

Desde que empezó el negocio nuclear a mediados de la década de los cincuenta, el coste y el periodo de construcción de una central han sido casi siempre el doble o el triple del previsto. Un informe oficial de EE UU calculó que el coste real de las 75 centrales estudiadas, cuyo presupuesto inicial era de 45.000 millones de dólares, había superado finalmente los 145.000 millones, un incremento de más del 200%.

Eduard Rodríguez Farré, Comité Científico de la UE sobre Nuevos Riesgos para la Salud

Salvador López Arnal es profesor de la UNED y del Instituto Puig Castellar de Gramanet

[1] Preámbulo de la edición serbia de Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal, *Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente*, El Viejo Topo, Barcelona, 2008 [presentaciones, epílogo y nota final de Santiago Alba Rico, Joan Pallisé, Jorge Riechmann, Joaquim Sempere y Enric Tello].

La tendencia sigue en pie y acrecentada. La modernísima central que empezó a construirse en Finlandia en 2003 se presupuestó en 3.000 millones de euros, asegurando que en cuatro años sería construida. En abril de 2011, la fecha prevista para su inauguración se ha alargado varios años y la factura se aproxima ya a los 6.000 millones. Por el momento. Estos 2.800 millones de diferencia, que aún podrían ser finalmente una cifra mayor, los tendrá que asumir la empresa promotora, Areva, una corporación controlada por el Estado francés. Al final, pagarán, una vez más, los contribuyentes, franceses en este caso.

En España, por poner otro ejemplo, los residuos de baja y media actividad se van almacenando en El Cabril, un pueblo andaluz de la provincia de Córdoba, al sur de España, y como el horizonte en que llegará al 100% de su capacidad se acerca –en principio, en el año 2030–, urge construir un nuevo almacén que exigirá el desembolso de unos mil millones de euros.

El Reino Unido, por su parte, ha calculado que necesitará invertir 125.000 millones para desmantelar su parque de centrales obsoletas y hacerse cargo de los residuos durante sólo 125 años. La factura, ni que decir tiene, también la pagará el contribuyente.

Estados Unidos cuenta con 104 reactores nucleares operativos. Todos ellos empezaron a construirse entre 1963 y 1978. Desde 1979, desde el año del accidente de Three Miles Island, no se ha iniciado la construcción de ningún reactor más en EE UU, un país donde la energía nuclear cuenta con el apoyo de los dos grandes y poderosos partidos institucionales.

Ya nada será igual tras el accidente japonés. La tercera economía del mundo, hasta hace poco la segunda; uno de los países capitalistas con mayor desarrollo tecnológico; el país, tras Francia y EE UU, con mayor número de centrales; el Estado con mayor densidad de reactores por kilómetro cuadrado y población está sufriendo en el momento que escribimos uno de los mayores accidentes nucleares de la historia. Por si faltara algo, la empresa propietaria de la central, TEPCO (Tokio Electrical Power Company), una gran corporación privada nipona, es una de las mayores compañías eléctricas del mundo.

Durante más de medio siglo se ha repetido una y mil veces al pueblo japonés que lo sucedido a finales de marzo de 2011 no pasaría nunca. Todos los gobiernos japoneses, de similar color político, han mentido; NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency), la agencia de seguridad nuclear japonesa, se ha sumado al engaño; TEPCO, propietaria y gestora de la central siniestrada, y de muchas otras centrales nucleares japonesas, les ha mentido también. La fusión parcial de los reactores ante la falta de refrigeración, provocada por el terremoto y el maremoto que han azotado un país donde estos sucesos no son infrecuentes, no debería haber ocurrido. Saichii, el reactor I de la central (un BWR, como los restantes reac-

tores, los que funcionan con agua en ebullición como es el caso de la central española de Santa María de Garoña cuya vida ha sido prolongada recientemente dos años más, hasta los 42 en total), no debería haber sufrido un accidente conocido con el nombre de Station Blackout (SBO), la pérdida total del suministro eléctrico.

¿Por qué se han ubicado en Japón tantos reactores al lado del mar en una zona propensa a maremotos? La Union of Concerned Scientists lo ha documentado con detalle: por razones económicas. No hay que pagar por el agua del mar

Existían precedentes. Por lo demás, no es extraño que algunos políticos de la extrema derecha nipona abonen la infamia más insultante. El alcalde de Tokio desde 1999, Shintaro Ishihara, un político ultranacionalista que destaca por atacar a homosexuales, inmigrantes y mujeres, ha sostenido que el terremoto ha sido un «castigo divino» por el «egoísmo» de los japoneses. Ha tenido que retractarse de su zafiedad pero sigue en su cargo.

A finales de julio de 2007, un terremoto de intensidad 6,8 en la escala de Richter golpeó la provincia de Niigata, en la isla de Honshu, a 200 km de Tokio y puso fuera de funcionamiento Kashiwazaki-Kariwa, una gigantesca planta nuclear con siete reactores, una de las más grandes del mundo. Nueve personas fallecen, un millar resultan heridas a causa del terremoto; se destruyen y dañan unas 800 casas; vías y puentes quedan impracticables; se corta el suministro de agua, gas y electricidad; se averían instalaciones industriales de la zona. Los informes hablaron de fugas radiactivas, conductos obsoletos, tuberías quemadas, aparte de los incendios. Varios centenares de barriles de residuos se vinieron abajo. Más de 1.000 litros de agua radiactiva se vertieron al mar y fugas de isótopos se dispersaron en la zona. No fue, en absoluto, una «pequeña fuga» sin consecuencias para el medio ambiente. Los responsables de la central, después de muchas dudas y vacilaciones, tuvieron que admitirlo: el terremoto provocó un desastre. Ya entonces un portavoz de la corporación TEPCO –que era también la empresa propietaria–, sostuvo que los reactores de la central habían sido diseñados para resistir terremotos, pero solo, matizó, hasta determinada intensidad, inferior a la magnitud del seísmo registrado aquel lunes de julio de 2007. La misma melodía que hemos oído estos días. ¿Puede merecer nuestro crédito?

Cabe preguntarse, ¿por qué se han ubicado en Japón tantos reactores al lado del mar en una zona propensa a maremotos? La Union of Concerned Scientists lo ha documentado

con detalle: por razones económicas. No hay que pagar por el agua del mar, sale muy barata, regalada, rebaja costes y aumenta beneficios, especialmente en un país sin ríos de caudal importante.

La radiación ni se ve ni se huele ni se siente, pero sus efectos son a largo plazo y dañarán la salud y el medio ambiente durante muchos años. Ya se han medido en Tokio, en el momento que escribimos, radiocontaminantes como el yodo-131[2] o el cesio-137. En el núcleo de un reactor atómico existen más de 60 contaminantes radiactivos, unos de vida media muy larga y otros de vida corta, y muchos de ellos tienen una gran afinidad con nuestro organismo. Se acumulan en él, son parecidos a nuestros elementos biológicos. Entre estos contaminantes, los que tendrán mayores consecuencias para la salud humana son el yodo-131, el estroncio-90 y el cesio-137 con el plus del plutonio.

El primero afecta inmediatamente y deja mutaciones en los genes; a partir de ellas se puede desarrollar posteriormente el cáncer de tiroides (se ha calculado que tras Chernobil se multiplicaron por diez los casos de este tipo de cáncer en Centroeuropa y el Gobierno ucraniano ha cifrado en 55.000 millones de dólares los costes sanitarios del accidente). El estroncio se acumula en los huesos, como si fuera calcio, donde una fracción del elemento puede permanecer muchos años, y durante este tiempo continúa irradiando el organismo. El cesio queda depositado en los músculos, comportándose de forma parecida al potasio. Ambos, estroncio y cesio, aumentan el riesgo de todo tipo de cánceres, especialmente los de huesos, músculos y tumores cerebrales, disminuyendo la inmunidad del organismo e incrementando la capacidad de sufrir otras patologías. La radiación, además, altera la reproducción y afecta más a las mujeres que a los hombres. Los espermatozoides se regeneran cada 90 días y un espermatozoide alterado desaparece en ese período. Los óvulos están en los ovarios toda la vida. Si un óvulo alterado por la radiación es fecundado posteriormente incrementa el riesgo de malformaciones en el feto así como el de diversas patologías aunque sea muchos años después.

Tampoco las consecuencias para el medio ambiente serán inocuas. La contaminación nuclear se deposita en el suelo y en el mar, se incorpora a la cadena trófica de los peces (que son la base de la dieta en Japón), del resto de animales –el yodo 131 aparece precozmente en la leche–, de las plantas, la fruta y las verduras. Este proceso se irá acumulando, pasará de un ser vivo a otro e irá empeorando (miles de renos tuvieron que sacrificarse en el Ártico tras Chernóbil al estar contaminados por los líquenes que contenían cesio-137 que habían ingerido). La persistencia de estos radioelementos en el medio perdura

[2] Según informaciones de la propia empresa propietaria TEPCO, el nivel de yodo-131 detectado en las aguas que rodean la central nuclear de Fukushima eran el jueves, 24 de marzo de 2011, ¡147 veces superiores a los niveles que se consideran seguros!

largo tiempo y su presencia puede detectarse en los alimentos incluso años después de un accidente nuclear.

Para prevenirse de la contaminación radiactiva al principio de la exposición, el contacto con la piel se puede eliminar lavándose con el mismo celo que tiene un cirujano cuando entra a un quirófano. Mucho más difícil es luchar contra la principal vía de contacto con los elementos contaminantes: la inhalación. Frente a ella, sólo son efectivas ante el radioyodo pastillas de yoduro potásico como las que las autoridades japonesas han repartido entre la población. El tiroides, cuando está repleto, no absorbe más yodo y el organismo elimina el que le sobra. Si se satura con yodo normal administrado en pastillas, se facilita que al inhalar el radiactivo éste no se capte y se elimine rápidamente.

Las causas han sido muy diferentes, pero el accidente de Fukushima es, en síntesis, un Chernobil a cámara lenta. El terremoto produjo alteraciones en la estructura de los reactores y el maremoto provocó fallos de los sistemas de refrigeración, inutilizándolos. La temperatura fue aumentando progresivamente y, debido al enorme incremento de la presión, se ha liberado vapor de agua e hidrógeno junto con los gases radiactivos que se producen en la vasija de contención. La estructura de las barras de uranio-235 del reactor va deformándose y acabará fundiéndose parcial o, en el peor de los casos, totalmente. En Chernobil la fusión fue global, por lo que la explosión fue enorme y de una sola vez. En Japón, por el contrario, hay una pérdida paulatina de elementos radiactivos y explosiones parciales de los reactores.

No está claro en el momento que escribimos por cuánto tiempo funcionarán los intentos de refrigeración de emergencia, helicópteros, bomberos, ni se sabe en estos momentos cuándo se restaurará el abastecimiento normal de energía. No será cuestión de días saber qué comportamientos están teniendo los seis reactores nucleares, qué ha pasado con los motores diesel de seguridad, con las piscinas de residuos altamente radiactivos, con las vasijas de contención, y, desde luego, con los trabajadores de la central. A finales de marzo el reactor 2 emitía el máximo nivel de radiactividad hasta el momento. Dentro de seis meses, el perfil de lo sucedido será distinto (y mucho peor seguramente) del que ahora podemos vislumbrar. Según el organismo oficial austriaco para la meteorología y la geodinámica (ZAMG, Zentralstalt für Meteorologie und Geodynamik) el yodo-131 emitido representaba el 20% del total que dispersó Chernobil, mientras que el cesio-137 alcanzaba el 50% de aquel. Y lo señalado eran estimaciones de los primeros cinco días del accidente. El 19 de marzo ya fueron detectadas emisiones de Fukushima en Hawai, las islas Wake y la costa de California. El organismo afín alemán ha apuntado estimaciones parecidas.

A finales de 1999, según un sondeo de Asahi Shinbun, un 45% de los japoneses se oponían a la energía nuclear y sólo un 32% la apoyaba. Tres años antes, la mitad de la ciuda-

danía de la prefectura Mie firmó una declaración que se oponía a la construcción en la zona de una planta nuclear. Sin embargo, como señaló otro estudio publicado por la Universidad Rice en el año 2000 sobre la opinión pública y la energía nuclear en Japón, una poderosa e influyente minoría social argumentó que la energía nuclear era esencial para la independencia energética de Japón. Los responsables de la propuesta descartaron las protestas tildándolas de ejemplos de ansiedad a corto plazo, llegaron a hablar incluso de intereses económicos egoístas y usaron recompensas financieras y compensación para calmar el descontento. La dependencia nipona de la energía nuclear siguió aumentando. Si en 1990, un 9% de la electricidad de Japón era generada en plantas nucleares, en 2000 el porcentaje era de un 32%.

Se ha confirmado estas últimas semanas que TEPCO, la corporación gestora de la central, se abstuvo de efectuar recientemente varias inspecciones a la planta. Entre ellas, la comprobación del funcionamiento del generador de energía alternativo para hacer frente a un corte de luz. *Business is business* y hay que disminuir o eliminar los costes "inútiles".

Es el momento de debatir amplia y documentadamente el futuro de la energía nuclear y nuestros usos de las fuentes energéticas

En el momento en que escribimos, la OMS discrepa del Gobierno nipón sobre la contaminación de los alimentos. La radiación detectada en varios productos es más grave de lo que se esperaba. Ha sido el primer toque de atención del organismo internacional desde que estalló la crisis. Hasta ahora había respaldado las tesis del Gobierno de Tokio sobre el nivel de gravedad del problema, afirmando que la fuga radiactiva de Fukushima no era peligrosa para la salud más allá del perímetro de evacuación. Sin embargo, en la tercera semana de marzo, la OMS ha lanzado una dura advertencia al dictaminar que la radiación detectada en los alimentos era "más grave" de lo que previamente se esperaba. Las partículas de yodo-131 y cesio-137 que los reactores emiten a la atmósfera han contaminado alimentos y agua de una forma más rápida y agresiva de lo que los expertos esperaban. «Es evidente que estamos ante una situación muy seria», declaró Peter Cordingley, el portavoz de la OMS para el Pacífico Occidental. El agua embotellada se ha agotado en Japón por el temor a la contaminación del agua corriente.

Una pesadilla de *Yume* (Sueños), un film de 1990 del maestro Akira Kurosawa, lleva por título «El monte Fuji en rojo». En ella, la gente huye de un terremoto por un puente. Una mujer y sus dos hijos, un hombre trajeado y otro hombre vestido informalmente se detienen para mirar hacia el monte Fuji. Horrorizados advierten que está haciendo erupción (el Fuji ha entrado en erupción realmente unas 75 veces en los últimos 2.200 años). Una inmensa

nube radioactiva aparece en el horizonte, inmensas columnas de llamas envuelven la montaña. El hombre trajeado afirma que la montaña está rodeada por seis plantas atómicas. Huyen pero saben que no hay escapatoria. Japón es un país pequeño. El sueño-pesadilla prosigue con un nuevo escenario: un acantilado desierto que domina el mar, cubierto de escombros. El otro hombre pregunta dónde se ha ido la gente. Todos han saltado al mar, le responden. Apunta al cielo y explica: «El rojo es plutonio 239. Un cien millonésimo de un gramo causa cáncer. El amarillo es estroncio 90. Se introduce en el cuerpo y causa leucemia. El púrpura es cesio 137. Afecta la reproducción y causa mutaciones. Produce monstruosidades. La estupidez del hombre es increíble. La radioactividad es invisible. Pero debido al peligro la colorearon. Pero eso sólo hace que sepas qué es lo que te mata. Es la tarjeta de visita de la muerte». Se inclina cortésmente y dice «*Osaki ni*» (yo primero). Se vuelve hacia el acantilado y se dispone a saltar al mar. Su compañero trata de retenerlo, la radiación no mata de inmediato. Pero él responde «esperar la muerte no es vivir». La mujer, que está estrechando fuertemente a sus hijos, grita: «Nos dijeron que la energía nuclear era segura. El accidente humano es el peligro, no la propia planta nuclear. No habrá accidentes, no hay peligro. Es lo que nos dijeron. ¡Qué mentirosos! ¡Si no los cuelgan por esto, los mataré yo misma!» El hombre que está a punto de saltar se atreve a decirles que la radiación los matará en su nombre. Se inclina y confiesa que él merece morir, lanzándose por el precipicio mientras los vientos radioactivos rodean al resto de seres vivientes.

No es este un escenario al que debamos aproximarnos aunque se esté haciendo todo lo posible para arrojarnos a él. Es el momento de debatir amplia y documentadamente el futuro de la energía nuclear y nuestros usos de las fuentes energéticas. El ministro de Industria español, uno de los políticos más pro nucleares del Gobierno, ha aceptado a regañadientes que si alguno de los reactores nucleares españoles no supera la prueba de resistencia europea, el Gobierno no tratará de reparar los defectos sino que cerrará la instalación, al tiempo que ha hablado de un examen con criterios “rigurosos” lo cual parece reconocer que los anteriores exámenes no eran tan exigentes. Ningún país de la UE se ha atrevido a admitir que algunas de sus centrales podían no ser seguras pero no es improbable que el endurecimiento de los controles europeos pueda poner al descubierto algunas deficiencias. El Gobierno de Angela Merkel, por su parte, un Gobierno muy pro nuclear hasta el momento, ha paralizado el funcionamiento de todos los reactores construidos antes de 1980.

Un grupo de países liderados por Austria, un país desnuclearizado donde hace años se ganó un referéndum en contra de la energía nuclear, se ha mostrado muy crítico con la existencia misma de la energía nuclear en Europa. Serbia debería transitar ese mismo sendero de racionalidad. Su ciudadanía, la ciudadanía española, los ciudadanos de todo el mundo, sabemos bien que los dos lemas esenciales del movimiento ecologista crítico e informado, así como el de los defensores de la salud pública, están más vivos que nunca:

«¿Nucleares? No, gracias», «Mejor activos hoy que mañana radiactivos». Hoy de nuevo es necesario defenderlos y airearlos con ánimo, tenacidad e insistencia. La industria nuclear está herida de muerte; la movilización ciudadana debe enterrarla en beneficio de la Humanidad y de su futuro. Un Faust enloquecido no puede ser nuestro referente. «¡Por una humanidad más justa en una Tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo!»[3]

[3] La cita esta extraída del editorial del primer número de *mientras tanto*, noviembre de 1979. Manuel Sacristán fue su autor tras una discusión colectiva.

Periscopio

Efectos sociales de la crisis. Una evaluación a partir del Barómetro 177
Colectivo Ioé

Los efectos de la crisis en los hogares: nivel de integración y exclusión social 189
Juan J. López Jiménez y Víctor Renes

COLECTIVO IOÉ[1]

Efectos sociales de la crisis. Una evaluación a partir del *Barómetro social de España*[2]

La crisis de los últimos años presenta efectos paradójicos desde el punto de vista social: por un lado, ha provocado una fuerte destrucción de empleo, con sus efectos colaterales de pobreza y pesimismo político y económico; por otro, el decrecimiento forzoso derivado de la recesión ha puesto freno al deterioro de algunos indicadores ambientales. El pinchazo de las burbujas inmobiliaria y financiera ha supuesto, en un primer momento, una revalorización relativa de las rentas salariales y del acceso a la vivienda, pero son varios los indicadores que apuntan a una salida regresiva de la crisis, con más desigualdad social y políticas sociales menguantes.

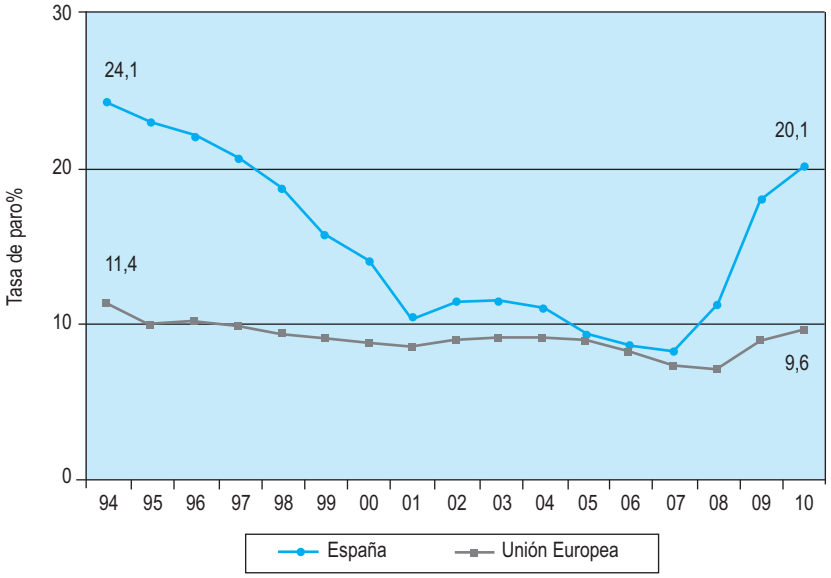
Entre 1994 y 2007 los indicadores de acceso al empleo mejoraron mucho en España: la tasa de actividad creció del 51 al 60%, especialmente entre la población femenina; el número de empleos pasó de 12 a 20 millones (3 de ellos para inmigrantes que produjeron un inesperado crecimiento de la población del país); y el paro se redujo en dos tercios, pasando del 23,9% al 8,3%. Sin embargo, a raíz de la crisis se han destruido dos millones de empleos y la tasa de paro ha llegado al 20,3% en el cuarto trimestre de 2010.

Tanto la creación de empleo antes de la crisis, como su destrucción posterior, han tenido lugar con una intensidad mucho mayor que en el resto de la

1 www.colectivoioe.org

2 El *Barómetro social de España*, realizado por Colectivo Ioé con el apoyo de CIP-Ecosocial, y publicado por Traficantes de Sueños, Madrid, 2008, es una herramienta de análisis de la sociedad española a partir de 189 indicadores que se agrupan en 35 dimensiones y 11 ámbitos de la vida social. En su última edición en línea se han incorporado los datos correspondientes a 2009, con lo que se cubre un período de 16 años (1994-2009). Como novedad se ha introducido una nueva metodología que trata de captar no sólo la evolución de los indicadores sino su nivel de calidad en relación al contexto europeo. Véase www.barometrosocial.es

Gráfico 1. Tasa de paro de la población activa en España y la Unión Europea (1994-2009)



Fuente: elaboración propia a partir de la EPA, para España, y de Eurostat, para la Unión Europea. El gráfico y su elaboración se recogen en el Indicador 2 del ámbito de Empleo, en www.barometrosocial.es

Unión Europea: en 2005-2006 la tasa de paro de España llegó a situarse en la media comunitaria, para duplicarla con creces en 2008-2009 (véase gráfico 1). Ello se debe, principalmente, a la elevada tasa de temporalidad de la contratación laboral que, al iniciarse la crisis, afectaba especialmente a la juventud y al colectivo inmigrante, con tasas en 2007 del 63% y 51%, respectivamente.

Aumentan la desigualdad y la pobreza

Los valores agregados de renta y patrimonio disponible han crecido de forma continua en los últimos 16 años, salvo en las crisis de 2001 y 2008, para retomar de nuevo la senda alcista en 2009. Sin embargo, los índices de desigualdad y de pobreza registran resultados negativos tanto en la etapa de crecimiento económico, hasta 2007, como en la actual coyuntura de crisis (máxima tasa de hogares pobres en 2009). El modelo de crecimiento español ha impulsado un notable incremento del producto bruto en ese periodo (tasa interanual del PIB del 3,4%) y una expansión mucho mayor del capital financiero e inmobiliario (tasa interanual del 5,4%) pero con un reparto muy desigual: mientras los mercados financieros se globalizan y producen ingente rentabilidad para una minoría, apenas mejora el poder adquisi-

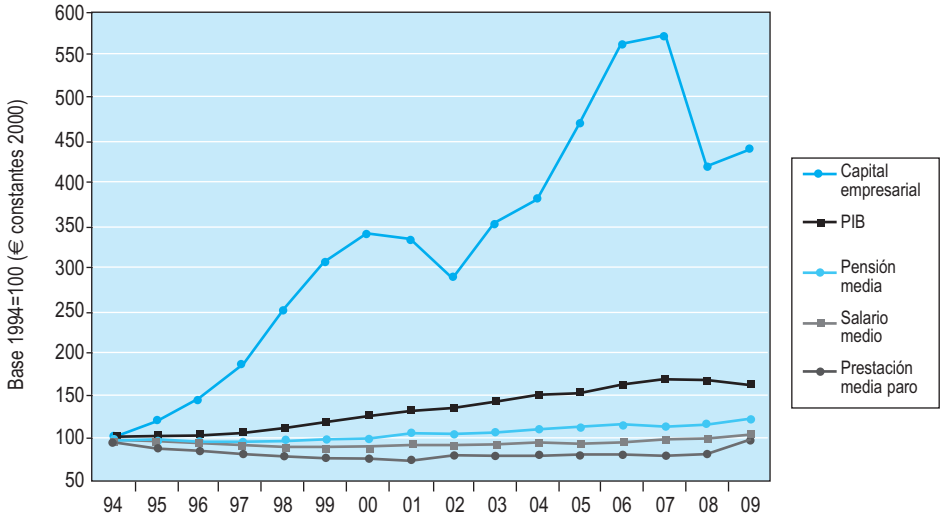
tivo de la mayoría de la población que percibe rentas salariales (la variación interanual del salario medio fue del 0,3%). No obstante, la intensa creación de empleo hasta 2007 y el mayor gasto público en políticas sociales, con un incremento ligeramente por encima del PIB hasta 2009, han mitigado las penurias materiales de una cuarta parte de los hogares, cuyas percepciones salariales en cómputo anual no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y se encuentran en situación o riesgo de pobreza.

Los ingresos salariales y las prestaciones públicas asociadas han experimentado un crecimiento muy por debajo del PIB y de la revalorización del capial empresarial, cuya base es el trabajo salarial

En cuanto a la fiscalidad, la recaudación bajó bruscamente un 18,3% en relación al PIB en el bienio 2008-2009 a consecuencia de la recesión, a la vez que se incrementaba el gasto público en un 18,9%, sobre todo en políticas sociales para abordar los efectos de la crisis (lo que mejora el índice al final del período). Esto dio lugar a un déficit fiscal del Estado del 11,2% en 2009 y a un incremento sustancial de la deuda soberana que el Gobierno trata de resolver por la vía de reducir el gasto público (salarios, pensiones, inversiones…), y no de incrementar los impuestos sobre el capital (principal beneficiario de las plusvalías en años anteriores) o abordar con eficacia el fraude fiscal, que el 82% de la población considera elevado.

Dado que el nivel de vida de la mayoría de los hogares depende de los ingresos salariales y de las prestaciones públicas asociadas a ellos (desempleo y pensiones principalmente), resulta muy negativo desde el punto de vista social que tales ingresos hayan experimentado de forma continua un crecimiento muy por debajo del PIB y de la revalorización experimentada por el capital empresarial, cuya base es precisamente el trabajo asalariado (véase gráfico 2). Tras el descalabro experimentado por el valor monetario de las acciones empresariales en 2008 (–26,6%), su despegue se inició justamente en el año siguiente, que fue el de mayor recesión (caída del PIB del 3,3%), con una subida media del 5,3%, mientas se registraba la máxima tasa de hogares pobres del período estudiado (20,8%). El salario medio se revalorizó un 0,8% en 2009, pero no porque aumentaran los salarios sino porque muchos perceptores con baja remuneración ya no entraban en el cómputo al quedarse en paro (al finalizar el año uno de cada diez hogares tenía a todos sus miembros activos en situación de desempleo).

Gráfico 2. Evolución de los salarios, las prestaciones de desempleo y las pensiones, en comparación con el PIB y el capital accionarial de las empresas españolas (1994-2009)



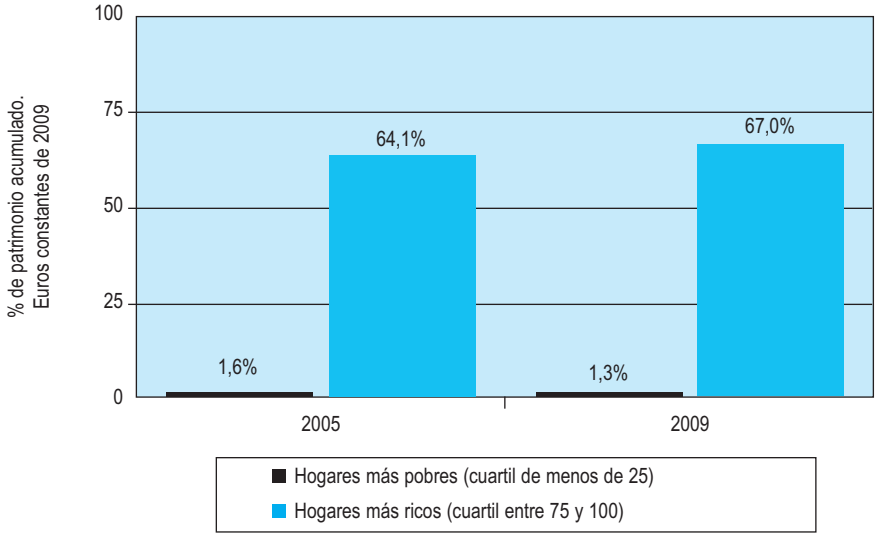
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España, el Banco de España y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El gráfico y su elaboración se recogen en el Indicador 8 del ámbito de Empleo, en www.barometrosocial.es

La principal consecuencia de los procesos anteriores, desde el punto de vista social, es que la sociedad española presenta un reparto de la riqueza cada vez más desigual, lo que se ha acrecentado en la etapa de crisis. Según la Encuesta Financiera de las Familias la ratio de desigualdad entre el 25% de hogares más ricos y más pobres pasó de 39,3 en 2005 a 50,4 en el primer trimestre de 2009. En términos de valor agregado el cuartil más rico incrementó su patrimonio en la coyuntura de crisis de los últimos años en un 20%, mientras el cuartil más pobre lo redujo en un 6,4% (véase gráfico 3).

La recesión frena el deterioro ambiental

La recesión económica de 2008-2009 ha afectado a la producción industrial, agrícola y ganadera, a la construcción, al transporte y al consumo eléctrico, provocando paradójicamente una sustancial mejora de los índices medioambientales: las emisiones de CO_2 se han reducido un 15,6% y el consumo energético un 9,3%, lo que permite a España acercarse 24 puntos a las exigencias del Protocolo de Kioto para 2012 (aún así, todavía faltan 14 puntos para cumplir el nivel establecido de emisiones).

Gráfico 3. Evolución de la distribución de la riqueza entre 2005 y 2009 (hogares más pobres y más ricos)



Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España, Encuesta financiera de las familias (EFF) 2008, Métodos, resultados y cambios desde 2005, Madrid, 2010.

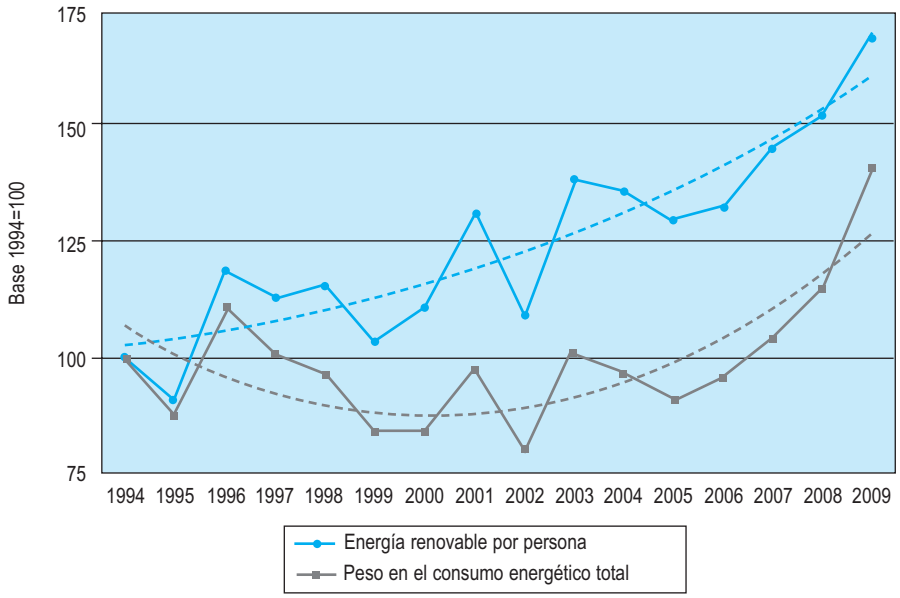
La intensidad energética por cada millón de euros del PIB, que venía creciendo hasta el año 2000, se ha reducido desde entonces casi un 20% (–5,4% en 2009) y las energías renovables, cuyo peso en el consumo energético total era cada vez menor hasta 2002, incrementaron su contribución relativa en un 74% entre ese año y 2009 (véase gráfico 4). Además, en la medida en que las energías renovables son de producción autóctona, la dependencia energética ha bajado del 81,1% en 2005 al 77% en 2009.

En los últimos años se ha reducido el consumo de fertilizantes y fitosanitarios en la agricultura y se ha ampliado la superficie cultivada con criterios ecológicos, si bien España continúa en este punto por debajo de la media comunitaria. También ha mejorado el tratamiento y reciclado de residuos, aún cuando no se han alcanzado las metas fijadas por el Plan Nacional de Residuos Urbanos.

Las políticas sociales resisten el envite (hasta 2009)

El índice global de políticas sociales, que agrupa los ámbitos de salud, educación, vivienda y protección social, ha mejorado ligeramente en el período estudiado. De los cuatro ámbitos implicados, Salud es el que registra mejores resultados, Educación y Protección social

Gráfico 4. Evolución de las energías renovables en España (1994-2009)



Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El gráfico y su elaboración se recogen en el Indicador 11 del ámbito de Medio ambiente, en www.barometrosocial.es

avanzan posiciones, y Vivienda es el único que termina 2009 con signos negativos. El gasto público en protección social se ha mantenido continuamente por debajo de la media comunitaria aunque mejorando la diferencia en puntos de PIB (–5,7 en 2000 respecto de la UE-15 y –4,2 en 2008). Para los últimos años aún no se han publicado datos homogeneizados de Eurostat, lo que impide valorar la incidencia de las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno a partir de la primavera de 2010.

Los indicadores de salud de la población presentan resultados diversos: positivos en relación a la mortalidad y esperanza de vida; negativos en la dimensión de morbilidad y hábitos de vida, sobre todo para las mujeres; y bastante estable en la dimensión de recursos sanitarios: el gasto público y privado en sanidad alcanzó en 2008 el 9% del PIB, la cifra más elevada desde 1994. Entre 2007 y 2009 ha aumentado el porcentaje de población que valora positivamente el sistema público de salud (desde 67,4% hasta 69,2%), mientras que la tasa de médicos colegiados por habitante se ha incrementado y se ha reducido el número de camas hospitalarias por habitante.

El índice sintético de educación registró sus mejores años en el periodo 1994-1999, para estancarse después y mejorar algo en los años más recientes. Las dimensiones determi-

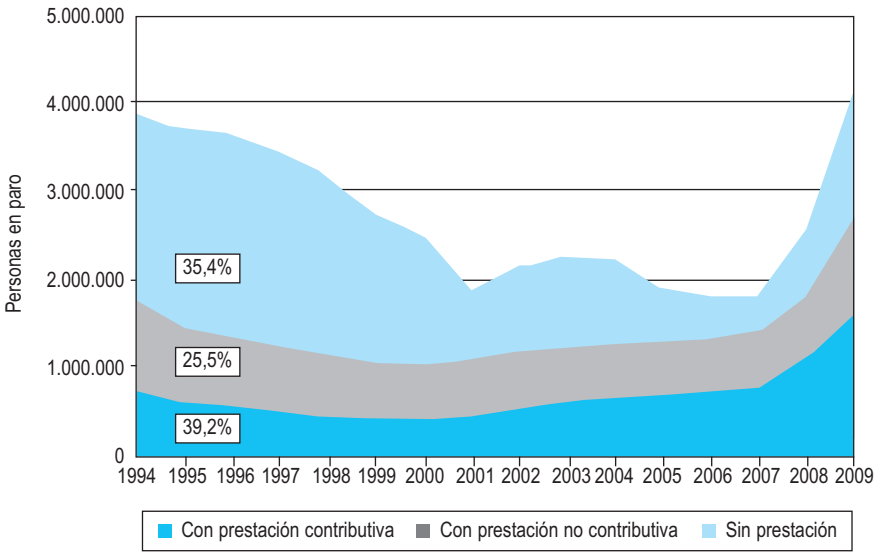
nantes de la mejora del índice general son los recursos destinados a educación y los avances en el nivel educativo de la población adulta (consecuencia de la universalización del acceso a la educación); en cambio, los resultados escolares están lejos de recuperar los índices positivos vigentes a finales de los años noventa. En especial, la tasa de abandono educativo temprano, que llega al 31,2% de la población entre 18 y 24 años, sitúa a España en el último puesto de la UE-27, sólo por delante de Malta.

El acceso a la vivienda en propiedad ha supuesto un creciente endeudamiento de muchas familias trabajadoras, a la par que se enriquecían los bancos y las promotoras, hasta que ha pinchado la burbuja inmobiliaria y se han abaratado los precios (el peso de las deudas de los hogares en relación a su renta disponible pasó del 63% en 1995 al 148% en 2007, para descender al 140% en 2009). Sin embargo, en los últimos años la caída del precio de compra y de los alquileres se ha visto contrarrestada por la mayor dificultad de acceso al crédito y la pérdida de poder adquisitivo de las familias en paro, dando lugar a un incremento sin precedentes de los embargos y los desahucios. En especial, los embargos de viviendas con hipotecas pendientes, que registraban una media anual de 15.000 casos hasta 2005, han llegado a 93.000 en 2009 y se aproximan a 120.000 en 2010.

El índice del Barómetro referido al sistema de pensiones, basado en 5 indicadores, que venía arrastrando una dinámica de relativo estancamiento, experimentó una mejora clara en 2009, en plena crisis. En este año se produjo el mayor incremento en euros constantes de la pensión media de jubilación, tanto de carácter contributivo (+5,1%) como no contributivo (+2,6%), y se amplió el peso de las pensiones contributivas respecto a las asistenciales hasta suponer el 94,3% de las pensiones públicas; sin embargo, aumentó el porcentaje de pensionistas con una pensión inferior a la mínima de jubilación (637 €/mes), a la vez que disminuía la tasa de pensionistas respecto al total de población con 65 o más años. También ha mejorado en los últimos años el servicio público de ayuda a domicilio para personas dependientes y la oferta de plazas en residencias públicas, aunque éstas siguen siendo minoritarias en relación a las privadas.

Desde el año 2007 se ha producido un deterioro continuo de la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo respecto a la población desocupada, tanto en prestaciones contributivas (de 42,5% a 39,2%) como no contributivas (del 60,9% al 41,8% de quienes no percibían la contributiva) (véase gráfico 5). En sentido positivo se ha producido un incremento de la prestación media por desempleo en 2009 (+3,6%), así como un incremento de las prestaciones contributivas sobre las no contributivas. Una mejoría que se debe precisamente al incremento de 524.000 nuevos perceptores de prestación contributiva en 2009, muchos de ellos con una larga historia de cotización a la Seguridad Social.

Gráfico 5. Evolución de las prestaciones de desempleo, según tipos (1994-2009)



Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales (MTAS) y de la Encuesta de Población Activa (INE). El gráfico y su elaboración se recogen en el Indicador 9 del ámbito de Protección social, en www.barometrosocial.es

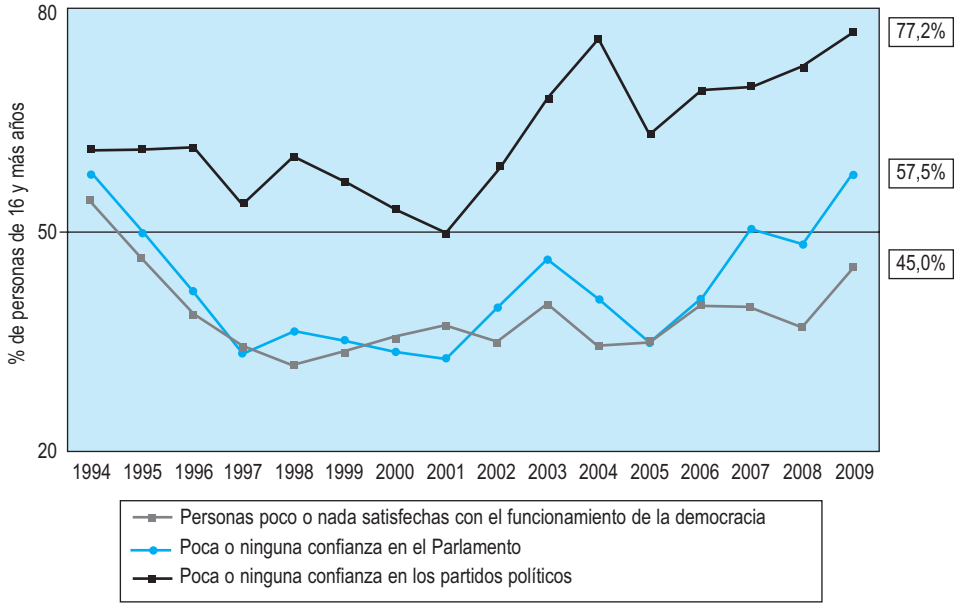
Crece la desconfianza en las instituciones políticas

Seis dimensiones del Barómetro abordan, a partir de 23 indicadores, los asuntos relacionados con la participación, la seguridad y las instituciones políticas y de regulación social. En general, sus resultados son oscilantes a lo largo de los últimos 16 años, en función de las diversas coyunturas políticas, con una evolución bastante negativa en 2008-2009, a raíz de la crisis.

Aunque la información sobre asociacionismo presenta en España muchas limitaciones, si tomamos como referencia las asociaciones inscritas a nivel estatal se observa una ligera tendencia decreciente desde mediados de los años noventa del siglo XX. No obstante, los colectivos con orientación cívico-política reivindicativa han experimentado un notable incremento, sobre todo en 2009. Las personas afiliadas a sindicatos oscilan entre el 9 y el 15% de la población activa, según las encuestas del CIS, una proporción baja en relación a la media europea y que ha experimentado uno de los mayores descensos en 2009 (–17% respecto al año anterior). La afiliación a partidos políticos, también según el CIS, oscila entre el 2,3 y el 4% de la población adulta; la máxima tasa se registró en 2007 (4%), con descensos en 2008 y 2009 (3,4 y 3,2%, respectivamente).

El índice de confianza en la política presenta sus mejores resultados en los momentos de cambio de partido en el Gobierno, para empeorar bruscamente al final de las legislaturas: 1994 (tercera legislatura del PSOE); 2003 (segunda legislatura del PP) y 2009 (segunda legislatura del PSOE). En este último año se produce el máximo crecimiento interanual de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, el Parlamento y los partidos (gráfico 6).

Gráfico 6. Desconfianza en las instituciones políticas (1994-2009)



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas del CIS. El gráfico y su elaboración se recogen en el Indicador 8 del ámbito de Participación ciudadana, en www.barometrosocial.es

Más de la mitad de la población desconfía del poder judicial, siendo 2008 el año con opiniones más negativas (21,2% «ninguna confianza», 36,8% «poca confianza»). Sin embargo, los procesos iniciados en los juzgados se han incrementado continuamente en los últimos 16 años, hasta duplicarse casi en números absolutos (+62% en términos relativos a la población). Las tasas de pendencia y congestión judicial se redujeron bastante en los años noventa para volver a crecer después, con máximos incrementos en el bienio 2008-2009 (al iniciarse 2010 había 3,1 millones de procesos judiciales pendientes).

La creciente litigiosidad judicial no se corresponde con la tasa de delincuencia existente en el país, que es una de las más bajas de la Unión Europea y se redujo un 21% entre 2002

y 2009, una evolución contrapuesta al número de personas presas cuya tasa ha aumentado un 34,7 % entre dichos años (76.000 en 2009, de ellas una quinta parte está pendiente de juicio).

España consolida su posición entre los países ricos

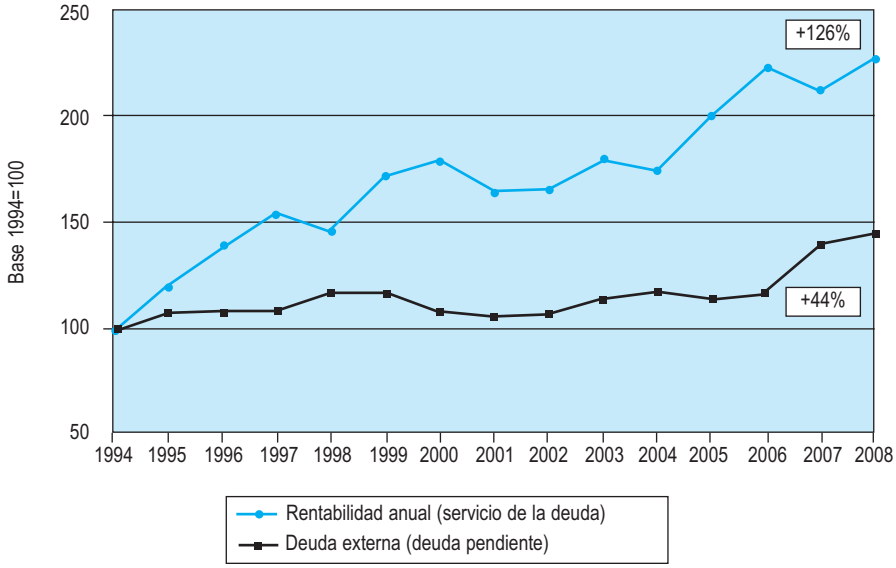
El índice del Barómetro que mide las relaciones internacionales de España presenta una evolución paralela a la del conjunto de países de renta alta: en un mundo económica y políticamente jerarquizado, la brecha económica entre países ricos y pobres se amplió en los últimos años del siglo XX, para reducirse ligeramente en la primera década del XXI, especialmente a raíz de la crisis económica. En 2009 la renta por persona de los 40 países más ricos ha descendido 1.312 dólares mientras ha aumentado 20 dólares en los 40 más pobres y 79 en los intermedios. El desnivel económico de España con los países de mayor inmigración (Rumania, Marruecos y Ecuador) aumentó un 22% entre 1994 y el año 2000, para reducirse después un 24% en la primera década del siglo XXI.

En cuanto a la brecha ecológica entre los 40 países más y menos contaminantes se amplió hasta el año 2000 y se redujo hasta 2007, último año con datos disponibles en nuestra fuente de información (Banco Mundial). En España las emisiones de CO_2 por persona crecieron en relación a la media mundial hasta 2005 para reducirse un 11% en los dos últimos años.

La deuda externa de los países de renta media y baja, según la clasificación del Banco Mundial, pasó de 1,9 billones de dólares en 1994 a 2,8 billones en 2008 (en valores constantes del año 2000); sin embargo, el peso de dicha deuda en relación a la economía de los citados países se redujo notablemente, hasta situarse en el 20,3% del PIB en 2008. Esta positiva evolución contrasta con los crecientes beneficios que salen de dichos países en concepto de servicio de la deuda, que se ha duplicado con creces entre 1994 y 2008 (de 192.000 millones de dólares anuales a 435.000 millones). La rentabilidad para los acreedores del capital invertido en los países de menos renta ha crecido, por tanto, tres veces más deprisa (126%) que el monto de la deuda pendiente (44%), lo que supone que cada seis años se paga toda la deuda, pero ésta sigue creciendo (grafico 7).

No disponemos de información en torno a la deuda externa que otros países tienen contraída con empresas o entidades financieras españolas, cuyo monto debe ser muy elevado en consonancia con el volumen de inversión española en el exterior. Sólo conocemos la deuda de la que es acreedor el Estado español, cuyo volumen absoluto y relativo ha disminuido en los últimos 15 años, pasando del 2,12 al 0,78% del PIB. En cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años llegando

Gráfico 7. Evolución de la deuda externa y del servicio de la deuda en los países de renta media y baja (1994-2008)



Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial. El gráfico y su elaboración se recogen en el Indicador 6 del ámbito de Relaciones internacionales, en www.barometrosocial.es

casi a triplicar la media mundial de la Ayuda proporcionada por los países de renta alta (0,17 del PIB en 2008, frente al 0,44% por parte de España). En la última década nuestro país se ha convertido en el primer remesador de la Unión Europea, superando los 8.000 millones de euros en 2007, cantidad que se ha reducido en un 12% a raíz de la crisis.

Se mantiene el diferencial entre mujeres y hombres

El ámbito de Igualdad de género tiene carácter trasversal en el Barómetro y sus 27 indicadores se agrupan en 4 dimensiones: actividad, salud, formación y protección social. En conjunto, la desigualdad de género se mantiene en el mismo nivel que hace 16 años, si bien las mujeres han ganado posiciones en actividad y formación, y han perdido en salud y protección social.

La tradicional discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo se sigue manteniendo aunque las diferencias se han reducido significativamente, sobre todo en relación a las tasas de actividad y de desempleo. La crisis ha afectado más a la población masculina, lo que ha permitido que la diferencia en la tasa de paro, que era de 5 puntos porcentuales

en 2007, pasara a ser de sólo un punto en 2009 y que el salario medio de las mujeres, que era un 30% inferior al de los hombres en 2007, se redujera 5 puntos en 2009.

La equiparación entre sexos en el campo educativo también ha avanzado de forma importante. Las mujeres registran menos retraso escolar y abandono temprano que los hombres, y la distribución de matrículas universitarias por sexos se ha equilibrado continuamente (en 2009 la tasa de personas adultas con título superior era casi la misma para ambos sexos). No obstante, las diferencias se han ampliado levemente en la etapa de crisis, a partir de 2007, para algunos indicadores (mujeres sin educación primaria, repetidoras de curso, etc.).

La salud es el punto que ha evolucionado más negativamente para las mujeres. Entre otros indicadores, el diferencial entre ambos sexos se ha ampliado en la percepción del propio estado de salud, el consumo de tabaco, alcohol y cannabis, y la esperanza de vida. La tradicional ventaja relativa de las mujeres en materia de mortalidad y hábitos saludables se ha visto reducida en relación a los hombres quienes, además, presentan una tasa más baja de enfermedades y discapacidades.

Las mujeres están peor posicionadas que los hombres en materia de protección social y esa diferencia se ha incrementado ligeramente en el período estudiado, con altibajos según los años. Así, en 2009 se ha recortado la desigualdad de género en cuanto a la tasa de pobreza y las pensiones de jubilación, pero ha empeorado en relación a las prestaciones de desempleo, cuya percepción media es ahora un 20% inferior a la de los hombres.

JUAN J. LÓPEZ JIMÉNEZ Y VÍCTOR RENES

Los efectos de la crisis en los hogares: nivel de integración y exclusión social

Esta crisis está provocando un amplio aumento de la vulnerabilidad social y un incremento de la desigualdad social en España. Sin llegar a situaciones de exclusión social, además, muchos hogares han visto precarizarse sus condiciones de vida. Como veremos, el avance de la exclusión pone de manifiesto las goteras del sistema de protección social. El artículo recorre las dimensiones de los problemas de exclusión, los grupos más afectados y un análisis de distintos itinerarios comparativos.

Juan J. López Jiménez y Víctor Renes son miembros del Equipo de Estudios-CÁRITAS

¿Ha afectado la crisis económica a la cohesión de la sociedad española, y en concreto al aumento de los sectores excluidos? Un informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas a partir de sendas encuestas, la primera de 2007 y la segunda de 2009, demuestra que la crisis económica ha sido la gota que ha colmado el vaso en muchos hogares que ya atravesaban una situación precaria.[1] Conviene no olvidar que los procesos de exclusión social y vulnerabilidad de nuestro modelo de integración no son fenómenos nuevos generados por la crisis. Más bien al contrario, se nos han mostrado como características estructurales de la sociedad española, que no hemos sido capaces de transformar significativamente en los periodos de bonanza económica y que ahora la crisis viene a ampliar y a intensificar.[2]

Lo novedoso es que ahora la situación social de los sectores más necesitados difícilmente puede obviarse en la agenda pública. El conjunto de factores que perfilan el riesgo de exclusión social (dificultades para hallar una vivienda, desempleo, falta de estudios, pobreza, mala salud, dependencia física y psíquica, problemas de relaciones personales, de aislamiento social) está creciendo en la actual situación de crisis. En este texto tomamos como referencia el análisis del Informe de la Fundación Foessa sobre el impacto de la crisis en la cohesión social de España con los datos y los cuadros *ad hoc*.

[1] M. Laparra (coord.), *El impacto de la crisis en la cohesión social de España*, Fundación FOESSA y Cáritas, Madrid, 2010.

[2] V. Renes (coord.), *VIº Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España*, Fundación FOESSA y Cáritas, Madrid, 2008.

Aumenta la precariedad y la exclusión social

La crisis, efectivamente, ha tenido un impacto muy rápido y muy intenso en la extensión del número de hogares situados bajo el umbral de pobreza. La pobreza relativa podría haber aumentado hasta alcanzar casi al 21% de la población.

Cuadro 1. Evolución de la pobreza en la crisis

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010[2]
Total							
60% mediana	19,9	19,7	19,9	19,7	19,6	19,5	20,8
30% mediana	3,8	3,9	4,3	4,1	3,8	5,4	-

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

También esta tendencia se manifiesta en la extensión de los hogares afectados por procesos de exclusión social de una cierta entidad. El carácter más estructural de los procesos de exclusión social hace que sus resultados sean visibles más lentamente que la simple carencia de ingresos.

Cuadro 2. Incidencia de la exclusión social en España en 2007 y 2009

	Muestra conjunta 2007-2009		Muestras completas 2007 y 2009	
	2007	2009	2007	2009
Integrado	48,9	35,2	47,5	37,2
Integración precaria	34,9	46,3	35,2	44,5
Exclusión moderada	10,4	12,9	11,9	12,5
Exclusión severa	5,9	5,7	5,3	5,8
	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuestas Foessa 2007/2009

El aumento de entre 1,1 y 2,3 puntos porcentuales de los hogares excluidos es muy significativo al tratarse de un periodo corto (a la vista de la evolución de estos parámetros en los últimos 25 años). La crisis nos ha traído un aumento de los hogares afectados por los distintos procesos de exclusión social cercano al millón de personas (un incremento en torno al 11% en estos dos años). En términos de población estaríamos hablando de más de 8 millones de personas afectadas por procesos de exclusión social y más de 10 millones bajo el umbral de la pobreza en 2009.

Se aprecia un aumento de la exclusión severa en la muestra completa de 2009, respecto de la anterior, algo que parece coherente con los informes provenientes de los dispositi-

vos asistenciales durante todo el periodo.[3] Además, los procesos de exclusión social estarían afectando a un mayor número de población porque la crisis ha impactado con más intensidad en las familias de mayor tamaño, y el desempleo –a diferencia de otras crisis anteriores– está incidiendo más intensamente en las personas que son referentes del hogar. En cualquier caso, el cambio sustancial en este periodo es el significativo aumento de los hogares situados en posiciones de precariedad sobre todo, y también de exclusión moderada. De hecho, ha descendido el número de hogares plenamente integrados, es decir, los hogares a los que no les afectan ninguno de los indicadores de exclusión.

Las diferentes dimensiones de los problemas de exclusión

Se ha producido un aumento muy notable de los problemas de exclusión del mercado de trabajo que tienen un claro efecto en la participación en el consumo básico. Por otra parte, se confirman las tendencias de un aumento de los problemas de exclusión de la vivienda y de exclusión de los derechos políticos.

Cuadro 3. Cambios en la incidencia de los distintos procesos de exclusión social para los distintos espacios sociales de la integración a la exclusión 2007 y 2009

	Muestra conjunta 2007-2009		Muestras completas 2007 y 2009	
	2007	2009	2007	2009
Exclusión del empleo	15,3	32,4	14,0	32,1
Exclusión del consumo	7,2	9,6	9,0	8,8
Exclusión política	11,2	14,3	13,4	22,2
Exclusión de la educación	6,3	12,5	5,7	11,2
Exclusión de la vivienda	20,9	19,7	19,4	20,3
Exclusión de la salud	12,2	13,5	10,9	11,5
Conflicto social	10,4	7,5	12,7	6,8
Aislamiento social	4,5	7,1	7,6	5,0
Pobreza relativa	19,3	22,7	19,4	20,4

Fuente: Muestra conjunta y muestras completas de la Encuesta Foessa 2007/2009

La crisis ha supuesto no sólo un aumento de los grupos sociales afectados por procesos de precariedad y exclusión social, sino también una transformación sustancial en la naturaleza de los problemas presentes en los distintos espacios sociales. *Los integrados*

[3] Se pueden consultar los cinco Informes del Observatorio de la Realidad Social que Cáritas ha dedicado desde 2008 a 2010 analizando el impacto de la crisis en las demandas y en los perfiles de la población demandante de ayuda social, constatando que se ha duplicado en dos años el número de personas que solicitan ayuda a Cáritas (que ha pasado de 370.000 a 780.000 entre 2007 y 2009).

de hoy son un poco más pobres que los de hace dos años. El espacio de *la integración precaria* ve aumentar significativamente sus problemas económicos y de desempleo que genera un descreimiento en el sistema político, así como ciertos problemas de aislamiento social.

La crisis ha acentuado el perfil femenino de la exclusión social, especialmente en algunas de sus formas más severas

La *exclusión moderada* experimenta también un fuerte impacto del desempleo y de formas de empleo de exclusión, incluso en el sustentador. La situación parece bastante estable en términos de pobreza (que disminuye algo) y de exclusión social (que aumenta ligeramente). La *exclusión severa* experimenta cambios demográficos rápidos (aumento de tamaño de los hogares, aumento de los polinucleares,…) como adaptación a la crisis. Este grupo empeora menos en términos relativos, pero sigue experimentando un empeoramiento general, tanto en términos económicos como sociales. Las situaciones de exclusión extremas están todavía un 26% peor que hace dos años.

Grupos sociales más afectados

De los datos del cuadro 4 (véase p. 193) podemos destacar algunas características de los grupos más afectados.

La exclusión afecta más a las mujeres

La crisis ha acentuado el perfil femenino de la exclusión social, especialmente en algunas de sus formas más severas. Ya antes, la exclusión moderada incidía más en los hogares encabezados por mujeres, pero no las formas de exclusión más extrema. Ahora, también la exclusión extrema afecta más a los hogares en los que el sustentador principal es mujer. Aún así, es necesario recordar que dos de cada tres hogares excluidos están encabezados por un varón. Esto tiene que ver con las características asociadas a los hogares encabezados por mujeres (la edad, el nivel de estudios, la relación con la actividad económica, la estructura de los hogares…).

Los hogares monoparentales y de estructura más compleja, con más de un núcleo familiar y mayor tamaño, se han visto más afectados. El carácter femenino de la exclusión social también está relacionado con una incidencia muy fuerte en las mujeres cabezas de hogar

Cuadro 4. Incidencia de la exclusión social según características del hogar (proporción de hogares en exclusión y en exclusión severa por cada 100 hogares de cada tipo)

	Muestra común 2007-2009				Muestras completas en cada año			
	2007		2009		2007		2009	
	Total exclusión	Exclusión severa	Total exclusión	Exclusión severa	Total exclusión	Exclusión severa	Total exclusión	Exclusión severa
Varón	15,4	5,8	16,5	5,1	16,2	5,4	16,2	5,4
Mujer	19,4	6,8	23,8	7,1	20,7	5,1	24,1	6,9
Hasta 29	15,9	4,1	21,7	5,7	15,1	5,0	28,0	5,2
De 30 a 44	19,6	8	20,5	6	21,0	7,2	23,1	8,6
De 45 a 64	14,3	4,4	19,6	6,3	14,4	4,8	15,3	4,9
De 65 y más	16,2	6,5	15,7	4,9	18,3	4,2	13,8	3,7
Inferior a Graduado Escolar o ESO	21,2	8,5	23,7	6	24,9	9,3	26,3	10,7
Graduado Escolar o en ESO, Bachiller elemental	15,7	6,1	19,2	5,1	22,6	5,2	17,4	4,9
BUP,FPI, FPII, Bachiller LOGSE o superior	9,2	1,7	10,5	2,3	11,5	2,3	10,7	1,6
Diplomado, licenciado o superior	7	1,7	8,8	0,7	5,6	2,4	8,8	1,3
Trabajando	12	3,4	13,1	3,1	14,6	4,7	13,5	3,3
Buscando empleo	71,6	37,8	42,3	14,1	81,0	38,0	46,3	19,2
Pensionista	13,7	4	14,4	4,3	12,6	1,8	11,5	2,8
Otras	19,8	8	26,5	10	21,6	5,5	25,8	9,4
Persona sola	20,4	5,1	23,8	6,5	25,3	3,1	26,5	7,5
De 2 a 4 miembros	14	5,9	16	4,5	15,3	5,8	15,5	4,8
5 y más miembros	28,4	8,2	29,1	15	15,3	6,8	25,9	10,6
Sin núcleo	22,1	6	26,5	7,7	28,1	4,0	28,2	8,6
Mononuclear	14,1	5,7	15,3	4,3	14,5	5,6	15,3	4,6
Polinuclear	30,6	11,3	36,7	23,3	17,5	7,8	31,1	16,7
Hay núcleo monoparental	18,5	6,8	33,2	11,1	12,3	5,9	26,4	9,6
Hay alguien anciano	15,4	5,9	16,1	5,5	15,4	3,7	15,2	4,2
Hay alguien menor de 18	19,2	6,6	18,4	5,9	14,1	6,1	19,1	6,2
Hay alguien joven 18-24	18,3	6,2	25,1	10,9	16,1	5,4	18,4	6,5
Hay persona con minusvalía					29,7	8,0	30,4	11,6
Hay alguien ocupado	13,1	3,8	13	3,6	15,5	4,6	13,0	3,5
Hay alguien parado	53,5	23,6	30,9	10,2	54,2	19,5	31,1	10,4
Barrio en buenas condiciones	12,8	4,1	16,2	4,3	14,4	4,3	14,9	3,8
Barrio degradado, marginal	34,4	15,6	41,8	20,3	34,0	12,1	40,9	19,4
Todos españoles o EU15	12,7	4,1	16	4,4	12,9	3,5	13,7	3,5
Algún extracomunitario o EU12 ampliación	38,8	13,4	39,5	13,2	41,1	14,2	40,0	13,5
Gitanos españoles	75,6	46,3	69,7	39,4	74,2	34,8	66,2	50,0
Total	16,4	6	18,6	5,7	17,2	5,3	18,3	5,8

* Para estos grupos el número de cuestionarios es reducido y el margen de error es alto en la muestra conjunta.
Fuente: Encuestas Foessa 2007/2009

más jóvenes. Además la presencia de menores en el hogar no tiene incidencia cuando el sustentador principal es varón, pero duplica las probabilidades de exclusión para las mujeres. También la presencia de minusvalías tiene un mayor impacto negativo en los hogares encabezados por mujeres.

La crisis tiene rostro generacional

La incidencia de la exclusión social en los hogares encabezados por menores de 30 años es significativamente mayor, aunque pueda ser una proporción reducida del total de hogares excluidos (poco más de 1 de cada 10). También los hogares encabezados por personas entre 30 y 44 años presentan tasas de exclusión claramente por encima de la media y es especialmente alta en estos últimos la incidencia de la exclusión más severa. Este grupo además supone 4 de cada 10 hogares excluidos y casi la mitad de los hogares en exclusión severa. En muchos de estos hogares hay menores y personas jóvenes, que también presentan tasas superiores a la media y que han experimentado un empeoramiento considerable en estos años (uno de cada tres hogares excluidos tienen menores a cargo).

Por el contrario, tanto los hogares encabezados por personas mayores de 65 como aquellos en los que hay alguna otra persona anciana no parecen haber experimentado una gran incidencia de las tensiones de exclusión, siendo el grupo que mejor parece estar soportando los efectos sociales de la crisis.

El infortunio nos iguala, pero no tanto

Las diferencias en cuanto a la incidencia de la exclusión social respecto del nivel educativo del sustentador principal se han realzado: los más afectados son los hogares encabezados por personas con un nivel educativo menor del obligatorio. La mitad de los hogares excluidos pertenecen a este grupo. En los otros grupos, incluso pueden haberse experimentado ligeras mejoras en su nivel de integración, más claramente en sus formas más severas. Los hogares encabezados por personas con estudios universitarios parecen haber aumentado también su exposición a los procesos de exclusión social, pero aún así representan una exigua minoría en el espacio social de la exclusión: el 6,7% del total y tan sólo el 3% de los hogares en exclusión severa.

La presencia de personas con minusvalía en el hogar también se asocia fuertemente con las probabilidades de verse afectado por procesos de exclusión social, algo que no es nuevo en sus formas más moderadas. Lo que sí es nuevo es que ahora podría haber aumentado muy notablemente la asociación de la minusvalía a los procesos de exclusión severa, multiplicando estos hogares por más de tres el ratio de probabilidades respecto de los que no la tienen.

Los grupos étnicos que más se veían afectados por la exclusión en tiempos de bonanza, no parece que hayan visto aumentar sus problemas más que el resto de la población. En cualquier caso, la variable étnica sigue siendo la más relevante y supone multiplicar por más de 3 la proporción de hogares excluidos para la población inmigrante y por más de 6 para la población gitana. Además, hay que destacar el aumento de la exclusión más severa en la comunidad gitana. La mitad del espacio social de la exclusión severa está constituido ya por colectivos étnicamente "distintos".

Sin embargo, la variable territorial, el tipo de barrio, que ya aparecía con una alta significación en 2007, se muestra cada vez más relevante y los barrios más deteriorados ven ampliarse más proporcionalmente los procesos de exclusión, especialmente la exclusión más severa. En el análisis multivariante, la residencia en barrios desfavorecidos multiplica por tres las probabilidades de verse afectados por procesos de exclusión social.

Análisis de los itinerarios: los que suben y los que bajan

Haber podido realizar entrevistas en 2009 en los hogares anteriormente entrevistados en 2007 nos permite identificar cambios reales en familias concretas y describir así los itinerarios recorridos.

Cuadro 5. Itinerarios realizados por los hogares en España entre los distintos espacios de la integración a la exclusión social (% sobre el total)

(a) ***Integración estable***

(b) ***Caídas a la exclusión***

Situación en 2009

Situación en 2007	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa	Total
Integrado	**21,3**	**21,9**	**4,3**	1,3	48,8
Integración precaria	9,9	**17,8**	**5,5**	1,6	34,8
Exclusión compensada	2,8	4,2	**2,0**	1,5	10,4
Exclusión severa	1,1	2,5	1,1	**1,2**	5,9
Total	35,2	46,3	12,9	5,6	100,0

(c) ***Procesos de integración***

(d) ***Exclusión continua***

Fuente: Muestra conjunta Encuesta Foessa 2007/2009

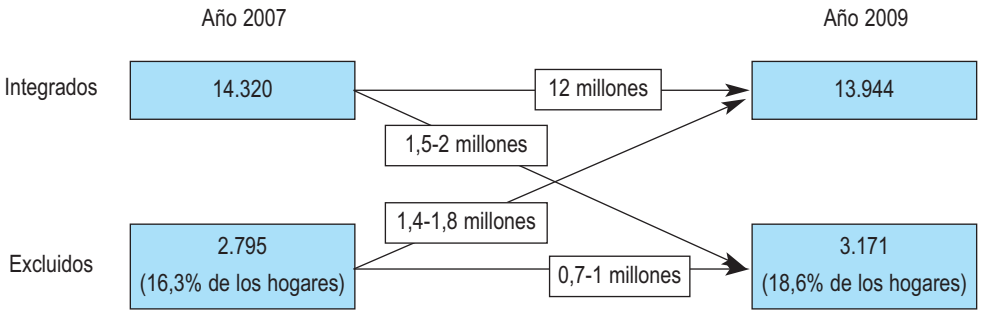
Muchos hogares han visto aparecer problemas sociales que antes no tenían (un 36% pasa a posiciones peores); aunque también algunos han resuelto, a pesar de la crisis, los

problemas que antes limitaban su participación en la sociedad (el 22% mejora la situación significativamente y pasa de un intervalo a otro mejor).

Se distinguen 4 grandes itinerarios:

- *Integración estable*: aparecen sin problemas relevantes de exclusión (con un índice inferior a 2 en 2007 y en 2009: cuadrante (a) en el cuadro anterior. Supone el 70,9% de la muestra.
- *Caídas a la exclusión*: pasan de situaciones de integración social (con un índice inferior a 2 en 2007 a situaciones de exclusión social (con un índice superior a 2) en 2009: cuadrante (b) en el cuadro anterior. Supone el 12,8% de la muestra.
- *Procesos de integración*: pasan de situaciones de exclusión social (con un índice superior a 2) en 2007 a situaciones de integración social (con un índice inferior a 2) en 2009: cuadrante (c) en el cuadro anterior. Supone el 10,6% de la muestra.
- *Exclusión continua*: estaban en situaciones de exclusión en 2007 y continúan así en 2010: cuadrante (d) en el cuadro anterior. Supone el 5,8% de la muestra.

Gráfico 1. Esquema de los itinerarios entre la integración y la exclusión social: estimación de número de hogares para el conjunto de la población española



Fuente: Muestra conjunta Encuesta Foessa 2007/2009

La integración estable

Los sectores integrados se ven también afectados por el desempleo (el 9% de estos hogares tienen todos los activos parados) y su situación económica empeora en ciertos casos. Experimentan, sin embargo, ciertas mejoras al resolverse algunos casos de vivienda inadecuada. La pobreza relativa en este grupo pasa del 14,4% al 19,1%, más cercana a la media del conjunto de la población.

Este itinerario ha sido protagonizado preferentemente por los hogares encabezados por varones de edades medias altas, con una formación superior a los otros grupos y que están ocupados o son pensionistas. Son hogares de tamaño intermedio y de estructura más simple, que viven en barrios en buenas condiciones y pertenecen a la etnia mayoritaria. Estas características se corresponden con las de los grupos que han presentado habitualmente menores probabilidades de procesos de exclusión social.

Las caídas a la exclusión

En una parte de los sectores integrados antes de la crisis se experimenta un impacto brutal del desempleo, que desencadena otros problemas económicos para pagar la vivienda (en uno de cada 5 casos) y un empeoramiento general de las condiciones de vida. Aquí, además, el desempleo va de la mano con un aumento de los empleos de exclusión (9% de las personas sustentadoras principales trabajan sin cobertura de la Seguridad Social). La tasa de pobreza, similar en el punto de partida a la del grupo anterior, se multiplica por más de 3 y llega a alcanzar el 39,5%. Esto genera efectos negativos en el ámbito de las relaciones sociales, aumentando las conductas conflictivas y el aislamiento social en uno de cada cuatro de estos hogares. El aislamiento social en este grupo es el más elevado: los procesos de caída en la exclusión social van ligados a la ruptura de las redes sociales que venían funcionando antes.

Este itinerario negativo ha afectado más a los hogares monoparentales, a las personas solas o a los hogares más amplios y de estructura más compleja, así como o a los encabezados por personas sin formación o inactivas no pensionistas. Aquí están significativamente más presentes los hogares encabezados por mujeres, con más ocupados y menos pensionistas. Sobre todas estas características destaca especialmente la incidencia de la variable étnica a la hora de distribuir las probabilidades de recorrer estos itinerarios negativos.

Los procesos de integración social positiva

Estos procesos parecen deberse a diversos factores. En primer lugar, los procesos de exclusión que les afectaban tenían menor entidad (su índice de exclusión es un punto inferior al de los hogares atrapados en la exclusión). Sobre este punto de partida, se superan ciertos problemas de salud y se consiguen mejoras en el empleo, posiblemente en una retroalimentación positiva (disminuye por ejemplo 14 puntos la privación de medicamentos y dietas) y en el consumo, lo que conjuntamente hace que mejoren las relaciones sociales en el ámbito familiar y vecinal, cuyos problemas pasan a ser residuales. En términos de pobreza relativa, la tasa cae hasta menos de la mitad para situarse en el 18%.

Aunque son una minoría (mayoritaria: del 38,4%) destacan dentro de este grupo, con una dinámica distinta a la que hemos descrito antes, los hogares encabezados por mayores de 65 años que en buena medida viven solos o en hogares pequeños.

La principal conclusión es que esta crisis está provocando un amplio aumento de la vulnerabilidad social y un incremento de la desigualdad social en España

Los sectores excluidos que no logran superar su situación

El 5,8% de los hogares en España se encuentra atrapado en el espacio de la exclusión social y se está produciendo un empeoramiento de la situación. Aunque la tasa de pobreza presenta una ligera reducción (puede ser una mera desviación estadística) sigue afectando a la mitad de estos hogares y el índice de exclusión aumenta un 5,8%. Su situación sigue siendo claramente peor que la de los nuevos excluidos (10 puntos más de pobreza relativa y un 20% más en el índice de exclusión). Aumentan los problemas de empleo, y el recurso a los oficios de exclusión es tan importante como el desempleo en el sustentador principal. Incluso ven reducirse la actividad irregular, sin cobertura de la Seguridad Social. Se mantienen los niveles de conflictividad social (en casi uno de cada tres hogares) y un cierto aislamiento social.

Este grupo que es el que más riesgo presenta de cronificarse en la exclusión en el futuro, lo cual dificultará procesos posteriores de intervención social, está formado más por hogares jóvenes, de mayor tamaño y de estructura más compleja, y también por hogares monoparentales. Destacan especialmente aquí la importancia del grupo étnico, del barrio y del nivel de estudios, como frenos para la promoción social en este periodo de crisis. Todos estos factores multiplican los riesgos de cronificación en el futuro.

Consideraciones finales

La principal conclusión es sin duda que esta crisis está provocando un amplio aumento de la vulnerabilidad social –que afecta ya a más de la mitad de la población–, y un incremento de la desigualdad social en España. Es amplísimo el volumen de hogares que ha protagonizado cambios sustanciales en su situación social, tanto en términos económicos como en cuanto al nivel de integración. Incluso sin llegar hasta las situaciones de exclusión social, muchos hogares han visto precarizarse sus condiciones de vida. Esto expresa un modelo de integración social excesivamente basado en la dinámica del mercado (del trabajo, de la vivienda, del crédito…).

El análisis nos muestra claramente algunos grupos sociales a los que prestar especial atención: a) los hogares jóvenes y los hogares con jóvenes, cuyo desarrollo tiene una importancia clave en la prevención de los procesos de exclusión social y pobreza de las nuevas generaciones; b) las mujeres con menores a cargo y con personas con minusvalías y, en especial, los hogares monoparentales; c) los hogares que han conformado los inmigrantes, cuyo proceso de integración social se ha visto fuertemente frenado y no acaban de ver reducirse las enormes diferencias sociales respecto del conjunto de la población; y d) la comunidad gitana, a la que esta crisis le ha cogido en pleno proceso de cambio interno.

Este avance de la exclusión, desde otra perspectiva, pone de manifiesto las goteras del sistema de protección social español, «universal pero desigual e insuficiente». Es necesaria una mayor inversión en derechos sociales, especialmente en todos los aspectos educativos y laborales, que garantice la participación de todos en el empleo y en la riqueza social. Pero esto exige un cambio de mayor calado, y afecta al propio concepto de crecimiento/desarrollo social; o sea, el PIB no dice si la gente vive bien; éste no es el modelo económico, ni el PIB el indicador.

El peligro de este avance de la exclusión es la ruptura de la cohesión social. Donde faltan los estudios, donde barrios enteros se convierten en guetos, donde la ausencia de formación y los trabajos precarios son la herencia de una generación a otra, se está generando un claro proceso de dualización y ruptura social.

La familia es el gran factor transversal en países como España y otros países mediterráneos. Ante la crisis, las personas buscan sus propias estrategias para amortiguar el impacto del desempleo. En general, las familias tratan de ajustar los gastos. Personas que no trabajaban buscan empleo para complementar ingresos. En algunos casos, se combinan ingresos de empleo con pensiones, prestaciones de desempleo, trabajos informales, o incluso ayudas familiares. Cada una de estas estrategias por separado, y la combinación de ellas, garantiza el mantenimiento de ciertos niveles de integración para muchos hogares, que a pesar de la vulnerabilidad no sufren procesos de fuerte deterioro de sus condiciones de vida.

Pero no todos los hogares tienen posibilidad de construir esas estrategias de respuesta y por eso están sufriendo más el impacto de la crisis, se están viendo superados por ella. Las dificultades económicas han contribuido a que más de un 40% de las familias se hayan visto obligadas a atarse el cinturón ante la crisis (reducir gastos); un 20% de los hogares ha recurrido a la ayuda familiar y un 10% ha acudido a las instituciones en busca de ayuda.

Por ello, si las redes sociales de inserción y las ayudas sociales flaquean, la cohesión social se resentirá. Si el Estado no proporciona la protección suficiente y falta el apoyo para revertir estas situaciones de extrema necesidad el grito será *sálvese quien pueda*, y se colarán los discursos xenófobos. Todo ello abrirá grietas en la cohesión social.

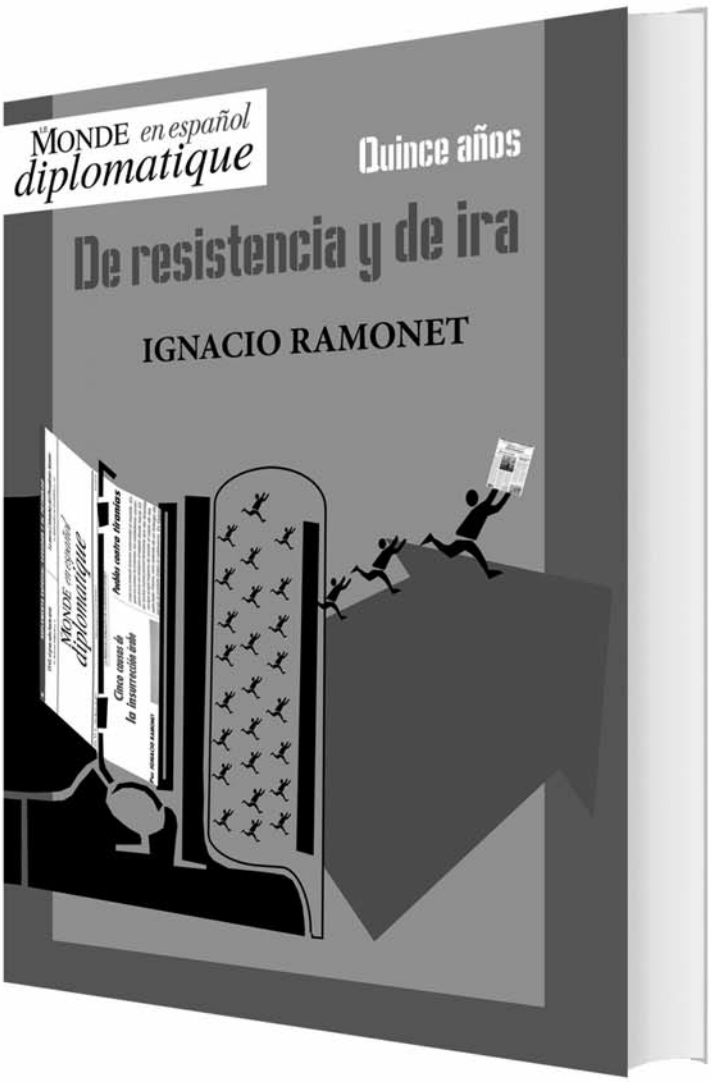
LE MONDE *en español* *diplomatique*

Quince años de resistencia y de ira

IGNACIO RAMONET

Una verdadera historia del periodo 1995-2011.
Estos textos de Ignacio Ramonet constituyen un análisis de aquellos problemas que normalmente son marginales para otros analistas. Dan visibilidad a las tensiones de nuestro tiempo, sitúan en su contexto los conflictos que emergen una y otra vez en el mapa de la Tierra, posicionándose de parte de aquellos movimientos sociales que, desde la libertad o la solidaridad, apuestan por un mundo más justo.
Ramonet crea, en definitiva, un mapa del mundo y registra como si de un sensibilísimo sismógrafo se tratara, los signos del tiempo para seguir postulando la utopía de un futuro más justo, más libre, más humano.

12 euros · 208 páginas · formato A-4



En kioscos, librerías y en **www.monde-diplomatique.es**

Libros

Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI de Harald Welzer 203
Jorge Riechmann

El retorno de los campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia de Silvia Pérez-Vitoria 205
Pedro Lomas

Por una economía ecológica y solidaria (conversación con Daniel Jover) de Antonio Estevan y José Manuel Naredo 208
Daniel Filippa

GUERRAS CLIMÁTICAS. POR QUÉ MATAREMOS (Y NOS MATARÁN) EN EL SIGLO XXI

Harald Welzer

Katz, Madrid/ Buenos Aires, 2011

342 págs.

El pasado 8 de febrero de 2011, en el diario *Público* podía leerse un reportaje estremecedor acerca de cómo el deshielo del permafrost siberiano estaba liberando numerosos restos de mamuts –animales extintos desde hace diez milenios–. En aquel remoto *Far West* (*Far East* más bien), aventureros, exploradores y logreros desentierran los cuerpos preservados hasta hoy a bastantes grados bajo cero para aprovechar –sobre todo– el marfil de los colmillos, cotizado a más de mil euros el kilo (y demandado sobre todo en China). Habrá quien objete el adjetivo «estremecedor»: ¿ya estamos haciendo alarmismo catastrofista, o catastrofismo alarmista, a costa del cambio climático? A fin de cuentas, ¿no les vendrá bien a los siberianos un clima algo más suave que el que padecen? Tales consideraciones evidencian la clase de miopía que contribuye a empujarnos al abismo hacia el que nos precipitamos: pues el permafrost congelado contiene ingentes cantidades de metano (que proviene de los depósitos submarinos formados antes de la última glaciación)… y el metano es un gas de «efecto invernadero» 25 veces más potente que el dióxido de carbono, por lo que su liberación provocaría un intenso efecto de retroalimentación, acelerando el calentamiento hasta niveles espeluznantes. El comercio de marfil de mamut constituye un signo ominoso a comienzos del siglo XXI.

El sociólogo y psicólogo social Harald Welzer (Bissendorf, Alemania, 1958), director del Center for Interdisciplinary Memory Research en Essen y profesor investigador en psicología social de la Universidad de Witten-Herdecke, ha escrito el libro sobre violencia y conflictos ecológico-sociales que ahora la editorial Katz presenta en su traducción española. A Welzer le asombra –con razón– la relativa indiferencia con que las ciencias sociales han tratado hasta ahora el enorme asunto de los desequilibrios climáticos antropogénicos, y con esta obra ha realizado una valiosa contribución a paliar tal desidia. Quizá no resulte extraño que bastantes investigadores alemanes o polacos sean muy sensibles al potencial de catástrofe que entraña la Modernidad industrial: al fin y al cabo, en Centroeuropa resulta menos fácil apartar la mirada del lugar central que el ascenso del nazismo o la *Shoa* deberían ocupar para la teoría social –y para la autocomprensión humana a secas–. Welzer ha escrito obras notables sobre la memoria histórica, los modos de transmisión de experiencias traumáticas, la perspectiva psicológica sobre el Holocausto y los usos de la violencia social. *Guerras climáticas* es un libro que, en la estantería, habría que dejar cerca de otras dos obras a mi juicio muy importantes: *Auschwitz: ¿comienza el siglo XXI?* de Carl Amery y *Modernidad y Holocausto* de Zygmunt Bauman.

Tres elementos centrales del penetrante análisis desplegado en *Guerras climáticas* son: en primer lugar, del calentamiento climático en curso cabe esperar en muchas zonas del planeta la pérdida de recursos básicos para la vida humana: la competencia recrudecida en situaciones de escasez creciente llevará a un incremento de la violencia (en formas viejas y nuevas). En segundo lugar, la violencia organizada –y la violencia extrema– es una posibilidad abierta siempre para los seres humanos. Y –en tercer lugar– esa violencia extremada hasta el genocidio no constituye una desviación o anomalía respecto del curso de progreso de la Modernidad, sino que por el contrario supone una dimensión central de la misma. Bauman mostró esto con respecto al Holocausto; Amery primero, y ahora Welzer, ambos con la experiencia del nazismo intensamente presente, llegan a conclusiones similares analizando la crisis ecológico-social y su probable evolución futura. Ahora que decenas de miles de seres humanos

ya han padecido el abrupto desplome del orden social a consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (como en Nueva Orleans con el huracán Katrina, catástrofe que se analiza en pp. 47 y ss.) y al menos una «guerra climática» (la de Darfur en Sudán, estudiada en pp. 107 y ss.), cobra suma importancia ser conscientes de que «la violencia en tanto opción social, en tanto posibilidad siempre disponible, representa un elemento nuclear, latente o manifiesto de las relaciones sociales, aunque los miembros de las sociedades que poseen el monopolio estable de la violencia [por parte del Estado] suelan preferir pasar esto por alto. Pero en esas sociedades simplemente se ha alojado en otra escala de relaciones sociales, se ha vuelto *indirecta* […], pero esto no significa que haya desaparecido» (p. 158).

Con el calentamiento climático, en muchas zonas del planeta –con impactos especialmente brutales en África– se desplazarán las zonas habitables y las regiones de cultivo, se perderán recursos básicos como bosques o pesca, avanzarán los desiertos, escaseará el agua, se inundarán las costas, menudearán fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones fluviales o tornados… Resulta dudoso que muchos órdenes sociopolíticos fragilizados, y atravesados por diversos conflictos, puedan resistir la magnitud de las embestidas. Los «refugiados climáticos», que ya hoy son decenas de millones, pueden convertirse a no muy largo plazo en centenares de millones. Todo esto afecta a los equilibrios de poder, a la geopolítica y al acceso a los recursos básicos, de manera que «no hay absolutamente ningún argumento que pueda refutar la idea de que en el siglo XXI el cambio climático generará un potencial de tensión mayor con un peligro considerable de llegar a situaciones violentas» (p. 179). Genocidios causalmente agravados por la superpoblación y la escasez de recursos como en Ruanda (estudiado en pp. 99 y ss., y en otros lugares de la obra), o guerras climáticas como la de Darfur, prefiguran lo que puede ocurrir en el siglo XXI. Nos dirigimos a toda máquina hacia lo que puede cobrar la forma de un verdadero colapso civilizatorio –y la máquina, de momento, no da señales de parar, ni siquiera de dejar de acelerar su marcha.

Cuando las culturas humanas topan con problemas de límites, en muchos casos emprenden estrategias de «huida hacia delante». Ya se trate de la Isla de Pascua o de nuestras petrodependientes sociedades actuales, se reacciona intensificando las prácticas que tuvieron éxito en el pasado (pero ahora se han vuelto contraproducentes), en vez de poner en entredicho los supuestos –culturales, económicos, políticos…– que nos están llevando al desastre. Welzer remite expresamente a otra investigación importante, *Colapso* de Jared Diamond.

¿Qué se puede hacer? La extralimitación-seguida-de-colapso no es un destino fatal para los grupos humanos. Por lo pronto ¿y si comenzáramos por prestar menos atención a las intimidades de la zarigüeya bizca del zoo de Leipzig («La penetrante mirada de la zarigüeya bizca seduce a Hollywood», *La Razón,* 31 de enero de 2011), o a las de Shakira en sus andanzas por Barcelona, y más a los asuntos serios –mortalmente serios– a los que hemos de hacer frente? ¿La "sociedad del conocimiento" es un patio de vecinos –o quizá sólo de escuela– amplificado a escala global? ¿La World Wide Web es básicamente un espacio de cotilleo? ¿Preferimos flotar amnióticamente en la "telerrealidad" y la realidad virtual antes que coordinarnos para actuar juntos en la plaza pública? ¿Nos dedicamos al fútbol y a los chascarrillos eróticos en los bares, mientras se desmantela el sistema de protección social, los ricos siguen avanzando en su guerra de clases contra los pobres y la crisis climática se agrava hasta lo irrecuperable?

El nivel de anestesia de las sociedades occidentales, y de la española en particular, roza lo alucinante. Interrogados por los encuestadores, más del 52% de nuestras conciudadanas y conciudadanos declararon su apoyo a las revoluciones democráticas de Túnez y Egipto y reclamaron que España las respalde… pero en

las concentraciones cívicas convocadas para pedir eso mismo en la Puerta del Sol de Madrid, capital del Reino –por ejemplo el 2 y el 9 de febrero de 2011–, apenas se reunieron 150 personas. La acción contra el cambio climático convocada en Madrid el 27 de noviembre de 2010 –¡en la antesala de la Cumbre de Cancún!– apenas reunió a dos docenas de activistas. Una pintada en las calles de Cáceres, en este invierno de 2010-2011, alerta a los viandantes con grandes letras rojas: «¿No veis lo que está pasando? ¡Despertad!»

La historia de los siglos XIX y XX fue la historia de cómo el capitalismo industrial construyó un mundo. La del siglo XXI, salvo que seamos capaces de imprimir en el decenio que está comenzando un fuerte giro de racionalidad colectiva a la actual carrera fuera de control, será la historia de cómo el capitalismo destruye *el* mundo –natural y social–. Y, pese a las fantasías de exoplanetas habitables alimentadas por los *mass-media,* no hay ningún otro mundo de recambio. El capítulo final del libro de Welzer se abre con una advertencia del gran dramaturgo germano-oriental Heiner Müller –«el optimismo no es más que falta de información»– y concluye con las benjaminianas palabras siguientes: «El proceso de globalización puede describirse […] como un proceso de entropía social que se acelera, desintegra las culturas y al fin, cuando termina mal, sólo deja tras de sí la indiferenciación de la voluntad de supervivencia. Aunque eso sería la apoteosis de esa misma violencia de cuya abolición la Ilustración (y con ella la cultura occidental) creyó hallar la clave. Pero desde el trabajo esclavo moderno y la explotación inmisericorde de las colonias hasta la destrucción perpetrada en la industrialización temprana del sustento vital de personas que no tenían absolutamente nada que ver con ese programa, la historia del Occidente libre, democrático e ilustrado escribe precisamente su contrahistoria de falta de libertad, opresión y contrailustración. La Ilustración (y esto lo demuestra el futuro de las consecuencias climáticas) no podrá liberarse de esa dialéctica» (p. 316). ¿Seremos capaces de contrariar este amargo pronóstico?

Jorge Riechmann
Dpto. de Filosofía de la UAM

EL RETORNO DE LOS CAMPESINOS UNA OPORTUNIDAD PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA

Silvia Pérez-Vitoria
Icaria, 2010
207 págs.

No cabe duda de la relevancia socioeconómica que el sector agrícola ha tenido hasta no hace tanto tiempo en nuestro país. No en vano, al inicio de la segunda república, allá por 1931, la superficie cultivada en España llegaba a suponer casi la mitad del territorio del Estado, y algo más del 40% de la población activa. El sector agrícola continuó siendo mayoritario dentro del panorama económico español hasta finales de los años cincuenta, comenzando entonces su ocaso. Hoy día, en la Europa de la Política Agrícola Común (PAC), abarca tan sólo un 5% de la población activa española, si bien la superficie ocupada por tierras cultivadas todavía supone algo más de 17 millones de hectáreas (más de un tercio de la superficie total del país). Pero parece evidente que este sector económico está en claro retroceso tanto en España como en el contexto europeo occidental, donde la PAC lucha contra los "excedentes agrícolas" y pretende transformar a los campesinos de productores a "gestores del paisaje". Así que podemos preguntarnos ¿para qué preocuparnos de un sector económico que muchos consideran símbolo de retraso y que pesa poco dentro del Producto Interior Bruto? ¿Por qué debería importarnos la desaparición del campesinado y de la agricultura? ¿Qué efectos podría tener

esta desaparición si podemos comprar productos agrícolas más baratos en otros países?

La economista, socióloga y documentalista de origen francés Silvia Pérez-Vitoria trata de responder en este libro[1] a esta y otras preguntas relacionadas con el papel de los campesinos y la cultura campesina en el siglo XXI. La tesis principal de la autora es que el campesinado y el mundo rural suponen una alternativa al fracaso de la Modernidad y las soluciones tecnológicas, en una sociedad sometida a una fuerte crisis ecológica y socioeconómica. Frente al abandono de las áreas rurales, la autora propone una *reruralización* de nuestra sociedad. En defensa de esta tesis, la autora analiza algunos de los principales cambios sufridos en el mundo rural y el campesinado en el tránsito desde una sociedad preindustrial hacia una sociedad industrial y sus consecuencias a distintos niveles.

En primer lugar, aborda el paso de una concepción de la tierra sagrada –cuando los derechos de propiedad sobre ella se consideraban de los dioses, los ancestros o la comunidad, en un régimen de carácter comunal–, a una concepción de la tierra como factor productivo y mercancía (la propiedad sagrada), en un régimen de propiedad estatal o privada, en el que se ha perdido su diversidad de funciones (lugar donde instalarse, modo de vida, etc.) y queda reducida a su función económica. Incluso se ha llegado a prescindir de la tierra como factor productivo, mediante cultivos donde ejerce sólo una función de soporte físico y queda a merced de la competencia urbana e industrial. También analiza la transformación de la figura del campesino, protagonista de la vida rural, y de un modelo agrícola familiar, con una fuerte componente de socialización del trabajo y de autosuficiencia, hacia la del productor individual agrícola muy mecanizado que busca el beneficio monetario en competencia con los otros productores en un proceso de creciente dependencia económica que conlleva la destrucción de la sociedad campesina y el sometimiento de su trabajo y su producción a las lógicas de las sociedad industrial. Por otra parte, analiza las consecuencias de este fenómeno en la población rural, describiendo los problemas de desarraigo y emigración que ha generado, así como los artefactos sociales que se han producido en un proceso de urbanización del campo (culturalmente y a través de la colonización por parte de los habitantes de la ciudad de los pueblos y zonas rurales mediante la segunda residencia), y de ruralización de la ciudad (a través de la moda ecológica con los huertos urbanos en el Norte, y de los cultivos de las periferias de las ciudades del Sur), que ha reducido muchas veces lo rural y lo campesino a motivo folclórico.

La autora subraya la vigencia de los valores, las prácticas y la cultura campesina en casi la mitad de la población del planeta, especialmente en el Sur. Este análisis quizá presente algunos rasgos maniqueos, como la división del campesinado entre los campesinos propiamente dichos y los productores agrícolas, en una cierta idealización de la figura del campesino del Sur frente al del Norte, cuando podría considerarse que conforman una misma clase social diversa que se ha enfrentado a un contexto social distinto, y por tanto ha tenido una evolución distinta. Esta subestimación del denominado productor agrícola del Norte lleva a la autora a olvidar que fuera del trópico, es el clima mediterráneo el que presenta mayor recurrencia de puntos calientes de biodiversidad del planeta, y constituye una de las áreas de domesticación de animales y plantas más antiguas, así como una de las zonas donde se han originado gran parte de las lenguas que hoy día se hablan en el mundo, dejando así de lado la necesidad urgente de rescatar también el mundo rural en ciertos lugares de Europa (especialmente el sur y el este de Europa), norte de África y Oriente Próximo.

Por otra parte, describe el proceso de desposesión de técnicas y conocimientos que han

[1] Traducción de la editorial Icaria de la obra original *Les paysans sont de retour*, 2005, Actes Sud.

sufrido los campesinos para desmentir el tópico de su ignorancia y pasividad. Resulta de especial interés la perspectiva que compara y hace complementarios los conocimientos tradicionales de carácter empírico de los campesinos, ligados a procesos de ensayo-error, con los conocimientos científicos, hecho que el mundo empresarial moderno ha captado, como la propia autora señala cuando subraya el proceso de expropiación del conocimiento y las técnicas al que están sometiendo dichas empresas a los campesinos de muchas partes del planeta (la denominada biopiratería). Estos conocimientos tienen un carácter más horizontal, frente al conocimiento industrial, que sólo poseen los que disponen de la tecnología adecuada y es ajeno a la práctica campesina, basada en el aprendizaje adaptativo con los ecosistemas, y por tanto, mejor acoplada a los ciclos naturales.

El libro aborda, asimismo, el paso de una producción local dedicada al autoabastecimiento a una producción globalizada, contraponiendo así los conceptos de alimento (satisfacción de necesidades básicas) frente a producto alimentario (mercancía), que llega incluso a convertirse en mercancía no alimentaria (agrocombustibles, tabaco, etc.). El argumento general que guía esta parte del libro es que la reorientación de muchos cultivos hacia la exportación ha provocado una desestructuración social en el mundo rural, así como una ruptura de la cadena productor-consumidor, introduciendo multitud de intermediarios dedicados a los procesos de almacenamiento, conservación, distribución, etc., a costa también de la calidad de los productos. A través de multitud de ejemplos, la autora ilustra cómo la integración de los productos agrícolas en los mercados internacionales ha tenido efectos devastadores en el control que los campesinos tienen sobre lo que producen, a cuánto y dónde lo venden. Además les ha hecho cada vez más dependientes de ayudas y subsidios. Frente al tópico de que hay que eliminar las ayudas a la agricultura, que tantas veces se escuchan en los foros políticos internacionales, la autora señala que supondría la completa desaparición del sector agrícola en Europa, que seguramente es algo no deseable.

Continúa describiendo los límites del denominado comercio justo, que a juicio de la autora, no deja de ser un disfraz más de las viejas estrategias de desarrollo en las que los países ricos imponen sus condiciones, los campesinos siguen orientados al mercado y no a la satisfacción de sus necesidades y el objetivo es siempre el de producir para la exportación. Frente a este modelo, la autora propone, como la mayoría de las organizaciones y colectivos campesinos, el concepto de soberanía alimentaria frente al de seguridad alimentaria o acceso garantizado a los alimentos, habitualmente esgrimido desde las organizaciones internacionales. Se trataría así del desarrollo de la propia capacidad de producción de alimentos básicos a partir de las condiciones naturales, sociales y culturales propias, promulgando un retorno hacia la autosuficiencia, la producción local y el comercio sólo para aquellos productos de los que el país no se pueda abastecer.

El tópico del campesino pasivo o reaccionario queda desmentido a través de la exposición de las luchas de resistencia o directas campesinas (Vía Campesina, EZLN, Movimiento de los Sin Tierra) bajo, al decir de la autora, un cierto anarquismo agrario, que define como tercera vía entre el liberalismo capitalista y los modelos de economía planificada, y que ofrece una superioridad económica y moral del modelo precapitalista de producción.

Finalmente, el libro retoma las preguntas iniciales, y plantea que, por un lado, las soluciones ofrecidas a la problemática alimentaria y del mundo rural en el Norte son falsas (producción integrada, agricultura biológica, transgénicos, *slow food*, etc.), y, por el otro, al Sur no se le está ofreciendo nada nuevo (desarrollo económico y tecnología, las ONG, etc.). Mientras, nadie escucha las soluciones que los propios campesinos están ya poniendo en marcha (redes de semillas, agroecología, recuperación del conocimiento tradicional, mercados locales, reapropiación de la tierra, etc.). La autora

apuesta por la necesidad de mantener un mundo rural vivo y el retorno a la actividad campesina como oportunidad para superar la crisis ecológica y socioeconómica que el modelo de producción de alimentos moderno ha generado.

En definitiva, el libro ofrece multitud de intuiciones e ideas sugerentes acerca de la necesidad de proteger la soberanía alimentaria y recuperar un mundo rural vivo para superar muchas de las dimensiones de la actual crisis ecosocial, cuyo origen rastrea hasta el proceso de industrialización de las prácticas campesinas y la consiguiente ruptura entre el campo y los ecosistemas, con múltiples consecuencias derivadas para la calidad de la alimentación, la salud y el medio ambiente.

No obstante, pudiera parecer que en ocasiones tiende a la idealización del mundo rural y del campesinado en un giro muy propio del imaginario rural que olvida el carácter de clase del trabajo a lo largo de la historia, idealiza en su concepto de sociedad precapitalista regímenes donde los campesinos no poseían la propiedad de la tierra ni de los medios de producción y ni tan siquiera disponían de sus propias vidas, como el vasallaje medieval o la esclavitud en Grecia o Roma. Y expresa un cierto paternalismo urbano y occidental hacia las culturas indígenas que olvida la actividad campesina en Occidente y ofrece una imagen de rechazo de la ciencia y la tecnología aplicadas al mundo rural, que, no hay que olvidar, en ciertos casos han servido también para mejorar la calidad de vida (seguridad, salud, etc.) de los campesinos.

Pedro Lomas
Doctor en Ecología y Medio ambiente, UAM

POR UNA ECONOMÍA ECOLÓGICA Y SOLIDARIA (CONVERSACIÓN CON DANIEL JOVER)

Antonio Estevan y José Manuel Naredo
Icaria, Barcelona 2010
120 págs.

Este libro es el resultado de una serie de conversaciones mantenidas por Antonio Estevan (co-fundador de la red de consultoría Gea 21, especialista en planificación territorial y ambiental y activista del movimiento ecologista que falleció prematuramente en septiembre de 2008: estamos por consiguiente ante uno de sus últimos trabajos) con José Manuel Naredo (doctor en Ciencias Económicas, estadístico facultativo, y uno de los más importantes economistas ecológicos del mundo), interrogados ambos por Daniel Jover (co-fundador del Equipo Promocions).

El texto está dividido en cinco áreas temáticas que describen la crisis del modelo económico actual, sus causas e impactos, las posibilidades de un nuevo modelo y los desafíos que surgen al plantearlo. Según el diagnóstico que los autores proponen para el modelo económico actual, se explican las carencias históricas de la economía como área de investigación. La cuestión descollante es la atribución de un valor monetario a los procesos humanos. El paradigma dominante en economía (que cabe llamar marginalista o neoclásico, sin demasiada precisión) se halla demasiado divorciado de la realidad, ya que no tiene en cuenta valores como los criterios de sostenibilidad. El mito del crecimiento ilimitado se destaca como un supuesto ideológico clave del sistema económico dominante, y se demuestra que es discontinuo con la realidad de un mundo finito. Este sistema aislado de la atribución de valor tiende a la monetarización de todos los aspectos de la vida humana, y a no dar cuenta del deterioro ambiental en su análisis de costo-beneficio.

Los impactos del modelo económico actual son multidimensionales. En primer lugar resul-

tan dañinos para la calidad del medio ambiente, en parte consecuencia del sistema aislado de los valores monetarios autosuficientes. Los autores también identifican numerosos costes sociales vinculados con la expansión ideológica de la sociedad de consumo y el individualismo posesivo. Estos factores debilitan la capacidad de compartir y colaborar, y degradan la calidad de las condiciones de la vida humana. El sistema económico dominante, en su búsqueda del crecimiento económico ilimitado, provoca una creciente desigualdad; la calidad de vida mengua debido a los crecientes costes de mantenimiento del sistema, y la creciente incapacidad del sistema económico para proveer los recursos básicos para la vida.

Frente a esta situación, Estevan y Naredo hacen hincapié en la necesidad de un cambio de paradigma: sugieren un enfoque *ecointegrador* que articule de otra forma las cuestiones públicas y lo económico. Esto facilitaría una apertura tanto para los economistas y ecólogos, como para investigadores de otras disciplinas, en un proceso de diálogo y construcción transdisciplinar de conocimiento. También permitiría una relativización de la tendencia dogmática a reducirlo todo a términos monetarios, así como incorporar explícitamente a los procesos sociales (incluyendo la toma de decisiones) valores apenas considerados en la actualidad.

El nuevo enfoque *ecointegrador* se traduciría al ámbito de la política y la sociedad. Según los autores, permitir que las partes interesadas contribuyan a los debates políticos y participen en la toma de decisiones supondría democratizar el proceso de formulación de objetivos y la toma de decisiones que, cada vez más, están siendo patrimonializados por los intereses económicos privados en detrimento del público. La potenciación de los colectivos democráticos y la economía social, en combinación con la protección de los recursos básicos para la vida, son percibidas por los autores como las respuestas clave frente al actual sistema de explotación depredadora.

Estevan y Naredo insisten en que los fundamentos culturales del sistema económico dominante suponen un gran desafío para hacer realidad estos cambios. Ponen de relieve cómo el poder de los intereses económicos se refleja en el nivel institucional y organizativo, traduciéndose en apoyo al *statu quo*. Los autores ven esto como una función apologética, que inhibe la capacidad del sistema para hacer frente a sus propios problemas y crisis. Esta función se extiende a la manipulación de la información, por ejemplo el uso de «imaginería verde» con el fin de desactivar los conflictos. El predominio del sistema económico también se ve reforzado a través de modelos culturales en los que la riqueza privada se convierte en la única aspiración legítima.

Un argumento central de estos dos pensadores es que los ciudadanos, a través de la participación directa y horizontal, podrían reorientar la economía para servir a sus propios intereses. Señalan qué cambios importantes en los supuestos culturales resultan necesarios en primer lugar. Aunque Estevan y Naredo subrayan el grado de satisfacción personal que cabe presuponer que se deriva de esas actividades no-jerárquicas, uno se pregunta si tales compensaciones pueden competir con el individualismo desenfrenado que el sistema actual potencia.

Que los grupos sociales protagonicen la vida humana, sin dejar este papel en manos de los negocios o los mercados podría ser la respuesta más directa al “neo-feudalismo” de los Estados modernos (donde los intereses económicos penetran en detrimento de las comunidades humanas). Esto ha sido puesto de manifiesto con aún mayor intensidad por los acontecimientos recientes en Europa, tales como los recortes en el gasto público para cumplir con los mercados financieros internacionales.

La monetarización de los procesos humanos ha dado lugar a un nivel sin precedentes en la complejidad de los sistemas humanos utilizados para mantener la vida en la tierra. Dada esta complejidad, se puede cuestionar la viabilidad de cualquier nuevo consenso a través de la participación que pudiera alcanzarse, así como la efectividad del control sobre dichos sistemas.

Esto no pone en entredicho la conjetura general de los autores acerca de la necesidad de poner el bien común por encima del interés privado, pero sí señala que la creciente fragmentación de los procesos humanos quizá ha sido subestimada.

Lo que sí está claro aquí es la distinción entre la idea de los seres humanos al servicio de la economía, y una economía al servicio de los seres humanos. Y si bien una utopía ecológica en un sentido operativo puede ser indispensable para reorientarnos hacia la transformación del mundo actual, queda por ver qué metas podrían ser decididas una vez que el proceso de decisión se abriese a la gran cantidad de ideas e intereses competidores que el sistema actual ha generado. Se trata, en cualquier caso, de un enfoque menos estrecho que el convencional.

Daniel Filippa

LA SITUACIÓN DEL MUNDO 2011

Innovaciones para alimentar el planeta

El informe anual del Worldwacht Institute ofrece una hoja de ruta hacia la seguridad alimentaria describiendo soluciones que están contribuyendo a reducir el hambre y la pobreza en África.

15 artículos y 17 textos de apoyo, titulados "A pie de campo", describen prácticas innovadoras que aportan soluciones presentes y futuras para alimentar el planeta.

La Situación del Mundo 2011 aborda temas como:
la ecoagricultura • el potencial nutritivo de las verduras • el aprovechamiento del agua • la investigación y las habilidades de los agricultores y las campesinas • la fertilidad del suelo • la biodiversidad local de los alimentos • la adaptación de los cultivos al cambio climático • la gestión de las pérdidas de las cosechas • la alimentación en las ciudades • la compra de tierras africanas por inversores extranjeros • la mejora de la producción de alimentos a través de la ganadería

Coeditado por CIP-Ecosocial (FUHEM) e Icaria
Varios autores
Precio: 28 €
Páginas: 440
ISBN: 978-84-9888-323-7

Incluye dos apéndices, exclusivos de esta edición:

- "2010. El terremoto alimentario. Causas de la crisis alimentaria y tendencias de futuro", de Fernando Fernández y Gustavo Duch.
- "Hacia una ecología de la alimentación. La comida no es sólo comida", de Monica Di Donato

BOLETÍN DE PEDIDO

Para suscribirse o hacer su pedido:

✔ Compre a través de la librería electrónica **www.libreria.fuhem.es**
✔ Envíe este formulario al fax **91 577 47 26**
✔ Llame al teléfono **91 431 03 46**
✔ Escriba un correo a **publicaciones@fuhem.es**

Nombre: .....

Dirección: .....

Población: ..... C.P. ..... Provincia: .....

Teléfono: ..... Correo electrónico: .....

☐ **EJEMPLAR 28 €** (Gastos de envío gratuitos para España) **Nº ejemplares .....**

☐ **SUSCRIPCIÓN 22,40 €** (Gastos de envío gratuitos para España)

FORMA DE PAGO

☐ Domiciliación bancaria (preferible esta modalidad para suscriptores)

Titular de la cuenta.....

ENTIDAD ☐☐☐☐ OFICINA ☐☐☐☐ CONTROL ☐☐ NÚMERO CUENTA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Cheque a nombre de Fundación Hogar del Empleado

☐ Contra reembolso

☐ Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0216 0251 51 0600005047

Duque de Sesto, 40 - 28009 Madrid
Tel.: 91 431 03 46 - Fax: 91 577 47 26
Web: www.cip-ecosocial.fuhem.es
E-mail: cip@fuhem.es

Icaria editorial

presenta el nº 40 de:

ECOLOGÍA POLÍTICA Cuadernos de debate internacional: *Trabajo y medio ambiente*

Ecología Política está coordinada por:
Miquel Ortega Cerdà,
Ignasi Puig Ventosa,
Anna Monjo Omedes
y **Joan Martínez Alier**
Secretaría técnica: **Maria Mestre Montserrat**

www.ecologiapolitica.info
secretariado@ecologiapolitica.info

TIEMPO DE TRABAJO
Y MEDIO AMBIENTE
Ignasi Puig Ventosa

ENERGÍAS RENOVABLES Y EMPLEO EN CATALUÑA
Jose Manuel Jurado y Biel Mas

UNA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA PARA VIVIR MEJOR CON MENOS
Florent Marcellesi

HACIA UNA NECESARIA REFORMULACIÓN DEL TRABAJO
Yayo Herrero

EL TRABAJO COMO DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA (Y COMO MEDIACIÓN ENTRE NATURALEZA Y SOCIEDAD)
Jorge Riechmann

ECONOMÍA SOSTENIBLE Y EMPLEOS VERDES EN TIEMPOS DE CRISIS
Joaquín Nieto

LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y UNA ESTRATEGIA ECOLÓGICA POST-CRECIMIENTO
Anders Hayden

ECONOMIAS SIN DINERO
Y TRABAJO SOSTENIBLE
Julio Gisbert Quero

PUEBLOS FUMIGADOS EN ARGENTINA: RESISTENCIA EPIDEMIOLÓGICA COMUNITARIA AL MODELO ECONÓMICO DE LOS AGRONEGOCIOS
Fernando R. Barri

ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN EN RÍO NEGRO. LECCIONES DEL FALSO DEBATE EMPLEO/AMBIENTE EN RELACIÓN A LA PLANTA DE CELULOSA SOBRE EL RÍO URUGUAY
Carlos Santos

SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
Carme Valls-Llobet

SOJA TRANSGÉNICA, TRABAJO Y DESARROLLO. UN ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES RURALES RECIENTES EN EL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
Verónica Hendel

PESCA ILEGAL Y CONDICIONES LABORALES. EL RETO GLOBAL QUE GOLPEA ÁFRICA
Equipo técnico de la revista Ecología Política

SIMPATIZAR CON LOS CHABOLISTAS Y COMPRENDER LA ECONOMÍA MORAL DE LA TIERRA
Balihar Sanghera

INVASIÓN MINERA EN TERRITORIOS COMUNALES EN PERÚ
Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI) - ENTREPOBLES

DECLARACION DEL CONGRESO DE LA CLOC FRENTE A REDD

TRIBUNAL ANULA CONCESIÓN DE MINA CRUCITAS EN COSTA RICA

WIKILEAKS REVELA COMO EEUU MANIPULÓ EL ACUERDO DE COPENHAGUE

IVAN ILLICH, UNA CRÍTICA ECOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES
Bruno Villalba

EN MEMORIA DE IVAN ILLICH
Jean Rober

CRÍTICA DEL INFORME "21 HORAS, POR QUÉ UNA SEMANA LABORAL MÁS CORTA PUEDE AYUDARNOS A TODOS A PROSPERAR EN EL SIGLO XXI"
José Luis Peña Fernández

Cada mes un tema en profundidad

análisis, opinión, experiencias, protagonistas

y además

libros, cine, teatro, T.V. , arte, deporte, música ciencia...

Revista CRÍTICA

98 AÑOS AL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN

ÚLTIMOS NÚMEROS PUBLICADOS

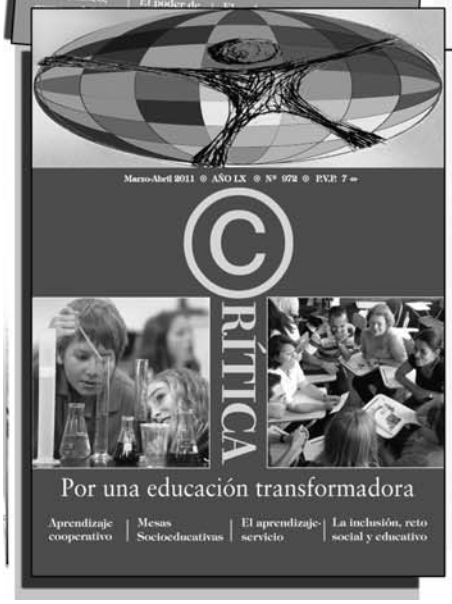
968 Atrapados por el estrés

969 La universidad y sus contradicciones. Después de Bolonia ¿qué?

970 Economía sostenible. Desafíos frente a la crisis

971 El poder y sus máscaras

972 Por una educación transformadora



Revista Crítica. c/ General Oraá, 62 - 1º izq. 28006 Madrid
Tel.: 91 725 92 00. Fax: 91 725 92 09
Correo electrónico: critica@revista-critica.com
web: www. revista-critica.com

suscripción 1 año
España 33 €
Extranjero 40 €

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos .....
Dirección .....
.....
C.P. ..... Ciudad .....
Provincia .....
Profesión .....
Modo de pago .....
☐ Transferencia ☐ Giro
☐ Cheque ☐ Domic. Bancaria

Remite y abona esta suscripción .....
.....
Dirección .....
Población .....
C.P. ..... Provincia .....

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular cuenta .....
Nombre de Banco o Caja .....
Dirección del Banco .....
N.....C.P.....Población del Banco

Mire su talonario o libreta y cumplimente los datos de sus cuenta en su totalidad

Código cuenta cliente

Muy Srs. míos: ruego a Uds. se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta arriba indicada, los recibos que les presente Crítica

Firma

Fecha:.....de.....de 2011

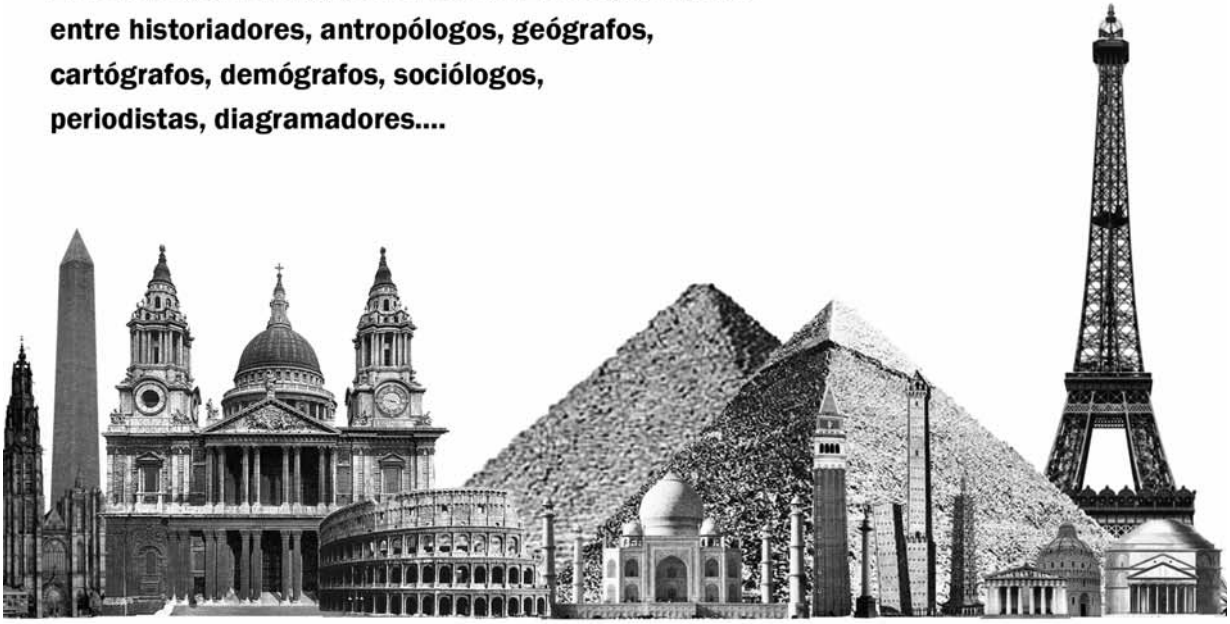
Le Monde la vie

ATLAS DE LAS CIVILIZACIONES

COMPRENDER EL PRESENTE A LA LUZ DEL PASADO

186 páginas
200 cartografías, gráficos y diagramas
Textos breves y sintéticos
Cronologías, bibliografía, sitios internet

Elaborado por un equipo de más de 200 especialistas entre historiadores, antropólogos, geógrafos, cartógrafos, demógrafos, sociólogos, periodistas, diagramadores....



Puede adquirirlo, al precio de 15 euros, en **kioscos y librerías**,
a través del número de teléfono **902.212.150**
o bien desde nuestra página web: **www.monde-diplomatique.es**

www.revistapapeles.fuhem.es/

PAUTAS PARA LOS AUTORES

Pautas generales

- Los textos publicados en la revista deberán ser originales, sin que hayan sido publicados con anterioridad en otra fuente.
- Agradecemos que a la entrega del texto el autor incluya su nombre y dos apellidos completos y el cargo que ocupa o título universitario con el que desea aparecer en la firma del texto.
- Los artículos de la revista tienen una **extensión** en torno a las 4.000 palabras.
- El **tono** del texto debe ser divulgativo, no excesivamente especializado, sin que ello suponga restarle rigor y profundidad de análisis.
- Al principio del texto se incluirá un breve párrafo, resumen del texto, de unas 9 líneas de extensión.
- Los párrafos irán separados por una línea de blanco.
- Los **epígrafes** se marcarán en negrita, y los subepígrafes en cursiva (ambos sin numerar).
  Las subdivisiones del texto deberían limitarse a estas dos exclusivamente.
- Los artículos **no** precisan de ir acompañados de **bibliografía** puesto que las referencias bibliográficas irán a pie de página en forma de nota.

Pautas específicas

- Las **siglas** y acrónimos deben ser mencionados en su versión completa solo la primera vez que aparecen en el texto. Ejemplo: Organización de Naciones Unidas (ONU). No deben llevar puntos entre las iniciales.
- Se usan las comillas **latinas** «»:
  – Para encerrar una cita textual.
  – Para encerrar los títulos de artículos de revista, capítulos de una obra u otros textos.

  Se usan las comillas **inglesas** “”:
  – Para dar a una palabra un sentido diferente del que tiene normalmente.
  – Para referirse a una palabra atribuida a otra persona o cuya connotación no se comparte (*se considera “muy buen escritor”*).
  – Con sentido irónico o peyorativo (*su laboriosidad es “envidiable”: se levanta a mediodía*).

  Se usan comillas **simples** (o semicomillas) ‘’: para entrecomillar una o más palabras dentro de una frase que ya está entre comillas latinas e inglesas («.....“.....‘....’.....”»).
- Se empleará *cursivas*: para indicar énfasis y para palabras extranjeras. No se utilizarán en ningún caso las negritas y subrayados.
- **Citas**
  – Si tienen una extensión superior a los dos renglones, irán en párrafo aparte, en cuerpo menor, y con una línea de blanco por arriba y por abajo. Entrecomilladas y correctamente identificadas en nota a pie de página.
  – Si tienen una extensión de dos renglones irán dentro del texto,entre **comillas** «» y correctamente identificadas en nota a pie de página.
- **Notas**
  – Las notas irán a pie de página y numeradas correlativamente. La llamada dentro del texto irá siempre después del signo de puntuación:
  Ej.: [...] la transformación del capitalismo.[1]
  – **Libros**
  M. Kranzberg y W. H. Davenport, *Tecnología y cultura*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, pp. 196.
  – **Capítulos de libros**
  J. Riechmann, «Para una teoría de la racionalidad ecológica» en S. Álvarez Cantalpiedra y Ó. Carpintero (eds.), *Economía ecológica: reflexiones y perspectivas*, CBA, Madrid, 2009.
  – **Artículos en prensa o revistas**
  M. Vázquez Montalbán, «De cómo Mariano Rajoy se convirtió en un ovni», *El País*, 3 de octubre de 2003, p. 14.
  – **Páginas web**
  T. J. Pritzker, «An early fragment from Central Nepal», Ingress Communications [disponible en: http://www.ingress.com/. Acceso el 8 de junio de 1998].
  – **Para una referencia utilizada con anterioridad, usar la fórmula:**
  M. Vázquez Montalbán, *op. cit.*, 2003.
  – Si la referencia es citada en la nota inmediatamente anterior, usar *Ibidem*.

- Todos los textos serán editados una vez recibidos para adecuarlos a los criterios y formato de la revista. En caso de que tengamos dudas nos pondremos en contacto con el autor para aclararlas.

PAPELES

DE RELACIONES ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

PARA SUSCRIBIRSE

✔ A TRAVÉS DE LA LIBRERÍA ELECTRONICA **www.libreria.fuhem.es**
✔ ENVÍE ESTE CUPÓN AL FAX O LA DIRECCIÓN INDICADA A PIE DE PÁGINA
✔ ESCRIBA A NUESTRA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO **publicaciones@fuhem.es**
✔ LLAME AL TELÉFONO **91 431 03 46**

Nombre: .....
Dirección: .....
Población: ..... C.P. ..... Provincia: .....
País: ..... Teléfono: .....
Correo electrónico: .....

PRECIO DE UN EJEMPLAR

☐ **España** (envío gratuito) ..... **9 €**
☐ **Europa** ..... **21 €**
☐ **Resto del mundo** ..... **28 €**

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN (4 números)

☐ **España** (envío gratuito) ..... **28 €**
☐ **Europa** ..... **60 €**
☐ **Resto del mundo** ..... **88 €**

FORMA DE PAGO

☐ Domiciliación bancaria (preferible esta modalidad para suscriptores)
Titular de la cuenta: .....

ENTIDAD	OFICINA	CONTROL	NÚMERO CUENTA
☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Cheque a nombre de Fundación Hogar del Empleado

☐ Contra reembolso

☐ Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
N° Cuenta: 0216 0251 51 0600005047

Duque de Sesto, 40 - 28009 Madrid - Tel.: 91 431 03 46 - Fax: 91 577 47 26
Web: www.cip-ecosocial.fuhem.es – E-mail: cip@fuhem.es